

alerta 2018!

Informe sobre conflictos,
derechos humanos
y construcción de paz



Alerta 2018! Informe sobre conflictos,
derechos humanos y construcción de paz

Alerta 2018!

Informe sobre conflictos,
derechos humanos
y construcción de paz

Elaborado por:

Josep Maria Royo Aspa
Jordi Urgell García
Pamela Urrutia Arestizábal
Ana Villellas Ariño
María Villellas Ariño

Con prólogo de:

Diana de la Rúa Eugenio
Presidenta de la Fundación IPRA

Este libro ha sido impreso en papel libre de cloro

Informe finalizado en febrero de 2018.

Imprenta: Ulzama

Edición: Icaria Editorial / Escola de Cultura de Pau, UAB

Diseño: Lucas Wainer Mattosso

ISBN: 978-84-9888-855-3

Depósito legal: B 10421-2003

El presente informe ha sido elaborado por:

Josep Maria Royo Aspa (conflictos armados y tensiones),
Jordi Urgell García (conflictos armados y tensiones), Pamela
Urrutia Arestizábal (conflictos armados, tensiones y género),
Ana Villellas Ariño (conflictos armados, tensiones y género) y
María Villellas Ariño (género, conflictos armados y tensiones).

Los contenidos de este informe pueden ser libremente
reproducidos y difundidos, siempre que se cite
adecuadamente. El contenido de esta publicación es
responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau
y no refleja necesariamente la opinión de la ACCD ni del
Ayuntamiento de Barcelona.

Para citar este informe:

Escola de Cultura de Pau. *Alerta 2018! Informe sobre
conflictos, derechos humanos y construcción de paz.*

Barcelona: Icaria, 2018.

Escola de Cultura de Pau

Parc de Recerca, Edifici MRA,

Plaça del Coneixement,

Universitat Autònoma de Barcelona,

08193 Bellaterra (España)

Tel: +34 93 586 88 48/ 93 586 88 42;

Fax: +34 93 581 32 94

Email: pr.conflict.escolapau@uab.cat

Web: <http://escolapau.uab.cat>

Índice

Relación de tablas, cuadros, gráficos y mapas	7
Prólogo de Diana de la Rúa Eugenio Presidenta de la Fundación International Peace Research Association (IPRA)	9
Resumen Ejecutivo	13

Capítulos

1. Conflictos armados	25
1.1. Conflictos armados: definición	25
1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2017	28
1.2.1. Tendencias globales y regionales	28
1.2.2. Impacto de los conflictos en la población civil	32
1.3. Conflictos armados: evolución anual	36
1.3.1. África	36
- África Occidental	36
- Cuerno de África	38
- Grandes Lagos y África Central	40
- Magreb - Norte de África	48
1.3.2. América	50
1.3.3. Asia y Pacífico	51
- Asia Meridional	51
- Sudeste Asiático y Oceanía	55
1.3.4. Europa	60
- Europa Oriental	60
- Rusia y Cáucaso	61
- Sudeste de Europa	62
1.3.5. Oriente Medio	63
- Golfo	63
- Mashreq	65
2. Tensiones	73
2.1. Tensiones: definición	73
2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2017	79
2.2.1. Tendencias globales	79
2.2.2. Tendencias regionales	81
2.3. Tensiones: evolución anual	84
2.3.1. África	84
- África Austral	84
- África Occidental	85
- Cuerno de África	89
- Grandes Lagos y África Central	93
- Magreb - Norte de África	94
2.3.2. América	98
América del Norte,	
Centroamérica y Caribe	98
- América del Sur	101
2.3.3. Asia y Pacífico	102
- Asia Central	102
- Asia Meridional	103
- Asia Oriental	106
- Sudeste Asiático y Oceanía	109
2.3.4. Europa	110
- Rusia y Cáucaso	110
- Sudeste de Europa	112
2.3.5. Oriente Medio	113
- Golfo	113
- Mashreq	117
3. Género, paz y seguridad	123
3.1. Desigualdades de género	123
3.2. El impacto de la violencia y los conflictos desde una perspectiva de género	124
3.2.1. Violencia sexual en conflictos armados y tensiones	124
3.2.2. Respuesta frente a la violencia sexual en conflictos armados	127
3.2.3. Otras violencias de género en contextos de tensión o conflicto armado	129
3.3. La construcción de la paz desde una perspectiva de género	130
3.3.1. La resolución 1325 y la agenda sobre mujeres, paz y seguridad	130
3.3.2. La dimensión de género en las negociaciones de paz	133
3.3.3. Iniciativas de la sociedad civil	136
4. Oportunidades de paz para 2018	139
4.1. La implementación del acuerdo de paz con las FARC, una oportunidad para la paz en Colombia	140
4.2. La aprobación de la Ley Fundamental de Bangsamoro como culminación del proceso de paz entre el Gobierno de Filipinas y el MILF	141
4.3. Mozambique: segunda oportunidad para la paz	143
4.4. Nuevos pasos hacia la paz en el País Vasco: hacia la desaparición de ETA, la memoria, las víctimas y la convivencia	145
4.5. La Instancia de la Verdad y la Dignidad de Túnez: ¿mecanismo de referencia de justicia transicional?	147

5. Escenarios de riesgo para 2018 _____	149
5.1. Escalada de la violencia y la inestabilidad en Camerún _____	150
5.2. La consolidación de ISIS en el sur de Filipinas y en el Sudeste Asiático _____	151
5.3. La crisis rohingya en Myanmar pone en riesgo la transición democrática y el proceso de paz _____	153
5.4. El desmantelamiento del marco post-acuerdo de paz en Tayikistán y la reducción del espacio opositor _____	154
5.5. El impacto de los conflictos y la violencia en niños y niñas de la región MENA _____	156
Glosario _____	159
Escola de Cultura de Pau _____	165

Relación de tablas, cuadros, gráficos y mapas

Mapa 1.1.	Conflictos armados _____	24	Mapa 3.1.	Desigualdades de género _____	122
Tabla 1.1.	Resumen de los conflictos armados en 2017 _____	26	Tabla 3.1.	Países en conflicto armado y tensión con niveles de discriminación de género altos o muy altos _____	124
Gráfico 1.1.	Distribución regional del número de conflictos armados en 2017 ____	29	Cuadro 3.1.	Actores armados y violencia sexual en conflictos _____	125
Gráfico 1.2.	Intensidad de los conflictos armados _____	31	Cuadro 3.2.	El II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad en España _____	131
Gráfico 1.3.	Intensidad de los conflictos por regiones _____	31	Mapa 4.1.	Oportunidades de paz para 2018 _	139
Cuadro 1.1.	Tendencias regionales en materia de conflictividad armada _____	32	Mapa 5.1.	Escenarios de riesgo para 2018 ____	149
Mapa 1.2.	Número de personas desplazadas internas al finalizar 2016 _____	35			
Mapa. 2.1.	Tensiones _____	72			
Tabla 2.1.	Resumen de las tensiones en 2017 _	74			
Gráfico 2.1.	Distribución regional del número de tensiones en 2017 _____	79			
Gráfico 2.2.	Intensidad de las tensiones por regiones _____	81			

Prólogo

Diana de la Rúa Eugenio Presidenta de la Fundación International Peace Research Association (IPRA)¹

El año 2018 tiene escenarios multicomplejos y multisectoriales que desafían a encararlos con miradas creativas y adaptadas a las necesidades reales y percibidas para tener la oportunidad de brindar sugerencias y propuestas que transformen las dificultades en procesos inclusivos y positivos.

Quienes hace más de 25 años estudiamos y trabajamos en el campo de la resolución no violenta de conflictos y construcción de cultura de paz vemos una evolución y cambio en la dinámica en los conflictos que nos motiva a buscar nuevos caminos para abordarlos, ya que nos enfrentamos al incremento de la violencia directa, estructural y cultural con el ingrediente de banalizarlas por medio de espectáculos y video juegos que –entre otras cosas– entran a nuestras casas, la normalizan e invisibilizan convirtiéndose en *carriers* de cultura profunda de violencia.

Frecuentemente se presentan las situaciones de violencia como un hecho en sí mismo, aislado, dejando de lado las consecuencias humanas, sociales, ambientales que resultan. Las nuevas generaciones están creciendo con esa impronta por lo que es importante mostrar los conflictos y sus efectos posteriores y también mostrar los procesos que trabajan para neutralizar la escalada de violencia y promover alternativas pacíficas y productivas.

Siempre hay buenos ejemplos, pero es necesario llevarlos a la luz para que no queden opacados por la agresividad o virulencia de ciertas diatribas que suelen ser más contundentes en ruido pero no en ideas o propuestas. Tomemos el caso de dos países del continente americano que están viviendo situaciones históricas:

En Colombia se lleva a cabo el proceso de paz que, si bien después del acuerdo firmado en el año 2016 perdió fuerza ante la falta de cumplimiento de algunos puntos, actualmente está reanudando el diálogo entre las partes y, por primera vez en cincuenta años, Colombia accede a elecciones presidenciales libres en un marco sin guerra. Es meritorio el seguir insistiendo con el proceso tratando de revertir aquello que lo obstaculiza, pero también es fundamental que la palabra empeñada sea cumplida, que todo el proceso sea creíble y finalmente se cumpla lo prometido para poder encarar un futuro de desarrollo compartido.

En Estados Unidos de Norteamérica hay varios temas para los investigadores y trabajadores de paz entre los que mencionamos: (a) la profundización de la actual administración hacia las diferencias entre los colectivos sociales, provocando un resurgimiento de movimientos de supremacía blanca que chocan con los derechos civiles que se creían conseguidos para siempre, lo que ha forzado el uso de los contrapesos institucionales – los jueces– para balancear las injusticias y que algunas ciudades y estados declararan abiertamente sus diferencias al respecto. La apuesta por la polarización y su vinculación con chivos expiatorios genera brechas sociales con el fin de capitalizar rédito político entre personas que adhieren a un líder que propone divisiones consistentes con un dualismo maniqueo y desprestigia lo que no le resulta beneficioso. El sistema de gobierno con separación de poderes del país ha demostrado que, hasta ahora, aún funciona la democracia; (b) el surgimiento del Movimiento #MeToo, que pone en evidencia las condiciones de patriarcado machista que estaban enquistadas y ocultas al público, provocando un cambio de percepción sobre el acoso a las mujeres en espacios laborales, donde esa conducta ya no sólo es inaceptable sino que genera denuncia y exposición pública. Este es un estimulante cambio de paradigma que puede replicarse en el resto de los países.

Situaciones a tener en cuenta

Actualmente hay que agregar dos ejes que cambian la vida humana del mundo y que convergen en la misma temporalidad, generando gran incertidumbre y violencia usualmente no visible: estos ejes son el cambio climático y la influencia de las redes sociales tecnológicas.

El proceso antropozoides ha producido situaciones que no podían haber sido previstas en su total envergadura pero ahora tenemos que convivir con ellas, paliar sus influencias y tratar de revertir –o al menos reducir– sus resultados, los cuales se esparcen por todo el globo y generan cambios climáticos que a su vez traen cambios geográficos, económicos, políticos y sociales que trastocan la vida de las comunidades. Las palabras inundaciones, sequías, deforestación y contaminación ya forman parte del lenguaje, pero pareciera que aún necesitan enraizar su significado en la conciencia colectiva y en las agendas políticas de todo el mundo, no sólo en épocas electorales que se ocupan de ellas ante

1. Diana de la Rúa Eugenio es también Presidenta de Asociación Respuesta para la Paz (Argentina), mediadora y facilitadora en conflictos multi-partite y profesora universitaria.

los desastres y trabajan desde lo visible de la urgencia, sino para lograr cambios profundos que ralenticen las terribles consecuencias que se viven y que empeorarán si no se toman medidas eficientes cuanto antes. Desde el año 2004 ya se habla con preocupación de los llamados tecnofósiles, de los que hay billones de variedades debido a la rápida fabricación y obsolescencia de productos –útiles o no– con los cuales no se sabe qué hacer. Los tomadores de decisión aún no asumieron este tema con seria consideración.

Hace años se habla del impacto de las tecnologías de comunicación en la sociedad, pero ahora vemos la magnitud de la utilización discrecional de los algoritmos tecnológicos que se generan con el fin de cambiar los patrones culturales, manipularlos para generar corrientes de opinión y –evidentemente– influir sobre los procesos democráticos de los países, influencias que se venden y compran al mejor postor como en cualquier mercado de pueblo, sin importar lo que esa manipulación significa para los países y para el mundo, debilitando así las democracias, generando suspicacias negativas en los procesos políticos y en la soberanía de las naciones además de fortalecer el poder por el poder mismo, no para los pueblos, para la gente y sus comunidades, sino para quienes se atrincheran en las ventajas que el poder proporciona.

Estos dos últimos escenarios coinciden temporalmente, abruman y desalientan la participación ciudadana, ya de por sí escasa. Las personas prefieren abstraerse o desconectarse de la realidad para no tener que hacer cambios en sus vidas que signifiquen resignar estilos de consumo (agua, combustible, compras no necesarias) mientras puedan. Aquellos quienes están sufriendo pueden quedar enredados en discursos binarios sin respaldo por parte de grupos de interés, que polarizan las percepciones negativas sobre ciertos grupos, radicalizan los mensajes y las acciones y, usualmente, eligen a algunos colectivos como chivos expiatorios de la mala situación.

Cultura de paz y participación social

Por ello es necesario que las personas puedan desarrollar una visión compartida de futuro que sea respetuosa de la diversidad de opiniones y puedan recuperar la posibilidad de una convivencia armónica donde todos puedan sentirse participantes y no meramente espectadores. Desde la educación para la paz y todas sus herramientas –el diálogo, la mediación, la facilitación, entre otras– se trabaja con la comunicación no violenta que permite la interacción verbal y reconstruye el proceso dialógico entre las partes, con el fin de poder expresar las opiniones, temores, sentimientos, intereses y necesidades sin ser juzgados ni desvalorizados. Uno de las manifestaciones de la época actual es la

dificultad que tienen las personas para identificar qué es lo que quieren obtener, les resulta más fácil explicar lo que no quieren. Lograr este avance es un ejercicio vital que permeará en todos los espacios sociales, brindando empoderamiento y eficiencia para expresarse.

El poder determinar lo que se quiere conseguir es un paso hacia la independencia personal porque focaliza en cómo lograr los objetivos deseados sin esperar que un líder o pater familia los provea, y entrena en la responsabilidad sobre las decisiones tomadas libremente lo cual, a su vez, repercute en el crecimiento como persona y ciudadano alentando la participación en otros ámbitos de la vida como es la participación política, ya sea como parte de los actores que definen las políticas públicas o como quienes proponen los cambios desde las bases.

Hay que adiestrarse para el debate y la confrontación sin que perdamos nuestro norte de alcanzar los objetivos de manera legítima y para ello es fundamental el generar consensos que permitan dilucidar las preocupaciones colectivas, priorizarlas y lograr un espíritu de cohesión que permita llevar adelante los proyectos de paz. El consenso no es coacción ni presión, el consenso es acordar entre todos, de manera voluntaria, lo que se hará o lo que no se hará. El construir una cultura de paz es un proceso colectivo, lento y profundo donde siempre habrá quienes por capacidad o personalidad estimulen a los demás, pero todos deben tener verdadero compromiso y reconocer y aceptar que deberán hacerse concesiones para lograr los consensos.

Un aporte sustancial que construye cultura de paz es que los menores aprendan en la escuela no sólo las materias habituales –matemáticas, lenguaje, ciencias, entre otras– sino que también aprendan a resolver pacíficamente los conflictos, lo cual les facilitaría para toda la vida el intercambio en la vida cotidiana porque tendrían incorporados la importancia del proceso, las herramientas y los entrenamientos necesarios para otro modelo de intercambio social.

Realización de proyectos

Si bien el trabajo de campo es fundamental, permanentemente se necesita elaborar nuevas teorías e investigar otras propuestas, analizarlas, compararlas, sacar conclusiones que permitan actualizar y medir resultados y eventualmente, profundizarlas o modificarlas. La suma de trabajo de campo más el trabajo de investigación de paz, ya sea desde universidades, ONG o de manera independiente, es lo que nos permite *aggiornarnos* y brindar respuestas acordes a las necesidades actuales. Hay muchas organizaciones y fundaciones que brindan la posibilidad de financiar

Alerta! es un vehículo eficiente para compartir el análisis profundo de los conflictos y sus posibilidades de solución, así como de la transmisión y difusión de cultura de paz que invita a reflexionar sobre las confrontaciones actuales desde una mirada comprometida con su resolución pacífica

esas investigaciones, por lo que es importante dedicar un tiempo para saber cómo recurrir a ellas, conocer los valores que las sustentan y animarse a solicitar esas becas. La cultura de paz se verá beneficiada y promovida a través de todos los canales, los investigadores, trabajadores, editores, el boca a boca de los beneficiados y los resultados en la vida de las personas.

Esta nueva presentación del Alerta! es el vehículo eficiente para compartir el análisis profundo de los conflictos y sus posibilidades de solución, así como de la transmisión y difusión de cultura de paz que invita a reflexionar sobre las confrontaciones actuales desde una mirada comprometida con su resolución pacífica, permitiendo seguir elaborando, cuestionando y adaptando las teorías con la factibilidad y la operatividad de los procesos a la vez que amplía los espacios de debate y capacitación.

Resumen ejecutivo

Alerta 2018! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz es un anuario que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz a partir de tres ejes: conflictos armados, tensiones, y género, paz y seguridad. El análisis de los hechos más relevantes del 2017 y de la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias de los principales escenarios de conflicto armado y tensión socio-política en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa regional e identificar tendencias globales, así como elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. Del mismo modo, el informe también identifica oportunidades para la construcción de paz o para la reducción, prevención o resolución de conflictos. En ambos casos, uno de los principales objetivos del presente informe es poner la información, el análisis y la identificación de factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de aquellos actores encargados de tomar decisiones políticas, de intervenir en la resolución pacífica de conflictos o de dar una mayor visibilidad política, mediática o académica a las numerosas situaciones de violencia política y social que existen en el mundo.

En cuanto a la metodología, los contenidos de este informe se nutren principalmente del análisis cualitativo de estudios e informaciones facilitados por numerosas fuentes –Naciones Unidas, organismos internacionales, centros de investigación, medios de comunicación u ONG, entre otras–, así como de la experiencia adquirida en investigaciones sobre el terreno.

Algunas de las conclusiones e informaciones más relevantes del informe *Alerta 2018!* son las siguientes:

- Durante 2017 se registraron 33 conflictos armados, de los cuales 32 seguían activos al finalizar el año. La mayoría se concentró en África (14) y Asia (nueve), seguidos por Oriente Medio (seis), Europa (tres) y América (uno).
- Trece de los 33 conflictos armados registraron intensidad elevada. Fueron los casos de Libia, Región Lago Chad (Boko Haram), RDC (Kasai), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Filipinas (Mindanao), Myanmar, Pakistán, Egipto (Sinaí), Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas).
- En 2017 13 de los 33 casos –equivalentes a un 39%– presentó un claro deterioro de la situación durante 2017. Se trata de Libia, Malí (norte), RCA, RDC (este), RDC (Kasai), Somalia, Filipinas (NPA), Filipinas (Mindanao), India (Jammu y Cachemira), Myanmar, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas). Otro 27% de los casos no registró cambios significativos y en un 34% se produjo una reducción de la violencia.
- Más allá de la naturaleza multicausal de la conflictividad armada, el 73% de los conflictos (24 de los 33 casos) tuvo entre sus motivaciones principales la oposición a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos o al sistema político, social o ideológico del Estado. Asimismo, las demandas identitarias y/o de autogobierno fueron una de las causas principales en un 55% de los casos (18 conflictos).
- Los conflictos armados continuaron causando en 2017 gravísimos impactos en la población civil, provocando y/o agudizando situaciones de crisis humanitaria, como en RDC, Sudán del Sur, Iraq y Yemen, entre otros casos.
- Uno de los impactos de los conflictos armados continuó siendo el fenómeno de la violencia sexual. Durante 2017 se denunció el uso de violencia sexual en contextos como Sudán del Sur, Malí, Myanmar y Siria.
- El desplazamiento forzado fue un año más una de las consecuencias más graves de los conflictos armados a nivel global. Los balances difundidos en 2017 señalaban que hasta finales de 2016, un total de 65,6 millones de personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares como resultado de situaciones de conflicto, persecución, violencia y/o violaciones de los derechos humanos, unas 300.000 más que a finales de 2015.
- Durante 2017 se identificaron 88 escenarios de tensión a nivel global. Los casos se concentraron principalmente en África (37) y Asia (18), mientras que el resto de las tensiones se distribuyeron en Europa (13), Oriente Medio (12) y América (ocho).
- Una quinta parte de las tensiones de 2017 tuvieron intensidad elevada, más de la mitad de las cuales tuvieron lugar en África. Fueron los casos de Angola (Cabinda); Burkina Faso; Camerún (Ambazonia/North West y South West); Etiopía; Etiopía (Oromiya); Kenya; Mozambique; Níger; Nigeria; RDC; Venezuela; Corea; RPD–EEUU, Japón, Rep. de Corea; India (Manipur); India-Pakistán; Pakistán; Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj); Egipto y Líbano. Otro 47% (40 casos) fueron de intensidad baja y un tercio (29 casos) de intensidad media.
- El 54% de las tensiones en el mundo tuvieron un carácter interno (48 casos), un 30% (26 casos) fueron internas internacionalizadas y un 16% (14 casos) fueron internacionales.
- En cuanto a la evolución de las tensiones, el 42% de las crisis registraron un deterioro con respecto a 2016, especialmente notable en África y Oriente Medio, mientras un 40% de los casos no experimentó cambios significativos y en un 18% de los casos se produjo una cierta mejoría.
- Un 68% de las tensiones tuvieron entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos u oposición al sistema político, social o ideológico de los respectivos Estados. A su vez, el 45% tuvieron como una de sus causas principales demandas de autogobierno y/o identitarias.
- El 75% de los conflictos armados y un 45% de las tensiones para los que existían datos sobre igualdad

de género tuvieron lugar en contextos con graves o muy graves desigualdades de género.

- Organizaciones de mujeres y de la sociedad civil denunciaron un año más la implementación fragmentaria de la agenda de mujeres, paz y seguridad.
- Naciones Unidas constató un retroceso en la participación de mujeres en procesos de paz y una reducción en el número de acuerdos de paz que incluyeron cuestiones de género en su redactado.
- Organizaciones de mujeres de países en conflicto como Siria, Libia y Yemen reclamaron una mayor participación en las negociaciones de paz.
- El informe *Alerta 2018!* identifica cinco oportunidades de paz: el proceso de implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC en Colombia; la eventual aprobación de la Ley Fundamental de Bangsamoro como culminación del proceso de paz entre el MILF y el Gobierno de Filipinas; las posibilidades de acuerdo para dar una respuesta política a la situación de tensión en Mozambique; el escenario de futura desaparición de ETA y eventuales avances en otros temas pendientes en el País Vasco; y el trabajo de la Instancia de la Verdad y Dignidad en Túnez, que podría convertirse en un mecanismo referente en el ámbito de la justicia transicional.
- El informe destaca cinco escenarios de alerta: la escalada de violencia y el incremento de inestabilidad en Camerún; la consolidación del grupo armado ISIS en el sur de Filipinas y en el Sudeste asiático; las repercusiones de la crisis rohingya para la transición democrática y el proceso de paz en Myanmar; la reducción del espacio opositor y el desmantelamiento del marco post-acuerdo de paz en Tayikistán; y el impacto de los elevados niveles de violencia en los niños y niñas como consecuencia de los graves conflictos armados que afectan el norte de África y Oriente Medio.

Estructura

El informe consta de cinco capítulos. En los dos primeros se analiza la conflictividad a escala global –causas, tipología, dinámicas, evolución y actores de las situaciones de conflicto armado o de tensión. El tercer capítulo analiza los impactos de género de conflictos y tensiones, así como iniciativas que desde el ámbito de Naciones Unidas y diferentes organizaciones y movimientos locales e internacionales se están llevando a cabo en lo que respecta a la construcción de la paz

desde una perspectiva de género. El cuarto capítulo identifica oportunidades de paz, escenarios en los que existe una coyuntura favorable para la resolución de conflictos o para el avance o consolidación de iniciativas de paz. El último capítulo analiza escenarios de riesgo de cara al futuro. Además de los cinco capítulos, el informe también incluye un mapa desplegable en el que se identifican los escenarios de conflicto armado y tensión sociopolítica, así como información sobre procesos de paz y sobre la dimensión de género de conflictos y tensiones.

Conflictos armados

En el primer capítulo (**Conflictos armados**)¹ se describe la evolución, la tipología, las causas y las dinámicas de los conflictos armados activos durante el año, se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados en 2017, así como los impactos de los conflictos en la población civil.

Durante el año 2017 se registraron 33 conflictos armados, un cifra en línea con la tendencia de años anteriores (33 casos en 2016, 35 contextos en 2015, 36 en 2014, 35 en 2013). De los 33 conflictos armados en 2017, 32 continuaban activos al finalizar el año, ya que la situación de conflictividad en la república rusa de Daguestán dejó de ser considerada conflicto armado, tras una reducción de los niveles de violencia y letalidad en los últimos años. Cabe destacar que de entre los conflictos armados de 2017, uno era un caso nuevo: el conflicto en la región de Kasai, en RDC, que asistió a un incremento de las hostilidades entre el Gobierno congolés y la milicia Kamwina Nsapu, así como a enfrentamientos entre organizaciones armadas vinculadas a diversos grupos étnicos.

En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos armados, la mayor parte se concentró en África (14) y Asia (9), en línea con años anteriores. Del resto de casos, seis tuvieron lugar en Oriente Medio, tres en Europa y uno en América. África, por lo tanto, concentró el 44% de los casos de conflicto armado a nivel global. En lo referente al escenario del conflicto y los actores involucrados en la contienda, en 2017 solo uno de los contextos fue catalogado como un conflicto armado internacional – Israel-Palestina–, mientras una amplia mayoría fueron de carácter interno internacionalizado (79%, 26 de los 33 casos), y un 18% tuvieron carácter eminentemente

Durante el año 2017 se registraron 33 conflictos armados, 32 de los cuales seguían activos al finalizar el año

1. En este informe, se entiende por conflicto armado todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual y de género, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:
- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o al control de los recursos o del territorio.

Conflictos armados en 2017*

ÁFRICA (14)	ASIA (9)	ORIENTE MEDIO (6)
Argelia (AQMI) -1992- Burundi -2015- Etiopía (Ogadén) -2007- Libia -2011- Malí (norte) -2012- Región Lago Chad (Boko Haram) - 2011- RCA -2006- RDC (este) -1998- RDC (este-ADF) -2014- RDC (Kasai) -2017- Somalia -1988- Sudán (Darfur) -2003- Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011- Sudán del Sur -2009-	Afganistán -2001- Filipinas (NPA) -1969- Filipinas (Mindanao) -1991- India (Jammu y Cachemira) -1989- India (CPI-M) -1967- Myanmar -1948- Pakistán -2001- Pakistán (Baluchistán) -2005- Tailandia (sur) -2004-	Egipto (Sinaí) -2014- Iraq -2003- Israel-Palestina -2000- Siria -2011- Yemen (al-houthistas) -2004- Yemen (AQPA) - 2011-
		EUROPA (3)
		Rusia (Daguestán) -2010- Turquía (sudeste) -1984- Ucrania -2014-
		AMÉRICA (1)
		Colombia -1964-

*Se incluye entre guiones la fecha de inicio del conflicto armado. En cursiva, los conflictos finalizados durante 2017.

interno. No obstante, la mayoría de los conflictos actuales se ven influidos por factores regionales o internacionales, como los flujos de personas refugiadas, el comercio de armas, la participación de combatientes extranjeros, el apoyo logístico o militar proporcionado por otros Estados a alguno de los bandos en pugna o a los intereses políticos o económicos de países vecinos al conflicto armado, por ejemplo, en lo referido a la explotación legal e ilegal de recursos.

Los conflictos siguieron caracterizándose por su naturaleza multicausal. El 73% de los conflictos (24 casos) tuvo entre sus motivaciones principales la oposición a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos o al sistema político, social o ideológico del Estado, lo que derivó en luchas por erosionar o acceder al poder. De éstos, en 18 casos se observó la búsqueda de un cambio de sistema, promovido principalmente por actores armados de inspiración socialista –como en los casos de organizaciones como CPI-M en India, el NPA en Filipinas o las FARC en Colombia– o por organizaciones que se atribuyen una agenda yihadista y que pretenden imponer su particular interpretación de los preceptos islámicos. Entre estos últimos grupos cabe mencionar casos como el grupo armado ISIS y sus filiales y organizaciones afines en distintas regiones –ISIS estuvo presente en países como Argelia, Libia, Nigeria, Somalia, Afganistán, Pakistán, Filipinas, Rusia, Turquía, Iraq, Siria, Yemen, entre otros–; las diversas ramas de al-Qaeda que operan en el norte de África y Oriente Medio –entre ellas AQMI (Argelia y Sahel) y AQPA (Yemen)–; las milicias talibán que operan en Afganistán y Pakistán o el grupo al-Shabaab en Somalia.

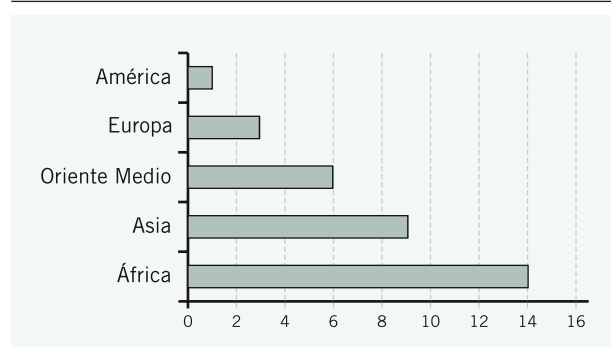
La mayor parte de los conflictos armados en 2017 (40%) fueron de alta intensidad, caracterizados por altos niveles de violencia y letalidad por encima de las mil víctimas mortales anuales

En lo referente a la evolución de los conflictos armados en 2017, y siguiendo con la tendencia observada el año anterior, **la mayoría de contextos registró un empeoramiento en los niveles de hostilidad y violencia.**

Un total de 13 de los 33 casos –equivalentes a un 39%– presentó una evolución negativa, una cifra ligeramente inferior a la de 2016 (46%). Los casos en los que se identificó un claro deterioro de la situación durante 2017 fueron Libia, Malí (norte), RCA, RDC (este), RDC (Kasai), Somalia, Filipinas (NPA), Filipinas (Mindanao), India (Jammu y Cachemira), Myanmar, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas).

En relación a la intensidad, la **mayor parte de los conflictos armados en 2017 –13 de los 33 casos o un 40%– fueron de alta intensidad**, es decir, escenarios caracterizados por niveles de letalidad por encima de las 1.000 víctimas mortales anuales, con severos impactos en el territorio y graves consecuencias en la población. Los 13 conflictos de mayor gravedad

Distribución regional del número de conflictos armados en 2017



en 2017 fueron Libia, Región Lago Chad (Boko Haram), RDC (Kasai), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Filipinas (Mindanao), Myanmar, Pakistán, Egipto (Sinaí), Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas). A su vez, 12 conflictos armados (el 36%) tuvieron un nivel de intensidad baja, y otros ocho casos (el 24%) registraron niveles medios. Asia fue la región que presentó un mayor aumento de casos de alta intensidad respecto al año anterior, pasando de dos a cuatro. Proporcionalmente, Oriente Medio continuó concentrando el mayor número de casos de alta intensidad.

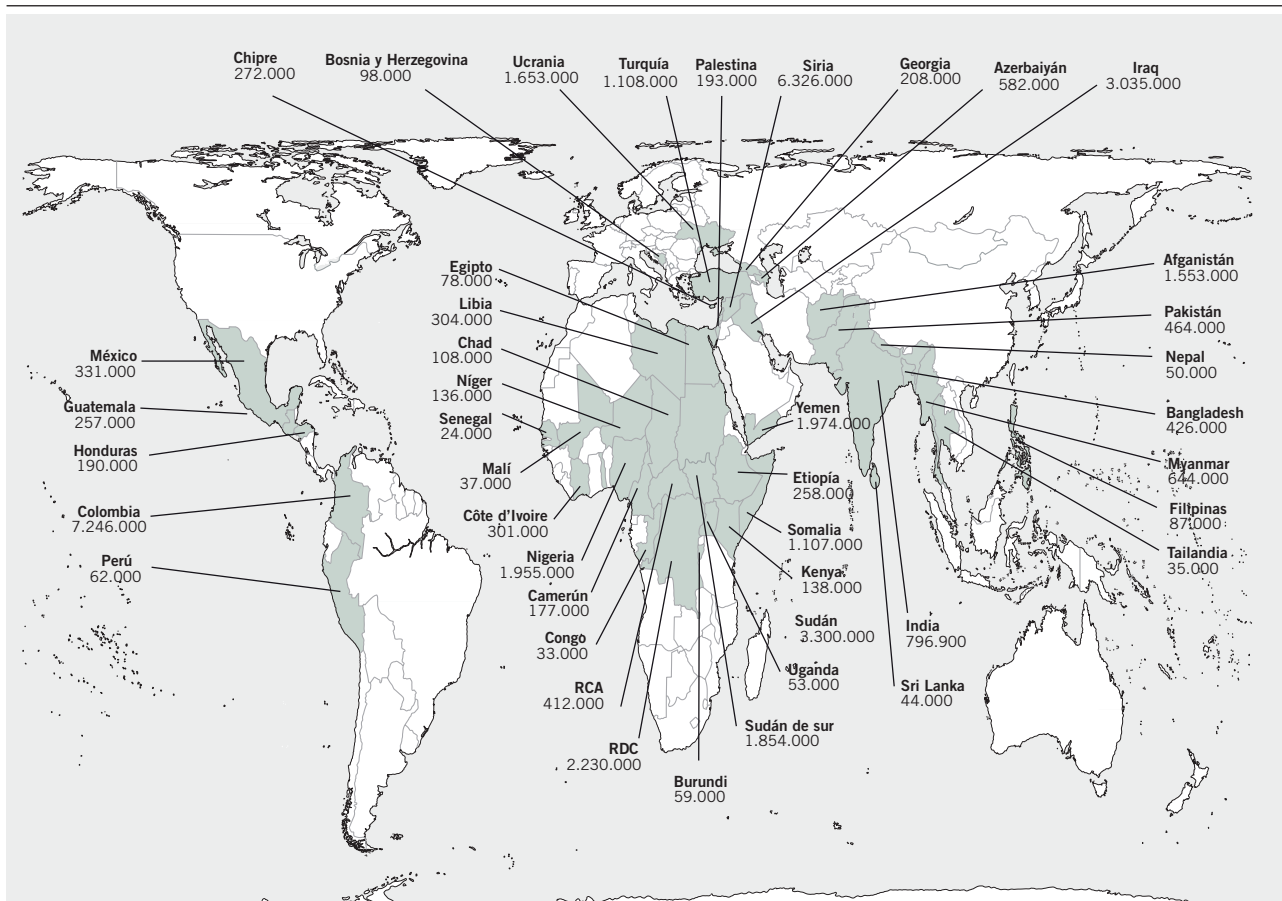
Sin contar con la población refugiada palestina, el 51% de la población refugiada mundial procedía de tan solo tres países: Siria, Afganistán y Sudán del Sur

A nivel mundial, los conflictos armados continuaron teniendo severos impactos en la población civil. Estas consecuencias se reflejaron en los niveles letalidad y en otro tipo de impactos como resultado del uso indiscriminado y/o deliberado de la violencia contra civiles. Durante 2017, esta situación se evidenció en prácticas como las ejecuciones sumarias e incendios de viviendas con personas en su interior en Myanmar; ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos contra civiles en el conflicto en Kasai (RDC); o en los asedios a población civil, como los registrados en Siria. Otro fenómeno destacado de 2017 fue la materialización de atentados especialmente cruentos en distintos conflictos armados, como los

perpetrados en Afganistán, Egipto (Sinaí) y Somalia, entre otros. Además, durante 2017 también tuvieron lugar acciones en el marco de campañas militares que tuvieron graves repercusiones en la población civil.

El desplazamiento forzado continuó siendo otra de las consecuencias más graves de los conflictos armados a nivel global y se mantuvo la tendencia de significativo incremento observada en los últimos años. Un total de 65,6 millones de personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares en 2016 como resultado de situaciones de conflicto, persecución, violencia y/o violaciones de los derechos humanos, según las cifras de ACNUR disponibles en 2017. El balance suponía un incremento de unas 300.000 personas respecto a finales de 2015. De la población desplazada 22,5 millones eran población refugiada –17,2 millones bajo mandato de ACNUR y 5,3 millones de palestinos y palestinas registrados por la UNRWA–, 40,3 millones eran personas que se encontraban en situación de desplazamiento forzado interno y 2,8 millones eran solicitantes de asilo. Los y las menores constituían un 51% de la población refugiada. Más de la mitad de la población refugiada mundial bajo mandato de ACNUR procedía de tan solo tres países: Siria (5,5 millones), Afganistán (2,5 millones) y Sudán del Sur (1,4 millones).

Número de personas desplazadas internas al finalizar 2016



Fuente: IDMC, *GRID 2017: Global Report on Internal Displacement*, mayo de 2017.

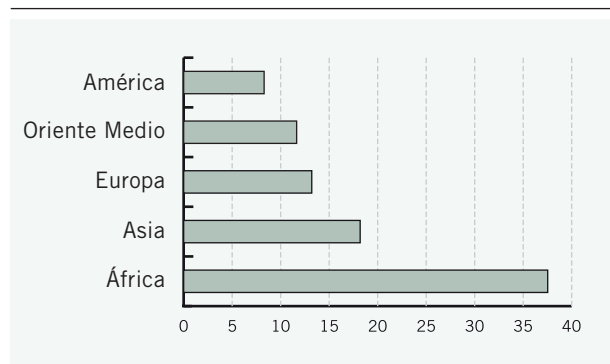
Tensiones

En el segundo capítulo (**Tensiones**)² se analizan los acontecimientos más relevantes referidos a las tensiones sociopolíticas registradas durante el año y se realiza una mirada comparativa de las tendencias globales y regionales. Durante 2017 se registraron 88 escenarios de tensión a nivel global. Como en años anteriores, el mayor número de crisis sociopolíticas tuvo lugar en África, con 37 casos, seguida de Asia, donde se registraron 18 casos. Europa y Oriente Medio fueron escenarios de 13 y 12 casos cada una, mientras que en América se identificaron ocho contextos.

Las situaciones de tensión tuvieron causas múltiples, con más de un factor principal en la gran mayoría de los casos. El análisis del panorama de crisis en 2016 permite identificar tendencias en lo referido a sus principales causas o motivaciones. En línea con años anteriores, el 68% de los casos tuvo entre sus causas principales **la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos** o la oposición al sistema político, social o ideológico de los Estados, lo que propició conflictos para acceder o erosionar el poder. En América Latina, por ejemplo, todas las tensiones identificadas estuvieron vinculadas a alguna de estas dos variables. A su vez, **cerca de la mitad de las tensiones (45%) tuvieron como una de sus causas principales demandas de autogobierno y/o identitarias, pero este porcentaje fue claramente superior en regiones como Europa (casi el 70%) o Asia (más del 55%)**. En alrededor de una tercera parte de las tensiones (34%) las disputas por el control de territorios y/o recursos fueron un elemento especialmente relevante, si bien se trata de un factor que alimenta numerosas situaciones de tensión en grados diversos.

En línea con años anteriores, **algo más de la mitad de las tensiones en el mundo tuvieron un carácter interno (48 casos o un 54%)**, siendo especialmente paradigmático el caso de América Latina, en el que la práctica totalidad de los casos (excepto Haití) fueron de este tipo. Por otra parte, **casi una tercera parte de las tensiones a escala global fueron internas internacionalizadas (26 casos o un 30%)**, pero este porcentaje fue claramente superior en regiones como Europa (54% de los casos) u Oriente Medio (42%). **Una sexta parte de las tensiones fueron internacionales (14 casos o un 16%)**, aunque en regiones como América Latina no se identificó ningún contexto de este tipo.

Distribución regional del número de tensiones en 2017



Durante 2017 casi la mitad de las tensiones presentaron una intensidad baja (47%, un porcentaje claramente inferior al 54% que se registró en 2016), un tercio registró una intensidad media (22% en 2016) y una quinta parte (18 casos) tuvo altos niveles de tensión, más de la mitad de las cuales en África. En términos comparativos con el año anterior, la cifra de tensiones graves se redujo ligeramente (un 20% en 2017 frente a un 24% en 2016) por la existencia de varios casos que en 2016 habían experimentado altos niveles de tensión, pero cuya situación desescaló durante el año 2017. Fue el caso de Túnez, El Salvador, Corea del Norte-Corea del Sur, India (Assam), Bangladesh, Turquía o Israel-Siria-Líbano. Sin embargo, también hubo tres escenarios que habían registrado niveles medios de tensión en 2016 cuyos niveles de conflictividad se incrementaron sustancialmente y fueron considerados de alta intensidad en 2017: Burkina Faso, Níger y Venezuela.

Dimensión de género en la construcción de paz

En el tercer capítulo (**Género, paz y seguridad**) se analizan los impactos de género de conflictos y tensiones, así como las diversas iniciativas que desde el ámbito de Naciones Unidas y diferentes organizaciones y movimientos locales e internacionales se están llevando a cabo en lo que respecta a la construcción de la paz desde una perspectiva de género.³ Esta perspectiva permite visibilizar cuáles son los impactos diferenciados de los conflictos armados sobre las mujeres y sobre los hombres, pero también en qué medida y de qué manera participan unas y otros en la construcción de paz y cuáles son las aportaciones que las mujeres

2. Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

3. El género es la categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres y mujeres son un producto social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias biológicas de los sexos. El género pretende dar visibilidad a la construcción social de la diferencia sexual y a la división sexual del trabajo y el poder. La perspectiva de género busca evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción social producto de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente en el sistema patriarcal. El género como categoría de análisis tiene el objetivo de demostrar la naturaleza histórica y situada de las diferencias sexuales.

Resumen de la conflictividad global en 2017

Continentes	Conflicto armado			Tensión			TOTAL
	Alta	Media	Baja	Alta	Media	Baja	
África	<i>Libia</i> RDC (Kasai) <i>Región Lago</i> <i>Chad (Boko Haram)</i> <i>Somalia</i> Sudán del Sur	<i>RCA</i> RDC (este) RDC (este-ADF) <i>Sudán (Darfur)</i> <i>Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)</i>	<i>Argelia</i> <i>Burundi</i> <i>Etiopía (Ogadén)</i> <i>Malí (norte)</i>	Angola (Cabinda) Burkina Faso Camerún (Ambazonia/ North West y South West) Etiopía Etiopía (Oromiya) Kenya <i>Mozambique</i> Níger Nigeria <i>RDC</i>	África Central (LRA) Chad Congo, Rep. De Côte d'Ivoire Eritrea Eritrea – Etiopía Lesotho <i>Nigeria (Delta Níger)</i> <i>Togo</i> Túnez	Djibouti <i>Gambia</i> Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Madagascar Marruecos <i>Marruecos – Sáhara Occ.</i> RDC – Rwanda RDC – Uganda Rwanda <i>Senegal (Casamance)</i> Somalia (Somalilandia-Puntlandia) Sudán Sudán – Sudán del Sur Uganda Zimbabwe	
SUBTOTAL	5	5	4	10	10	17	51
América			<i>Colombia</i>	<i>Venezuela</i>	El Salvador Honduras México	Bolivia Guatemala Haití Perú	
SUBTOTAL			1	1	3	4	9
Asia y Pacífico	<i>Afganistán</i> Filipinas (Mindanao) <i>Myanmar</i> Pakistán	Pakistán (Baluchistán)	<i>Filipinas (NPA)</i> India (CPI-M) India (Jammu y Cachemira) <i>Tailandia (sur)</i>	Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea India (Manipur) India – Pakistán Pakistán	Bangladesh Corea, RPD – Rep. de Corea <i>India (Assam)</i> Tayikistán	China (Tíbet) China (Xinjiang) China - Japón <i>India (Nagalandia)</i> Indonesia (Papúa Occ.) Kirguistán Nepal Sri Lanka Tailandia Uzbekistán	
SUBTOTAL	4	1	4	4	4	10	27
Europa		Turquía (sudeste) <i>Ucrania</i>	Rusia (Daguestán)*	<i>Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)</i>	Rusia Rusia (Chechenia) Turquía	Belarús Bosnia y Herzegovina <i>Chipre</i> España (Cataluña) <i>Georgia (Abjasia)</i> <i>Georgia (Osetia del Sur)</i> Macedonia <i>Moldova, Rep. de (Transnistria)</i> Serbia – Kosovo	
SUBTOTAL		2	1	1	3	9	16
Oriente Medio	Egipto (Sinaí) Iraq <i>Siria</i> <i>Yemen (al-houthistas)</i>		<i>Israel – Palestina</i> Yemen (AQPA)	Egipto Líbano	Arabia Saudita Irán (noroeste) Irán (Sistán) Baluchistán Yemen (sur)	Palestina	
SUBTOTAL	4		2	2	4	4	18
TOTAL	13	8	12	18	29	41	121

Se señalan en cursiva los conflictos armados y tensiones con negociaciones de paz, ya sean exploratorias o estén formalizadas. Con asterisco, los conflictos armados finalizados durante 2017. Para más información sobre negociaciones y procesos de paz, véase Escola de Cultura de Pau. *Negociaciones de paz 2018. Análisis de tendencias y escenarios*. Barcelona: Icaria, 2018.

están haciendo a esta construcción. El capítulo está estructurado en tres bloques principales: el primero hace una evaluación de la situación mundial en lo que respecta a las desigualdades de género mediante el análisis del Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI, por sus siglas en inglés); en segundo lugar se analiza la dimensión de género en el impacto de los conflictos armados y crisis sociopolíticas; y el último apartado está dedicado a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. Al principio del capítulo se adjunta un mapa en el que aparecen señalados aquellos países con graves desigualdades de género según el Índice de Instituciones Sociales y Género. El capítulo lleva a cabo de manera específica un seguimiento de la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, establecida tras la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU.

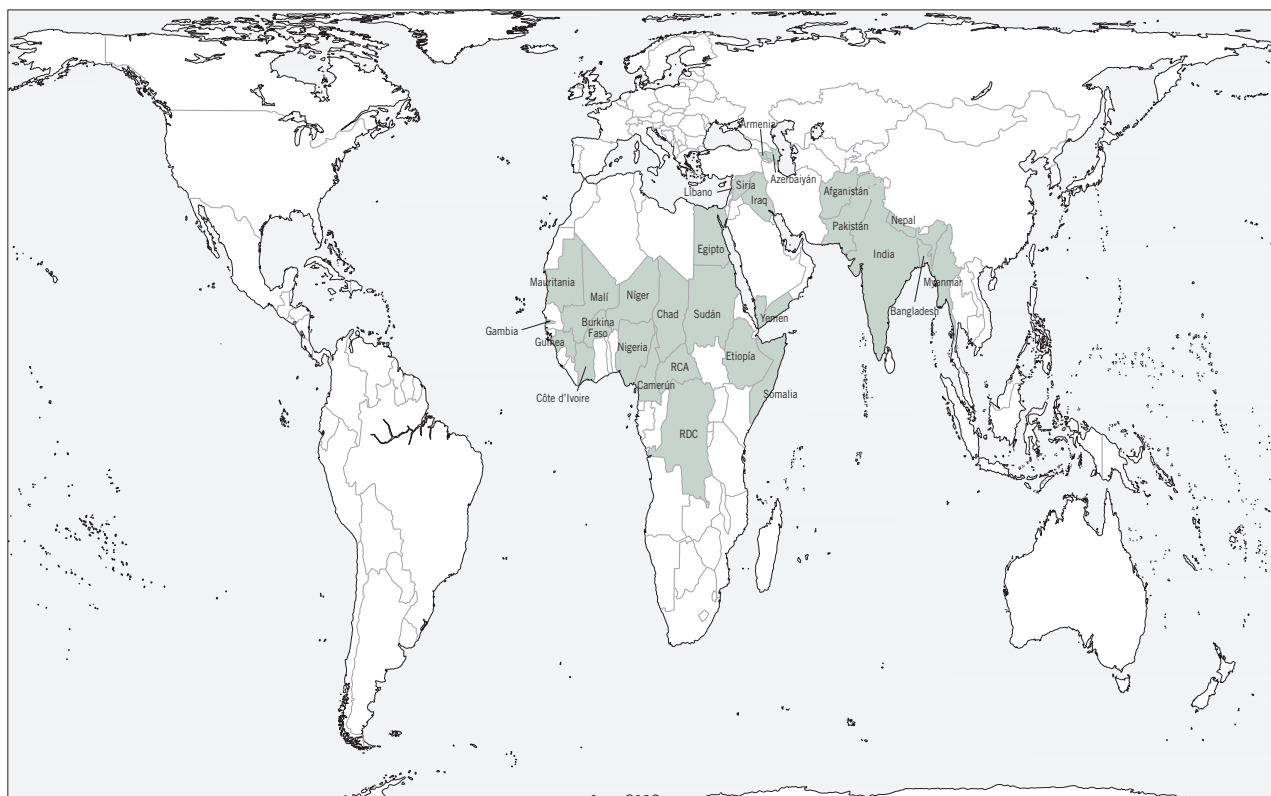
21 de los 33 conflictos armados que tuvieron lugar en 2017 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género

De acuerdo con el SIGI, los niveles de discriminación contra las mujeres fueron altos o muy altos en 38 países, concentrados principalmente en África, Asia y Oriente Medio. El análisis que se obtiene cruzando los datos de este indicador con el de los países que se encuentran en situación de conflicto armado revela que **21 de los 33 conflictos armados que continuaban activos al finalizar 2017 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género, con niveles altos o muy altos de discriminación y que cinco conflictos armados tenían lugar en países sobre los que no hay datos disponibles**

al respecto –Argelia, Libia, Israel-Palestina, Rusia y Sudán del Sur–. Así, el 75% de los conflictos armados para los que existían datos sobre igualdad de género tuvieron lugar en contextos con graves o muy graves desigualdades de género. Asimismo, en otros seis países en los que existía uno o más conflictos armados, los niveles de discriminación eran inferiores, en algunos casos con niveles medios (Burundi, Filipinas) y en otros con niveles bajos (Ucrania, Colombia, Tailandia y Turquía). En lo que respecta a las crisis sociopolíticas, al menos 32 de las 88 tensiones activas durante el año 2017 transcurrieron en países en los que existían graves desigualdades de género (niveles altos o muy altos según el SIGI), lo que supone un 45% de las tensiones para las que existían datos. 16 tensiones transcurrían en países sobre los que no hay datos disponibles (Eritrea, Guinea Ecuatorial, México, Japón, Corea RPD, Rep. de Corea, Chipre, Rusia, Arabia Saudita, Irán y Palestina).

La violencia sexual estuvo presente en un gran número de los conflictos armados activos durante el año 2017. Uno de los conflictos armados en los que la violencia sexual tuvo un mayor impacto durante el año 2017 fue el de Myanmar, en el que numerosas organizaciones de derechos humanos internacionales y locales denunciaron la violencia sexual perpetrada por las fuerzas de seguridad de Myanmar contra la población civil rohingya, especialmente las mujeres y las niñas. Otro caso de gravedad fue Sudán del Sur, donde actores armados continuaron perpetrando violencia sexual a una escala

Países en conflicto armado y/o tensión con graves desigualdades de género



Países en conflicto armado y tensión con niveles de discriminación de género altos o muy altos

	Niveles altos de discriminación	Niveles muy altos de discriminación
Conflictos armados*	Afganistán Camerún Etiopía India (2) Iraq Myanmar Pakistán (2) RCA	Chad Egipto Malí Níger Nigeria RDC (3) Siria Somalia Sudán (2) Yemen (2)
Tensiones	Armenia Azerbaiyán Burkina Faso Camerún Côte d'Ivoire Etiopía (3) Guinea India (4) Iraq Líbano (2) Nepal Pakistán (2)	Bangladesh Chad Egipto Gambia Níger Nigeria (2) RDC (4) Siria Somalia Sudán (2) Yemen

* Entre paréntesis, el número de conflictos armados o tensiones en dicho país.

** Una de las tensiones protagonizadas por la India hace referencia a la que mantiene con Pakistán.

*** Armenia y Azerbaiyán protagonizan una única tensión internacional, la relativa a la disputa en torno a Nagorno-Karabaj.

**** Una de las tensiones en Líbano hace referencia a que mantiene con Israel y Siria.

Fuente: Tabla elaborada a partir de los niveles de discriminación de género del SIGI (OCDE) y de las clasificaciones de conflicto armado y tensión de la Escola de Cultura de Pau. El SIGI establece cinco niveles de clasificación en función del grado de discriminación: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo.

masiva y dirigida contra personas de grupos étnicos considerados rivales. Como en años anteriores, el informe anual del secretario general de la ONU sobre el impacto de la violencia sexual en los conflictos armados, presentado en abril de 2017 y relativo al periodo de enero a diciembre de 2016, identificó actores armados responsables de haber cometido actos sistemáticos de violación y otras formas de violencia de sexual. También documentó los patrones y tendencias en la utilización de la violencia sexual en el marco de los conflictos de Afganistán, RCA, Colombia, RDC, Iraq, Libia, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Darfur (Sudán), Siria, Yemen; de los casos de posconflicto de Bosnia y Herzegovina, Côte d'Ivoire, Nepal y Sri Lanka, además de la situación en Burundi y Nigeria. Cabe alertar sobre el hecho de que de los 17 conflictos armados⁴ en los que según el informe del Secretario General de la ONU se registró violencia sexual en 2016, diez de esos conflictos registraron elevados niveles de intensidad durante 2017 –Libia, Región Lago Chad (Boko Haram), RDC (Kasai), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Myanmar, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas). Además, en diez de ellos también se produjo una escalada de la violencia durante el 2017 con respecto al año anterior –Libia, Malí (norte), RCA, RDC (este), RDC (Kasai), Somalia, Myanmar, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas).

A su vez, a lo largo del año se produjeron diferentes iniciativas de respuesta frente a la violencia sexual en

Se denunció el uso de violencia sexual y otras violencias de género en países en conflicto armado y/o tensión sociopolítica en 2017

el marco de los conflictos armados. Entre ellas, en RDC se condenó a cadena perpetua a 11 miembros de la milicia Djeshi ya Yesu por la violencia sexual contra 40 niñas, en un proceso apoyado por la sociedad civil y Naciones Unidas. La sentencia fue considerada de gran relevancia para la lucha contra la impunidad. Por otra parte, el secretario general de la ONU presentó los cuatro pilares de la nueva estrategia para combatir la explotación y abusos sexuales: los derechos y dignidad de las víctimas; la lucha contra la impunidad; la cooperación con la sociedad civil, personas expertas externas y otras organizaciones; y la reorientación de la comunicación, para promover la concienciación. Como parte de la nueva estrategia se estableció en 2017 un nuevo cargo, el de defensora de las Naciones Unidas para los derechos de las víctimas de abuso sexual. Según el balance de Naciones Unidas presentado en 2017, en 2016 se denunciaron 145 casos de explotación y abusos sexuales perpetrados en misiones de la ONU (65 casos que habrían sido perpetrados por personal civil y 80 por personal uniformado), frente a las 99 del año 2015 y 80 de 2014.

Además de la violencia sexual, países en conflicto armado y/o tensión sociopolítica siguieron afrontado otras violencia de género. Entre ellos, cabe señalar el caso de El Salvador, con elevadas tasas de feminicidios (468 feminicidios en 2017), a cuyos impactos se añaden

4. En algunos países recogidos en el informe del secretario general de la ONU se produjo más de un conflicto armado de acuerdo con la definición de la ECP. El listado completo de conflictos armados es: Libia, Malí (norte), Región Lago Chad (Boko Haram) –incluye Nigeria–, RCA, RDC (este), RDC (este-ADF), RDC (Kasai), Somalia, Sudán del Sur, Sudán (Darfur), Colombia, Afganistán, Myanmar, Iraq, Siria, Yemen (al-houthistas) y Yemen (AQPA).

las graves vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres por la prohibición absoluta del aborto y el elevado número de delitos sexuales (3.947 denuncias por delitos sexuales en 2016, según cifras de la Policía Nacional, de los cuales el 47% fueron violaciones de menores de 15 de años, y el 26% de adolescentes de entre 15 y 18 años). Los intentos de restringir la libertad de movimiento de mujeres por parte de los actores armados en Libia, o las denuncias de secuestros en Chechenia de hombres homosexuales –o percibidos como tales– perpetrados por actores armados no estatales y fuerzas de seguridad fueron otros casos de violencias de género en contextos de conflicto y tensión en 2017.

En relación a la resolución 1325 y la agenda internacional de mujeres, paz y seguridad, se constataron un año más las limitaciones en la implementación de la agenda. En algunos ámbitos, como el de la participación de mujeres en procesos de paz, se identificaron algunos retrocesos que pusieron de manifiesto la falta de sostenibilidad de los avances de años anteriores. Así, se redujo el número de mujeres en puestos de categoría superior en delegaciones negociadoras en los procesos a los que Naciones Unidas dio seguimiento; disminuyó el número de demandas de asesoramiento especializado en igualdad de género en procesos con mediación o co-mediación de la ONU, y también fue menor el número de consultas a la sociedad civil en el marco de procesos de paz. Asimismo, se redujo el número de acuerdos de paz que incluía cuestiones de género en su redactado. Organizaciones de mujeres de todo el mundo instaron a un mayor compromiso de los Estados con la participación activa de las mujeres y sociedad civil, a más esfuerzos en desarme, y a garantías para que las políticas antiterroristas, incluyendo en el ámbito financiero, no impidan ni restrinjan el trabajo de las organizaciones de mujeres, entre otras demandas.

Grupos de mujeres reclamaron una mayor participación en diferentes negociaciones en todo el mundo así como la inclusión de agendas de género. Entre otros casos significativos durante 2017, organizaciones de mujeres de Colombia respaldaron públicamente el inicio de negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla del ELN. Ambas delegaciones incluyeron mujeres. No obstante, las cuestiones de género no ocuparon un lugar relevante en la agenda de las conversaciones de paz durante el año. Asimismo, en relación al acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, en 2017 inició su trabajo la Instancia Especial para garantizar el enfoque de género en la implementación de dicho acuerdo y colaborar con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) para fortalecer este enfoque. No obstante, se identificaron dificultades y retrasos en la aplicación del mismo. En otros contextos, pese a las dificultades de participación, organizaciones de mujeres

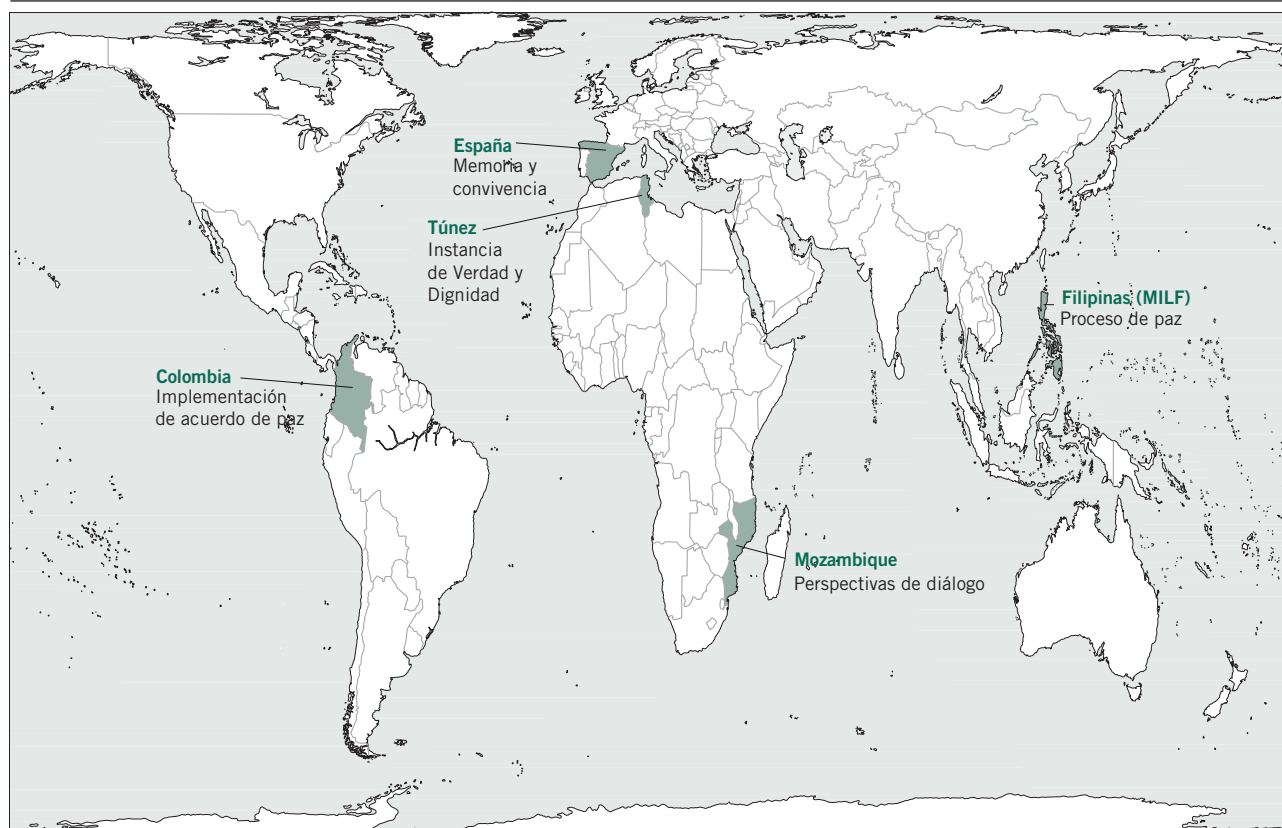
Después de varios años de tendencia positiva en la participación de las mujeres en los procesos de paz, se constataron retrocesos que evidencian la falta de sostenibilidad de los avances

persistieron en sus demandas de inclusión, como en Libia, Siria y Malí, señalando la infrarrepresentación actual. En contextos como Yemen, organizaciones de mujeres llamaron a la adopción inmediata de un cese el fuego, el acceso urgente a ayuda humanitaria y la reanudación de negociaciones de paz.

Oportunidades de Paz para 2018

En el cuarto capítulo (**Oportunidades de Paz para 2018**), el informe identifica y analiza cinco escenarios propicios para que se den pasos positivos en términos de construcción de paz en el futuro. Las oportunidades identificadas durante 2017 hacen referencia a diferentes regiones y temas.

- **Colombia:** La drástica reducción de la violencia y la relativa celeridad en la implementación del acuerdo entre el Gobierno y las FARC –en comparación con acuerdos de paz en otros conflictos–, sobre todo en lo que respecta a las medidas que debían ser implementadas en el corto plazo, supone oportunidades de avanzar hacia una paz sostenible, pese a los múltiples obstáculos y retos pendientes.
- **Filipinas (MILF):** Los avances en la discusión y tramitación de la Ley Fundamental de Bangasmore –a modo de estatuto de autonomía para la nueva región–, respaldada por el presidente, así como la defensa del acuerdo de paz de 2014 por el Gobierno, el MILF, analistas y gobiernos ante un contexto de incremento de la violencia por grupos leales a ISIS, suponen una oportunidad para avanzar en el proceso y en la implementación del acuerdo.
- **Mozambique:** Tras tres años de negociaciones entre el Gobierno de FRELIMO y el opositor RENAMO, varios pasos positivos en 2017 –entre ellos, una tregua del partido opositor, retirada de tropas de posiciones cercanas al feudo de RENAMO, la primera reunión desde 2015 entre el Presidente y el líder opositor, el apoyo de la sociedad civil local al diálogo, así como de actores internacionales– pueden suponer una nueva oportunidad para la paz en el país, pese a los obstáculos existentes.
- **España (País Vasco):** Los avances recientes –incluyendo la consecución del desarme de ETA en 2017 y los pasos hacia un escenario de disolución en el año entrante, así como el acuerdo en 2017 entre todos los grupos políticos del Parlamento vasco, con excepción del PP, para la creación de una Ponencia de Memoria y Convivencia– suponen pasos hacia la paz en el País Vasco, si bien persisten retos en ámbitos como víctimas y convivencia, y personas presas.



- **Túnez:** El trabajo de la Iniciativa de la Verdad y la Dignidad –instancia de justicia transicional aprobada en 2013 por el primer gobierno democrático de la transición–, que inició sus audiencias públicas a finales de 2016 y que al terminar 2017 había recibido más de 62.000 reclamaciones por abusos en el pasado –con un incremento de denuncias de mujeres, tras la movilización de organizaciones de mujeres–, constituye una oportunidad para la memoria y la reparación, pese a los obstáculos existentes, entre ellos la no colaboración de instituciones clave.

El informe Alerta! identifica y analiza cinco contextos propicios para que se den pasos positivos en términos de construcción de paz en el año 2018

desplazamiento forzado y ataques transfronterizos–, así como internos –el agravamiento de la crisis en las regiones anglófonas, marginadas política y económicamente por el Estado bajo control de la mayoría francófona. Los cuatro ciclos electorales de 2018 serán una nueva prueba en este escenario de riesgo.

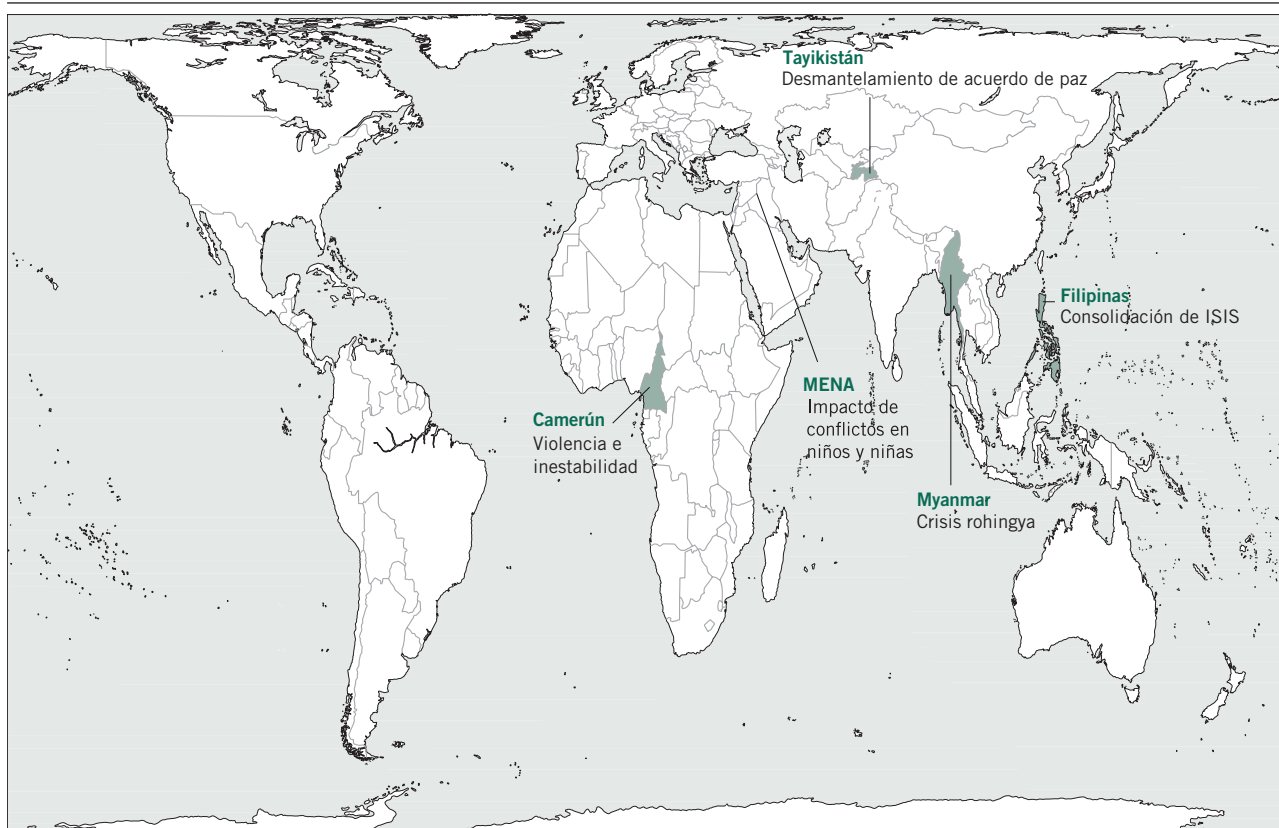
- **Filipinas (Mindanao):** El incremento sin precedentes en la actividad armada en Mindanao en 2017 por parte de organizaciones que han proclamado su lealtad al grupo armado Estado Islámico (ISIS), la creciente atención que el propio ISIS está dedicando a Mindanao y el Sudeste asiático, y un incremento del reclutamiento de organizaciones consideradas yihadistas ponen de manifiesto el riesgo de impactos en el proceso de paz entre el Gobierno y el MILF, así como los riesgos de extensión de ideologías extremistas entre sectores de la población.

Escenarios de riesgo para 2018

En el sexto capítulo (**Escenarios de riesgo para 2018**), el informe identifica y analiza 5 escenarios de conflicto armado y tensión que por sus condiciones pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves.

- **Camerún:** La escalada de inestabilidad que sufre el país podría incrementarse y generar una espiral de violencia de consecuencias impredecibles. Las dinámicas de riesgo están asociadas a factores regionales –entre ellos, la extensión de la violencia de Boko Haram al norte de Camerún y los efectos de la crisis de RCA en Camerún, incluyendo

- **Myanmar:** La grave crisis humanitaria y de derechos humanos que afectó al país en 2017 –con una operación militar de gran escala en respuesta a varios ataques del grupo armado rohingya ARSA en el estado de Rakhine, que causó el desplazamiento forzado de casi 700.000 personas, y perpetración de violencia sexual, incendios y saqueos por personal militar, y que podría ser constitutiva de delitos de genocidio– podría poner en peligro los



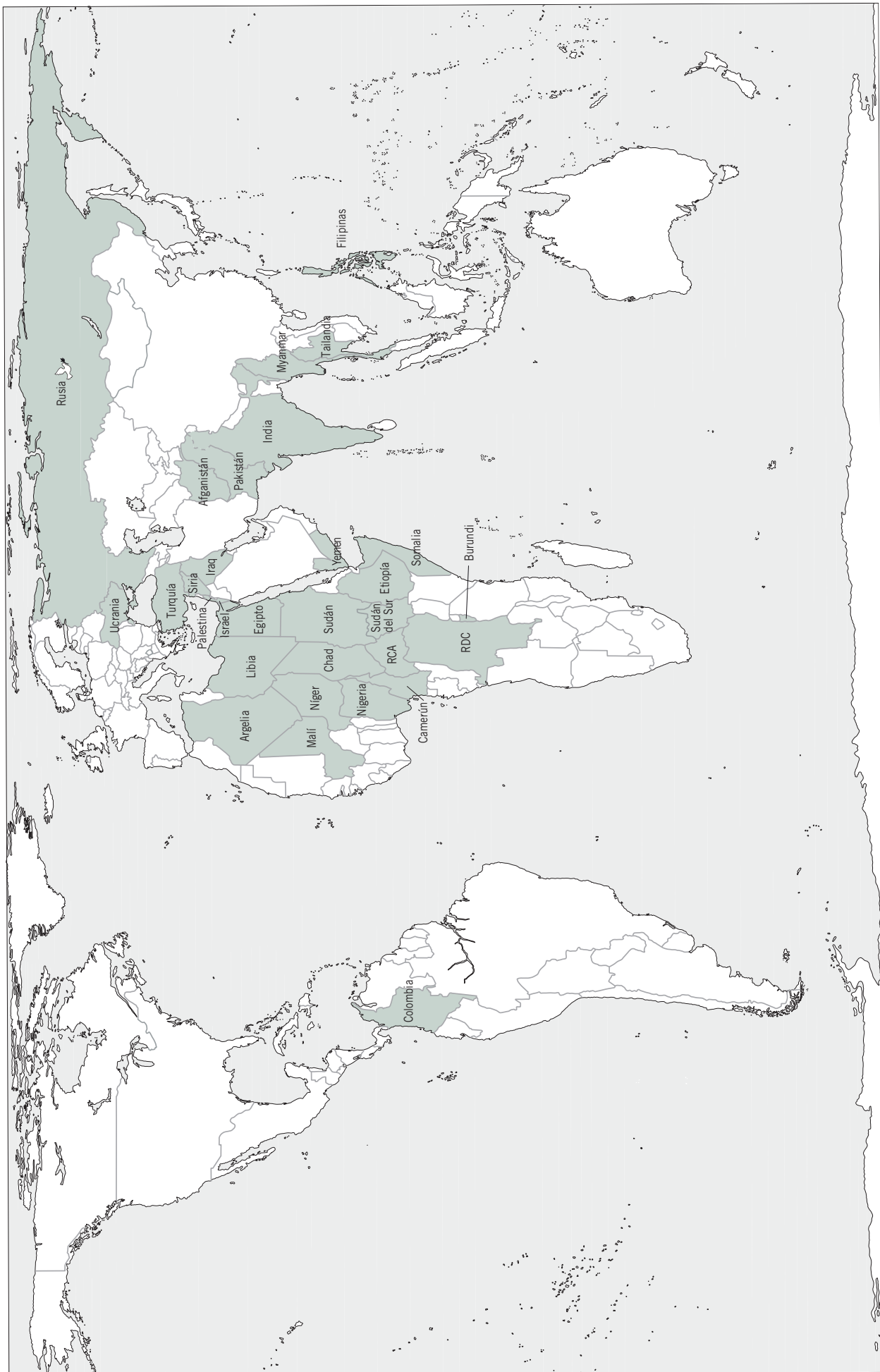
frágiles avances de democratización y construcción de paz de los últimos años.

- **Tayikistán:** El desmantelamiento en los últimos años del marco político resultante del acuerdo de paz de 1997 –que puso fin a la guerra civil de 1992-1997–, la escalada de medidas políticas y judiciales contra oposición política – ilegalizando a la oposición islamista–, la vulneración de derechos humanos de opositores, familiares y defensores de derechos humanos, y la grave reducción del espacio para la crítica podrían agravar la situación de tensión en el país.
- **Oriente Medio y Norte de África:** La intensificación en los niveles de violencia en diversos conflictos

El informe analiza cinco escenarios de conflicto armado y tensión que por sus condiciones pueden agravarse durante el año 2018

de la región MENA están teniendo un creciente impacto sobre niños y niñas, por las consecuencias del uso indiscriminado y/o deliberado de la violencia en zonas densamente pobladas –un 50% de incremento en el número de muertes de menores en 2017 en Siria, respecto a 2016, entre otros elementos–; los obstáculos a la asistencia humanitaria; los impactos en menores de la destrucción de infraestructura civil, incluyendo el severo deterioro de las instalaciones de médicas; el reclutamiento de niños y niñas; el desplazamiento forzado de menores y el uso de violencia sexual, entre otros factores. Las violencias contra los y las niñas suponen un grave riesgo de trauma para toda una generación.

Mapa 1.1 Conflictos armados



Países con conflicto armado

Fin del conflicto armado durante 2017

1. Conflictos armados

- Durante 2017 se registraron 33 conflictos armados, de los cuales 32 seguían activos al finalizar el año. La mayoría se concentró en África (14) y Asia (nueve), seguidos por Oriente Medio (seis), Europa (tres) y América (uno).
- La situación en Malí se deterioró durante el año, con una intensificación de las múltiples dinámicas de violencia que afectan la zona norte y centro del país y dificultades para implementar el acuerdo de paz.
- Al-Shabaab cometió el peor atentado en la historia de Somalia en medio de un incremento de la presencia estadounidense y de sus acciones contrainsurgentes terrestres y aéreas.
- La estrategia militar sobre Boko Haram desarrollada por Nigeria, Níger, Chad y Camerún, redujo su capacidad y a finales de 2017 el grupo fue desalojado en gran parte de su feudo en Sambisa Forest.
- La escalada de la violencia en Kasai, en el centro-sur de RDC, provocó que se doblara la población desplazada en el país, alcanzando los 4,1 millones, situándose como el primero en número de desplazados en África.
- El panorama en Libia se caracterizó por la persistente crisis política, la fragmentación institucional y la actividad de un sinnúmero de grupos armados que derivaron en múltiples focos de violencia.
- En Colombia, se dio por finalizado el conflicto entre FARC y Gobierno tras concluir el desarme y la desmovilización de este grupo armado, en un proceso verificado por la ONU.
- En Filipinas, Mindanao vivió la escalada de violencia más grave de los últimos años por los intensos enfrentamientos en la ciudad de Marawi durante cinco meses entre el Ejército y grupos armados leales a ISIS.
- La operación militar en el estado de Rakhine, en Myanmar, tras varios ataques del grupo armado rohingya ARSA generó una gravísima crisis humanitaria y de derechos humanos.
- Turquía intensificó su lucha contra el PKK dentro de Turquía y en la región, si bien el balance de víctimas mortales asociado al conflicto disminuyó de forma significativa respecto a 2016.
- El conflicto armado convirtió a Yemen en escenario de la peor crisis humanitaria a nivel mundial, con 22,2 millones de personas necesitadas de asistencia, 3,4 millones más que el año anterior.
- Iraq continuó siendo uno de los escenarios de conflicto de mayor intensidad a nivel mundial, en un año marcado por la expulsión del grupo armado ISIS de Mosul y de la mayor parte del territorio.
- El conflicto armado en Siria siguió agravándose fruto de las complejas dinámicas de violencia, los numerosos frentes de batalla y severos impactos en la población civil.

El presente capítulo analiza los conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo del año 2017. Está estructurado en tres partes. En el primer apartado se expone la definición de conflicto armado y sus características. En el segundo se analizan las tendencias de los conflictos durante 2017, incluyendo las dinámicas globales y regionales y otras cuestiones relacionadas con la conflictividad internacional. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Además, al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan los países afectados por conflictos armados en 2017.

1.1. Conflictos armados: definición

Se entiende por **conflicto armado** todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o desplazada, violencia sexual, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y en el tejido social o interrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de objetivos diferenciados de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a:

- demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias;
- oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder;
- o control de los recursos o del territorio.

Tabla 1.1. Resumen de los conflictos armados en 2017

Conflicto ¹ -inicio-	Tipología ²	Actores principales ³	Intensidad ⁴
			Evolución ⁵
África			
Argelia -1992-	Interno internacionalizado	Gobierno, AQMI (ex GSPC), MUYAO, al-Mourabitoun, Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS, gobiernos del norte de África y Sahel	1
	Sistema		=
Burundi -2015-	Interno internacionalizado	Gobierno, facciones de antiguos grupos armados	1
	Gobierno		↓
Etiopía (Ogadén) -2007-	Interno internacionalizado	Gobierno, ONLF, OLF, milicias progubernamentales	1
	Autogobierno, Identidad		=
Libia -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno de Acuerdo Nacional con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, facciones armadas vinculadas a la Operación Dignidad (Ejército Nacional de Libia o ENL), grupos armados vinculados con la Operación Amanecer, milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi, ISIS, AQMI, entre otros actores armados; EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, EAU, entre otros países	3
	Gobierno, Recursos, Sistema		↑
Malí (norte) -2012-	Interno internacionalizado	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, GSIM, MLF, ANSIPRJ, MINUSMA, ECOWAS, Francia (Operación Barkhane), Fuerza Conjunta G5-Sahel	1
	Sistema, Autogobierno, Identidad		↑
Región Lago Chad (Boko Haram) ⁶ - 2011-	Interno internacionalizado	Boko Haram (BH), MNJTF (Nigeria, Camerún, Chad, Níger)	3
	Sistema		=
RCA -2006-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupos armados de la ex coalición rebelde Séléka (FPRC, MPC, UPC), milicias anti-balaka, milicia 3R, Francia (operación Sangaris), MINUSCA, EUFOR, grupos vinculados al antiguo Gobierno de François Bozizé, otros remanentes de grupos armados (antiguas Fuerzas Armadas), grupo armado ugandés LRA	2
	Gobierno, Recursos		↑

- En esta columna se señala el Estado o la región en que se desarrolla el conflicto armado, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado a la que se circunscribe el conflicto o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
- Este informe clasifica y analiza los conflictos armados a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses y por otra parte la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas principales, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, los conflictos armados pueden ser internos, internos internacionalizados o internacionales. Se considera conflicto armado interno aquel enfrentamiento protagonizado por actores armados del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por conflicto armado interno internacionalizado aquel en el que alguna de las partes contendientes es foránea, y/o cuando el enfrentamiento se extiende al territorio de países vecinos. Para considerar un conflicto armado como interno internacionalizado también se tiene en cuenta el hecho de que los grupos armados tengan sus bases militares en los países vecinos, en connivencia con esos Estados, y lancen sus ataques desde éstos. Finalmente, se entiende por conflicto internacional aquel en el que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la mayoría de los conflictos armados actuales tienen una importante dimensión e influencia regional o internacional debido, entre otros factores, a los flujos de personas refugiadas, al comercio de armas, a los intereses económicos o políticos (como la explotación legal o ilegal de recursos) que los países vecinos tienen en el conflicto, a la participación de combatientes extranjeros o al apoyo logístico y militar proporcionado por otros Estados.
- En esta columna se señalan los actores que intervienen de manera directa en las hostilidades. Los actores principales que participan de forma directa en los enfrentamientos conforman una amalgama de actores armados regulares o irregulares. Los conflictos suelen ser protagonizados por el Gobierno, o sus Fuerzas Armadas, contra uno o varios grupos armados de oposición, pero también pueden abarcar otros grupos no regulares como clanes, guerrillas, señores de la guerra, grupos armados opuestos entre sí o milicias de comunidades étnicas o religiosas. Aunque el instrumento bélico que más utilizan los actores es el armamento convencional, y dentro de éste las armas ligeras (que son las causantes de la mayoría de las víctimas mortales de los conflictos), en muchos casos se utilizan otros medios, como ataques suicidas, atentados, violencia sexual, e incluso el hambre es utilizada como instrumento de guerra. Existen además otros actores que no participan directamente en las acciones armadas pero que sí influyen de manera significativa en el conflicto.
- La intensidad de un conflicto armado (alta, media o baja) y su evolución (escalada de la violencia, reducción de la violencia, sin cambios) se evalúan principalmente a partir de su letalidad (número de víctimas) e impacto en la población y en el territorio. Asimismo, hay otras dimensiones que merecen ser consideradas, como la sistematización y frecuencia de la violencia o la complejidad de la disputa bélica (la complejidad está normalmente vinculada al número y fragmentación de los actores involucrados, al nivel de institucionalización y capacidad del Estado y al grado de internacionalización del conflicto, así como a la elasticidad de los objetivos y a la voluntad política de las partes para alcanzar acuerdos). Por tanto, suelen considerarse conflictos armados de alta intensidad aquellos que provocan más de 1.000 víctimas mortales anuales además de normalmente afectar a porciones significativas del territorio y la población e implicar a un número importante de actores (que establecen interacciones de alianza, confrontación o coexistencia táctica entre ellos). Los conflictos de media y baja intensidad, en los que se registran más de 100 víctimas mortales anuales, presentan las características anteriormente mencionadas con una menor presencia y alcance. Se considera que un conflicto armado finaliza cuando se produce una reducción significativa y sostenida de las hostilidades armadas, bien sea por victoria militar, acuerdo entre los actores enfrentados, desmovilización de una de las partes o bien porque una de las partes contendientes renuncia a o limita notablemente la lucha armada como estrategia para la consecución de unos objetivos. Cualquiera de estas opciones no significa necesariamente la superación de las causas de fondo del conflicto armado ni cierra la posibilidad de un rebrote de la violencia. El cese temporal de hostilidades, formal o tácito, no implica necesariamente el fin del conflicto armado.
- En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2017 con la del 2016, apareciendo el símbolo de escalada de la violencia (↑) si la situación general del conflicto durante 2017 es más grave que la del año anterior, el de reducción de la violencia (↓) si es mejor y el de sin cambios (=) si no ha experimentado cambios significativos.
- En ediciones anteriores del informe *Alerta!* este caso había sido identificado como "Nigeria (Boko Haram)" por la concentración de las acciones armadas de esta organización en Nigeria. A partir de 2016 el caso pasa a denominarse "Región Lago Chad (Boko Haram)" dada la regionalización del conflicto armado a la región denominada Lago Chad, compartida por Nigeria, Chad, Níger y Camerún.

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
RDC (este) -1998-	Interno internacionalizado	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR, milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, grupos armados de Ituri, grupo armado de oposición burundés FNL, Rwanda, MONUSCO	2
	Gobierno, Identidad, Recursos		↑
RDC (este – ADF) -2014-	Interno internacionalizado	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO	2
	Sistema, Recursos		=
RDC (Kasai) -2017-	Interno	Gobierno, diversas milicias de adscripción étnica (Bana Mura, Kamwina Nsapu)	3
	Gobierno, Identidad		↑
Somalia -1988-	Interno internacionalizado	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab	3
	Gobierno, Sistema		↑
Sudán (Darfur) -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias progubernamentales PDF, unidades paramilitares RSF, <i>janjaweed</i> , coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), otros grupos, UNAMID	2
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↓
Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul) -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), Sudán del Sur	2
	Autogobierno, Recursos, Identidad		↓
Sudán del Sur -2009-	Interno internacionalizado	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción ex vicepresidente Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF,SSNLM, REMNESA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Sudán, Uganda, UNMISS.	3
	Gobierno, Recursos, Identidad		=
América			
Colombia -1964-	Interno internacionalizado	Gobierno, FARC-EP, ELN, grupos paramilitares	1
	Sistema		↓
Asia			
Afganistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS	3
	Sistema		=
Filipinas (NPA) -1969-	Interno	Gobierno, NPA	1
	Sistema		↑
Filipinas (Mindanao) -1991-	Interno internacionalizado	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao, facciones del MILF y el MNLF	3
	Autogobierno, Identidad, Sistema		↑
India (Jammu y Cachemira) -1989-	Interno internacionalizado	Gobierno, JKLF, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, United Jihad Council, All Parties Hurriyat Conference	1
	Autogobierno, Identidad		↑
India (CPI-M) -1967-	Interno	Gobierno, CPI-M (naxalitas)	1
	Sistema		↓
Myanmar -1948-	Interno	Gobierno, grupos armados (KNU/KNLA, SSA-S, SSA-N KNPP, UWSA, CNF, ALP, DKBA, KNPLAC, SSNPLO, KIO, ABSDF, AA, TNLA, HaY, MNDAA)	3
	Autogobierno, Identidad		↑
Pakistán -2001-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes internacionales, EEUU	3
	Sistema		↓
Pakistán (Baluchistán) -2005-	Interno internacionalizado	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT; sociedad civil, LeJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS	2
	Autogobierno, Identidad, Recursos		↓
Tailandia (sur) -2004-	Interno	Gobierno, grupos armados de oposición secesionistas	1
	Autogobierno, Identidad		↓

Conflicto -inicio-	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Europa			
Rusia (Daguestán) -2010-	Interno	Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Daguestán, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS)	1
	Sistema		Fin
Turquía (sudeste) -1984-	Interno internacionalizado	Gobierno, PKK, TAK, ISIS	2
	Autogobierno, Identidad		↓
Ucrania (este) ⁷ -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia	2
	Gobierno, Identidad, Autogobierno		=
Oriente Medio			
Egipto (Sinaí) -2014-	Interno internacionalizado	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasam), Israel	3
	Sistema		=
Iraq -2003-	Interno internacionalizado	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Irán, Turquía, PKK	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		↑
Israel-Palestina -2000-	Internacional	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas, Ahfad al-Sahaba knaf Bayt al-Maqdis (vinculado a ISIS)	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		=
Siria -2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias YPG/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados	3
	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad		↑
Yemen (al-houthistas) -2004-	Interno internacionalizado	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), fuerzas leales al ex presidente Alí Abdullah Saleh, milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Irán	3
	Sistema, Gobierno, Identidad		↑
Yemen (AQPA) - 2011-	Interno internacionalizado	Gobierno, AQPA/Ansar Sharia, ISIS, EEUU, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, EAU, milicias tribales, milicias al-houthistas	1
	Sistema		↓

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta;

↑: escalada de la violencia; ↓: reducción de la violencia ; = : sin cambios; Fin: deja de considerarse conflicto armado

1.2. Conflictos armados: análisis de tendencias en 2017

En este apartado se analizan las tendencias globales y regionales de los conflictos armados a lo largo de 2017, incluyendo el balance respecto a años anteriores, la distribución geográfica de los conflictos y las principales tendencias por regiones, la relación entre los actores implicados y el escenario de la disputa, las principales causas de los conflictos armados actuales, la evolución general de los contextos y la intensidad de los conflictos en función de sus niveles de violencia y su impacto. Asimismo, en este apartado se analizan algunas de las principales consecuencias de los conflictos armados en la población civil, entre ellas la repercusión de las hostilidades en niños y niñas, el agravamiento de situaciones de crisis humanitaria como resultado de conflictos, el impacto de la violencia sexual en

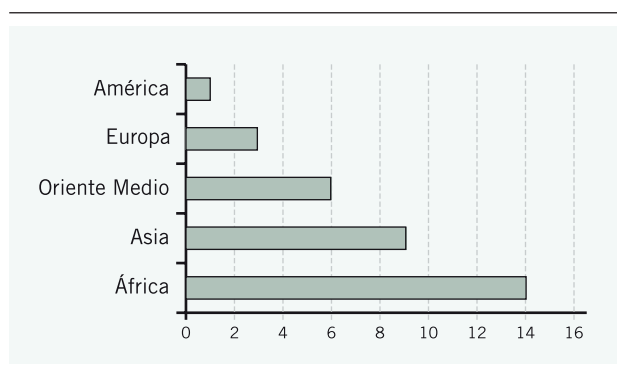
contextos bélicos y el desplazamiento forzado a causa de situaciones de conflicto y violencia.

1.2.1. Tendencias globales y regionales

Durante el año 2017 se mantuvo la tendencia observada en años anteriores respecto al número de conflictos armados, **con un total de 33 casos, la misma cifra que en 2016 y un número similar al registrado en períodos previos** (35 contextos en 2015, 36 en 2014, 35 en 2013). De los 33 casos contabilizados en 2017, solo 32 permanecían activos al finalizar el año ya que la situación en la república rusa de Daguestán dejó de ser considerada como un conflicto armado tras presentar un patrón de reducción significativa en los niveles de

7. En la anterior edición del informe *Alerta!* se analizaban por separado el conflicto armado Ucrania (este) y la tensión Ucrania – Rusia, que se analizan conjuntamente en esta edición.

Gráfico 1.1. Distribución regional del número de conflictos armados en 2017



violencia en los últimos años. En comparación con 2016, la lista de conflictos armados registró un nuevo caso en 2017: el conflicto en la región de Kasai en la RDC, tras la intensificación de las hostilidades entre el Gobierno congolés y la milicia Kamwina Nsapu y de los enfrentamientos entre organizaciones armadas vinculadas a diversos grupos étnicos. En cuanto a la distribución geográfica de los conflictos armados a nivel mundial, los datos de 2017 ofrecen un panorama similar al de años anteriores. La gran mayoría de los casos se concentraron en África (14) y Asia (nueve), seguidos por Oriente Medio (seis), Europa (tres) y América (uno). En comparación con 2016, la distribución de conflictos por regiones en 2017 presentó un contexto más en África –RDC (Kasai)– y uno menos en Asia –ya que el caso correspondiente a la región china de Xinjiang (Turquestán) dejó de ser considerado como conflicto armado al finalizar 2016 y durante 2017 pasó a ser analizado como un escenario de tensión.⁸ Cabe destacar que los casos en el continente africano representaron un 44% del total de conflictos armados a nivel global.

En lo referente a la relación entre los actores involucrados en el conflicto y el escenario de la disputa, se identificaron conflictos internos, internacionales y, mayoritariamente, internos internacionalizados. Un total de seis contextos o 18% de los conflictos a nivel global fueron de carácter interno, es decir, disputas entre actores armados de un mismo Estado y que operan exclusivamente en y desde las fronteras del mismo: RDC (Kasai), Filipinas (NPA), India (CPI-M), Myanmar, Tailandia (sur) y Rusia (Daguestán). A nivel mundial, solo un caso fue catalogado como internacional: el de Israel-Palestina (representando un 3% del total de conflictos). El resto de los conflictos armados –26 de 33 contextos, equivalentes a un 79%– fueron de carácter interno internacionalizado. Se trata de casos en los que alguna de las partes es foránea, los actores armados involucrados tienen bases o lanzan ataques desde el extranjero y/o cuando la disputa se extiende

a países vecinos. En numerosos conflictos este factor de internacionalización se concretó en la implicación de terceros actores, incluyendo misiones de la ONU o vinculadas a organismos de carácter regional, coaliciones militares regionales e internacionales *ad-hoc*, Estados y grupos armados de acción transfronteriza, entre otros.

En diversos conflictos, y particularmente en África, se observó la implicación de misiones de la ONU, entre ellas MINUSCA en RCA, MONUSCO en RDC, UNAMID en Sudán o UNMISS en Sudán del Sur o MINUSMA en Malí. Esta última ha sido considerada como la misión de la ONU más peligrosa a nivel mundial tras la muerte de decenas de sus efectivos en los últimos años. Paralelamente, se mantuvo el despliegue de misiones de organizaciones regionales como la UA (AMISOM en Somalia), la UE (EUNAVFOR en Somalia) o la OTAN (misión Rolute Support en Afganistán) y también el de coaliciones militares de alcance regional y/o internacional creadas *ad-hoc* en el marco de algunos conflictos. Entre ellas, cabe destacar, por ejemplo, la Fuerza Conjunta G5-Sahel –concebida en 2014, pero formalizada en 2017– que reúne a tropas de Malí, Burkina Faso, Níger, Chad y Mauritania con el fin de dar respuesta a los retos de seguridad en la región del Sahel. Esta alianza militar estaría inspirada, a su vez, en la experiencia de la Fuerza Militar Conjunta Regional MNJTF, puesta en marcha en 2016 para combatir la amenaza del grupo armado Boko Haram e integrada por Nigeria, Níger, Chad y Camerún. Otro ejemplo de coalición militar *ad-hoc* es el del conglomerado de fuerzas liderado por Arabia Saudita e integrado por otros nueve países (EAU, Bahrein, Kuwait, Qatar, Egipto, Jordania, Marruecos, Senegal y Sudán) en el marco de su participación desde 2015 en la guerra en Yemen y el de la coalición internacional anti-Estado Islámico (ISIS) –Global Coalition Against Daesh–, establecida en 2014, liderada por EEUU e integrada por 71 países y cuatro instituciones (UE, Liga Árabe, OTAN e Interpol)⁹.

Algunos Estados tuvieron una especial implicación en conflictos fuera de sus fronteras, entre ellos Francia, que continuó con su participación en el conflicto armado en Malí a través del despliegue de su operación Barkhane; Egipto, que lanzó ataques en territorio libio en represalia por ataques del grupo armado ISIS; Turquía, que intensificó su lucha contra el PKK en países vecinos; Rusia e Irán, que continuaron activamente comprometidos en el apoyo al régimen de Bashar al-Assad en el marco de la guerra de Siria; o EEUU, que además de liderar la coalición internacional anti-ISIS en sus campañas en Siria e Iraq se mantuvo implicado en otros contextos. De hecho, en varios de estos casos el nuevo Gobierno de EEUU impulsó un aumento de sus actividades militares. Así, en Somalia, se produjo

8. Véase el resumen sobre China (Xinjiang) en el capítulo 2 (Tensiones).
9. Para más información, véase <http://theglobalcoalition.org/en/home/>.

un incremento sin precedentes de los ataques aéreos estadounidenses, más del doble que en 2016. Una tendencia similar se observó en Yemen, donde se triplicaron las acciones aéreas estadounidenses contra presuntos objetivos de AQPA e ISIS. En Afganistán, en tanto, EEUU reconoció haber desplegado un mayor número de tropas (11.000 respecto a lo que había admitido oficialmente, 8.400).

En diversos conflictos armados, el elemento de internacionalización estuvo vinculado a la presencia de grupos armados que operan más allá de las fronteras de sus países de origen. Uno de los casos emblemáticos fue AQMI, que continuó protagonizando acciones en Argelia, pero que también perpetró destacadas acciones en el Sahel, en el marco de un progresivo proceso de “africanización” del grupo en los últimos años. De hecho, las ofensivas más significativas del grupo durante 2017 tuvieron lugar en Malí, donde la filial de AQMI unió sus fuerzas a las de Al-Mourabitoun y Ansar Dine para crear una nueva organización autodenominada Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM). Otro ejemplo destacado fue ISIS, que a lo largo de 2017 sufrió importantes retrocesos en sus principales feudos en Iraq (Mosul) y Siria (Raqqá), pero que continuó reivindicando acciones más allá de Oriente Próximo. Así, por ejemplo, ISIS expandió su actividad armada y fue responsable de algunos de los más graves atentados en Pakistán, reivindicó algunas de las ofensivas más cruentas en Afganistán y cobró un mayor protagonismo en la región filipina de Mindanao, donde se constataron fuertes vínculos de ISIS con grupos armados locales y una mayor presencia de combatientes foráneos en las hostilidades con el gobierno.

La mayor parte de los conflictos armados tuvo entre sus principales motivaciones la búsqueda de un cambio de gobierno o de sistema

Además de aprovechar situaciones de conflicto armado en numerosos países para ampliar su radio de acción, durante 2017 ISIS también reivindicó una serie de ataques en distintos puntos del mundo atribuidos a simpatizantes del grupo o células de la organización. Entre ellos cabe mencionar los ataques ocurridos en **Reino Unido** –un atentado en las afueras del Palacio de Westminster, en marzo, causó seis víctimas mortales; el ataque suicida durante un concierto en Manchester, en mayo, dejó 22 personas fallecidas; una camioneta atropelló y luego tres atacantes acuchillaron a diversas personas en la zona del puente de Londres, en junio, en un hecho que acabó con la muerte de ocho personas–, **Suecia** –el ataque en una zona comercial de Estocolmo, en abril, causó la muerte a cinco personas–, **Francia** –un incidente ocurrido en los Campos Elíseos, en abril, se saldó con dos personas fallecidas; otro ataque ocurrido en Marsella, en octubre, acabó en la muerte de tres personas–, **Indonesia** –el ataque a una estación de autobús en Jakarta, en mayo, provocó la muerte a tres policías–, **Irán** –dos ataques contra el Parlamento y el mausoleo del Ayatollah Khomeini en Teherán, en junio, acabaron con la vida de 17 personas–, **España** –una camioneta atropelló deliberadamente a transeúntes

en la zona de La Rambla en Barcelona, en agosto, causando la muerte a 13 personas y heridas a más de un centenar, mientras que un segundo ataque en la localidad de Cambrils resultó en la muerte de una mujer y de cuatro de los atacantes– y **EEUU** –un ataque con camión en Nueva York, en octubre, provocó la muerte de ocho personas y un intento de atentado suicida fue desarticulado en diciembre.

En materia de causas de los conflictos armados, el análisis de los distintos escenarios confirma su naturaleza multicausal. Siguiendo la tendencia observada en años previos, **durante 2017 la mayor parte de los conflictos armados tuvo entre sus principales motivaciones la oposición a las políticas domésticas o internacionales de los respectivos gobiernos o al sistema político, económico, social o ideológico de un determinado Estado, que derivaron en luchas por acceder al poder o erosionarlo.** Este tipo de factores estuvo presente en 24 de los 33 casos analizados, es decir, en un 73% de los contextos. De éstos, en 18 casos se identificó la búsqueda de un cambio de sistema, promovido principalmente por actores armados de inspiración socialista –como en los casos de organizaciones como CPI-M en India, el NPA en Filipinas o las FARC en Colombia– o por organizaciones que se atribuyen una agenda yihadista y que pretenden imponer su particular interpretación de los preceptos islámicos. Entre estos últimos grupos cabe mencionar ejemplos como el autodenominado ISIS y sus filiales y organizaciones afines en distintos continentes –ISIS estuvo presente en países como Argelia, Libia, Nigeria, Somalia, Afganistán, Pakistán, Filipinas, Rusia, Turquía, Iraq, Siria, Yemen, entre otros–; las diversas ramas de al-Qaeda que operan en el norte de África y Oriente Medio –entre ellas AQMI (Argelia y Sahel) y AQPA (Yemen)–; las milicias talibán que operan en Afganistán y Pakistán o el grupo al-Shabaab en Somalia.

Un segundo gran grupo de casos tuvo entre sus principales causas aspiraciones de carácter identitario y/o demandas de autodeterminación o autogobierno. Este tipo de elementos se identificó en 18 de los 33 conflictos armados en 2017, equivalentes a un 55%, incluyendo casos como el de Malí (norte), los conflictos en el este de la RDC y en la región de Kasai, los de Darfur y Kordofán y Nilo Azul en el caso de Sudán, el de Mindanao en Filipinas, el de Jammu y Cachemira en India, el de Baluchistán en Pakistán, el del sur de Tailandia, el de Myanmar, o el del sudeste de Turquía vinculado a la cuestión kurda, por mencionar algunos. De estos casos, cabe destacar casos como el de Kasai o el de Myanmar, que vivieron una escalada de violencia especialmente significativa durante el año 2017 y en los que el componente identitario fue un elemento clave. Un tercer grupo de casos tuvo entre sus principales motivaciones cuestiones relacionadas con el control de recursos y territorios, presente en nueve de los 33 casos (27%). El factor vinculado a la disputa

por recursos se observó mayoritariamente en contextos del continente africano, incluyendo Libia, RCA, RDC (este), RDC (este-ADF), Sudán (Darfur), Sudán del Sur, aunque también estuvo presente en Asia, en el caso de Pakistán (Baluchistán). En tanto, el factor territorial fue un asunto clave en el conflicto entre Palestina e Israel.

En lo referente a la evolución de los conflictos armados en 2017, y siguiendo con la tendencia observada el año anterior, **la mayoría de contextos registró un empeoramiento en los niveles de hostilidad y violencia.**

Un total de 13 de los 33 casos –equivalentes a un 39%– presentó una evolución negativa, una cifra ligeramente inferior a la de 2016 (46%). Los casos en los que se identificó un claro deterioro de la situación durante 2017 fueron Libia, Malí (norte), RCA, RDC (este), RDC (Kasai), Somalia, Filipinas (NPA), Filipinas (Mindanao), India (Jammu y Cachemira), Myanmar, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas). En algunos contextos, como en Malí o Libia, la intensificación del conflicto estuvo relacionada, al menos en parte, con las dificultades para implementar acuerdos para abordar los conflictos desde una perspectiva política. En el caso de Filipinas (NPA), el incremento de la violencia también estuvo vinculado a la crisis en las negociaciones entre el Gobierno y el NDF (referente político del NPA). Algunos de los casos en los que el deterioro fue más acusado fueron Myanmar, Siria y Yemen (al houthistas), donde se intensificaron los niveles de violencia, las graves violaciones a los derechos humanos y las crisis humanitarias, que afectaron principalmente a la población civil. En otros nueve de los 33 conflictos armados (27%) contabilizados en 2017 se registró una evolución similar a la de 2016, mientras que en otros 11 casos se constató una reducción en los niveles de violencia. La intensidad de la violencia disminuyó en escenarios como Colombia y Tailandia (sur) –producto de la implementación del acuerdo de paz y en el marco de un proceso de negociación activo, respectivamente– y también en la república rusa de Daguestán, donde la tendencia de reducción en los niveles de violencia de los últimos años llevó a que el caso dejara de ser considerado como un conflicto armado activo en 2017. Cabe destacar, sin embargo, que la identificación de

La mayor parte de los conflictos armados en 2017 (40%) fueron de alta intensidad, caracterizados por altos niveles de violencia y letalidad por encima de las mil víctimas mortales anuales

un caso como finalizado por reducción sostenida de las hostilidades no supone necesariamente que se hayan superado las causas de fondo del conflicto ni cierra la posibilidad de un futuro rebrote de la violencia.

En lo que respecta a la intensidad de los conflictos, una parte importante de ellos –12 de los 33 contextos, equivalentes a un 36%– presentó una intensidad baja, mientras que una porción menor de casos –ocho de los 33, que representan un 24%– registró un nivel medio. Siguiendo la tendencia de 2016, **la mayor parte de los conflictos armados en 2017 –13 de los 33 casos o un 40%– fueron de alta intensidad,** es decir, escenarios caracterizados por niveles de letalidad por encima de las 1.000 víctimas mortales anuales, con severos impactos en el territorio y graves consecuencias en la población. Los trece conflictos de mayor gravedad en 2017 fueron Libia, Región Lago Chad (Boko Haram), RDC (Kasai), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Filipinas (Mindanao), Myanmar, Pakistán, Egipto (Sinaí), Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas).

Respecto a 2016, **Asia fue la región que presentó una mayor variación, con un incremento del 50% en los casos de alta intensidad en 2017, pasando de dos a cuatro contextos tras la dramática intensificación de la violencia en Filipinas (Mindanao) y Myanmar.** Cabe destacar, adicionalmente, que en muchos de estos casos se superó con creces el umbral del millar de víctimas anuales. Así, por ejemplo, en África, en la región de Lago Chad las hostilidades entre las fuerzas armadas de varios países de la zona y el grupo armado Boko Haram habrían causado unas 1.800 víctimas mortales entre enero y diciembre. En RDC (Kasai) solo hasta junio el conflicto había causado la muerte de al menos 3.400 personas, según cifras proporcionadas por la Iglesia Católica local; mientras que en Somalia balances parciales indicaban que al menos 3.800 personas murieron en 2017. En Asia, en Afganistán, sólo entre la población civil el conflicto causó más de 3.400 muertes –documentadas por la UNAMA–; en la región filipina de Mindanao murieron 1.100 personas en tan solo cinco meses; y en Myanmar durante el primer mes de operación militar en el estado de Rakhine habrían muerto al menos 6.700

Gráfico 1.2. Intensidad de los conflictos armados

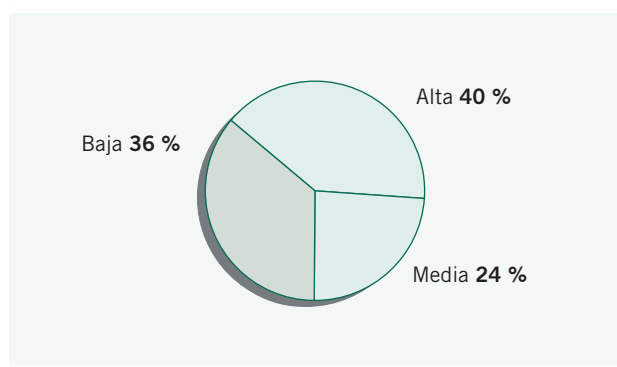
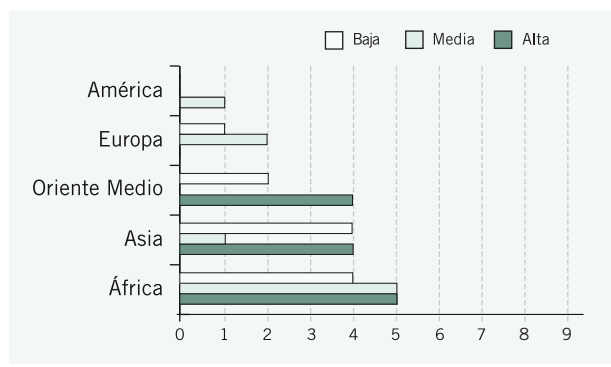


Gráfico 1.3. Intensidad de los conflictos por regiones



Cuadro 1.1. Tendencias regionales en materia de conflictividad armada

<p>ÁFRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente albergó el mayor número de casos de conflictos armados a nivel mundial, con 14 de los 33 (equivalentes a un 44%). Esta cifra supone el incremento en un caso respecto a 2016, dado que en 2017 los niveles de violencia en la región de Kasai en la RDC derivaron en que el caso pasara a ser considerado como un conflicto armado. • Más de un tercio de los conflictos en África fueron de alta intensidad (cinco de los 14) –Libia, Región Lago Chad (Boko Haram), RDC (Kasai), Somalia y Sudán del Sur. • La mayor parte de los conflictos armados en el continente registraron un deterioro y una escalada en los niveles de violencia en 2017 y sólo en tres contextos se observó una reducción en las hostilidades. En otros cinco escenarios los niveles de violencia fueron similares a los de 2016. • Los conflictos armados africanos se caracterizaron por su alto nivel de internacionalización. En 13 de los 14 casos se observó la presencia de actores armados transnacionales, misiones internacionales o implicación de terceros Estados –entre otros elementos–, mientras que solo en un caso –RDC (Kasai)– las dinámicas del conflicto fueron eminentemente internas. • Los conflictos armados en África tuvieron como causas múltiples factores, entre los que destaca la aspiración a un cambio de gobierno o de sistema, presente en 11 de los 14 casos. El control de los recursos también tuvo una presencia destacada. El continente albergó siete de los ocho contextos a nivel mundial que tuvieron entre sus principales causas la disputa por el control de recursos.
<p>AMÉRICA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente fue escenario de un único conflicto armado, el de Colombia. América concentró, por tanto, un 3% de los casos de conflicto armado en 2017 a nivel mundial. • En línea con la tendencia observada en los últimos años, este caso presentó una disminución en los niveles de violencia como consecuencia del proceso de paz entre las FARC y el Gobierno y de la firma del acuerdo de paz en 2016.
<p>ASIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La región ocupó el segundo lugar en número de conflictos armados después de África, albergando un total de nueve casos (27% del total). • Una tendencia destacada en 2017 fue el porcentaje de casos de la región que sufrió una intensificación de la violencia –cuatro de los nueve contextos o 44%– y el aumento de casos de alta intensidad, que se duplicaron respecto a 2016, pasando de dos a cuatro casos: Afganistán, Pakistán (identificados como casos graves el año anterior), Myanmar y Filipinas (Mindanao) (que pasaron a ser catalogados como casos de alta intensidad en 2017). • Un rasgo distintivo de la región fue la elevada presencia de contextos de carácter interno, que representaron casi la mitad de los contextos (cuatro de nueve): Filipinas (NPA), India (CPI-M), Myanmar y Tailandia (sur). • En términos de causalidad de los conflictos armados en Asia, una buena parte de ellos –cinco de los nueve casos– tuvieron entre sus principales motivaciones cuestiones de identidad y autogobierno, aunque el factor vinculado al cambio de sistema también tuvo una presencia relevante y estuvo presente también en la mayoría de los contextos (cinco de los nueve conflictos en Asia).
<p>EUROPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El continente europeo albergó tres casos –Rusia (Daguestán), Turquía (sudeste) y Ucrania (este)–, que representaron un 9% de los conflictos armados a nivel mundial. • A diferencia del año anterior, durante 2017 el continente europeo no fue escenario de ningún conflicto armado de alta intensidad. Los niveles de violencia descendieron en el caso de Turquía (sudeste) en comparación a 2016 y el caso pasó a ser considerado de intensidad media, igual que Ucrania, que mantuvo un nivel de hostilidades similar al del año previo. • En el caso de Rusia (Daguestán) la consolidación de la tendencia de reducción de la violencia en los últimos años y también en 2017 llevó a que este caso dejara de ser considerado como un conflicto armado activo al finalizar el año. • Europa continuó caracterizándose por conflictos armados con prevalencia de los factores identitarios y de autogobierno, así como de cambio de sistema y gobierno. Dos de los tres casos fueron de carácter interno internacionalizado –Turquía (sudeste) y Ucrania (este)–, mientras que la disputa en la región rusa de Daguestán fue eminentemente interna.
<p>ORIENTE MEDIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La zona ocupó el tercer lugar en números de casos de conflicto armado, con un total de seis contextos (18%) • La región continuó siendo, proporcionalmente, la que concentró un mayor número de casos graves a nivel mundial. Cuatro de los seis casos en Oriente Medio (equivalentes a un 67% de los contextos en la región) presentaron una alta intensidad: Egipto (Sinaí), Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas). • La mitad de los casos de la zona exhibieron un deterioro a lo largo de 2017 –Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas)–, mientras que en otros dos los niveles de violencia fueron similares a 2016 –Egipto (Sinaí) e Israel-Palestina. Tan sólo en el conflicto vinculado a la presencia de AQPA en Yemen se identificó un ligero descenso en los niveles de violencia respecto a 2016. • Oriente Medio fue la única región en la que se identificó un caso de conflicto armado de carácter internacional –el de Israel-Palestina–, mientras que el resto de contextos fueron internos internacionalizados. • En cuanto a las causas de la conflictividad, los casos de la región estuvieron motivados por múltiples factores, pero la búsqueda de cambio de sistema tuvo una especial prevalencia, asociada en parte a la presencia de actores armados de inspiración yihadista que intentaron promover su particular interpretación de los preceptos islámicos.

rohingyas, de acuerdo a cifras proporcionadas por la ONG Médicos Sin Fronteras. La situación en este último caso fue especialmente grave durante 2017 y alentó denuncias sobre la comisión de crímenes contra la humanidad y genocidio, dada la persecución sistemática a la población rohingya. La región de Oriente Medio continuó concentrando, proporcionalmente, el mayor número de casos de alta intensidad y fue escenario de algunos de conflictos armados más cruentos de 2017, en especial Siria e Iraq. Cifras parciales y provisionales de la Syrian Network for Human Rights (SNHR) indicaban que el número de fallecidos entre la población civil podría ascender a las 10.000 personas

en 2017 en Siria –incluyendo 2.300 menores–; mientras que en Iraq el balance de la organización Iraq Body Count (IBC) situaba en más de 13.000 civiles los fallecidos a causa del conflicto a lo largo de 2017.

1.2.2. Impactos de los conflictos en la población civil

A nivel mundial, los conflictos armados continuaron teniendo severos impactos en la población civil. Estas consecuencias se reflejaron en los niveles letalidad, como ha quedado en evidencia en algunos de los

casos mencionados previamente, y en otro tipo de impactos como resultado del uso indiscriminado y/o deliberado de la violencia contra civiles. Durante 2017, esta situación se evidenció en prácticas como las ejecuciones sumarias e incendios de viviendas con personas en su interior, como se observó en Myanmar; en las numerosas ejecuciones extrajudiciales y otras graves violaciones de derechos humanos contra civiles en el marco del conflicto en Kasai (RDC); o en los asedios a población civil como los registrados en Siria, donde unas 390.000 permanecían atrapadas al finalizar el año sobreviviendo en condiciones extremas en la zona de Ghouta Oriental. En esta línea, un fenómeno destacado de 2017 fue la materialización de atentados especialmente cruentos en distintos conflictos armados. Así, por ejemplo, un ataque en Afganistán considerado como el de mayor gravedad desde la invasión militar estadounidense de 2001 provocó la muerte de unas 150 personas, en su mayoría civiles, mientras que otras 500 resultaron heridas. En Egipto, en el marco del conflicto armado en el Sinaí, el atentado más cruento en la historia reciente del país dejó más de 300 personas fallecidas tras una ofensiva con bomba y un posterior tiroteo en una mezquita frecuentada por la comunidad sufí. En Somalia, en tanto, el atentado más mortífero de la historia del país provocó la muerte a más de 500 personas y dejó heridas a otras 300. Además de estas acciones, atribuidas a grupos armados no estatales, durante 2017 también tuvieron lugar sonadas acciones en el marco de campañas militares que tuvieron graves repercusiones en la población civil. Así, por ejemplo, en el marco de la ofensiva contra ISIS en Iraq, un ataque aéreo estadounidense provocó la muerte de más de 150 civiles que se habían refugiado en un edificio huyendo de las hostilidades. Al finalizar el año EEUU reconoció que su campaña contra ISIS en Iraq y Siria había causado al menos 800 muertes entre la población civil desde 2014, aunque otras fuentes apuntaban a cifras de letalidad muy superiores.¹⁰

Los conflictos armados continuaron provocando y/o agudizando situaciones de crisis humanitaria. Así, por ejemplo, en RDC más de 7,7 millones de personas padecían inseguridad alimentaria grave, un 30% más que en 2016; mientras que en Sudán del Sur esta cifra ascendía a unas 4,8 millones de personas. En Iraq, 11 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria al acabar 2017. En Yemen, en tanto, al finalizar el año 22,2 millones de personas requerían asistencia, 3,4 millones de personas más que en 2016. De este total, 11,3 millones necesitaban ayuda urgente para sobrevivir. Adicionalmente, el conflicto armado en este país –el más pobre del mundo árabe– propició la expansión de enfermedades como el cólera, que durante

2017 afectó a un millón de personas y causó la muerte a más de 2.000, en el peor brote de esta enfermedad en la historia contemporánea.

Paralelamente, los conflictos armados en todo el mundo siguieron teniendo un **impacto especialmente grave en niños y niñas**. El informe anual del secretario general de la ONU sobre menores y conflictos dado a conocer en 2017 –que hace referencia a la situación entre enero y diciembre de 2016– constató numerosas vulneraciones contra niños y niñas, al menos 4.000 atribuibles a fuerzas gubernamentales y otras 11.500 violaciones verificadas perpetradas por grupos armados no estatales.¹¹ El informe de la ONU subrayó que las y los menores de edad continuaron estando expuestos a morir o a resultar heridos en el marco de conflictos armados en todo el globo y destacó situaciones como las de Afganistán –donde se contabilizaron 3.512 víctimas menores de edad, la mayor cifra registrada

desde el inicio del conflicto (923 muertes y 2.589 con heridas)–, Yemen –donde la cifra de víctimas entre niños y niñas habría ascendido a 1.340 (502 muertes y 838 con heridas)–, Iraq y Siria –donde unos 2.000 menores habrían perdido la vida en el marco de las hostilidades asociadas al combate a ISIS– o RDC –país que habría registrado el mayor número de muertes entre menores de edad desde 2012. En este contexto, el secretario general hizo un llamamiento a las partes en disputa para que respeten los principios de distinción entre civiles y combatientes, proporcionalidad y precaución establecidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Más allá de este informe, los datos recopilados por la Escuela de Cultura de Pau (ECP) sobre la evolución de distintos escenarios de conflicto durante 2017 confirma este preocupante fenómeno. Así, por ejemplo, durante 2017 la campaña militar contra la población rohingya habría causado la muerte de más de 700 menores de edad tan solo en el primer mes de violencia; mientras que en otros contextos, como Siria, los datos de UNICEF indican que 2017 fue el peor año en términos de letalidad del conflicto armado en niños y niñas, con un 50% de incremento en el número de muertes respecto a 2016 –910 muertes verificadas, aunque la cifra definitiva podría ser mucho más elevada teniendo en cuenta que las estimaciones de algunas organizaciones apuntan a la muerte de 2.300 menores en el mismo período.¹²

Cabe destacar que el informe del secretario general de la ONU también llamó la atención sobre otra tendencia preocupante en los conflictos armados actuales: el bloqueo al acceso de ayuda humanitaria que perjudica directamente a niños y niñas, en áreas asediadas y sin el debido acceso a agua, alimentos, asistencia médica

10. Véase los resúmenes sobre Iraq y Siria en este capítulo.

11. Consejo de Seguridad de la ONU, *Report of the Secretary General: Children and armed conflict*, A/72/361-s/2017/821, 24 de agosto de 2017.

12. Véase los resúmenes sobre Myanmar y Siria en este capítulo y “El impacto de los conflictos y la violencia en niños y niñas de la región MENA” en el capítulo 5 (Escenarios de riesgo para 2018).

y medicinas, incluyendo vacunas. Asimismo, expresó su preocupación por el continuo ataque contra infraestructuras civiles que afectan a menores, como es el caso de escuelas y hospitales. El informe también denunció la práctica del reclutamiento forzado de menores, especialmente prevalente en países como Somalia y Siria, donde este fenómeno se duplicó en 2016 en comparación con 2015. El análisis de casos de conflicto armado en 2017 también revela que este flagelo tuvo especial notoriedad en países como RDC –en la región de Kasai los grupos armados han hecho un extensivo reclutamiento de menores– y también en la zona de Lago Chad, donde la organización armada Boko Haram continuó utilizando a niños y niñas, cuadruplicando la frecuencia en el uso de menores para llevar a cabo ataques en comparación con 2016. Según resaltó el informe del secretario general de la ONU, las y los menores también siguieron siendo objeto de violencia sexual en diversos escenarios de conflicto armado, entre ellos Nigeria, RDC, Somalia, Sudán del Sur y Siria.

En lo que se refiere a **la violencia sexual, estuvo presente en numerosos conflictos armados**, aunque se trata de un fenómeno por lo general infra-denunciado. El informe del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en contextos de conflicto publicado en abril de 2017 –que cubre el período correspondiente a enero-diciembre de 2016– destacó el uso de los cuerpos de mujeres y niñas como moneda de cambio en el marco de la economía de guerra y llamó la atención sobre la utilización de la violencia sexual como “táctica terrorista”.¹³ El informe de la ONU subrayó la recurrencia a esta práctica por parte de diversos grupos extremistas como fórmula para aterrorizar y someter a poblaciones, como método para forzar el desplazamiento de civiles y como vía para incentivar el reclutamiento de combatientes –a quienes ofrecen niñas y mujeres como método de compensación–, entre otras actividades. Adicionalmente, la violencia sexual se convierte en un instrumento de la economía del conflicto al convertir a mujeres en víctimas de tráfico y esclavitud sexual, prostitución forzada o para forzar el pago de rescates a las familias. El informe también destaca el profundo estigma que padecen las personas que sobreviven a episodios de violencia sexual en el marco de conflictos y condena el impacto de algunas medidas contrterroristas que también vulneran los derechos y libertades de personas que han sido liberadas después de períodos en cautiverio, en ocasiones objeto de arrestos por sospechas de filiación o colaboración con grupos armados.

El informe también aporta información sobre episodios de violencia sexual en contextos de conflicto y posconflicto

El informe de la ONU sobre menores y conflictos denunció la práctica de reclutamiento forzado, que entre 2015 y 2016 se duplicó en países como Somalia y Siria

A finales de 2016 un total de 65,6 millones de personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares a causa de situaciones de conflicto, persecución, violencia y/o violaciones de los derechos humanos

en 19 países. A partir de estos antecedentes, el análisis de la ECP destaca que de los 17 conflictos armados en los que se produjo violencia sexual, diez eran casos de conflicto de alta intensidad en 2017 –Libia, Región Lago Chad (Boko Haram), RDC (Kasai), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Myanmar, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas).¹⁴ Más allá del diagnóstico del informe de la ONU, el análisis de los acontecimientos ocurridos a lo largo de 2017 demuestra la persistencia de este flagelo en numerosos contextos, incluyendo Sudán del Sur –donde continuó utilizándose la violencia sexual a escala masiva contra personas de grupos étnicos considerados rivales–; Malí –escenario de violencia sexual y de género perpetrada por diversos actores armados en el norte y centro del país–; Myanmar –con graves informaciones sobre la violencia sexual utilizadas por las fuerzas de seguridad birmanas contra la población rohingya, en especial mujeres y niñas–; Ucrania –donde se constató el uso de violencia sexual como método de tortura para castigar y extraer confesiones– o Siria –donde se documentó el impacto de la violencia sexual contra hombres y niños y su explotación sexual en contextos de desplazamiento forzado. Frente a estos desarrollos negativos, a lo largo de 2017 también se identificaron algunas iniciativas de respuesta contra la violencia sexual y de lucha contra la impunidad.¹⁵

Finalmente, cabe mencionar que **el desplazamiento forzado continuó siendo otra de las consecuencias más graves de los conflictos armados a nivel global** y que se mantuvo la tendencia de significativo incremento observada en los últimos años. Según el informe de ACNUR publicado a mediados de 2017, y que ofrece un balance de la situación de desplazamiento forzado hasta finales de 2016, un total de 65,6 millones de personas se habían visto obligadas a abandonar sus hogares como resultado de situaciones de conflicto, persecución, violencia y/o violaciones de los derechos humanos, unas 300.000 más que a finales de 2015. **De este total de 65,6 millones de personas, 22,5 millones eran población refugiada –17,2 millones bajo mandato de ACNUR y 5,3 millones de palestinos y palestinas registrados por la UNRWA–, 40,3 millones eran personas que se encontraban en situación de desplazamiento forzado interno y 2,8 millones eran solicitantes de asilo.** De acuerdo con los datos de ACNUR, durante el año 2016 10,3 millones de personas padecieron situaciones de desplazamiento forzado por primera vez, de las cuales 3,4 millones se convirtieron en personas refugiadas o solicitantes de asilo y 6,9 huyeron en busca de un lugar más seguro dentro de las fronteras de sus propios países. **Los y las menores constituyeron un 51% de la población**

13. Consejo de Seguridad de la ONU, *Report of the UN Secretary General on conflict-related sexual violence*, S/2017/249, 15 de abril de 2017.

14. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

15. Ibid.

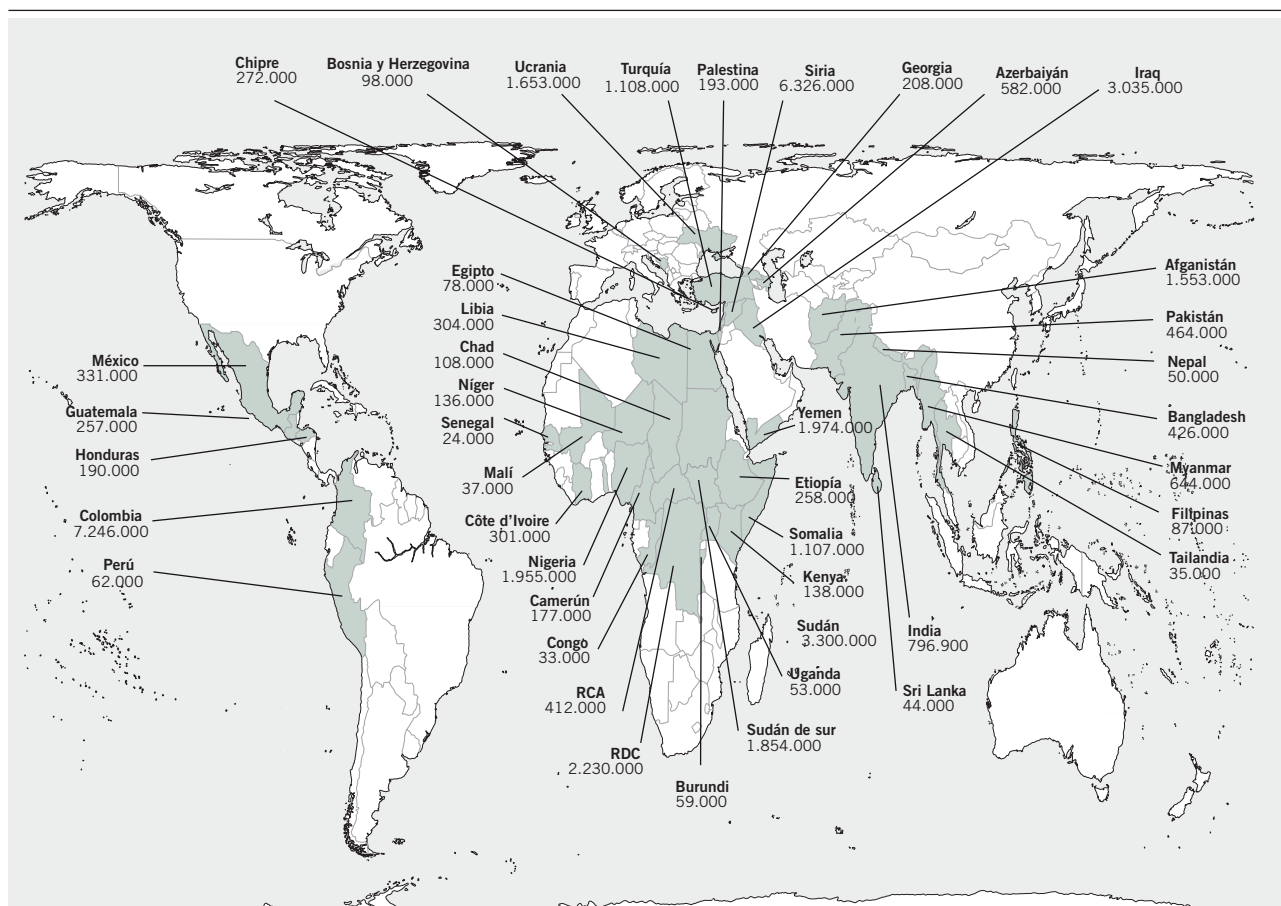
refugiada en 2016. En este sentido, cabe destacar que el informe sobre menores y conflictos del secretario general de la ONU subrayó que las cifras sin precedentes sobre niños y niñas en situación de desplazamiento forzado son fruto no sólo de los conflictos en general, sino también de la brutalidad con que las partes conducen las hostilidades, en muchos casos atacando directamente a las y los menores de edad. Más de la mitad de la población refugiada mundial procedía de tan solo tres países: Siria (5,5 millones), Afganistán (2,5 millones) y Sudán del Sur (1,4 millones). Según las cifras de ACNUR, los países en desarrollo continuaron albergando la mayoría de población refugiada a nivel mundial. En 2016 los principales países receptores fueron Turquía (2,9 millones), Pakistán (1,4 millones), Líbano (1 millón), Irán (979.400), Uganda (940.800) y Etiopía (791.600). En términos proporcionales, Líbano continuó siendo el país con mayor porcentaje de población refugiada respecto a la población nacional, con una relación de 1/6, seguido por Jordania (1/11) y Turquía (1/28).

A lo largo de 2017 se produjeron graves episodios de desplazamiento forzado a causa de conflictos en RDC (Kasai), Filipinas (Mindanao), Myanmar, Iraq y Siria, entre otros

duplicara hasta llegar a 4,1 millones de personas, convirtiendo a RDC en el Estado con mayor número de personas desplazadas de África. En Mindanao (Filipinas), los enfrentamientos más graves de los últimos años entre las Fuerzas Armadas y diversos grupos armados provocaron el desplazamiento forzado de más de 600.000 personas. En Myanmar, en tanto, la ofensiva contra la población rohingya causó el desplazamiento de más de 660.000 personas entre agosto y diciembre, la mayoría de las cuales se refugiaron en Bangladesh. En Iraq, la campaña armada contra ISIS mantenía a 3,2 millones de personas desplazadas a causa de la violencia. Mientras, en Siria, se estima que solo en los primeros nueve meses del año se habían producido 1,8 millones de movimientos de personas a causa del conflicto –equivalentes a unas 6.550 personas cada día–, con muchísimos desplazamientos sucesivos. A estas situaciones se añaden casos como el de Libia, donde el conflicto ha convertido al país en un escenario propicio para la explotación y vulneración de derechos de la población migrante y refugiada, sometida a detenciones arbitrarias, tráfico, torturas, trabajos forzados y explotación sexual. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denunció la existencia de mercados de esclavos y esclavas en Libia, mientras que diversos actores –incluyendo la ONU– alertaron sobre las políticas

La tendencia de deterioro en este ámbito amenazaba con continuar agravándose si se tienen en cuenta algunos de los antecedentes sobre desplazamiento forzado en contextos de conflicto en 2017. Así, por ejemplo, en RDC la situación en la región de Kasai en 2017 motivó que el número de población desplazada en el país se

Mapa 1.2. Número de personas desplazadas internas al finalizar 2016



Fuente: IDMC, GRID 2017: Global Report on Internal Displacement, mayo de 2017.

europas que estaban facilitando la vulneración de derechos de estas personas en territorio libio.¹⁶

1.3. Conflictos armados: evolución anual

1.3.1. África

África Occidental

Malí (norte)	
Inicio:	2012
Tipología:	Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, CMA (MNLA, MAA facción, CPA, HCUA), Plataforma (GATIA, CMPFPR, MAA facción), Ansar Dine, MUYAO, AQMI, MRRA, al-Mourabitoun, GSIM, MLF, ANSIPRJ, MINUSMA, ECOWAS, Francia (Operación Barkhane), Fuerza Conjunta G5-Sahel
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:

La comunidad tuareg que puebla el norte de Malí vive en una situación de marginación y subdesarrollo que desde tiempos coloniales ha alimentado diversas revueltas y la organización de frentes armados contra el poder central. En los noventa, tras un breve conflicto armado, se logró un acuerdo de paz que prometía inversiones y desarrollo para el norte. La falta de implementación impidió que el acuerdo sirviera de freno a la configuración de nuevos grupos armados que exigían una mayor autonomía para la zona. La caída del régimen de Muammar Gaddafi en Libia en 2011, que durante años había dado cobijo a la insurgencia tuareg maliense e incorporado a parte de sus miembros dentro de sus cuerpos de seguridad, favoreció el resurgimiento de los grupos rebeldes tuareg en el norte del país que claman por la independencia de Azawad (nombre con el que los tuareg designan la región norte de Malí). Tras avanzar en el control de la zona aprovechando la situación de inestabilidad política en Malí a principios de 2012, el grupo armado tuareg Movimiento por la Liberación de Azawad (MNLA) se vio crecientemente desplazado por grupos radicales islamistas que operan en la región y que avanzaron posiciones en el norte de Malí. La internacionalización del conflicto se acentuó en 2013, tras la intervención militar de Francia y el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz (MINUSMA) en el país.

La situación en Malí se deterioró respecto al año anterior, con una intensificación de las dinámicas de violencia que afectan principalmente a la zona norte y centro del país y dificultades para implementar el acuerdo de paz suscrito en 2015. Balances informales a partir de informaciones de prensa indican que, como mínimo, 350 personas murieron producto del conflicto durante 2017. A lo largo del período continuaron los ataques contra las fuerzas de

seguridad locales, miembros de la misión de la ONU en el país (MINUSMA), efectivos de la operación francesa Barkhane, grupos armados firmantes del acuerdo de paz y civiles, en forma de ataques suicidas, atentados explosivos y tiroteos. Buena parte de estas acciones – en algunos casos las ofensivas no fueron reivindicadas– fueron de autoría de grupos no firmantes del acuerdo de paz, especialmente organizaciones de línea yihadista vinculados a al-Qaeda. Así, por ejemplo, al-Mourabitoun reivindicó un ataque contra un campo de las fuerzas militares y grupos armados en Gao –donde se preparaban patrullas conjuntas en el marco de la implementación del acuerdo de paz– que causó 61 víctimas mortales en enero. En marzo, **los líderes de al-Mourabitoun, Ansar Dine y de la filial de AQMI en Malí anunciaron la unión de sus fuerzas y la creación de una nueva organización autodenominada Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM, por sus siglas en inglés), que declaró su lealtad a al-Qaeda. A partir de entonces GSIM reivindicó numerosas ofensivas,** entre ellas un ataque contra soldados malienses que dejó 11 muertos en marzo en la región de Mopti; el ataque contra un complejo turístico en Bamako, en junio, en el que murieron cinco personas, además de cuatro de los asaltantes; o la ofensiva en la región de Ménaka, en noviembre, contra una patrulla conjunta de MINUSMA y el Ejército maliense que causó cuatro muertes. Según informes de la ONU, en torno a 150 soldados malienses murieron en distintos hechos de violencia en 2017. La MINUSMA continuó siendo una de las misiones de la ONU más peligrosas a nivel mundial, con 42 fallecidos durante el año. Las fuerzas yihadistas también sufrieron bajas producto de enfrentamientos y ataques, entre los que destaca una ofensiva de la Operación Barkhane en octubre en la que habrían fallecido 15 combatientes de GSIM además de 11 soldados y tres guardias malienses que permanecían secuestrados por el grupo. Adicionalmente, durante el año se produjeron episodios de violencia intercomunitaria, incluyendo enfrentamientos entre grupos fulani y bambara que causaron 21 muertos en la región de Ségou, en febrero; o los choques entre miembros de la comunidad dagon y fulani en la región de Mopti, en junio, que dejaron otra treintena de fallecidos. GSIM también protagonizó algunos choques con la comunidad bambara en Ségou que habrían provocado decenas de víctimas en marzo. Una filial de ISIS que opera en la zona –el autodenominado Estado Islámico en el Gran Sáhara– también estaba explotando las tensiones intercomunitarias en el área fronteriza entre Níger y Malí.

Paralelamente, a mediados de año también **se produjo una escalada de violencia entre grupos firmantes del acuerdo de paz,** principalmente entre GATIA –que forma parte de la plataforma pro-unidad nacional– y sectores de la alianza separatista CMA en la zona de Kidal. La escalada estuvo precedida por dificultades para implementar aspectos del acuerdo de paz –incluyendo retrasos y objeciones en la designación de autoridades interinas– y sólo remitió tras la suscripción de ceses el fuego –en agosto y septiembre– y la firma de un nuevo acuerdo para la región de Kidal (Anefis 2), en octubre.

16. Véase el resumen sobre Libia en este capítulo.

Al finalizar el año se mantenía la tregua y la atención se focalizaba en las elecciones regionales –que debían celebrarse en diciembre, pero que fueron pospuestas a abril de 2018–, y en las propuestas de reforma a la Constitución, entre ellas una polémica disposición para fortalecer los poderes del presidente. Teniendo en cuenta que en junio de 2017 finalizó formalmente el período interino previsto en el acuerdo de paz adoptado en 2015, la MINUSMA y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicaron un balance del período iniciado en 2016. En un informe conjunto documentaron 608 casos de abusos a los derechos humanos –incluyendo detenciones ilegales, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores y violencia sexual– en las regiones de Gao, Kidal, Ménaka, Mopti, Ségou, Tombuctú y en el distrito de Bamako, con un total de 1.481 víctimas.¹⁷ Cabe destacar que **durante el año también se avanzó en la puesta en marcha de la Fuerza Conjunta G5-Sahel** – iniciativa concebida en 2014, promovida por Francia, que se formalizó en febrero de 2017–, que reúne a Malí, Burkina Faso, Níger, Chad y Mauritania con el fin de responder a los retos de seguridad en la región. G5-Sahel lanzó su primera operación (“Hawbi”) a finales de octubre en la zona fronteriza entre Malí, Níger y Burkina Faso. Según trascendió, la fuerza militar conjunta contará con unos 5.000 efectivos y estará plenamente operativa durante el primer trimestre de 2018. Algunos análisis destacaron que esta fuerza emula a la MNJTF que opera en la zona de Lago Chad contra Boko Haram y que existen muchas dudas sobre los problemas y retos que enfrentará, entre ellos su capacidad operativa, el nivel de coordinación entre sus miembros y otras fuerzas que ya operan en terreno (MINUSMA, Barkhane y EEUU, que mantiene un número indeterminado de efectivos en la región), y los desafíos estratégicos de un escenario donde –a diferencia del contexto de la MNJTF– actúan no uno, sino una veintena de grupos armados.¹⁸

Al-Mourabitoun, Ansar Dine y la filial de AQMI en el Sahel se unieron en el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM), que reivindicó diversas acciones en el norte de Malí

Región Lago Chad (Boko Haram)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Boko Haram (BH), MNJTF (Nigeria, Camerún, Chad, Níger)
Intensidad:	3
Evolución:	=
Síntesis:	La secta islamista Boko Haram reclama el establecimiento de un Estado islámico en Nigeria y considera a las instituciones

públicas nigerianas como corruptas y decadentes. El grupo –cuyo nombre significa “la educación occidental es un pecado”– se inscribe dentro de la rama integrista que otras formaciones iniciaron en Nigeria desde la independencia en 1960 y que, periódicamente, produjeron brotes de violencia de mayor o menor envergadura. Pese a la fuerte represión a la que han sido sometidos sus miembros, el grupo armado continúa en activo y el alcance de sus ataques se ha ampliado, agravando la situación de inseguridad en el país con un elevado impacto en la población civil. Una filial del grupo, Ansaru, también ha protagonizado ataques en el país. Organizaciones internacionales de derechos humanos han alertado sobre los crímenes cometidos por Boko Haram, pero también sobre los abusos del Gobierno en su campaña contra el grupo. En el año 2015 el conflicto se regionalizó, afectando también a los países fronterizos con el Lago Chad: Chad, Níger y Camerún.

La estrategia regional de presión militar sobre Boko Haram **desarrollada por Nigeria, Níger, Chad y Camerún, a través de la implementación de la fuerza militar conjunta regional (MNJTF) desde mediados de 2016 redujo su capacidad e impacto en la región y a finales de 2016 el grupo insurgente incluso fue desalojado** en gran parte de su base de operaciones en Sambisa Forest. Tras esta derrota, las fuerzas gubernamentales concentraron sus esfuerzos en la destrucción de los feudos restantes del grupo en la cercana región del Lago Chad, lo que vino acompañado por la liberación de centenares de secuestrados y la entrega o el arresto de decenas de combatientes.

Según datos registrados por el Nigeria Security Tracker (NST),¹⁹ **el balance de víctimas mortales producidas en Nigeria como consecuencia del conflicto con Boko Haram hasta el mes de diciembre fue de 954 muertes, a las que habría que añadir 874 muertes en enfrentamientos directos entre Boko Haram y las fuerzas de seguridad, lo que asciende a un total de 1.828 víctimas mortales entre enero y diciembre de 2017. Este balance supone un incremento del 12% respecto a las 1.605 víctimas mortales del año 2016, según cifras del NST, pero sigue siendo muy inferior a las cifras de 2015, cuando murieron 8.410 personas. Este incremento en 2017 contradice el discurso del Gobierno nigeriano por el cual Boko Haram estaba prácticamente desarticulado, según destacó en septiembre de 2017 Amnistía Internacional.** Las cifras varían según las organizaciones consultadas. En este sentido, por ejemplo, el balance ofrecido por el Africa Center for Strategic Studies señala que La violencia derivada de las actividades de Boko Haram causó alrededor de 3.499 víctimas mortales en 2016, cifra ostensiblemente inferior a las 11.519

17. MINUSMA – Nations Unies Droits de l’Homme Haut Commissariat, *Human Rights and the Peace Process in Mali (January 2016 – June 2017)*, febrero de 2018.

18. International Crisis Group, *Finding the Right Role for the G5 Sahel Joint Force*, Africa Report no.258, 12 de diciembre de 2017.

19. Council on Foreign Relations, *The Nigeria Security Tracker*, 20 de enero de 2018.

víctimas mortales del año anterior.²⁰ Se estima que más de 20.000 personas han muerto desde el inicio del conflicto en 2009 en toda la región y más de 2,6 millones de personas se han desplazado como consecuencia de la violencia.

El grupo continuó llevando a cabo ataques suicidas en pequeña escala contra objetivos predominantemente civiles en aldeas rurales y campamentos de desplazados, principalmente en el estado nigeriano de Borno y en la provincia camerunesa de Far North. En esta última región, se estima que han muerto unas 2.000 personas desde el inicio del conflicto y otras 241.000 se han desplazado como consecuencia de la violencia. Las ofensivas militares durante septiembre y octubre de 2017 fueron considerables y consiguieron debilitar ostensiblemente al grupo insurgente. Las Fuerzas Armadas nigerianas intensificaron los ataques y bombardeos aéreos en el noreste durante todo el año. Ante los avances en la lucha contra Boko Haram, EEUU y Rusia decidieron aprobar la venta de diversos aviones de combate para apoyar la ofensiva. Además, las fuerzas de seguridad ejecutaron o capturaron varios objetivos de alto perfil, como Mallama Fitdasi, la esposa del líder de Boko Haram, Abubakar Shekau, que fue blanco de un ataque aéreo en la zona del gobierno local de Konduga en octubre; e Idris Ibrahim Babawo, un teniente de alto rango de Shekau que fue arrestado en el estado de Ondo a finales de septiembre. Varios informes de inteligencia indicaron, según ACLED, que un gran número de combatientes de Boko Haram huyeron al estado nigeriano de Adamawa para evitar la alta presencia de los cuerpos de seguridad en Borno, lo que provocó el despliegue de fuerzas de seguridad por parte del gobernador de Adamawa en Madagali. La violencia de Boko Haram en Nigeria disminuyó en general desde principios de 2017. Como resultado de este debilitamiento del grupo, sus acciones han sido ataques de bajo perfil contra objetivos civiles y militares. **En 2017, se produjo un cambio radical en el uso de menores para llevar a cabo estos ataques, cuadruplicando su frecuencia en relación a 2016, según destacó UNICEF.** El Gobierno informó sobre la proximidad de la captura del comandante de Boko Haram, Shekau, citando un ataque aéreo a finales de agosto que produjo la muerte de cinco de sus principales lugartenientes. Análisis de ACLED señalaron que las acciones a corto plazo de Boko Haram probablemente se determinarán según su capacidad financiera y destacaron que sus fondos actuales son limitados, por lo que es posible que los secuestros a cambio de un rescate se vuelvan más frecuentes durante el 2018.²¹

UNICEF destacó que se produjo un cambio radical en el uso de menores por parte de Boko Haram para llevar a cabo ataques en 2017, cuadruplicando su frecuencia en relación a 2016

Cuerno de África

Etiopía (Ogadén)	
Inicio:	2007
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, ONLF, OLF, milicias progubernamentales (“Liyu Police”)
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

Etiopía es escenario de movimientos de carácter secesionista o de resistencia al poder central desde los años setenta. El grupo armado ONLF surgió en 1984 y opera en la región etíope de Ogadén, en el sureste del país, exigiendo un mayor grado de autonomía para la comunidad somalí que habita esta zona. En diversas ocasiones el ONLF ha llevado a cabo actividades insurgentes más allá de Ogadén, en colaboración con el grupo armado OLF, que exige al Gobierno una mayor autonomía de la región de Oromiya desde 1973. El Gobierno somalí ha apoyado al ONLF contra Etiopía, con quien se enfrentó por el control de la región entre 1977 y 1978, guerra en la que Etiopía derrotó a Somalia. El fin de la guerra entre Eritrea y Etiopía en el 2000 comportó el incremento de las operaciones del Gobierno para poner fin a la insurgencia en Ogadén y explotar sus recursos naturales. Tras las elecciones celebradas en el año 2005, los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el ONLF se incrementaron, en especial en 2007, cuando se produjo un ataque a unas instalaciones chinas de exploración de petróleo por parte del ONLF en el que murieron 74 personas, aunque en los últimos años la intensidad del conflicto ha disminuido.

La escalada de inseguridad y represión gubernamental que azotó el país en 2016 persistió durante todo el año 2017.

Este clima de violencia se añadió a la situación que sufren diferentes regiones de Etiopía, en especial la región de Ogadén (denominada región Somalí), escenario de conflicto desde los años ochenta. A pesar del levantamiento del estado de emergencia en todo el país en agosto, la situación no mejoró. La Liyu Police (“Policía Especial”), milicia paramilitar gubernamental involucrada en tareas de contrainsurgencia en la región, continuó cometiendo graves violaciones de los derechos humanos y abusos contra la población civil. No existen balances de víctimas mortales de la insurgencia, de cuerpos de seguridad del Estado o de la población debido a la opacidad gubernamental y el bloqueo informativo en el acceso a la zona a los medios, por lo que no se disponen de fuentes oficiales que puedan contrastar las informaciones vinculadas a la insurgencia o al movimiento pro independentista. Excepcionalmente, una investigación de HRW publicada

20. Africa Center for Strategic Studies, *Map of Africa's Militant Islamist Groups*, 26 de abril de 2017.

21. ACLED, *Nigeria – September 2017 Update*, septiembre de 2017.

en abril de 2017 denunció la ejecución extrajudicial de 21 personas en junio de 2016 en la localidad de Jaamac Dubad, así como el saqueo e incendio de tiendas y domicilios.²² La Policía Liyu²³ fue creada para llevar a cabo acciones contra los grupos opositores en la región de Ogadén, y su actividad se concentra en esta región, aunque en los últimos años también ha dado apoyo a las acciones de la misión de la UA en Somalia (AMISOM) en la zona fronteriza entre ambos países y, sobre todo, ha ampliado sus actividades en el territorio de la región de Oromiya desde diciembre de 2016, donde ha sido acusada de perpetuar graves violaciones de los derechos humanos contra comunidades en zonas fronterizas. Según el proyecto Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED),²⁴ se produjeron 64 ataques y enfrentamientos entre milicias de la región de Oromiya y la Policía Liyu entre enero y noviembre de 2017 en los que habrían muerto 434 personas. A finales de agosto las autoridades somalíes entregaron al Gobierno etíope a Abdikarin Sheikh Muse, un miembro del comité ejecutivo del grupo armado ONLF que vivía en Mogadiscio y había sido detenido en Galkayo el 23 de agosto, según señaló Reuters.

Somalia	
Inicio:	1988
Tipología:	Gobierno, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno Federal, fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, milicias de clanes y señores de la guerra, Ahlu Sunna wal Jama'a, EEUU, Francia, Etiopía, AMISOM, EUNAVFOR Somalia, Operation Ocean Shield, al-Shabaab
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto armado y la ausencia de autoridad central efectiva en el país tienen sus orígenes en 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra el poder dictatorial de Siad Barre y tres años después consiguieron derrocarlo. Esta situación dio paso a una nueva lucha dentro de esta coalición para ocupar el vacío de poder, que ha provocado la destrucción del país y la muerte de más de 300.000 personas desde 1991, a pesar de la fracasada intervención internacional de principios de los noventa. Los diversos procesos de paz para intentar instaurar una autoridad central han tropezado con numerosas dificultades, entre las que destacan los agravios entre los diferentes clanes y subclanes que configuran la estructura social somalí, la injerencia de Etiopía, Eritrea y EEUU, y el poder de los

diversos señores de la guerra. La última iniciativa de paz conformó en 2004 el Gobierno Federal de Transición (GFT), que se apoyó en Etiopía para intentar recuperar el control del país, parcialmente en manos de la Unión de los Tribunales Islámicos (UTI). La facción moderada de la UTI se unió al GFT, así como Ahlu Sunna Wal Jama'a, y juntos se enfrentan a las milicias de la facción radical de la UTI, agrupadas en el grupo armado islamista al-Shabaab que controla parte de la zona sur del país. En el año 2012 culminó la fase de transición iniciada en 2004 y se formó un nuevo Parlamento que eligió a su primer presidente desde 1967. La misión de la UA, AMISOM (en la que se integraron las tropas etíopes y kenyanas presentes en el país) y las tropas gubernamentales se enfrentan a al-Shabaab, grupo que ha sufrido divisiones internas.

Somalia siguió padeciendo en el año 2017 uno de los conflictos más graves de los últimos años de todo el continente africano.

El grupo armado islamista somalí al-Shabaab se situó como el más letal del año 2016 por encima del nigeriano Boko Haram,²⁵ al pasar de 3.046 víctimas mortales en 2015 a 4.281 en 2016, cifra que podría ser superada en 2017, ya que entre enero y septiembre de 2017 se produjeron 3.287 víctimas mortales, según ACLED, sin incluir un grave atentado producido en octubre. El 14 de ese mes se produjo el **atentado más mortífero de la historia del país, en el que murieron 512 personas, otras 300 resultaron heridas y 70 permanecían desaparecidas en el balance realizado en diciembre**, por lo que también podrían haber muerto en el atentado, según fuentes oficiales. Un camión de grandes dimensiones cargado con 350 kg de material explosivo fue detonado en la zona conocida como PK5, cerca del hotel Safari, en una de las calles más concurridas de Mogadiscio. El atentado, que conmocionó el país y colapsó los servicios sanitarios durante varias semanas, no fue reivindicado, aunque las autoridades responsabilizaron a al-Shabaab. Ante la magnitud de los hechos, analistas señalaron que la organización podría no querer socavar su apoyo popular al asociarse con una pérdida tan grande de vida civil. No obstante, el ataque, cometido en medio de la escalada de las intervenciones de EEUU en el país y solo dos días después de la visita del jefe de AFRICOM al presidente somalí, pretendería incrementar la implicación de EEUU en Somalia, intensificada durante la administración Obama y que todavía ha aumentado más desde la llegada al poder de Donald Trump. Miles de somalíes se manifestaron en las calles de la ciudad para condenar los hechos.

El centro-sur del país se vio gravemente afectado por los continuos ataques de al-Shabaab, las operaciones militares de las Fuerzas Armadas somalíes apoyadas o lideradas por AMISOM así como las acciones de

22. Human Rights Watch, *Ethiopia: No Justice in Somali Region Killings*, 5 de abril de 2017.

23. En 2008, la Policía Liyu se convirtió en un grupo contrainsurgente poderoso y liderado por el jefe de seguridad de la región, Abdi Mohammed Omar, conocido como Abdi Illey, quien en 2010 se convirtió en presidente de la región de Somalí, aunque la Policía Liyu continuó bajo su mando. HRW, *Íbid*.

24. Armed Conflict Location & Event Data Project's, *Ethiopia*, November ACLED-Africa Conflict Trends Report, noviembre de 2017.

25. Véase la polémica suscitada en torno a la cuestión a raíz del informe de Africa Center for Strategic Studies, *Map of Africa's Militant Islamist Groups*, 26 de abril de 2017; *Al-Shabab and Boko Haram: Patterns of Violence*, ACLED, 2017; y Solomon, Salem y Frechette, Casey, "No, al-Shabab is not deadlier than Boko Haram. Here are better numbers", *The Washington Post*, 21 de julio de 2017.

contrainsurgencia y ataques aéreos de EEUU en el país. Las acciones de al-Shabaab se ampliaron progresivamente hacia el norte del país, tendencia ya destacada en los últimos años junto al aumento de acciones insurgentes protagonizadas por grupúsculos de ISIS en Somalia y el faccionalismo clánico. ACLED señaló que las acciones de las milicias de clanes, como las milicias de los clanes y subclanes Habar Gedir, Jejele y Darood-Marehan, contra la población civil fue un creciente factor de violencia en 2017. El clima de optimismo derivado de la elección como presidente de Mohamed Abdullahi “Farmajo”, en febrero, según diversos analistas, fue eclipsado por la persistencia de la violencia, la resiliencia de al-Shabaab, la debilidad crónica de los cuerpos de seguridad gubernamentales y, en definitiva, los déficits de gobernabilidad que apuntalan la inestabilidad que padece el país, según destacó el International Crisis Group. A esta situación se añadieron las crecientes tensiones entre Mogadiscio y los gobiernos regionales pertenecientes a la federación somalí, exacerbadas por la crisis entre Arabia Saudita y sus aliados contra Qatar, incluido el principal aliado internacional de Qatar, Turquía, que es a su vez uno de los principales donantes de Somalia. En paralelo, la anunciada retirada de AMISOM del país, prevista para 2020, iniciada en diciembre de 2017 con la reducción de 1.000 de los 22.000 soldados que dispone la misión, abrió un clima de preocupación ante los retos en términos de seguridad que todavía afronta el país (incluida la reforma del sector de seguridad) y ante una posible regresión de los avances alcanzados contra al-Shabaab por llevar a cabo una retirada precipitada.

En paralelo, se produjo un incremento sin precedentes de la presencia y ataques aéreos de EEUU en el país. En mayo murió en combate un soldado de los cuerpos especiales de EEUU, y otros dos resultaron heridos, la primera muerte en combate en el país desde 1993. El estadounidense Donald Trump autorizó nuevas prerrogativas a AFRICOM en el país en abril, lo que se tradujo en 34 operaciones aéreas durante 2017, concentradas en la segunda mitad del año, más del doble de las perpetradas en 2016 (14) o el triple que en 2015 (11). Solo el mes de noviembre concentró ocho ataques aéreos. Los ataques aéreos de EEUU tuvieron como objetivo al-Shabaab e ISIS. No obstante, en cinco ataques perpetrados desde julio resultaron muertos o heridos más de 50 civiles, entre los cuales menores. El Departamento de Defensa de EEUU dispone al menos de 500 miembros en el país (entre civiles, cuerpos especiales y miembros de contratistas), más del doble de las 200 personas de que disponía en marzo de 2017, según AFRICOM. EEUU estima que hay entre 3.000 y 6.000 combatientes de al-Shabaab en el país y menos de 250 miembros de ISIS. Además de la muerte de varios comandantes de al-Shabaab en operaciones militares, cabe destacar la desertión el 13 de agosto en Bakool

El 14 de octubre se produjo el atentado más mortífero de la historia de Somalia, en el que murieron 512 personas, otras 300 resultaron heridas y 70 permanecían desaparecidas en diciembre

del antiguo vicecomandante y portavoz de al-Shabaab, Mukthar Robow Ali, conocido como Abu Mansur, después de haber sobrevivido al último intento de al-Shabaab de ejecutarlo o capturarlo. Abu Mansur criticó las actividades de al-Shabaab por no estar al servicio de la población y pidió perdón por sus actos, además de pedir a la militancia del grupo que siguiera sus pasos. Abu Mansur había sido uno de los fundadores del grupo en su inicio y en 2013 se dio a la fuga por estar en desacuerdo con el nuevo liderazgo del grupo en manos de Ahmed Godane. Desde entonces al-Shabaab había llevado a cabo numerosos intentos de capturarlo y ejecutarlo por la posibilidad que revelara información sensible del grupo.

Grandes Lagos y África Central

Burundi	
Inicio:	2015
Tipología:	Gobierno Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, facciones de antiguos grupos armados
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El proceso de transición política e institucional iniciado con la firma del Acuerdo de Paz de Arusha en el 2000 culminó formalmente en el año 2005. La aprobación de una nueva Constitución que formalizó el reparto de poder político y militar entre las dos principales comunidades, hutus y tutsis, y la celebración del proceso electoral que condujo a la formación de un nuevo Gobierno, intentaron sentar las bases de futuro para superar el conflicto iniciado en 1993 y supusieron la principal oportunidad para poner fin a la violencia de carácter etnopolítico que había afectado al país desde su independencia en 1962. Sin embargo, la evolución autoritaria del Gobierno tras las elecciones de 2010, tachadas de fraudulentas por la oposición, ha ensombrecido el proceso de reconciliación y provocado la movilización de la oposición política. El deterioro institucional y la reducción del espacio político para la oposición, la controvertida candidatura de Nkurunziza a un tercer mandato y su victoria en unas elecciones presidenciales fraudulentas, la escalada de la violencia política, el intento frustrado de golpe de Estado en mayo de 2015, las violaciones de los derechos humanos y el surgimiento de nuevos grupos armados, son diferentes elementos que revelan el deterioro de la situación en el país.

Persistió el clima de violencia política, abusos y vulneraciones de los derechos humanos derivado de la decisión del presidente, Pierre Nkurunziza, de postular a un tercer mandato presidencial, decisión considerada inconstitucional y que ya había provocado en 2015 una oleada de protestas sociales y un clima de represión que se ha traducido en un conflicto de baja intensidad. Continuaron cometiéndose graves violaciones de derechos humanos a diario con total impunidad principalmente por parte del Gobierno y de las milicias

juveniles Imbonerakure del CNDD-FDD, el partido del presidente. Según destacó en septiembre un informe de una comisión de investigación de la ONU establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se cometen periódicamente ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, casos de torturas y detenciones arbitrarias, acciones que tienen lugar en un entorno de privación de derechos básicos. El mandato de esta comisión se prolongó un año, a pesar de la resistencia del Gobierno. En paralelo, podrían estar cambiando los patrones de uso de la violencia, ya que los ataques con granadas a bares y otros lugares de reunión se habían centrado tradicionalmente en la capital, Bujumbura, pero durante el año afectaron otros lugares fuera de la capital. La mayoría de estos ataques podrían estar motivados políticamente, con miembros de los partidos de la oposición a menudo siendo el objetivo. No obstante, ACLED destacó que se había producido una reducción paulatina de actos de violencia, ya que en octubre se alcanzó el nivel más bajo de ataques y el segundo menor recuento de víctimas reportado (13) desde antes de las elecciones presidenciales de 2015, mientras que los meses de junio y julio tuvieron el balance más alto de víctimas mortales (34).²⁶ Desde inicios de la crisis en 2015 se estima que unas 400.000 personas han abandonado el país, según UNHCR. El componente policial de la ONU siguió sin desplegarse y la ampliación de la autorización de la resolución 2303 para promover el despliegue de la misión generó controversia en el Consejo de Seguridad, ya que se adoptó una declaración de la presidencia del Consejo sin incluir explícitamente esta cuestión.

Una comisión de investigación de la ONU dictaminó que en Burundi se cometen periódicamente ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, casos de torturas y detenciones arbitrarias

En el ámbito político fracasaron los intentos de reactivar el diálogo interburundés por parte de la EAC y la ONU debido al bloqueo del Gobierno a reconocer a la coalición opositora CNARED como interlocutor político en el proceso de diálogo. La ONU nombró en junio a su nuevo enviado especial para el país, Michel Kafando, el cuarto desde junio de 2015, en sustitución de Jamal Benomar, quien había tenido una difícil relación con el Gobierno burundés. Las autoridades señalaron que esperaban que el relevo pudiera reactivar el proceso pero alertaron de posible parcialidad hacia la oposición política. **El presidente Pierre Nkurunziza lanzó oficialmente la campaña para reformar la Constitución** vía un referéndum el 12 de diciembre, que se prevé para la primera mitad del 2018. Esta reforma contempla permitir al actual presidente competir por un cuarto mandato presidencial en las elecciones de 2020. Las enmiendas previstas pretendían abolir el límite de dos mandatos y prolongar el mandato presidencial a siete años. Por otra parte, cabe destacar que Burundi finalmente formalizó a finales de octubre su salida de

la CPI por considerar al tribunal parcial y centrado en los delitos perpetrados sólo por africanos. Es el primer Estado miembro que toma esta decisión, que supone un duro golpe para la justicia internacional, pero no afecta a la competencia de la Corte sobre una investigación anterior sobre Burundi. Fechada en 2015, incluye la muerte de 430 personas en las protestas registradas tras el anuncio de que el presidente Pierre Nkurunziza, antiguo líder rebelde de la comunidad hutu (mayoritaria en el país), optaba a un tercer mandato. La Fiscalía presentará en breve sus conclusiones. La marcha de Burundi fue notificada hace un año oficialmente a Naciones Unidas.²⁷ A pesar de todo, la fiscal jefe, Fatou Bensouda, siguió adelante con su trabajo en el país. Un expediente en el que figura el arresto de 3.400 personas y la huida de unas 230.000 más en busca de refugio en los países vecinos, además de asesinatos, tortura, violencia sexual y desapariciones forzadas completan la documentación.

RCA	
Inicio:	2006
Tipología:	Gobierno, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, grupos armados de la ex coalición rebelde Séléka (FPRC, MPC, UPC), milicias antibalaka, milicia 3R, Francia (operación Sangaris), MINUSCA, EUFOR, grupos vinculados al antiguo Gobierno de François Bozizé, otros remanentes de grupos armados (antiguas Fuerzas Armadas), grupo armado ugandés LRA
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

Desde su independencia en 1960, la situación en la RCA se ha caracterizado por una continua inestabilidad política, que ha desembocado en diversos golpes de Estado y dictaduras militares. Las claves de la situación son de índole interna y externa. Interna, porque existe una confrontación entre élites políticas de etnias del norte y el sur que compiten por el poder y minorías que se han visto excluidas de él. Los diferentes líderes han intentado establecer un sistema de clientelismo y patronazgo para asegurar su supervivencia política. Y externa, por el papel que han jugado sus vecinos Chad y Libia; por sus recursos naturales (diamantes, uranio, oro, maderas nobles) y la concesión de contratos mineros por los que compiten estos países, China y la antigua metrópolis, Francia, que controla el uranio. Los conflictos de la región han contribuido a acumular restos de armamento y combatientes que han convertido al país en santuario regional. A esta situación se ha sumado una dimensión religiosa debido a que la coalición Séléka, formada por diversos grupos del norte, de confesión musulmana, y marginados históricamente, en,

26. ACLED, *Conflict Summaries – October 2017*, octubre de 2017.

27. Véase "La retirada de países africanos de la CPI: retroceso en términos de protección de los derechos humanos" en el capítulo 5 (Escenarios de riesgo) de Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2017! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Barcelona: Icaria, 2017.

la que participan combatientes extranjeros, tomó el poder en marzo de 2013 tras derrocar al anterior líder, François Bozizé, quien durante los últimos 10 años había combatido a estas insurgencias del norte. La incapacidad del líder de Séléka, Michel Djotodia, para controlar a esta coalición rebelde, que cometió graves violaciones de los derechos humanos saqueos, ejecuciones extrajudiciales, provocó el surgimiento de milicias de confesión cristiana ("anti balaka"). Estas milicias y sectores del Ejército y partidarios del anterior presidente Bozizé se rebelaron contra el Gobierno y Séléka, creando un clima de caos e impunidad generalizado. Francia, la UA y la ONU intervinieron militarmente para reducir los enfrentamientos y facilitar un proceso de diálogo que condujera a una transición negociada.

Durante el año **persistió el deterioro de la situación en el país experimentado desde septiembre y octubre de 2016 y que se recrudeció nuevamente en mayo y junio de 2017 en los alrededores de Bangassou y Bria**, contribuyendo al empeoramiento de la seguridad en gran parte del territorio. Si bien Bangui se mantuvo relativamente en calma, los enfrentamientos armados y la violencia contra la población civil continuaron en el resto del país, especialmente en el sudoeste, el centro, y algunas partes del oeste del país (prefecturas de Ouham y Ouham-Pendé), tal y como señaló el informe del secretario general de la ONU. La violencia fue provocada por el aumento de la competencia entre los grupos armados por el control sobre los recursos, cada vez más agravada por las tensiones entre comunidades y grupos étnicos, sobre todo entre musulmanes y cristianos. Surgieron nuevos grupos armados que intensificaron los enfrentamientos y los ataques contra civiles. El inicio de la temporada de lluvias no disminuyó sus acciones. En el centro y el este del país, muchos de los incidentes incluyeron actividades delictivas y ataques contra las comunidades musulmanas por parte de grupos antibalaka. La creciente retórica incendiaria divisiva utilizada por algunos agentes nacionales contribuyó a un aumento de las tensiones sectarias, especialmente en el sudeste del país, donde los musulmanes, en general, y los fulani, en particular, fueron blanco de ataques, según destacó en octubre el informe del secretario general de la ONU. Los ataques fueron llevados a cabo por motivos étnicos y religiosos por agentes armados cada vez más fragmentados y desorganizados, vagamente asociados con las facciones antibalaka o ex-Séléka.

A pesar de la firma del acuerdo para proceder al desarme de 13 de los 14 grupos armados activos en el país promovido por la Comunidad de Sant Egidio en junio en Roma, **el contexto político**

siguió caracterizándose por un recrudecimiento de la violencia. Se produjeron enfrentamientos entre milicias ex Séléka, entre milicias ex Séleka y antibalaka, y entre la misión de la ONU en el país y los grupos armados. Los grupos armados siguieron compitiendo por afianzar o ampliar su control sobre los recursos y el territorio. Las críticas al Gobierno se hicieron más fuertes y varias figuras de la oposición cuestionaron al presidente y a su Gobierno, por incapacidad de garantizar la estabilidad, según destacó el informe de la ONU. Las persistentes tensiones entre el poder ejecutivo y legislativo agravaron la situación. Varias iniciativas nacionales y regionales de paz y reconciliación no cobraron impulso durante el año, y el Gobierno, dirigido por el presidente Faustin Archange Touadéra, prácticamente no tenía ningún tipo de control de la situación fuera de la capital. Los esfuerzos de desarme avanzaron solo de forma limitada, y las facciones de los antiguos grupos Séléka y anti-balaka siguen estando armadas y controlando amplias zonas del país. La MINUSCA también fue objeto de críticas por no contener a los grupos armados e incluso por no desarmarlos a la fuerza y diferentes sectores pidieron el rearme de las Fuerzas Armadas Centroafricanas (FACA) no reformadas. Durante el año murieron 25 cascos azules, 15 de ellos en acciones bélicas, convirtiéndose en la tercera misión de la ONU más peligrosa de la actualidad. Cabe destacar que en noviembre la misión fue prorrogada por un año más y se amplió con 900 soldados, alcanzando la cifra de 13.000 cascos azules y policías. Los trabajadores humanitarios también fueron objeto de ataques (12 muertos hasta finales de octubre), lo que redujo

gravemente el espacio humanitario, forzando el cierre de la presencia humanitaria en el terreno, como fue el caso de MSF, que en noviembre evacuó su misión en Bangassou, en el sureste del país, lo que dejó a medio millón de personas sin asistencia en esta localidad diamantífera fronteriza con RDC. Mientras tanto, el número de personas desplazadas internas aumentó en 200.000 en 2017, alcanzando un total de 600.000. El Gobierno exigió el levantamiento del embargo de armas para rearmar a las FACA con el argumento de proteger a los civiles. En este sentido, a mediados de diciembre Rusia solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU que hiciera una excepción y permitiera el envío de nuevo armamento a los soldados entrenados por la misión de la UE, la EUTM RCA, a lo que accedieron EEUU y Francia con la condición de que se registraran los números de serie de cara a su trazabilidad. UNICEF señaló que el elevado clima de violencia, invisibilizado por los medios de comunicación, sitúa al país como uno de los peores donde ser menor de edad.

La ONU destacó que la creciente retórica incendiaria divisiva utilizada por algunos agentes nacionales contribuyó a un aumento de las tensiones sectarias en la República Centroafricana

RDC (este)	
Inicio:	1998
Tipología:	Gobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, FDLR, escisiones de las FDLR, milicias Mai-Mai, Nyatura, APCLS, NDC-R, grupos armados de Ituri, grupo armado de oposición burundés FNL, Rwanda, MONUSCO
Intensidad:	2
Evolución:	↑

Síntesis:

El actual conflicto tiene sus orígenes en el golpe de Estado que llevó a cabo Laurent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu Sese Seko, que culminó con la cesión del poder por parte de éste en 1997. Posteriormente, en 1998, Burundi, Rwanda y Uganda, junto a diversos grupos armados, intentaron derrocar a Kabila, que recibió el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabue, en una guerra que causó alrededor de cinco millones de víctimas mortales. El control y el expolio de los recursos naturales han contribuido a la perpetuación del conflicto y a la presencia de Fuerzas Armadas extranjeras. La firma de un alto el fuego en 1999, y de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003, comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración de un Gobierno de transición y posteriormente, en 2006, un Gobierno electo. Sin embargo, este proceso no supuso el fin de la violencia en el este del país debido al papel de Rwanda y a la presencia de facciones de grupos no desmovilizados y de las FDLR, responsables del genocidio rwandés en 1994. El incumplimiento de los acuerdos de paz de 2009 propició en 2012 la desertión de los militares del antiguo grupo armado CNDP integrados en el Ejército congolés, que organizaron una nueva rebelión, llamada M23, apoyada por Rwanda. En diciembre de 2013 dicha rebelión fue derrotada. A pesar de ello persiste el clima de inestabilidad y violencia.

La situación en el país se caracterizó por un grave deterioro de la situación humanitaria en el país y la persistencia de la grave crisis política y social como consecuencia de la expiración del mandato del presidente Joseph Kabila en diciembre de 2016, que derivó en un elevado clima de tensión a nivel nacional.²⁸ Siguió activos los diferentes focos de violencia en Haut Uélé y Bas Uélé (noreste del país), vinculados a las actividades del grupo armado de origen ugandés LRA;²⁹ en Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur y Tanganica (este del país) por el conflicto armado vinculado a las actividades de las diferentes milicias Mai Mai, las FDLR y sus escisiones; y por el conflicto armado en el norte de la provincia de Kivu Norte por las actividades del grupo de origen ugandés ADF. Finalmente, se produjo un grave deterioro de la situación en Kasai (centro-sur), donde este nuevo conflicto provocó que la población desplazada se doblara en el país, **alcanzando los 4,1 millones de personas desplazadas en el conjunto**

La ONU elevó la situación de emergencia de RDC a la categoría de otros tres países: Siria, Iraq y Yemen

de la RDC, situando al país como el primero en número de desplazados en África. Más de 622.000 congolese se encuentran refugiados en países vecinos, 100.000 de ellos este año. El país albergaba más de medio millón de refugiados de los vecinos Burundi, RCA, Rwanda y Sudán del Sur. Alrededor de 7,7 millones de personas padecían inseguridad alimentaria grave, un aumento del 30% respecto de hace un año. Aproximadamente 13,1 millones de personas (en su mayoría mujeres y menores), necesitarán protección y asistencia humanitaria en 2018, lo que representa un aumento del 50% con respecto a 2017.

Las provincias de Kivu Norte y Sur continuaron siendo el feudo de decenas de grupos armados y milicias Mai Mai que llevaron a cabo acciones periódicas de saqueo, extorsión y ataques contra MONUSCO y las FARDC. La organización HRW y el centro de investigación Congo Research Group crearon el Kivu Security Tracker para hacer un seguimiento de la violencia en los Kivus. Según este portal, entre junio y noviembre de 2017 al menos 526 civiles fueron asesinados en los Kivus, al menos 1.087 personas fueron secuestradas, y hubo al menos siete incidentes de violaciones en masa. En octubre, la ONU elevó la situación de emergencia del país al nivel 3, categoría que solo se otorga a otros tres países: Siria, Iraq y Yemen. En materia de explotación de recursos naturales, se siguió documentando informaciones relativas a contrabando de estaño, tántalo y tungsteno, infracciones del sistema de rastreo de esos minerales, así como violaciones del embargo de armas y desvíos por parte de las FARDC hacia los grupos armados procedentes de Burundi. Las violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario siguieron siendo una práctica generalizada. Respecto a las milicias Mai Mai y otros grupos, como el grupo Nyatura, **se constató un incremento de las actividades armadas y la expansión de las zonas bajo su control como consecuencia del envío de unidades de las FARDC estacionadas en los Kivus hacia Kasai, para hacer frente a la insurgencia de Kamwina Nsapu.**

A pesar de esta situación, la ONU anunció el cierre de diversas bases en Kivu Norte durante el año como consecuencia de los recortes en las actividades de mantenimiento de la paz. En la provincia de Ituri, la FRPI seguía siendo la mayor amenaza para la población civil, y fue responsable de gran parte de los abusos de los derechos humanos documentados en la zona.

En 2016 las FDLR quedaron debilitadas por las operaciones Sukola II dirigidas por las FARDC y la escisión del CNRD³⁰ y siguieron perdiendo fuerza a causa de las defecciones y la falta casi completa de nuevos reclutas. Sin embargo, el grupo armado mantuvo alianzas con grupos armados congolese y generó ingresos mediante la venta local de carbón vegetal y madera producidos principalmente dentro del Parque Nacional de Virunga, según destacó el informe del Grupo de expertos de la ONU en RDC.³¹ Los enfrentamientos del CNRD

28. Véase el resumen sobre RDC en el capítulo 2 (Tensiones) y en el capítulo 3 (Procesos de paz).

29. Véase el resumen de África Central (LRA) en el capítulo 2 (Tensiones).

30. Véase el resumen sobre RDC (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados) de Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2017! Informe sobre sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*. Barcelona: Icaria, 2017.

31. Grupo de Expertos sobre la RDC, *Informe de mitad de período del Grupo de Expertos sobre la República Democrática del Congo establecido en virtud de la resolución 1533 (2004) del Consejo de Seguridad*, Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1533 (2004) relativa a la República Democrática del Congo, S/2017/1091, 22 de diciembre de 2017.

con las FDLR disminuyeron, aunque las FDLR estuvieron involucradas en varios incidentes con grupos armados locales. Las FDLR están emplazadas principalmente en la zona tribal de Bwito (territorio de Rutshuru, el Petit Nord), cuentan con un número de combatientes estimado de entre 400 y 600. Por su parte, el CNRD también se seguía debilitando a causa de las constantes deserciones y las dificultades para reclutar a nuevos combatientes, y contaba con unos 300 miembros. En la provincia de Kivu Sur, el resurgimiento de las milicias Mai Mai Yakutumba y el control temporal de posiciones de las FARDC, cerca de la ciudad de extracción de oro de Misisi, a finales de junio, provocaron el desplazamiento forzado de 80.000 personas. Las FARDC lograron repeler el grupo armado con el apoyo de la MONUSCO. Sin embargo, las Yakutumba consolidaron su posición y control sobre un importante tramo de la costa del lago Tanganica, realizando operaciones de piratería y acelerando las actividades de contrabando, lo que contribuyó en mayor medida al fortalecimiento del grupo armado. El conflicto entre las milicias luba y twa se intensificó en el territorio de Kalemie (provincia de Tanganica) durante el año, causando decenas de víctimas mortales.

RDC (este - ADF)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema, Recursos Interno internacionalizado
Actores:	RDC, Uganda, milicias Mai-Mai, grupo armado de oposición ADF, MONUSCO
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

Las Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional de Liberación de Uganda (ADF-NALU) es un grupo rebelde islamista dirigido por combatientes ugandeses y congolese que opera en el noroeste del macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). En sus orígenes contaba con entre 1.200 y 1.500 milicianos reclutados principalmente en ambos países y en Tanzania, Kenya y Burundi. Es el único grupo en el área considerado una organización islamista, y está incluido en la lista de grupos terroristas de EEUU. Fue creado en 1995 por la fusión de otros grupos armados ugandeses refugiados en RDC (Rwenzururu, ADF) y posteriormente pasó a llamarse ADF. En el grupo prevalece la ideología del antiguo ADF, que tenía sus orígenes en movimientos islamistas marginados en Uganda, vinculados al movimiento islámico conservador Salaf Tabliq. En sus primeros años fue instrumentalizado por el Zaire de Mobutu (y posteriormente también Kabila) para presionar a Uganda, gozaba también del apoyo de Kenya y de Sudán y tenía un fuerte apoyo clandestino en Uganda. En un inicio pretendía instaurar un Estado islámico en Uganda, pero en los años 2000 se afianzó en las comunidades que le acogían en RDC, convirtiéndose en una amenaza de carácter local a la administración congolese, aunque su actividad fue limitada. A principios de 2013 el grupo inició una oleada de reclutamiento y secuestros y una escalada de ataques contra la población civil.

Continuó activo el conflicto armado en la zona conocida como Grand Nord (norte de la provincia de Kivu Norte), en el este del país, en el que participa el grupo armado

de origen ugandés ADF. **Las ADF continuaron operando en el territorio de Beni (Grand Nord), y aunque se redujeron las matanzas de civiles,** aumentó el número de secuestros de civiles, y además se intensificaron sus acciones insurgentes contra las FARDC y la MONUSCO. En diciembre **Uganda llevó a cabo una operación militar de envergadura en territorio congolés contra las ADF.** Durante el 2017 diversos informes de la ONU constataron que las ADF continuaron llevando a cabo actividades de reclutamiento forzado en RDC, Uganda y Rwanda, utilizando falsas promesas para atraer a jóvenes ugandeses pobres hacia la región oriental de la RDC, donde los obligaban a sumarse al grupo armado. Persistió el descontento de la población local y de la sociedad civil y la oposición política contra el Gobierno y la MONUSCO ante la incapacidad gubernamental para controlar la situación.

La ONU habría determinado un cambio del modus operandi de las ADF, pasando de evitar el contacto con las FARDC a realizar ataques directos contra sus efectivos. Este cambio podría estar relacionado con un interés común entre algunos comandantes de las ADF y grupos Mai Mai, que recientemente han centrado sus ataques en las FARDC y los símbolos del Estado. La MONUSCO siguió siendo uno de los objetivos de las ADF. Cabe remarcar que en diciembre **se produjo en Semliki (Kivu Norte) el ataque más mortífero cometido en el país por un grupo armado contra personal de mantenimiento de la paz de la ONU, en el que resultaron muertos 15 soldados de Tanzania y otros 44 resultaron heridos.** La autoría del ataque se atribuyó a las ADF. El 22 de diciembre, Uganda informó que, tras consultar con las autoridades de la RDC, sus Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF), habían llevado a cabo un “ataque quirúrgico” en campamentos de las ADF en el territorio de Beni. El ataque de las UPDF se produjo desde el territorio de Uganda en la zona fronteriza. El 27 de diciembre el portavoz del Ministerio de Defensa ugandés anunciaba que los ataques de 22 de diciembre de las UPDF iban dirigidos contra ocho campamentos de las ADF y que causaron la muerte de un centenar de miembros de las ADF y varios heridos.

RDC (Kasai)	
Inicio:	2017
Tipología:	Gobierno, Identidad Interno
Actores:	RDC, diversas milicias de adscripción étnica (Bana Mura, Kamwina Nsapu)
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto en la región del Grand Kasai, que incluye cinco provincias del centro-sur del país (Kasai-Central, Kasai, Kasai-Oriental, Lomami y Sankuru), enfrenta a las fuerzas de seguridad del Estado congolés contra diversas milicias de la zona, organizaciones que también se enfrentan entre

ellas y contra la población civil. En 2012, Jean-Pierre Pandi debía suceder a su difunto tío como el sexto “Kamwina Nsapu”, uno de los principales jefes consuetudinarios en el territorio de Dibaya en Kasai-Central. Tales jefes desempeñan un papel importante, ejerciendo el control sobre la tierra y la administración en sus dominios. Supuestamente apolíticos y seleccionados de acuerdo con las tradiciones, deben ser reconocidos por el Estado central, requisito que alienta a los jefes a apoyar al régimen para que respalde a los solicitantes. En Grand Kasai, la interacción entre la autoridad consuetudinaria y la administración del presidente congolés Joseph Kabila ha sido particularmente compleja porque la región es un bastión de la oposición. Kinshasa se negó a reconocer oficialmente a Pandi lo que incrementó la tensión. En agosto de 2016, Pandi fue asesinado en su casa durante enfrentamientos entre sus combatientes y las fuerzas de seguridad en circunstancias controvertidas, lo que desencadenó una rebelión por parte de sus seguidores, que adoptaron el nombre de Kamwina Nsapu para vengar a su líder. El movimiento se convirtió en una insurrección generalizada al sumarse otros grupos de la zona. Los grupos han ganado notoriedad por su extensivo reclutamiento de menores. El conflicto, inicialmente en Kasai-Central, se extendió a otras localidades y hacia las provincias de Kasai, Kasai-Oriental, Sankuru y Lomami. La desproporcionada respuesta de las FARDC provocó la escalada de la situación, que ha tomado un cariz intercomunitario ya que Kamwina Nsapu, surgida de la comunidad luba, ha ampliado sus ataques a la población que no pertenece a esta etnia, y el Gobierno ha apoyado a la milicia Bana Mura, de la comunidad tchokwe.

La situación se deterioró gravemente en la región de Kasai, en el centro del país. Los enfrentamientos entre la milicia Kamwina Nsapu y el Gobierno congolés, y entre milicias de grupos étnicos, continuaron durante el año y se extendieron a las cinco provincias que forman el Grand Kasai. Las milicias actúan de forma autónoma y no disponen de un liderazgo claro. Aunque en un inicio la milicia Kamwina Nsapu había focalizado sus ataques contra los cuerpos de seguridad del Estado y funcionarios civiles, progresivamente nuevas milicias han surgido y han ampliado sus ataques a otros grupos étnicos de la región acusados de simpatizar con el régimen de Joseph Kabila. Asimismo, también se desencadenaron represalias contra la población civil acusada de apoyar a los grupos insurgentes. Durante el año la ONU identificó al menos 80 fosas comunes en la región y condenó los graves abusos que se están cometiendo en la zona de los que parte son responsabilidad de los cuerpos de seguridad, que estaría actuando de forma indiscriminada contra la población civil. El representante de la ONU sobre Derechos Humanos, Jose María Aranaz, anunció que el país debía identificar a los policías y otros cuerpos de seguridad involucrados en las masacres de la región de Kasai. La milicia Bana Mura está recibiendo apoyo por parte de las FARDC y la Policía para combatir a las milicias luba, y está formada por miembros de la comunidad tchokwe. Bana Mura ha ejecutado a civiles de las comunidades luba y luluwa acusados de apoyar a Kamwina Nsapu o a alguna de las milicias y grupos autónomos que combaten a las FARDC, con el apoyo e incluso junto a los cuerpos de seguridad, y se le acusa de atrocidades y graves violaciones de los derechos humanos contra

menores y mujeres. La ONU denunció 251 ejecuciones extrajudiciales cometidas por las milicias Bana Mura, Kamwina Nsapu y las FARDC desde el inicio del conflicto en agosto de 2016. **La Iglesia Católica situó en junio la cifra de víctimas mortales del conflicto en 3.383 desde el inicio del conflicto**, y denunció que al menos 20 localidades habían sido incendiadas y destruidas, la mitad por parte de las FARDC. Las cifras de la ONU para los seis primeros meses de 2017 sitúan la cifra de víctimas mortales en 428. Algunos de los hechos más destacados fueron la ejecución y decapitación de al menos 40 policías el 24 de marzo. MSF alertó que la región de Kasai se había convertido en una de las principales crisis humanitarias del mundo. Desde agosto de 2016, 1,4 millones de personas de las cinco provincias que componen la región del Grand Kasai se han visto forzadas a desplazarse como consecuencia de la violencia, entre las cuales 850.000 menores, alcanzando los 4,1 millones de desplazados en el conjunto de la RDC, situando al país como el primero en número de desplazados en África.

Sudán (Darfur)	
Inicio:	2003
Tipología:	Autogobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias progubernamentales PDF, unidades paramilitares RSF, janjaweed, coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), otros grupos, UNAMID
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Síntesis:	El conflicto de Darfur surge en 2003 en torno a demandas de mayor descentralización y desarrollo de la región por parte de diversos grupos insurgentes, principalmente SLA y JEM. El Gobierno respondió al levantamiento utilizando a las Fuerzas Armadas y las milicias árabes <i>janjaweed</i> . La magnitud de la violencia cometida por todas las partes contendientes contra la población civil ha llevado a considerar la posibilidad de la existencia de un genocidio en la región, donde ya han muerto 300.000 personas desde el inicio de las hostilidades, según Naciones Unidas. Después de la firma de un acuerdo de paz (DPA) entre el Gobierno y una facción del SLA en mayo del 2006, la violencia se recrudeció, además de generar la fragmentación de los grupos de oposición y un grave impacto regional por los desplazamientos de población, por la implicación sudanesa en el conflicto chadiano y la participación chadiana en el conflicto sudanés. A esta dimensión se suma la tensión intercomunitaria por el control de los recursos (tierra, agua, ganado, minas), en algunos casos instigada por el propio Gobierno. La misión de observación de la UA AMIS, creada en 2004, fue integrada en el año 2007 en una misión conjunta UA/ONU, la UNAMID. Esta misión ha sido objeto de múltiples ataques e incapaz de cumplir con su mandato de proteger a la población civil y al personal humanitario.

Se redujo la violencia asociada al conflicto armado, si bien continuaron produciéndose enfrentamientos. El

Gobierno prolongó el alto el fuego en Darfur –así como en Kordofán Sur y Nilo Azul– en enero por seis meses, de nuevo en julio por cuatro meses y en octubre hasta el 31 de diciembre. En diversos momentos del año el Gobierno dio por acabado el conflicto en Darfur, en contraste con los hechos de violencia –tanto ataques contra civiles, como enfrentamientos entre fuerzas de seguridad e insurgencia, como violencia entre sectores de la insurgencia– y con las dificultades del proceso de paz. Ocho personas murieron y unas 60 resultaron heridas a manos de hombres uniformados en Jebel Marra en enero. La insurgencia del SLA-MM acusó a fuerzas pro-gubernamentales. Choques entre las RSF y el grupo armado SLM-AW en abril resultaron en una veintena de fallecidos, también en Jebel Marra. Se incrementó la violencia en mayo, con nuevos choques entre Ejército y las RSF y las insurgencias SLM-MM y SLM-TC, que habría causado miles de desplazados. En relación al rebrote de violencia, el Gobierno y las RSF acusaron a la insurgencia de intentar tomar de nuevo Jebel Marra abriendo dos frentes, con combatientes retornados de Libia y Sudán del Sur. Asimismo, se produjeron choques en Darfur del Norte en noviembre entre las RSF y combatientes leales a Musa Hilal, ex asesor del presidente sudanés, Omar al-Bashir, con una decena de víctimas mortales, precedidos de tensiones y enfrentamientos en meses anteriores, en el marco de la implementación de la campaña de recolección de armas anunciada en julio. El Gobierno exigió en noviembre a todos los grupos armados de Darfur la entrega de armas. A su vez, se registraron choques entre fuerzas de seguridad y población desplazada del campo de Kalma (Darfur del Norte) en septiembre, en protesta por la visita de al-Bashir, con tres fallecidos y una treintena de heridos.

Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en junio una reducción del 30% de las tropas y policía de la misión UNAMID y la reconfiguración de sus operaciones, en medio de alertas de organizaciones de derechos humanos sobre los riesgos para la seguridad de la población civil, ante la continuación de los abusos del régimen. En el marco del repliegue, la UNAMID informó en octubre del cierre de 11 bases de operaciones en Darfur. Según el plan aprobado, la misión quedará reducida a 11.395 militares y 2.888 policías en enero de 2018 y, tras una evaluación de las condiciones en Darfur, a 8.735 militares y 2.500 policías en junio de 2018. Por otra parte, EEUU aprobó el levantamiento definitivo del embargo comercial y otras sanciones –algunas en vigor desde hacía 20 años– contra Sudán, alegando progresos en la lucha antiterrorista y en derechos humanos, en medio de críticas de organizaciones de derechos humanos.

Sudán (Kordofán Sur y Nilo Azul)	
Inicio:	2011
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno internacionalizado

Actores:	Gobierno, grupo armado SPLM-N, coalición armada Sudan Revolutionary Forces (SRF), milicias progubernamentales PDF, unidad paramilitar Rapid Support Forces (RSF), Sudán del Sur
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

La reconfiguración nacional de Sudán tras la secesión del sur, en julio de 2011, agravó las tensiones del Gobierno sudanés con las regiones fronterizas de Kordofán Sur y Nilo Azul, que durante el conflicto armado sudanés apoyaron a la insurgencia sureña del SPLA. La necesidad de introducir reformas democráticas y de llevar a cabo una descentralización efectiva, que permita el desarrollo económico de todas las regiones que constituyen el nuevo Sudán, se encuentra en la base del resurgimiento de la violencia. La falta de reconocimiento de la pluralidad étnica y política, en la que se incluyen las formaciones políticas ligadas al SPLM sureño, sería también otra de las raíces de la violencia. La contraposición entre las élites de Jartum y los estados del Alto Nilo, que controlan la riqueza económica sudanesa, y el resto de los estados que conforman el país se sitúa en el eje de las tensiones que amenazan la paz.

Se redujo la violencia en el conflicto armado entre el Gobierno y las insurgencias en los estados de Kordofán sur y Nilo Azul.

Como en el caso de Darfur, el Gobierno extendió el alto el fuego durante el año, prolongándolo en enero, julio y octubre, hasta finales de diciembre. Pese a la medida, se registraron enfrentamientos en diversos momentos del año, incluyendo choques entre facciones insurgentes. Se produjeron choques entre el Ejército y el SPLM-N tras la muerte de cerca de siete pastores cerca de la capital de Kordofán Sur, Kadugli, el 10 de febrero. El SPLM-N acusó al Gobierno y milicias progubernamentales del ataque y de tratar de arrastrar a tribus locales al conflicto, mientras el Ejército acusó al grupo de iniciar las hostilidades. Pese a las tensiones, el grupo armado liberó a principios de marzo a 125 prisioneros, mayoritariamente soldados retenidos en Kordofán Sur y en Nilo Azul, a través de la mediación de Uganda y con apoyo del CICR. La medida fue acompañada días después por la liberación por parte del Gobierno de 259 rebeldes de diversos orígenes. Aun así, se produjeron choques y acusaciones de violaciones del alto el fuego entre el Ejército y el SPLM-N en otros momentos del año, como a finales de junio y septiembre.

Por otra parte, se acrecentaron las tensiones dentro del SPLM-N.

Su vicepresidente Abdel-Aziz al-Hilu dimitió en marzo por desacuerdos con su máximo dirigente, Malik Agar, y con la posición negociadora del grupo, contraria a plantear la cuestión de la autodeterminación de las Montañas Nuba, como defendía al-Hilu. El Consejo de Liberación de las Montañas Nuba, órgano político del SPLM-N, aprobó en junio relegar a Agar y nombrar a al-Hilu como nuevo líder y comandante general, así como retirar también al secretario general y principal negociador Yasir Arman, e impedirles entrar en áreas bajo control del grupo. El órgano político justificó las medidas en la negativa de Agar y Arman a incluir la cuestión de la autodeterminación de las Montañas

Nuba en las negociaciones con el Gobierno. La tensión llevó a choques entre facciones leales a Agar y al-Hilu a finales de julio en el estado de Nilo Azul, que llevaron a combatientes seguidores de Agar a desplazarse al estado del Alto Nilo y a Sudán del Sur. Se produjeron nuevos choques en agosto en Nilo Azul, con varias decenas de víctimas mortales entre los combatientes. La conferencia general celebrada por el SPLM-N en octubre ratificó a al-Hilu como nuevo líder y reiteró la demanda de autodeterminación, mientras cerró la puerta al acercamiento con la facción liderada por Agar. A finales de año el presidente sudanés extendió el estado de emergencia al estado de Kordofán Norte y Kasala, que se suma a la medida vigente en Kordofán Sur y Nilo Azul y los cinco estados de Darfur.

Las divisiones internas en el bloque gubernamental y en el bloque insurgente agravaron el conflicto en Sudán del Sur

Sudán del Sur	
Inicio:	2009
Tipología:	Gobierno, Recursos, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno (SPLM/A), grupo armado SPLA-in Opposition (facción ex vicepresidente Riek Machar), facciones disidentes del SPLA-IO dirigidas por Peter Gatdet y Gathoth Gatkuoth, SSLA, SSDM/A, SSDM-CF,SSNLM, REMNASA, milicias comunitarias (SSPPF, TFN), coalición armada Sudan Revolutionary Front (SRF, compuesta por JEM, SLA-AW, SLA-MM y SPLM-N), Sudán, Uganda, UNMISS.
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El acuerdo de paz alcanzado en 2005 que puso fin al conflicto sudanés reconocía el derecho de autodeterminación del sur a través de un referéndum. No obstante, el cese de la guerra con el norte y la posterior consecución de la independencia para Sudán del Sur en 2011 no lograron llevar la estabilidad a la zona meridional. Las disputas por el control de territorio, ganado y poder político se acrecentaron entre las múltiples comunidades que pueblan Sudán del Sur, aumentando el número, la gravedad y la intensidad de los enfrentamientos entre ellas. La situación se había agravado aún más tras las elecciones generales de abril de 2010, cuando diversos militares que habían presentado su candidatura o apoyado a oponentes políticos del partido en la presidencia, SPLM/A, no lograron la victoria. Estos militares se negaron a reconocer los resultados de los comicios y decidieron tomar las armas para reivindicar su acceso a las instituciones, denunciar el predominio de los dinka y la subrepresentación de otras comunidades dentro de las mismas y señalar al Gobierno de Sudán del Sur como corrupto. Las ofertas de amnistía por parte de Juba no han logrado poner fin a la insurgencia, acusada de recibir financiación y apoyo logístico sudanés. En paralelo, se produjo una escalada de la violencia a finales de 2013 entre los partidarios del Gobierno de Salva Kiir y los del ex vicepresidente Riek Machar, quien cuenta con el apoyo de algunos de estos militares y milicias desafectas.

Cuatro años después del inicio del conflicto, la situación en el país continuó siendo de extrema gravedad entre los

diferentes actores del escenario sursudanés. **Persistió la grave situación humanitaria, las sistemáticas violaciones de los derechos humanos (detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, presión a actores políticos opositores) y el clima de inseguridad reinante.** En lo concerniente a la seguridad, los enfrentamientos entre el Gobierno y los actores opositores fueron permanentes en numerosas áreas del país, entre las que se incluyen las regiones de Ecuatoria y el Alto Nilo, y se teme que se produzca un incremento de la violencia debido a la proximidad de la estación seca (noviembre-abril) y la mejora de la movilidad, que tradicionalmente se traduce en un incremento de los niveles de violencia. Entre los meses de mayo y octubre, coincidiendo con la temporada de lluvias, se redujo la intensidad del conflicto. Según OCHA, hay 1,86 millones de personas desplazadas internas y 2,1 millones de personas refugiadas en los países vecinos, cifra que no para de aumentar. Aproximadamente 4,8 millones de personas se enfrentan a una grave situación de inseguridad alimentaria, cifra que a principios de 2018 se elevará, previsiblemente, a 5,1 millones, de los cuales 1,1 son menores, según alertó Save the Children.

A pesar de declarar un cese al fuego unilateral en mayo, el Gobierno lanzó operaciones militares contra posiciones del opositor SPLA-IO y recuperó el control de determinadas zonas controladas por el SPLA-IO. Las divisiones visibles dentro de facciones progubernamentales e insurgentes corren el riesgo de socavar aún más la situación de seguridad, según destacó el centro de investigación ACLED. En primer lugar, el descontento entre las fuerzas de seguridad por el hecho de que el Gobierno no pagó sus salarios en medio de dificultades económicas y escasez de alimentos se ha traducido en niveles crecientes de criminalidad. En Juba se denunciaron regularmente robos a mano armada en los últimos meses del año, así como saqueos y quema de propiedades civiles en áreas agrícolas. En segundo lugar, ha habido tensiones internas crecientes en la comunidad dinka, que dividen la base de apoyo del Gobierno. La violencia entre las comunidades dinka ha continuado tanto en Aweil en el norte de Bahr el Ghazal como en Warrap (estado natal del presidente Kiir) desde que Kiir declaró el estado de emergencia en estos dos estados en julio. Las tensiones se vieron agravadas por el descontento por el confinamiento domiciliario del ex general del Ejército Paul Malong por parte del Gobierno en Juba entre su comunidad de origen en Aweil y el gubernamental SPLA, lo que provocó desertiones. En tercer lugar, el SPLA-IO se vio limitado por el aumento de la competencia con nuevos frentes rebeldes. También se continuaron formando nuevos grupos, lo que subraya la falta de coherencia dentro del movimiento insurgente. A pesar de que el 21 de diciembre de 2017 las facciones enfrentadas en Sudán del Sur firmaron un acuerdo de alto el fuego, los combates no cesaron, y era probable que se agravaran durante la estación seca. A principios de año la posibilidad de establecer el embargo de

armas, iniciativa perseguida por EEUU, volvía a estar sobre la mesa. La organización regional IGAD continuó llevando a cabo iniciativas de cara a promover el diálogo entre las partes durante todo el año y, a finales de 2017, realizó consultas de cara a preparar la celebración del foro de revitalización del proceso de paz (High-Level Revitalization Forum) en los primeros meses de 2018.

Magreb - Norte de África

Argelia	
Inicio:	1992
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, AQMI (ex GSPC), MUYAO, al-Mourabitoun, Jun al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS, gobiernos del norte de África y Sahel
Intensidad:	1
Evolución:	=

Síntesis:

El conflicto armado ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y a distintos grupos islamistas desde comienzos de los noventa, tras un ascenso del movimiento islamista en Argelia que respondió al descontento de la población, la crisis económica y la falta de espacios de participación política. La confrontación se inició después de la ilegalización del Frente Islámico de Salvación (FIS) en 1992 tras su triunfo electoral frente al partido histórico que había liderado la independencia del país, el Frente de Liberación Nacional. La lucha armada enfrentó a varios grupos (EIS, GIA y el GSPC, escindido del GIA y convertido en Al Qaeda en el Magreb Islámico en 2007) con el Ejército, apoyado por milicias de autodefensa. El conflicto provocó unas 150.000 muertes durante los noventa y continúa cobrándose víctimas, aunque los niveles de violencia han descendido desde 2002, después de que algunos grupos renunciaran a la lucha armada. En los últimos años el conflicto ha estado protagonizado principalmente por AQMI, que se convirtió en una organización transnacional, ampliando sus operaciones más allá del territorio argelino y afectando a países del Sahel. Argelia, junto a Malí, Libia, Mauritania y Níger, entre otros, se han enfrentado a AQMI y otros grupos armados que operan en la zona, entre ellos el Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) y las organizaciones al-Mourabitoun (Firmantes de Sangre), Jund al-Khilafa (filial de ISIS) e ISIS.

El conflicto armado en Argelia mantuvo una tendencia similar a la de 2016 y años previos, con hechos de violencia de baja intensidad que, según datos oficiales, dejaron en torno a un centenar de fallecidos. De acuerdo con las cifras publicadas por el ministerio de Defensa argelino, **durante 2017 el Ejército dio muerte a 91 presuntos militantes y recuperó los cuerpos de otros seis, además de arrestar a otros 40, incluyendo nueve mujeres.** Adicionalmente fueron detenidas otras 200 personas acusadas de formar parte de las redes de apoyo a grupos armados; se

decomisaron más de 600 armas, junto a municiones y productos de propaganda; y se destruyó material explosivo. En paralelo, informaciones de prensa también reseñaron algunas acciones de militantes armados contra las fuerzas de seguridad argelinas que habrían provocado algunas bajas. Entre ellas el ataque de combatientes de AQMI que dejó tres soldados muertos en la provincia de Ain Defla (norte), en mayo; o los atentados explosivos reivindicados también por AQMI que provocaron la muerte a cuatro militares en Tebessa (noreste) y Batna (noreste) en junio y julio. La filial de ISIS en Argelia también reclamó la autoría de algunas ofensivas contra gendarmes y estaciones de policía que causaron algunos heridos. Algunos ataques fueron reivindicados tanto por AQMI como por ISIS. Respecto a la filial de ISIS, durante 2017 se informó de la muerte en una operación militar del líder del escuadrón Ghoraba, en la provincia de Constantine, en marzo; y del desmantelamiento de una célula encabezada por un ex dirigente de AQMI que presuntamente planeaba ataques en Argel.

AQMI siguió siendo el grupo armado más relevante en el país norteafricano. Durante 2017, diversos análisis llamaron la atención sobre su evolución a diez años de su filiación a al-Qaeda. Si bien el grupo mantiene sus operaciones en Argelia, las circunstancias estratégicas –incluyendo las operaciones militares que han limitado sus actividades– han debilitado a la organización en este país y motivado un creciente foco hacia el sur, hacia el Sahel, en un proceso de “africanización”. Así, durante el año, las acciones más significativas de AQMI y sus filiales se produjeron fuera de las fronteras de Argelia, en especial en Malí.³² En abril, en una entrevista con una publicación de AQPA (la filial de al-Qaeda en Yemen) **el líder de AQMI, Abdelmalek Droukdel, reconoció las dificultades que enfrenta el grupo en Argelia por falta de apoyos, en contraste con lo que califica como “despertar yihadista” en Libia, Túnez y áreas del Sahel.** Según fuentes de seguridad, en total habría entre 800 y un millar de militantes activos en Argelia –principalmente en zonas montañosas y áreas fronterizas– y los grupos armados que operan en el país enfrentarían crecientes problemas para reclutar nuevos militantes. Esto habría llevado a estas organizaciones, según fuentes de seguridad, a pedir refuerzos a células en Túnez y Libia. De acuerdo con informaciones de prensa, células que hasta ahora mantenían sus bases en las montañas de Kabylia y Jijel se desplazaron al sureste, cerca de la frontera con Túnez.

Libia	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Recursos, Sistema Interno internacionalizado

32. Véase el resumen sobre Malí (norte) en este capítulo.

Actores:	Gobierno de Acuerdo Nacional con sede en Trípoli, Gobierno con sede en Tobruk/Bayda, facciones armadas vinculadas a la Operación Dignidad (Ejército Nacional de Libia o ENL), grupos armados vinculados con la Operación Amanecer, milicias de Misrata, Petroleum Facilities Guard, Brigadas de Defensa de Bengasi (BDB), ISIS, AQMI, entre otros actores armados; EEUU, Francia, Reino Unido, Egipto, EAU, entre otros países
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

En el marco de las revueltas en el norte de África, en febrero de 2011 se inició una contestación popular contra el Gobierno de Muammar Gaddafi. En el poder desde 1969, su régimen se había caracterizado por el autoritarismo, la represión a la disidencia, la corrupción y graves carencias a nivel institucional. El conflicto interno motivó una escalada de violencia que derivó en una guerra civil y en una intervención militar internacional liderada por las fuerzas de la OTAN. Tras meses de enfrentamientos, el bando rebelde anunció la “liberación” de Libia a finales de octubre de 2011, después de la captura y ejecución de Gaddafi. No obstante, en el país han persistido elevados niveles de violencia derivados de múltiples factores, entre ellos la incapacidad de las nuevas autoridades de controlar el país y garantizar un clima de seguridad, la elevada presencia de milicias no dispuestas a entregar sus armas y las disputas por recursos y rutas de tráfico. A partir de mediados 2014, la situación en el país se deterioró, con un incremento en los niveles de violencia y la conformación de dos parlamentos y dos gobiernos, en Tobruk y Trípoli, que cuentan con el apoyo de sendas coaliciones armadas. Los esfuerzos por reconducir la situación se han visto dificultados por este panorama de fragmentación y el clima de inestabilidad ha favorecido la expansión de nuevos grupos, como ISIS, en el país norteafricano.

La situación en Libia siguió deteriorándose a lo largo de 2017 como consecuencia de la **persistente crisis política, la fragmentación institucional y la actividad de un sinnúmero de grupos armados de diverso signo que derivaron en múltiples focos de violencia en todo el territorio**. A pesar de las iniciativas de la ONU y actores regionales e internacionales para intervenir en la marcha del proceso político en el país norteafricano –incluyendo la UE, la UA, países vecinos y Estados europeos–, durante el año persistieron los desacuerdos y las dificultades para implementar el acuerdo de Skhirat suscrito en diciembre de 2015. Así, continuó la bicefalia de centros de poder, con un gobierno de facto en el este del país, con base en al-Bayda, y otro en Trípoli, vinculado al Consejo Presidencial y encabezado por el primer ministro Fajez Sarraj, creado según las disposiciones del acuerdo de Skhirat y con reconocimiento internacional, pero altamente frágil y con ascendencia sobre una limitada fracción de los cuerpos armados. Adicionalmente, igual que el

año anterior, sectores vinculados a Khalifa Ghweil y al autodenominado Gobierno de Salvación Nacional (GSN) –que en el pasado estuvo en funcionamiento en Trípoli– volvieron a desafiar al Ejecutivo de Serraj en la capital libia, creando una Guardia Nacional paralela e intentando tomar el control de sectores de la ciudad. Las diferencias internas también se reflejaron en el seno de la Cámara de Representantes, donde sectores cuestionaron el diálogo auspiciado por la ONU. En paralelo al convulso clima político, las diversas dinámicas de conflicto derivaron en enfrentamientos armados en todo el país, en especial en zonas como Bengasi, Derna, Misrata, Sirte, Trípoli, la zona petrolera del Golfo de Sirte y las provincias de Sabha y al-Jufrah (centro-sur). **Los combates, ataques explosivos y bombardeos causaron la muerte de centenares de personas durante 2017**, aunque la cifra total de víctimas a causa de las hostilidades era difícil de precisar.

Entre los episodios de violencia más significativos cabe mencionar los enfrentamientos entre el Ejército Nacional Libio (ENL) del general Khalifa Hifter y la coalición armada Brigadas de Defensa de Bengasi (BDB) en torno a las instalaciones petroleras de Sidra y Ras Lanuf que causaron más de 40 muertes en marzo; los choques entre fuerzas del Gobierno liderado por Serraj y opositores del GSN que dejaron más de 50 fallecidos en Trípoli en mayo; el ataque del grupo Third Force (de Misrata) y BDB contra la base aérea de Brak al-Shati, en el sur que causó la muerte a entre 80 y 130 miembros del ENL, además de civiles, también en mayo; las hostilidades en las zonas de Sabha y Jufrah (centro-sur), incluyendo ataques aéreos del ENL contra grupos rivales que provocaron decenas de fallecidos a mediados de año; los continuos combates del ENL con grupos armados en Bengasi (este), incluyendo Shura Council of Benghazi Revolutionaries que acabó siendo expulsado de la ciudad en junio; y el asedio a la ciudad de Derna (este) por parte del ENL, en el marco de su lucha con milicias islamistas, que llevó a un grave deterioro de la situación humanitaria durante el segundo semestre. Cabe destacar que, tras la expulsión de su feudo en Sirte en 2016, el grupo armado ISIS también continuó activo en Libia en forma de pequeñas células en distintos puntos del territorio. La organización lanzó diversos ataques durante el año, principalmente contra las fuerzas de la operación Bunyan al-Marsous (BAM). Además, **varios terceros Estados continuaron interviniendo en Libia. Así, EEUU lanzó ofensivas contra posiciones de ISIS**, una de las cuales causó la muerte a unos 90 miembros del grupo al sur de Sirte en enero y a otros 17 en septiembre. Egipto, en tanto, apoyó con ataques aéreos las acciones del ENL en el centro-sur de Libia y lanzó una ofensiva en Derna en mayo después de un ataque contra cristianos coptos reivindicado por ISIS.³³ En términos generales, a nivel de frentes de batalla, se constató una consolidación del ENL en Bengasi y un avance de este grupo desde el este hacia el oeste y centro sur del país. En paralelo, Hifter siguió

33. Véase el resumen sobre Egipto en este capítulo.

perfilándose como una figura clave en el devenir de Libia. El general mantuvo algunas reuniones con Serraj, quien en julio propuso una hoja de ruta para resolver la crisis. Tras una reunión en París, ambos suscribieron una declaración comprometiéndose a un cese el fuego y a trabajar por restituir la seguridad del país y celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias. No obstante, poco después **Hifter puso en duda la capacidad de que este acuerdo pudiera implementarse y, al finalizar el año, rechazó públicamente el acuerdo político de 2015 y consideró obsoletas las instituciones emanadas del pacto, incluyendo el Gobierno de Serraj.** En este contexto, el Consejo de Seguridad de la ONU defendió la vigencia del acuerdo y el nuevo enviado especial a Libia, Ghassan Salamé –nombrado en julio en sustitución de Martin Kobler– continuó promoviendo un plan para salir de la crisis que incluía la reformulación de algunos aspectos del acuerdo de Skhirat.

A esta compleja situación política y de seguridad cabe **añadir el panorama de derechos humanos en Libia, que continuó siendo crítico.** ONG y sucesivos informes de la misión de la ONU en el país (UNSMIL) denunciaron las repetidas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario perpetradas por numerosos actores armados libios, entre ellas ejecuciones sumarias, secuestros, torturas, asesinatos de civiles, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ofensivas contra centros de salud. Adicionalmente, **un tema de especial preocupación fue el de la vulnerabilidad de la población migrante y refugiada en Libia, sometida a condiciones extremas:** detenciones arbitrarias en atestados centros administrados por el oficial Departamento para el Combate de la Inmigración Ilegal libio (DCIM, por sus siglas en inglés), por grupos armados o redes de trata y tráfico de personas; acceso insuficiente a comida, agua e instalaciones sanitarias; torturas, trabajos forzados y explotación sexual. En abril, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) denunció la existencia de mercados de esclavos y esclavas en Libia. Estas denuncias transcurrieron en paralelo a la adopción de una serie de medidas para frenar los flujos de población migrante y refugiada hacia Europa, a partir de acuerdos de autoridades libias con la UE e Italia que supusieron una reducción en 67% de la llegada de personas a las costas italianas entre julio y noviembre, en comparación con el mismo período de 2016. **El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos calificó de “inhumanas” las políticas de asistencia de la UE a la Guardia Costera libia para interceptar y retornar inmigrantes en el Mediterráneo.** Amnistía Internacional acusó a gobiernos europeos de complicidad en los abusos, alertó sobre la colusión entre miembros de la

La situación de la población migrante y refugiada en Libia causó especial preocupación en 2017, en especial después de que la OIM denunciara la existencia de mercados de esclavos y esclavas en el país

Guardia Costera libia y las redes de tráfico y trata y apuntó que unas 20.000 personas permanecían detenidas en los centros gestionados por el DCIM, donde la extorsión y la tortura son prácticas habituales.³⁴

1.3.2. América

Colombia	
Inicio:	1964
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, FARC-EP, ELN, nuevos grupos paramilitares
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

En 1964, en el marco de un pacto de alternancia del poder entre los partidos Liberal y Conservador (Frente Nacional) que excluía otras opciones políticas, nacen dos movimientos de oposición armada que se plantean la toma del poder: el ELN (de composición universitaria y obrera e inspiración guevarista) y las FARC-EP (de tendencia comunista y agrarista). En los setenta surgen diversos grupos tales como el M-19 y el EPL que terminan negociando con el Gobierno e impulsando una nueva Constitución (1991) que establece los fundamentos de un Estado Social de Derecho. A finales de los ochenta aparecen varios grupos paramilitares instigados por sectores de las Fuerzas Armadas, terratenientes, narcotraficantes y políticos tradicionales en defensa del statu quo mediante una estrategia de terror. La actividad del narcotráfico influye en la esfera económica, política y social y contribuye al incremento de la violencia.

Se produjo una desescalada de la violencia en el marco del conflicto armado que afecta a Colombia. Por una parte, **tras la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, finalizó el desarme y la desmovilización de este**

grupo armado, en un proceso verificado por la ONU que culminó en agosto con la retirada de los contenedores de armas.

No se registraron nuevos enfrentamientos entre las FARC y las fuerzas de seguridad colombianas, lo que llevó a actores políticos, sociales e internacionales a dar por finalizado el conflicto entre FARC y Gobierno. No obstante, y tal como recogieron algunas investigaciones,³⁵ la violencia no desapareció totalmente y permanecieron algunos factores de riesgo. Por una parte, en torno a 700 guerrilleros disidentes permanecerían activos aunque

sin vinculación a las nuevas estructuras políticas creadas por las antiguas FARC. Por otra parte, en setenta municipios del país se incrementó la violencia y los homicidios tras la retirada de las FARC, al haber sido ocupados por el ELN o por organizaciones armadas de

34. Amnistía Internacional, *Libya: European governments complicit in horrific abuse of refugees and migrants*, 12 de diciembre de 2017.

35. Valencia Agudelo, León, *Terminó la guerra, el postconflicto está en riesgo: a un año del acuerdo de paz*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2017.

carácter paramilitar. Con respecto al conflicto armado con el ELN, cabe destacar que a lo largo del año se redujo la violencia como consecuencia del inicio formal de las negociaciones de paz entre la guerrilla y el Gobierno, e incluso se alcanzó un alto el fuego de carácter bilateral temporal, vigente entre el 1 de octubre de 2017 y el 9 de enero de 2018, que sin embargo no fue renovado en los primeros días de 2018. Durante el año, y a pesar del diálogo, se produjeron diferentes episodios de violencia. Así, en febrero un policía murió en Bogotá como consecuencia de un atentado del ELN, en abril ocho integrantes de esta guerrilla murieron en una operación de las fuerzas de seguridad en el Catatumbo y durante todo el año se repitieron los enfrentamientos entre ELN y fuerzas de seguridad que dejaron decenas de víctimas mortales. Con el inicio del alto el fuego esta violencia se redujo notablemente y cesaron los combates, aunque al menos 26 personas murieron en diferentes incidentes de violencia durante este periodo, según señaló la organización CERAC. No obstante, cabe destacar que durante el año persistió la acción armada de diferentes grupos paramilitares como el Clan del Golfo. Además, resultó especialmente preocupante el aumento de asesinatos de líderes sociales, que según INDEPAZ, pasaron de 117 en 2016, a 170 muertes de líderes sociales y defensores de paz en 2017.

1.3.3. Asia y Pacífico

Asia Meridional

Afganistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, coalición internacional (liderada por EEUU), OTAN, milicias talibán, señores de la guerra, ISIS
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

El país ha vivido en conflicto armado prácticamente de forma ininterrumpida desde la invasión de las tropas soviéticas en 1979, cuando se inició la guerra entre las fuerzas soviéticas y afganas por una parte, y las guerrillas anticomunistas islamistas (muyahidín) por otro. La retirada de las tropas soviéticas en 1989 y el ascenso de los muyahidín al poder en un contexto de caos y enfrentamientos internos entre las diferentes facciones, facilitó el ascenso al poder del movimiento talibán desde el sur a la práctica totalidad del territorio afgano en la segunda mitad de la década de 1990. En noviembre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre de al-Qaeda y la negativa del Gobierno talibán de entregar a Osama ben Laden y otros líderes de al-Qaeda (en territorio afgano), EEUU atacó al país ayudado por un contingente de fuerzas británicas. Tras la firma de los acuerdos de Bonn se instauró un Gobierno interino liderado por Hamid Karzai posteriormente refrendado por las urnas. Desde 2006 se ha producido una escalada de la violencia, motivada por la recomposición de las milicias talibán. Tras las elecciones presidenciales y provinciales

de 2014, el país se sumió en una crisis provocada por las acusaciones de fraude electoral tras la segunda ronda en la que los dos líderes más votados, Ashraf Ghani y Abdulá Abdulá, mantuvieron los resultados en el aire durante meses. En septiembre, se llegó a un acuerdo para crear un Gobierno bicéfalo con Ghani en la presidencia y Abdulá como jefe ejecutivo. En 2011 las tropas internacionales iniciaron su retirada, que se completó a finales de 2014, aunque en el terreno quedó desplegada la misión “Resolute Support”, con mandato de la OTAN para formar y entrenar a las fuerzas afganas y otra fuerza para llevar a cabo operaciones de formación y contraterrorismo, integrada por soldados norteamericanos, misión “Freedom Sentinel”.

El conflicto armado en Afganistán mantuvo niveles de alta intensidad durante todo el año, con múltiples enfrentamientos armados, atentados y graves violaciones de los derechos humanos en todo el país. La UNAMA documentó 10.453 víctimas civiles, 3.438 muertes y 7.015 heridas. A lo largo de todo el año se produjeron múltiples atentados en Kabul, causando centenares de muertes, gran parte de ellas civiles. En enero, dos explosiones en las inmediaciones del Parlamento afgano causaron la muerte de al menos 30 personas, en un ataque reivindicado por la insurgencia talibán. En febrero murieron al menos 20 personas como consecuencia de un atentado suicida contra la sede del tribunal supremo en Kabul. En marzo se produjeron al menos tres atentados de gravedad en la capital. Dos tuvieron lugar el 1 de marzo, reivindicados por los talibanes, y en ellos murieron 15 personas y 50 resultaron heridas. En el primero un coche bomba explotó junto a una comisaría de policía y el segundo se produjo en las inmediaciones de una oficina de los servicios de inteligencia afganos, el National Directorate for Security. Días después el hospital de Sardar Daud Khan en Kabul fue objeto de un atentado en el que murieron 50 personas. El atentado fue reivindicado por ISIS, aunque algunos análisis señalan que esta organización no tendría la capacidad suficiente para llevar a cabo un ataque de esta magnitud en Afganistán. De ser obra de ISIS se trataría del ataque de mayor complejidad llevado a cabo por esta organización. **El 31 de mayo se produjo el atentado de mayor gravedad del año y posiblemente desde la invasión militar estadounidense en 2001. 150 personas murieron, presumiblemente civiles en su mayoría, y cerca de 500 resultaron heridas como consecuencia del ataque que tuvo lugar en las inmediaciones de la Embajada de Alemania, y en la calle que lleva a la Embajada de EEUU y a los cuarteles generales de EEUU y la OTAN, por lo que se desconoce si la intención era atacar la Embajada de Alemania o estos otros objetivos.** El atentado no fue reivindicado y la insurgencia talibán negó su implicación, aunque los servicios de inteligencia acusaron a la Red Haqqani de estar detrás. En diciembre se produjo otro atentado de enorme gravedad en Kabul cuando un ataque suicida contra el centro cultural chií Tebyan, que también es sede de una agencia de noticias iraní, causó la muerte de 50 personas e hirió a más de 80. ISIS reivindicó el atentado, del que la insurgencia talibán se desmarcó. Por otra parte, se intensificaron los enfrentamientos armados en diferentes zonas del

país. Uno de los episodios más graves tuvo lugar en abril, cuando un ataque perpetrado por 10 insurgentes talibanes contra la base militar afgana de Camp Shaheen, en la provincia de Balkh, causó la muerte de 160 soldados. Por otra parte, la insurgencia talibán también dio muestras de capacidad militar mediante su creciente control de zonas del país. Por ejemplo, en el mes de julio, los talibanes lograron hacerse con el distrito de Janikhel, provincia de Paktia, después de varios días de intensos enfrentamientos. La insurgencia talibán también logró el control del distrito de Kohistan, en la provincia de Faryab, aunque dos días después fue recuperado por las fuerzas de seguridad afganas, en una operación en la que según fuentes oficiales murieron 20 insurgentes talibanes. El tercero de los distritos capturados por la insurgencia en julio fue el de Taywara, en la provincia de Ghor.

En agosto el Gobierno de EEUU reconoció que el despliegue militar en el terreno era de 11.000 soldados estadounidenses, una cifra superior a la que se había reconocido de forma pública anteriormente, que era de 8.400.³⁶ El secretario de Defensa de EEUU, James Mattis, anunció un despliegue adicional de 3.000 efectivos militares, lo que llevaría a un despliegue total de 14.000 soldados estadounidenses en el país, a los que habría que añadir el personal civil y los contratistas que trabajan junto a las Fuerzas Armadas. Este nuevo despliegue se produjo en el marco de la **nueva estrategia para el país anunciada por el presidente Donald Trump, en la que se comprometió a no salir de Afganistán y en la que desveló que la operación militar no se centrará en cuestiones vinculadas a la promoción de la democracia y el apoyo a la construcción de Estado sino en el combate militar al terrorismo**. Trump señaló que una retirada de tropas implicaría un vacío que sería ocupado por al-Qaeda e ISIS. También anunció un endurecimiento en la relación con Pakistán, a quien acusó de dar cobijo a organizaciones terroristas en su territorio, lo que generó un amplio rechazo en este país.

Cabe destacar el informe del Secretario General de evaluación de la UNAMA,³⁷ presentado en agosto ante la Asamblea General en el que Naciones Unidas reconoce el deterioro en la situación de seguridad del país de los últimos años, en los que se ha consolidado un aumento de la capacidad talibán para controlar el territorio, al tiempo que amplios sectores insurgentes no contemplan la posibilidad de una solución negociada al conflicto armado dado su creciente poder militar. Además, el informe advierte sobre el poder cada vez mayor de ISIS en el país, que aunque sigue siendo un actor integrado por un número pequeño de insurgentes, complejiza el contexto y añade inseguridad, puesto que este grupo ha sido responsable de varios atentados de gravedad durante el año. Por otra parte,

La capital afgana fue escenario de múltiples atentados durante todo el año que causaron centenares de muertes, gran parte civiles

la UNAMA también denunció un incremento de los ataques contra centros religiosos, especialmente lugares de culto chií, provocando decenas de víctimas civiles.³⁸

India (Jammu y Cachemira)	
Inicio:	1989
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, JKLF, Lashkar-e-Toiba (LeT), Hizb-ul-Mujahideen, All Parties Hurriyat Conference, United Jihad Council
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis:
El conflicto armado en el estado indio de Jammu y Cachemira tiene su origen en la disputa por la región de Cachemira que desde la independencia y partición de India y Pakistán ha opuesto a ambos Estados. En tres ocasiones (1947-1948; 1965; 1971) estos países se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos la soberanía sobre esta región, dividida entre India, Pakistán y China. El conflicto armado entre India y Pakistán en 1947 da lugar a la actual división y creación de una frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado de Jammu y Cachemira, donde una multitud de grupos insurgentes, favorables a la independencia total del estado o a la adhesión incondicional a Pakistán, se enfrentan a las fuerzas de seguridad indias. Desde el inicio del proceso de paz entre India y Pakistán en 2004, la violencia ha experimentado una reducción considerable, aunque los grupos armados se mantienen activos.

El conflicto armado en el estado indio de Jammu y Cachemira escaló de intensidad a lo largo del año con un aumento de la mortalidad, siguiendo la tendencia de escalada de 2016. A lo largo de 2017 se produjeron 358 muertes vinculadas al conflicto armado –57 civiles, 83 integrantes de las fuerzas de seguridad y 218 insurgentes–, según las cifras recogidas por el South Asia Terrorism Portal, el balance más elevado desde el año 2010. No obstante, otras fuentes elevaron esta cifra y, por ejemplo, la coalición Jammu Kashmir Coalition of Civil Society, que agrupa a varias organizaciones de derechos humanos señaló que durante 2017 habían muerto 451 personas –108 civiles, 125 integrantes de las fuerzas de seguridad y 218 insurgentes–. **Además, las organizaciones denunciaron la persistencia de graves violaciones de derechos humanos, como la negativa del gobierno a investigar las desapariciones forzadas que se han producido a lo largo de las últimas décadas, torturas o detenciones arbitrarias**, entre otras. También se produjeron ataques específicos contra mujeres, como el fenómeno

36. Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, *Quarterly Report to the United States Congress*, octubre 2017.

37. Consejo de Seguridad de la ONU, *Informe especial sobre el examen estratégico de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán. Informe del Secretario general A/72/312-S/2017/696*, 10 de agosto de 2017.

38. UNAMA, *Protection of Civilians in Armed Conflict: Attacks against Places of Worship, Religious Leaders and Worshipers*, UNAMA, 7 de noviembre de 2017.

conocido como “Braid chopping”, del que fueron víctimas cientos de mujeres.³⁹ Las fuerzas de seguridad anunciaron a mediados de año el inicio de la operación militar “Operation All Out”, con la que pretendían matar a los dirigentes más visibles de la insurgencia cachemir. A finales de año, el responsable de la operación e inspector general de la Policía de Jammu y Cachemira señalaba a los medios de comunicación que se había matado a 18 mandos de alto nivel de diferentes organizaciones insurgentes, incluyendo líderes de LeT, Hizbul Mujahideen y Jaish-e-Mohammad.

Entre los hechos más graves del año estuvo el atentado contra una comisaría en Pulwana en septiembre, en el que murieron ocho policías y reivindicado por Jaish-e-Mohammad, el de mayor gravedad desde septiembre de 2016, cuando 18 miembros de las fuerzas de seguridad murieron en un ataque a un campamento militar. Posteriormente se inició una fuerte operación de seguridad que fue contestada con protestas sociales en varias poblaciones. En julio, coincidiendo con el aniversario de la muerte de Burhan Wani miembro del grupo armado Hizbul Mujahideen, cuya muerte en 2016 desencadenó graves disturbios y enfrentamientos, se impusieron serias restricciones, similares a las de un toque de queda para dificultar las protestas en las calles. No obstante, se registraron diferentes episodios de violencia incluyendo un intercambio de fuego en la frontera entre India y Pakistán en el que murieron siete personas, en medio de un cruce de acusaciones entre los dos países.

Se produjo una escalada en la violencia en Jammu y Cachemira con el inicio de la operación militar “Operation All Out” y con denuncias de graves violaciones de derechos humanos por las fuerzas de seguridad

Se registró un ligero descenso de la violencia en el conflicto armado que enfrenta al grupo armado de oposición naxalita CPI-M con las fuerzas de seguridad indias en varios estados del país. Según las cifras de mortalidad relacionadas con el conflicto armado recogidas por el South Asia Terrorism Portal, durante el año 2017 se registraron 332 muertes –109 civiles, 74 integrantes de las fuerzas de seguridad indias y 149 insurgentes–. En ocho estados indios se registraron enfrentamientos con víctimas mortales, siendo el más afectado Chhattisgarh con 169 víctimas, seguido de Jharkhand (56), Odisha (36), Maharashtra (25), Bihar (24), Telangana (13), Andhra Pradesh (9) y Madhya Pradesh (1) No obstante, a pesar de esta reducción global de la violencia, durante 2017 se produjeron algunos de los episodios de mayor gravedad de los últimos años. En el estado de Chhattisgarh, en el distrito de Sukma se produjeron dos graves episodios de violencia. En el mes de marzo, un ataque de la insurgencia causó la muerte de 12 miembros de la Fuerza de Reserva Central de Policía, encargada de llevar a cabo tareas de contrainsurgencia. **En abril se produjo el ataque más grave del año cuando 25 miembros de las fuerzas de seguridad murieron tras ser emboscados**

en la zona de Sukma, en el estado de Chhattisgarh. 300 insurgentes habrían participado en la emboscada, en la que atacaron a un grupo de 100 policías que patrullaban una zona en la que se estaban llevando a cabo obras de infraestructura. Según la propia Policía, en el ataque, uno de los más mortíferos de los últimos años, habrían muerto 12 insurgentes, pero sus cuerpos no fueron hallados posteriormente. Entre los insurgentes atacantes también habría mujeres. La zona de Sukma está fuertemente afectada por la presencia insurgente y las operaciones militares de las fuerzas de seguridad. A este ataque le siguió una operación de seguridad a gran escala en la que murieron al menos 12 insurgentes. La operación, conocida como Prahara, es una de las mayores de los últimos meses y tuvo lugar en una de las zonas considerada feudo de la insurgencia naxalita. Más de 1.500 policías se desplegaron en el marco de esta operación. Por otra parte, persistieron las denuncias por parte de organizaciones de la sociedad civil relativas a las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad y las empresas extractivas que operan en los estados afectados por el conflicto.

India (CPI-M)	
Inicio:	1967
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, CPI-M (naxalitas)
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto armado que enfrenta al Gobierno indio con el grupo armado maoísta CPI-M (conocido como naxalita, en honor a la ciudad en la que se inició este movimiento) afecta a numerosos estados de la India. El CPI-M surge en Bengala Occidental a finales de los años sesenta con reclamaciones relativas a la erradicación del sistema de propiedad de la tierra, así como fuertes críticas al sistema de democracia parlamentaria, considerada como un legado colonial. Desde entonces, la actividad armada ha sido constante, y ha ido acompañada del establecimiento de sistemas paralelos de gobierno en aquellas zonas bajo su control, fundamentalmente rurales. Las operaciones militares contra este grupo, considerado como terrorista por el Gobierno indio, han sido constantes. En el año 2004 se inició un proceso de negociación que resultó fallido. Desde 2011 ha tenido lugar una reducción considerable de las hostilidades.

Pakistán	
Inicio:	2001
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, milicias talibán, insurgentes internacionales, EEUU

39. Cientos de mujeres fueron atacadas por hombres no identificados que les cortaron el cabello y las agredieron físicamente, generando un clima de terror entre las mujeres del estado. Algunos sectores acusaron a las fuerzas de seguridad indias de instigar estas agresiones.

Intensidad:	3
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto armado que afecta al país surge a raíz de la intervención en 2001 en Afganistán. Inicialmente, el conflicto tuvo como escenario principal la zona que comprende las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) y la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (anteriormente denominada Provincia Fronteriza del Noroeste). Tras la caída del régimen talibán en Afganistán, miembros de este Gobierno y sus milicias, así como varios grupos de insurgentes de distintas nacionalidades, entre ellos al-Qaeda, encontraron refugio en Pakistán, fundamentalmente en varias agencias tribales, aunque el liderazgo se distribuyó por varios núcleos urbanos (Quetta, Lahore o Karachi). Si bien en un inicio, Pakistán colaboró con EEUU en la búsqueda de insurgentes extranjeros (chechenos, uzbekos) y de al-Qaeda, Pakistán no mantuvo la misma colaboración con el liderazgo talibán. El descontento de varios de los grupos de origen pakistaní que formaban parte de la insurgencia talibán, dio lugar a la formación en diciembre de 2007 del movimiento talibán pakistaní (Tehrik-e Taliban Pakistan, TTP) que comenzó a cometer atentados en el resto del territorio pakistaní, tanto contra instituciones estatales como contra la población civil. Con el aumento de la violencia a niveles desconocidos hasta entonces, y con una serie de ataques especialmente contra las minorías chií, ahmadí y cristiana, y en menor medida contra sufíes y barelvíes, la opinión pública se posicionó a favor de acabar con los santuarios terroristas. En junio de 2014, el Ejército lanzó la operación Zarb-e Azb para eliminar la insurgencia en las agencias del Waziristán Norte y Sur.

Pakistán fue escenario de elevados niveles de violencia, aunque continuó la tendencia iniciada en 2015 y se produjo una reducción tanto de los incidentes violentos como de la mortalidad asociada a esta violencia. De acuerdo con las cifras registradas por el Center for Research and Security Studies de Pakistán, durante 2017 murieron 2.048 personas como consecuencia del conjunto de conflictos armados y situaciones de tensión que transcurren en el país. En las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Punjab y en las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA), que son el epicentro de la actividad de la insurgencia talibán, se produjeron 1.090 muertes. **ISIS expandió su actividad armada, y fue responsable de algunos de los más graves atentados registrados durante el año.** Entre sus acciones cabe destacar el atentado que se produjo en febrero contra el santuario sufí de Sehwan en la provincia de Sindh que causó la muerte de al menos 88 personas, 20 de ellas menores y centenares de personas resultaron heridas. Este fue el atentado suicida más mortífero desde el ataque de diciembre de 2014 contra un colegio en Peshawar en el que murieron más de 150 personas. Las fuerzas de seguridad señalaron que al menos 39 personas resultaron muertas en las operaciones de seguridad iniciadas posteriormente al atentado y que llevaron al cierre de dos puntos fronterizos con Afganistán. ISIS también reivindicó el atentado que se produjo contra una iglesia en Quetta en diciembre, en el que murieron nueve personas y más de 40 resultaron heridas. Dos atacantes suicidas atacaron la iglesia cuando centenares de personas asistían a una ceremonia religiosa con motivo de la navidad.

La insurgencia talibán fue responsable también de varios atentados, algunos de ellos perpetrados por la facción talibán Jamaat-ul-Ahrar. **La ciudad de Parachinar, capital de Kurram Agency y predominantemente chií, resultó especialmente afectada por la violencia, con múltiples atentados** como el que tuvo lugar en marzo en las inmediaciones de una mezquita chií, y que causó la muerte a 23 personas e hirió a otras 73. El grupo armado sunní Lashkar-e-Jhanvi, en colaboración con la facción talibán liderada por Shahryar Mahsud, perpetró otro atentado en un mercado de Parachinar en enero que causó la muerte de 22 personas. Además, alrededor de 90 personas resultaron heridas por la explosión, que tuvo lugar en una zona mayoritariamente chií. En junio tuvo lugar uno de los atentados más graves del año también en Parachinar, reivindicado por la facción al-Alami de Lashkar-i-Jhangvi, en el que murieron 72 personas y más de 200 resultaron heridas.

Pakistán (Baluchistán)	
Inicio:	2005
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Recursos Interno
Actores:	Gobierno, Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, BLA, BRP, BRA, BLF y BLT; sociedad civil, LJ, TTP, talibanes afganos (shura de Quetta), ISIS
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

Desde la creación del Estado de Pakistán en 1947, Baluchistán, la provincia más rica en recursos naturales, pero con algunas de las tasas de pobreza más elevadas del país, ha vivido cuatro periodos de violencia armada (1948, 1958, 1963-69 y 1973-77) en los que la insurgencia ha explicitado su objetivo de obtener una mayor autonomía e incluso la independencia. En el año 2005 la insurgencia armada reaparece en escena, atacando fundamentalmente infraestructuras vinculadas a la extracción de gas. El grupo armado de oposición BLA se convierte en la principal fuerza opositora a la presencia del Gobierno central, al que acusan de aprovechar la riqueza de la provincia sin que ésta revierta en la población local. Como consecuencia del resurgimiento de la oposición armada, una operación militar fue iniciada en 2005 en la provincia, provocando desplazamientos de la población civil y enfrentamientos armados. De forma paralela, se desarrolla un movimiento de la población civil que pide el esclarecimiento de la desaparición de centenares, si no miles, de baluchíes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

La provincia de Baluchistán siguió afectada por el conflicto armado que transcurre en su territorio todo el año, aunque se redujo la intensidad de la violencia con respecto a años anteriores y disminuyó el número de víctimas mortales. Según los datos recopilados por el Center for Research and Security Studies de Pakistán, durante 2017 murieron 489 personas como consecuencia del conflicto armado en Baluchistán, frente a las 805 muertes de 2016. La reducción de la mortalidad benefició sobre todo a insurgentes y miembros de las fuerzas de seguridad, pero no se redujo

tanto el número de víctimas civiles. El grupo armado de oposición más activo fue el BLA. Además, Baluchistán fue uno de los escenarios en los que transcurrió también el conflicto armado que enfrenta a la insurgencia talibán con las fuerzas de seguridad, y en paralelo, ISIS continuó expandiendo sus actividades. También se repitieron los ataques de carácter sectario contra la población hazara, que ha sido objetivo de múltiples actos de violencia.

Uno de los hechos más graves del año tuvo lugar en el mes de agosto, cuando un atentado suicida perpetrado por un motociclista causó la muerte a 15 personas y ocasionó heridas a otras 25 en la ciudad de Quetta, capital de la provincia. El objetivo del atentado era un camión militar. Ocho de las víctimas eran soldados y otras siete civiles. La explosión se produjo en la víspera de la celebración de la independencia de Pakistán y fue reivindicado por ISIS. Pocos días después, ocho miembros de las fuerzas de seguridad pakistaníes murieron como consecuencia de un atentado reivindicado por el grupo armado de oposición baluchi BLA. Los fallecidos, que eran miembros del Cuerpo Fronterizo, murieron consecuencia del estallido de un artefacto explosivo improvisado al paso de su vehículo que patrullaba en el distrito de Harnai. En octubre, el BLA reivindicó otro ataque en el que murieron cuatro miembros de las fuerzas de seguridad que tuvo lugar en la zona Panjgur. En esta misma zona se produjeron ataques contra infraestructuras vinculadas al proyecto multimillonario del Corredor Económico China Pakistán, que ha sido atacado por la insurgencia baluchi en repetidas ocasiones.

Sudeste Asiático y Oceanía

Filipinas (NPA)	
Inicio:	1969
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno, NPA
Intensidad:	1
Evolución:	↑

Síntesis: El NPA, brazo armado del Partido Comunista de Filipinas, inicia la lucha armada en 1969 y alcanza su cenit en los años ochenta bajo la dictadura de Ferdinand Marcos. A pesar de que las purgas internas, la democratización del país y los ofrecimientos de amnistía debilitaron el apoyo y la legitimidad del NPA a principios de los años noventa, actualmente se estima que está operativo en la mayor parte de las provincias del país. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE erosionó enormemente la confianza entre las partes y en buena medida provocó la interrupción de las conversaciones de paz con el Gobierno de Gloria Macapagal Arroyo. El NPA, cuyo principal objetivo es el acceso al poder y la transformación del sistema político y el modelo socioeconómico, tiene como referentes políticos al Partido Comunista de Filipinas y al National Democratic Front (NDF), que agrupa a varias organizaciones de inspiración comunista. El NDF mantiene negociaciones de paz con el Gobierno desde principios de los años noventa.

La violencia se incrementó significativamente respecto del año anterior a raíz de las sucesivas crisis que sufrieron las negociaciones de paz entre el Gobierno y el NDF, así como de la declaración de la ley marcial impuesta a finales de mayo (y posteriormente prorrogada) por el presidente, Rodrigo Duterte. A principios de diciembre, el Gobierno declaró que, tras la interrupción de las conversaciones de paz en el mes de febrero, 264 combatientes del NPA habían fallecido o sido arrestados, otros 573 se habían entregado voluntariamente y se habían incautado 622 armas. En la misma línea, a principios de noviembre las Fuerzas Armadas señalaron que entre el 1 de enero y el 6 de noviembre el NPA había cometido 353 crímenes solamente en Mindanao oriental y habría provocado daños por valor de 2,18 billones de pesos, un incremento sustancial respecto del año anterior, en el que la cifra rondó los 100 millones de pesos. Durante el mismo periodo, las acciones del NPA habrían provocado la muerte de 70 civiles y 64 militares, policías o CAFGU (Citizen Armed Force Geographical Unit). Además, 127 policías o militares habrían resultado heridos, mientras que 28 civiles habrían desaparecido. Estos datos contrastan claramente con los bajos niveles de violencia que se registraron en la segunda mitad de 2016, tras la reanudación de las negociaciones entre el nuevo Ejecutivo de Duterte y el NDF tras varios años de inactividad bajo la administración anterior de Benigno Aquino. En cuanto a las dinámicas del conflicto, la violencia se incrementó precisamente en aquellos momentos del año en los que las negociaciones atravesaron crisis. En el mes de febrero, por ejemplo, el número de incidentes armados se incrementó drásticamente respecto de los meses anteriores después de que, a principios de mes, el NPA y el Gobierno dieran por finalizado sus respectivos alto el fuego unilaterales –el NPA lo hizo matando a seis soldados y secuestrando a otros dos– y el presidente Duterte anunciara la retirada del Gobierno de las negociaciones y el inicio de una guerra total contra el NPA. A finales de febrero, por ejemplo, Manila declaró que 14 combatientes del NPA y siete soldados habrían muerto en varios enfrentamientos. Tras la finalización del acuerdo de alto el fuego, Duterte calificó de terroristas al NPA y ordenó el arresto de varios miembros del NDF que habían participado en las negociaciones, especialmente de aquellos que habían sido liberados temporalmente para ello. Por su parte, el ministro de Defensa comparó al NPA con Abu Sayyaf por recurrir a la extorsión, el secuestro y los atentados con explosivos. Además, el Gobierno acusó al NPA de haber utilizado el acuerdo de alto el fuego en vigor durante la segunda mitad del 2016 y principios del 2017 para incrementar el reclutamiento de nuevos efectivos hasta alcanzar nuevamente la cifra de unos 5.000 combatientes. Sin embargo, en un congreso celebrado a finales de marzo con motivo del 48º aniversario de la fundación del NPA, el grupo declaró contar con 70.000 miembros en todo el territorio nacional. En este mismo congreso, el Partido Comunista de Filipinas anunció haber renovado y rejuvenecido notablemente su comité

central. Por su parte, el NPA justificó su decisión de poner fin al alto el fuego a principios de febrero alegando la negativa del Gobierno a liberar a lo que considera prisioneros políticos y a ordenar el repliegue de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en bastiones tradicionales del grupo.

La tensión entre las partes y los niveles de violencia en el campo de batalla volvieron a incrementarse sustancialmente a finales de mayo, después de que, a raíz de los episodios de violencia en la ciudad de Marawi (Lanao del Sur), Duterte impusiera la ley marcial en Mindanao, región en la que últimamente se concentra la mayor parte de la actividad armada del NPA. Ello comportó que se cancelara la quinta ronda de negociaciones prevista para finales de mayo y principios de junio en Holanda después de que durante varias conversaciones informales en los meses de marzo y abril se hubiera retomado el diálogo y se hubiera acordado la reanudación de sendos alto el fuego unilaterales de manera temporal. A pesar de que el NPA ofreció infructuosamente su apoyo en la lucha contra los grupos armados que tomaron zonas de la ciudad de Marawi, la relación entre ambas partes siguió muy deteriorada durante la segunda mitad del año. El Partido Comunista de Filipinas ordenó al NPA un incremento de sus acciones militares y de sus campañas de reclutamiento. Por su parte, Duterte declaró en varias ocasiones que utilizaría los poderes extraordinarios al amparo de la ley marcial para combatir al NPA y utilizó la existencia de este grupo (junto a la de otros como Abu Sayyaf, el BIFF o el grupo Maute) para pedir al Parlamento la prolongación de la ley marcial. Además, anunció que, una vez finalizada la ofensiva militar en Marawi –que concentró la mayor parte de los esfuerzos militares del Gobierno en 2017– iniciaría una guerra total contra el NPA. A finales de noviembre, pocos días antes del inicio de la quinta ronda de negociaciones que debería haberse celebrado en Oslo, Duterte firmó una proclamación presidencial por la que oficialmente ponía fin a las negociaciones de paz con el NDF. Pocos días más tarde firmó otra proclamación presidencial por la que consideraba como organizaciones terroristas al NPA y al Partido Comunista de Filipinas. Cabe recordar que algunos meses antes el propio Duterte había pedido, infructuosamente, al Gobierno de EEUU que retirara a ambas organizaciones de su listado de grupos terroristas. Tras estas decisiones, los niveles de violencia volvieron a incrementarse en los meses de noviembre y diciembre. El NPA anunció una intensificación de sus operaciones en el norte de Mindanao y declaró que, solamente en la primera quincena del mes de noviembre habría llevado a cabo 27 acciones militares en las que 13 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado habrían fallecido y otros 12 habrían resultado heridos. Por su parte, el Gobierno anunció una intensificación de sus operaciones contra el NPA y declaró que en el mes de noviembre 119 combatientes del NPA habían sido neutralizados (69 se entregaron, 29 fueron arrestados y 21 murieron en combate) y que había sido tomado uno de los principales campamentos del grupo. El Ejecutivo

destacó la muerte de 14 combatientes del NPA en la región de Batangas a finales de noviembre y de otros 15 cerca de Manila en el mes de diciembre.

Filipinas (Mindanao)	
Inicio:	1991
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Abu Sayyaf, BIFF, Estado Islámico de Lanao/Dawlah Islamiyah/ Grupo Maute, Ansarul Khilafah Mindanao, facciones del MILF y el MNLF
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

La actual situación de violencia en Mindanao, en la que varios grupos armados se enfrentan al Gobierno y en ocasiones entre sí, está estrechamente vinculada al conflicto armado de larga duración entre Manila y el MNLF y posteriormente el MILF, organizaciones luchaban por la autodeterminación del pueblo moro. La falta de implementación del acuerdo de paz de 1996 con el MNLF hizo que algunas facciones del grupo no estén plenamente desmovilizadas y participen esporádicamente de episodios de violencia, mientras que las dificultades surgidas en el proceso de negociación del MILF con el Gobierno propiciaron la emergencia del BIFF, una facción del grupo opuesta a dicho proceso fundada en 2010 por el ex comandante del MILF Ameril Umbra Kato. Por otra parte, el grupo Abu Sayyaf lucha desde principios de los años noventa para establecer un Estado islámico independiente en el archipiélago de Sulu y las regiones occidentales de Mindanao (sur). Si bien inicialmente reclutó a miembros desafectos de otros grupos armados como el MILF o el MNLF, posteriormente se fue alejando ideológicamente de ambas organizaciones e incurriendo de forma cada vez más sistemática en la práctica del secuestro, la extorsión y los atentados con bomba, lo que le valió su inclusión en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la UE. Finalmente, cabe destacar que la irrupción de ISIS en la escena internacional provocó el surgimiento de numerosos grupos en Mindanao que juraron lealtad y obediencia al grupo. En 2016, ISIS reivindicó por vez primera un ataque de envergadura en Mindanao y anunció su intención de fortalecer su estructura e incrementar sus ataques en la región.

El conflicto armado en Mindanao vivió la escalada de violencia más grave de los últimos años, especialmente por los intensos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el denominado grupo Maute y otras organizaciones armadas en la Ciudad de Marawi (provincia de Lanao del Sur) durante cinco meses, que provocaron la muerte de más de 1.100 personas y el desplazamiento forzoso de más de 600.000 personas. Además de este episodio de violencia en Lanao del Sur, en otras partes de Mindanao siguieron registrándose enfrentamientos entre el Ejército y varios grupos, como Bangasmoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) –especialmente en la provincia de Maguindanao y Cotobato Norte–, Abu Sayyaf –especialmente en el archipiélago de Sulu– o Ansar Al Khilafah –sobre todo en la provincia de Sarangani–, así como enfrentamientos

entre algunos de estos grupos y efectivos del MILF – grupo en pleno proceso de paz con el Gobierno–, o casos esporádicos de enfrentamientos clánicos o familiares (conocidos localmente como rido) entre miembros de algunas de estas organizaciones armadas. A raíz de la situación de violencia en el sur del país, poco después del inicio de los enfrentamientos en la ciudad de Marawi en mayo, el presidente, Rodrigo Duterte, impuso la ley marcial en Mindanao, medida que fue prorrogada por el legislativo en varias ocasiones y que fue criticada por determinadas fuerzas políticas y por organizaciones de derechos humanos. En cuanto al sitio de la ciudad de Marawi, los enfrentamientos se iniciaron a finales de mayo tras un operativo militar y policial fallido para detener a Isnilon Hapilon, líder histórico de Abu Sayyaf que según muchos medios se había erigido en los últimos tiempos en el máximo exponente de Estado Islámico (ISIS) en la región. Como respuesta a dicho operativo, alrededor de 100 combatientes (principalmente del grupo Maute y de Abu Sayyaf) tomaron algunas partes de la ciudad, destruyeron edificios, tomaron decenas de rehenes y liberaron prisioneros, en un modus operandi parecido al que se utilizó en la toma de la localidad de Butig en 2016 por parte del grupo Maute. Durante los primeros días de enfrentamientos, que incluyeron numerosos bombardeos aéreos por parte de las Fuerzas Armadas, unas 130 personas murieron y más de 170.000 se vieron obligadas a huir. En los siguientes meses, trascendió que hasta 40 combatientes foráneos (de países como Indonesia, Malasia, Singapur, Arabia Saudita o Yemen) estaban tomando parte en los enfrentamientos y que algunos de ellos jugaron un papel decisivo en la presunta canalización de medios desde ISIS, que reivindicó las acciones armadas en Marawi y facilitó el reclutamiento de combatientes a través de varios llamamientos a luchar en Mindanao. En este sentido, cabe destacar que el Gobierno y el propio presidente reconocieron los sólidos vínculos entre ISIS y el grupo Maute y otras organizaciones armadas presentes en Marawi, pero también declaró que parte de sus fondos procedían del narcotráfico. Al terminar la ofensiva militar en Marawi a finales de octubre, habían muerto una cincuentena de civiles, más de 160 militares y alrededor de un millar de combatientes, incluyendo a Isnilon Hapilon, a Omar y Abdullah Maute –líderes y fundadores del grupo–, así como varios de sus otros hermanos y Mahmud Ahmad, combatiente de origen malasio que según la inteligencia filipina había jugado un papel importante en las relaciones entre ISIS y varios de los grupos que operan en Mindanao. Respecto de la muerte de Isnilon Hapilon, la Policía especuló con la posibilidad de que el malasio Mohammad Mon Baco hubiera sido designado su sucesor, pero las Fuerzas Armadas declararon que éste había muerto en combate. Poco después, el Gobierno señaló que Esmael Abdulamlik, alias Abu Toraiife, líder destacado del BIFF, podría haber asumido las funciones que hasta entonces ejercía Hapilon. En noviembre Amnistía Internacional acusó a ambas partes de haber perpetrado numerosas violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra durante los enfrentamientos en Marawi.

Cabe destacar que antes del inicio de los enfrentamientos en el mes de mayo ya se habían detectado algunos indicios sobre el incremento de la presencia de grupos armados en Lanao del Sur. En enero algunos informes de inteligencia señalaron que Isnilon Hapilon se había trasladado desde su bastión tradicional de Sulu a la provincia de Lanao del Sur para coordinar y fortalecer la presencia de ISIS en la zona. En este mismo mes se produjeron varios enfrentamientos en Lanao en los que 15 personas murieron y el propio Isnilon Hapilon resultó herido. En fechas parecidas, en una operación en la provincia de Sarangani contra el grupo Ansar Al-Khilafah –grupo que juró lealtad a ISIS y que según varias fuentes tendría sólidas alianzas con el grupo Maute– murió su líder y fundador, Mohammad Jafaar Maguid, alias Tokboy. Según el Gobierno, su muerte era relevante por cuanto seguramente supondría el desmembramiento de Ansar Al-Khilafah –también conocido como Ansar al-Khalifa, Ansarul Khilafa o Ansar Khilafa– y por sus estrechos contactos que mantendría con combatientes de ISIS en Siria. En este sentido, el propio Gobierno había anunciado que estimaban en 50 el número de células de ISIS en Mindanao y había advertido sobre la posibilidad de que miembros de ISIS que hasta ahora estaban combatiendo en Siria e Iraq se trasladaran a Mindanao. De hecho, durante los combates en la ciudad de Marawi, algunos informes de inteligencia militar señalaron que el modus operandi de los grupos armados en Marawi era parecido al de la insurgencia en Iraq. Finalmente, cabe señalar que en abril, poco antes del inicio de los combates en Marawi el Gobierno informó sobre la muerte de 36 combatientes del grupo Maute y de Yemaah Islamiyah durante unos enfrentamientos en Lanao del Sur que habrían terminado con la toma de uno de los principales campamentos del grupo.

En cuanto al conflicto armado en otras regiones de Mindanao, cabe destacar especialmente el incremento de la actividad del BIFF en las regiones occidentales de Mindanao. **Según datos oficiales recogidos por la prensa, como mínimo un centenar de personas habrían muerto en episodios de violencia en los que participó el BIFF.** Algunos de estos episodios más destacados fueron la muerte de 21 combatientes a mediados de marzo en Maguindanao; la muerte de otros 31 miembros del BIFF en la misma provincia (en la localidad de Datu Salibo) a principios de mayo; el atentado contra un helicóptero que transportaba al gobernador de Maguindanao a finales de julio; los enfrentamientos entre el BIFF y el MILF en Maguindanao a finales de agosto, que finalizaron con la muerte de 25 combatientes (cinco de ellos del MILF); o la ofensiva de las Fuerzas Armadas contra dos facciones distintas del BIFF a finales de diciembre en las provincias de Maguindanao y Cotabato Norte, provocando la muerte de más de 20 combatientes.

En cuanto a Abu Sayyaf, prosiguió su actividad armada principalmente en su bastión tradicional del archipiélago de Sulu y, como en los últimos años, siguió incurriendo en prácticas como el secuestro. Algunos de los momentos en los que el grupo captó

mayor atención política y mediática coincidieron con el ataque del grupo contra un barco vietnamita y la decapitación de un rehén en febrero; la incursión de Abu Sayyaf en la isla turística de Bohol en abril, con la presunta intención de llevar a cabo secuestros y atentar contra una reunión de ASEAN, y que provocó varios enfrentamientos en los que murieron una decena de personas; el operativo de las Fuerzas Armadas para rescatar a rehenes vietnamitas a principios de abril, y en el que unos 10 miembros de Abu Sayyaf murieron y más de 30 soldados resultaron heridos; o la muerte de unos 20 combatientes del grupo en Basilan a principios de mayo, poco antes del inicio de los enfrentamientos en Marawi. En la segunda mitad del año siguieron produciéndose enfrentamientos regulares en los que un número indeterminado de personas perdieron la vida, pero éstos se vieron eclipsados por los episodios de violencia en Marawi. Finalmente, cabe señalar que algunos medios se hicieron eco de una presunta división interna en el grupo a raíz de la decisión de Isnilon Hapilon de jurar lealtad a ISIS, erosionando así sus vínculos históricos con al-Qaeda, así como de erigirse en el máximo responsable de ISIS en Mindanao y desplazar el núcleo principal de sus actividades a Lanao del Sur.

Myanmar	
Inicio:	1948
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, grupos armados (KNU/KNLA, SSA-S, SSA-N KNPP, UWSA, CNF, ALP, DKBA, KNPLAC, SSNPLO, KIO, ABSDF, AA, TNLA, HaY, MNDAA)
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Desde 1948 decenas de grupos armados insurgentes de origen étnico se han enfrentado al Gobierno de Myanmar reclamando un reconocimiento a sus particularidades étnicas y culturales y demandando reformas en la estructuración territorial del Estado o la independencia. Desde el inicio de la dictadura militar en 1962 las Fuerzas Armadas han combatido a grupos armados en los estados étnicos, combinándose las demandas de autodeterminación de las minorías, con las peticiones de democratización compartidas con la oposición política. En 1988 el Gobierno inició un proceso de acuerdos de alto el fuego con parte de los grupos insurgentes, permitiéndoles proseguir con su actividad económica (tráfico de drogas y piedras preciosas básicamente). No obstante, las operaciones militares han sido constantes en estas décadas, y han estado especialmente dirigidas contra la población civil, con el objetivo de acabar con las bases de los grupos armados, provocando el desplazamiento de centenares de miles de personas. En 2011 el Gobierno inició acercamientos a la insurgencia y desde entonces se han logrado acuerdos de alto el fuego con la práctica totalidad de los grupos armados.

La situación en Myanmar se deterioró gravemente con una escalada en la violencia sin precedentes en los últimos años. El principal foco de conflicto se situó en el estado de Rakhine, donde la violencia se incrementó a lo largo de todo el año, pero especialmente a partir del mes de agosto, cuando tras varios ataques del grupo armado de oposición rohingya ARSA (anteriormente conocido como HaY),⁴⁰ se inició una operación militar a gran escala que generó una gravísima crisis humanitaria y de derechos humanos.

El año se iniciaba con el desplazamiento forzado de más de 20.000 personas rohingya hacia Bangladesh como consecuencia de las operaciones militares iniciadas en 2016.⁴¹ La propia relatora especial de la ONU para Myanmar, Yanghee Lee, denunciaba en el mes de febrero los graves abusos y violaciones a los derechos humanos padecidos en Myanmar por los grupos de personas refugiadas rohingyas desplazadas a Bangladesh desde octubre de 2016, incluyendo ejecuciones sumarias, violencia sexual, incendio de viviendas con personas en el interior, entre otros graves hechos. En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó enviar una misión internacional de investigación a Myanmar, centrada en las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en Rakhine. En junio y julio la situación se tensó en el estado con enfrentamientos comunitarios entre grupos de población budista y rohingya. Sin embargo, los episodios de violencia más graves se vivieron a partir del mes de agosto cuando ARSA atacó en una misma mañana al menos 30 puestos policiales y en respuesta a los ataques llevados a cabo por centenares de insurgentes se desencadenó una operación militar a gran escala. La organización Médicos sin Fronteras denunció que **al menos 6.700 rohingyas murieron como consecuencia de la violencia, incluyendo numerosos menores –más de 700 menores de cinco años–, en el primer mes después del inicio de la operación militar, y más de 660.000 personas se desplazaron entre agosto y diciembre refugiándose en Bangladesh.** Al finalizar el año el CICR advertía sobre las condiciones de vida de la población rohingya que ha quedado en el estado Rakhine, en el que únicamente permanecían 180.000 rohingyas en medio de graves tensiones comunitarias. A mediados de septiembre ARSA decretó un alto el fuego unilateral de un mes, pero la operación militar siguió activa hasta finales de octubre, cuando después de que EEUU y la UE anunciaran posibles sanciones contra el país, las Fuerzas Armadas iniciaron una retirada parcial de efectivos militares desplegados en Rakhine. La crisis humanitaria se agravó por el bloqueo gubernamental a la ayuda de la ONU y de ONG, impidiendo el acceso humanitario a la población, aunque a finales de octubre las autoridades birmanas habrían accedido a reanudar el reparto de ayuda alimentaria por parte de la ONU.

40. Denominación utilizada en Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2017! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Icaria, 2017.

41. Véase el resumen sobre Myanmar en el capítulo 1 (Conflictos armados) de Escola de Cultura de Pau, *Alerta 2017! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Icaria, 2017.

Amnistía Internacional acusó a las fuerzas de seguridad de crímenes contra la humanidad denunciando que centenares de miles de personas rohingya se convirtieron en víctimas de una persecución sistemática, forzando su desplazamiento en condiciones de extrema precariedad en Bangladesh. Amnistía señaló que algunos de los sucesos más graves tuvieron lugar en la población de Tula Toli, escenario de una masacre documentada por medios de comunicación como The Guardian. La ONG denunció que las Fuerzas Armadas actuaron contra el conjunto de la población civil con una actitud de venganza por las acciones del grupo armado. Naciones Unidas también denunció que medio millón de personas se habían desplazado después de que las fuerzas de seguridad quemaran casas, campos de cultivo y aldeas enteras. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres exhortó a las autoridades birmanas a detener las operaciones militares y **el Alto Comisionado para los Derechos Humanos señaló que no podía descartarse que en el futuro un tribunal calificara de genocidio los actos cometidos contra la población rohingya, y que se trataba de ataques perfectamente diseñados y planificados**, al tiempo que exigía una mayor contundencia de la líder birmana Aung San Suu Kyi para detener la acción militar. En noviembre, el Consejo de Seguridad emitió una declaración presidencial, al no lograr el consenso de Rusia y China para la aprobación de una resolución, en la que se condenaban los ataques del ARSA contra las fuerzas de seguridad birmanas y la violencia sistemática y generalizada de éstas contra la población rohingya en las posteriores operaciones militares. El texto instaba al Gobierno a no hacer un uso excesivo de la fuerza y a investigar todas las violaciones de derechos humanos incluyendo la violencia sexual. No obstante, el papel de la ONU en la gestión de la crisis también fue cuestionado, lo que llevó a que se nombrara a un nuevo coordinador residente para el país en sustitución de Renata Lok-Dessallien, acusada de haber retirado un informe encargado por la organización internacional a un consultor independiente en el que se alertaba de los riesgos de deterioro del conflicto y advertía a la ONU de que debía endurecer sus denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos en el estado Rakhine. El informe advertía que las fuerzas de seguridad de Myanmar actuarían previsiblemente de forma indiscriminada y con extrema dureza, tal y como sucedió meses después. El Gobierno birmano rechazó en la ONU las acusaciones de genocidio y limpieza étnica. Internacionalmente, se intensificaron las críticas contra la Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, por su inacción ante las violaciones de los derechos humanos de la población rohingya, que no visitó la zona norte del estado de Rakhine, la más afectada por el conflicto, hasta noviembre.

En lo que respecta a los enfrentamientos armados con otras organizaciones insurgentes, estos se produjeron

La operación militar contra la población rohingya en Myanmar originó una escalada de la violencia sin precedentes y una gravísima crisis de derechos humanos con acusaciones de crímenes contra la humanidad y genocidio

en diferentes momentos del año. En febrero, las Fuerzas Armadas señalaron que más de 100 soldados habían muerto en los enfrentamientos que se produjeron en los meses de noviembre y diciembre de 2016 en el estado Shan con los grupos armados agrupados bajo el paraguas de la Northern Alliance (MNDAA, AA, TNLA y KIA). En marzo se reanudaron estos enfrentamientos, forzando a miles de personas a huir de sus hogares, desplazándose a campos en la frontera con China y a la ciudad de Mandalay. Los enfrentamientos se concentraron en la ciudad de Laukkai, capital administrativa de la región Kokang en el estado Shan y muy próxima a la frontera con China. Los grupos armados señalaron que los enfrentamientos se habían reanudado en el mes de marzo ante la negativa del Gobierno a que estas insurgencias participaran en el proceso de paz y como respuesta a las ofensivas militares en los territorios controlados por el MNDAA y el TNLA. También se produjeron enfrentamientos en el estado Kachin entre las Fuerzas Armadas y el KIA en varios momentos del año.

Tailandia (sur)	
Inicio:	2004
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, grupos armados de oposición secesionistas
Intensidad:	1
Evolución:	↓

Síntesis:

El conflicto en el sur de Tailandia se remonta a principios del siglo XX, cuando el entonces Reino de Siam y la potencia colonial británica en la península de Malasia decidieron partir el Sultanato de Patani, quedando algunos territorios bajo soberanía de la actual Malasia y otros (las provincias meridionales de Songkhla, Yala, Patani y Narathiwat) bajo soberanía tailandesa. Durante todo el siglo XX ha habido grupos que han luchado para resistir las políticas de homogeneización política, cultural y religiosa impulsadas por Bangkok o bien para exigir la independencia de dichas provincias, de mayoría malayo-musulmana. El conflicto alcanzó su momento álgido en los años sesenta y setenta y remitió en las siguientes décadas gracias a la democratización del país. Sin embargo, la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 implicó un drástico giro en la política contrainsurgente y antecedió el estallido del conflicto armado que vive la región desde 2004. La población civil, tanto budista como musulmana, es la principal víctima de la violencia, normalmente no reivindicada por ningún grupo.

Los niveles de violencia en el sur de Tailandia no solamente se redujeron sustancialmente respecto del año 2016, sino que alcanzaron sus mínimos históricos desde el 2004, año en que se considera que se reanudó el conflicto armado. Desde entonces, unas 7.000

personas han muerto (entre ellas 87 menores) y otras 13.000 han resultado heridas (incluyendo a 553 menores). Según el centro de investigación Deep South Watch, en 2017 murieron 235 personas y otras 356 resultaron heridas en 545 episodios de violencia, cifras éstas muy inferiores a las del año 2007 –en el que 892 personas murieron y otras 1.681 resultaron heridas–, e incluso a las del año 2016, en el que 309 personas murieron. La media anual de víctimas mortales desde el año 2004 es de 455. Cabe destacar también que los niveles de violencia durante la primera mitad del año fueron sensiblemente inferiores a los de la segunda, puesto que hasta finales de junio habían muerto 50 personas y 138 habían resultado heridas. Ello arroja una media mensual de 8,3 víctimas mortales y 23 personas heridas, una reducción muy significativa respecto de la media mensual del año 2016: 12,8 y 35,2. Según Deep South Watch, la reducción de los niveles de violencia observados en 2017 está en sintonía con la disminución general de los umbrales de violencia que se observa en el sur del país desde que la entonces primera ministra Yingluck Shinawatra iniciara conversaciones de paz en 2013, que posteriormente fueron reanudadas en 2015 por la junta militar que depuso a Shinawatra. Algunos autores sostienen que las principales causas que explican la reducción sostenida de la violencia en los últimos años son el incremento de las medidas de seguridad por parte del Estado y la mayor presencia de informantes sobre el terreno; el hecho de que haya un proceso de negociación activo en el que el principal tema de la agenda sustantiva sea el establecimiento de las denominadas zonas de seguridad o acuerdos de alto el fuego limitados; la exigencia del Gobierno a Mara Patani de que demuestre su control sobre los niveles de violencia o su ascendencia sobre los grupos armados que la perpetran; la voluntad por parte de los grupos armados insurgentes de ser más selectivos en la elección de sus objetivos; o el cambio en la estrategia militar del principal grupo armado de la región, el BRN, tras la muerte en el exilio en enero de uno de sus líderes históricos –Sapaesing Basor, a cuyo funeral asistieron miles de personas–, que se produjo pocos meses más tarde que la muerte de otro líder histórico –Masae Using–, lo que comportó que el antiguo comandante militar del grupo, Abdullah Wan Mat Noor (o Doonloh Wae-mano) asumiera la máxima responsabilidad dentro del BRN.

A pesar de la clara reducción en los niveles de violencia, la Junta militar expresó en varias ocasiones su preocupación por la situación de inestabilidad en el sur del país, como así lo demuestra el incremento del presupuesto militar de 2018 respecto al de 2017 en más de un 5% o el hecho de extendiera nuevamente la vigencia del decreto de emergencia que rige en las provincia de Yala, Patani y Narathiwat desde el año 2005 (se ha prorrogado en 45 ocasiones), propiciando las críticas de numerosas organizaciones de derechos humanos. Así, durante el año se produjeron varios incidentes armados que denotaron la capacidad militar de los grupos insurgentes en el sur del país. Cabe destacar especialmente la serie de ataques acaecidos en febrero, poco después de que

el Gobierno y Mara Patani acordaran su intención de establecer cinco zonas de seguridad; los más de 20 ataques coordinados con ataques explosivos los días 6 y 7 de abril o los 13 ataques simultáneos pocos días más tarde (el 19 de abril) en las provincias sureñas de mayoría musulmana; así como el atentado contra un centro comercial en Pattani en mayo en el que 80 personas (casi todas civiles) resultaron heridas. Por último, cabe destacar que, a raíz del descubrimiento de una fábrica de armamento del BRN por parte de la Policía de Malasia en enero y de la aparente consolidación de Estado Islámico en el Sudeste Asiático (especialmente en Mindanao) algunos medios de comunicación advirtieron sobre una mayor asertividad hacia el conflicto en el sur de Tailandia por parte del Gobierno de Malasia, que históricamente había sido acusado de connivencia hacia los grupos armados tailandeses.

1.3.4. Europa

Europa Oriental

Ucrania (este)	
Inicio:	2014
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, actores armados en provincias del este, Rusia
Intensidad:	2
Evolución:	=

Síntesis:

Ucrania, considerado un país en transición desde su independencia tras la caída de la Unión Soviética en 1991 y territorio de gran importancia geoestratégica, afronta un conflicto armado en zonas del este del país y es escenario de la crisis más grave entre Occidente y Rusia desde la Guerra Fría. Precedido por un cúmulo de focos de tensión en el conjunto del país entre finales de 2013 y 2014 (protestas masivas pro-europeas y antigubernamentales; caída del presidente Víctor Yanukóvich y su régimen; anexión de Crimea por Rusia; protestas anti-Maidán y emergencia de actores armados en el este), la situación en el este de Ucrania derivó en conflicto armado en el segundo trimestre de 2014, enfrentando a milicias separatistas pro-rusas en las regiones de Donetsk y Lugansk, apoyadas por Rusia, y a las Fuerzas Armadas estatales bajo las nuevas autoridades pro-europeas. Las áreas de Donetsk y Lugansk bajo control de las fuerzas rebeldes se declararon repúblicas independientes. A cuestiones como el estatus de esas provincias se añade de fondo la dimensión geoestratégica internacional (rivalidad política, económica y militar entre Occidente y Rusia en el este de Europa; demostración de fuerza de Rusia ante su propia opinión pública; entre otros elementos). La guerra ha tenido un grave impacto en la población civil, especialmente en términos de desplazamiento forzado. La guerra transcurre en paralelo a un proceso de paz con negociaciones en diversos niveles y formatos.

El conflicto armado en el este Ucrania se mantuvo en niveles de violencia similares a los de 2016, mientras el proceso de resolución del conflicto continuó estancado. La guerra causó en torno a 600 víctimas

mortales, incluyendo fuerzas de seguridad ucranianas, combatientes de Donetsk y Lugansk y civiles. La cifra de civiles fallecidos se acercó al centenar (98, según el balance de ACNUDH de hasta mediados de noviembre), similar a 2017 (92 civiles fallecidos). Además, en torno a 2.000 personas resultaron heridas –450 de ellas civiles. Además, 239.075 personas de origen ucraniano continuaban en situación de refugio o similar al refugio, y 1,8 millones seguían desplazadas en Ucrania, según el último balance de ACNUR, referente a 2016. **La situación de seguridad fue inestable y volátil, con recurrentes violaciones del alto el fuego** de Minsk y de los altos el fuego adicionales que se pactaron durante el año en abril, junio, agosto y finales de diciembre, tras una fuerte escalada ese mes. La misión de observación de la OSCE registró cerca de 400.000 violaciones del alto el fuego y cerca de 4.000 casos de armamento prohibido por los acuerdos de Minsk. Entre las principales causas de víctimas civiles por el conflicto en 2017, cabe mencionar, por una parte, la proliferación de minas, restos explosivos, armas trampa y artefactos explosivos improvisados y, por otra parte, los bombardeos.⁴² Además, la ONU documentó uso de la violencia sexual en el marco del conflicto, la mayoría de casos en contexto de privación de libertad por las fuerzas gubernamentales o los grupos armados, principalmente perpetrada entre 2014 y 2015, si bien ACNUDH siguió recibiendo testimonios que señalaban la continuación de violencia sexual en la línea de contacto y en Crimea.⁴³ Durante el año, la violencia más intensa se concentró en torno a Avdiivka, Yasynuvata y el aeropuerto de Donetsk; así como el sur y sureste de Svitlodarsk (Donetsk); este de Mariúpol (Donetsk); oeste, suroeste y norte de Horlivka (Donetsk); y áreas junto a Popasna y Pervomaisk, en Lugansk. A finales de año la OSCE advirtió de que los actores armados seguían desplegados muy cerca unos de otros.

La ONU expresó preocupación por el impacto de las hostilidades sobre la población y las periódicas escaladas de violencia junto a infraestructura de suministros de agua, electricidad y gas, con impactos humanitarios y riesgos medioambientales. A lo largo de 2017 se registraron 135 incidentes en que quedaron dañadas instalaciones de saneamiento y tuberías de agua, según UNICEF. Por otra parte, se incrementó la tensión política y social relacionada con el conflicto en diversos momentos. El Gobierno formalizó en marzo el bloqueo de las líneas ferroviarias que conectan con Donetsk y Lugansk, impuesto desde enero por sectores nacionalistas ucranianos y tras el cual las autoridades de Donetsk y Lugansk impusieron la nacionalización de empresas ucranianas en las áreas bajo su control. Por otra parte, en Lugansk, dimitió en noviembre el líder de la región, Igor Plótnitski, tras una escalada de lucha interna de poder, que implicó despliegue de hombres armados en la ciudad, bloqueo de edificios

administrativos y despliegue de vehículos militares. No obstante, el Gobierno ruso afirmó que la situación era de continuidad. Durante el año la ONU siguió documentando violaciones de derechos humanos a ambos lados de la línea de contacto, así como en Crimea. Pese al estancamiento en el proceso de paz se produjeron algunos avances, como el intercambio a final de año de 300 presos de Ucrania, Donetsk y Lugansk, el mayor hasta la fecha.

Rusia y Cáucaso

Rusia (Daguestán)	
Inicio:	2010
Tipología:	Sistema Interno
Actores:	Gobierno federal ruso, Gobierno de la república de Daguestán, grupos armados de oposición (Emirato Caucásico e ISIS)
Intensidad:	1
Evolución:	Fin

Síntesis:

Daguestán, la república más extensa, poblada y con mayor diversidad étnica del norte del Cáucaso, afronta desde finales de los años noventa un incremento de la conflictividad. La insurgencia armada de corte islamista salafista, que defiende la creación de un Estado islámico en el norte del Cáucaso, se enfrenta a las autoridades locales y federales, en un contexto de atentados periódicos y operaciones de contrainsurgencia. La oposición armada se ha articulado en torno a diversas estructuras, como la red de unidades armadas y de carácter islamista conocida como Sharia Jammát, y posteriormente a través de Vilayat Daguestán, ambas integradas en la insurgencia del norte del Cáucaso (Emirato Caucásico). A partir de finales de 2014 diversos comandantes de Daguestán y el norte del Cáucaso proclamaron su lealtad a ISIS, escindiéndose de Emirato Caucásico y estableciendo una rama caucásica vinculada a ISIS (Vilayat Kavkaz). Además, una parte de la insurgencia se ha desplazado a Siria e Iraq, uniéndose a diversos grupos armados. La violencia armada en Daguestán es resultado de un cúmulo de factores, incluyendo la regionalización de la insurgencia islamista procedente de Chechenia así como el clima local en Daguestán de violaciones de derechos humanos, a menudo enmarcadas en la “lucha contra el terrorismo”. Todo ello en un contexto social y político frágil, de malestar social por los abusos de poder y la corrupción y los elevados índices de desempleo y pobreza, pese a la riqueza de recursos naturales. A ello se añaden tensiones interétnicas, rivalidades por el poder político y violencia de corte criminal.

Se redujo de manera significativa la violencia en la república de Daguestán, alcanzando niveles inferiores a los de conflicto armado, siguiendo la tendencia de reducción de los últimos años. Durante el año, medio centenar de personas murieron y en torno a una decena

42. OHCHR, *Report on the human rights situation in Ukraine. 16 May to 15 August 2017*, OHCHR, 12 de septiembre de 2017; y OHCHR, *Report on the human rights situation in Ukraine. 16 August to 15 November 2017*, OHCHR, 12 de diciembre de 2017.

43. OHCHR, *Conflict Related Sexual Violence in Ukraine, March 2014 to 31 January 2017*, OHCHR, 16 de febrero. Véase el capítulo 4 (Género, paz y seguridad)

resultaron heridas en incidentes vinculados al conflicto entre las fuerzas de seguridad y la insurgencia islamista, según el balance del Caucasian Knot. El balance acentúa la reducción de víctimas de años anteriores (136 víctimas mortales en 2016, 111 en 2015, 188 en 2014, 341 en 2013, 405 en 2012, 423 en 2011). Aun así, se mantuvieron las llamadas de alerta sobre el riesgo de futuros incrementos de violencia asociados al retorno de insurgentes originarios del norte del Cáucaso que han combatido en Siria e Iraq. Según el Ministerio de Interior daguestaní, en torno a 1.200 personas de Daguestán combatían en las filas de ISIS, de un total de en torno a 4.000 combatientes de Rusia, incluyendo sectores de la diáspora. Durante el año se produjeron diversos incidentes de seguridad, incluyendo tiroteos en puestos de control y enfrentamientos en el marco de operaciones antiterroristas. Como en años anteriores, se produjeron violaciones de derechos humanos, incluyendo desapariciones de diversos ciudadanos y de familiares de personas acusadas de ser combatientes. Además, las autoridades mantuvieron la práctica de llevar a cabo redadas y detenciones masivas de creyentes salafistas, durante el rezo o a la salida de mezquitas en diversos distritos, liberados posteriormente. Entre estos hechos, las autoridades arrestaron a 30 fieles en una mezquita en la capital a principios de junio y días después arrestaron a otras 90 personas en redadas en mezquitas y cafeterías. En agosto, una quincena de personas fueron arrestadas en una mezquita y liberadas. A finales de ese mes, otros 17 creyentes fueron detenidos tras el rezo y posteriormente liberados. 25 fieles de varias mezquitas de la capital y del distrito de Jasaviurt fueron trasladados a una comisaría a principios de noviembre. También se produjeron detenciones de personas acusadas de ser miembros de ISIS. A su vez, algunos de los incidentes de violencia durante el año fueron reivindicados por ISIS, como un ataque en agosto, en que murió un policía. En el plano político, el gobernador de Daguestán, Ramazan Abdulatipov, dimitió de su cargo, y fue sustituido por Vladimir Vasiliyev, designado por el presidente ruso en octubre.

Sudeste de Europa

Turquía (sudeste)	
Inicio:	1984
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, PKK, TAK, ISIS
Intensidad:	2
Evolución:	↓

Síntesis:

El PKK, creado en 1978 como un partido político de corte marxista-leninista y dirigido por Abdullah Öcalan, anunció en 1984 una ofensiva armada contra el Gobierno, embarcándose en una campaña de insurgencia militar para

reclamar la independencia del Kurdistán, fuertemente respondida por el Gobierno en defensa de la integridad territorial. La guerra que se desencadenó entre el PKK y el Gobierno afectó de manera especial a la población civil kurda del sudeste de Turquía, atrapada en fuego cruzado y víctima de las persecuciones y campañas de evacuaciones forzadas ejercidas por el Gobierno. El conflicto dio un giro en 1999, con la detención de Öcalan y el posterior anuncio del PKK del abandono de la lucha armada y la transformación de sus objetivos, dejando atrás la demanda de independencia para centrarse en la reivindicación del reconocimiento a la identidad kurda dentro de Turquía. Desde entonces, el conflicto ha transcurrido entre fases de alto el fuego –principalmente entre 2000 y 2004– y de violencia, coexistiendo con medidas de democratización e intentos de diálogo (Iniciativa de Democratización en 2008, Diálogo de Oslo 2009-2011 y proceso de Imrali 2013-2015). En 2015 se reinició la guerra, que desde los años 80 ha causado unas 40.000 víctimas mortales. La guerra en Siria puso de nuevo en evidencia la dimensión regional de la cuestión kurda en Turquía y el carácter transfronterizo del PKK, cuya rama siria pasó a controlar áreas de mayoría kurda en ese país.

Se redujo significativamente la mortalidad asociada al conflicto entre Turquía y el PKK, tras un 2016 de grave violencia urbana y rural. No obstante, se mantuvieron elevados niveles de militarización y tensión social y política, bajo el paraguas del estado de emergencia, renovado en abril y octubre, y la polarización asociada al referéndum constitucional.⁴⁴ El balance de fallecidos fue de unos 800 (1.900 en 2016), según International Crisis Group, de los cuales el 66% eran combatientes del PKK, 21% fuerzas de seguridad y 13% civiles (45%, 34% y 14%, respectivamente, junto a un 7% de afiliación desconocida en 2016). Además, 57.925 personas con nacionalidad turca estaban en situación de refugio o similar, y 23.228 esperan respuesta a su petición de asilo, según el último balance de ACNUR, referente a 2016. El Gobierno intensificó las operaciones militares en el invierno de 2016-2017 en áreas del sudeste, y en marzo lanzó una macrooperación militar en la provincia de Diyarbakir, con el despliegue de 7.000 efectivos, mientras continuó la declaración de zonas de seguridad especial. El PKK redujo los ataques en el periodo previo al referéndum de abril, mientras los reanudó en meses posteriores, incluyendo contra civiles, como varios cargos locales del partido oficialista AKP. El liderazgo del PKK anunció en junio que se habían incrementado las acciones de la guerrilla, y en septiembre que había tomado prisioneros a dos cargos de alto rango de los servicios de inteligencia turcos (MIT) en el norte de Iraq, junto a otros funcionarios del MIT. Entre otros hechos de violencia, un ataque del PKK con bomba contra un autobús policial en Mersin en octubre causó 18 heridos. También el grupo armado kurdo TAK amenazó con ataques contra lugares turísticos.

Turquía intensificó su lucha contra el PKK dentro de Turquía y en los países vecinos. Como parte de ello,

44. Véase el resumen sobre Turquía en el capítulo 2 (Tensiones).

el Ejército bombardeó por primera vez posiciones del PKK en Sinjar (norte de Iraq), causando también bajas de peshmergas kurdoiraquíes. Turquía incrementó en agosto su presencia militar en la frontera con la región kurda de Afrin (Siria) –bajo control de las YPG/YPJ, vinculadas al PKK–, y acordó con Irán ese mismo mes reforzar el control de su frontera mutua, con la construcción de una barrera. En octubre lanzó una operación militar terrestre contra el PKK en el norte de Iraq, la primera desde 2008. Ese mes, el Gobierno advirtió contra las posibilidades de un corredor en Siria que conecte Afrin con otras zonas sirias bajo control kurdo, amenazando con adoptar las medidas necesarias para impedirlo. Las amenazas se produjeron en un contexto de escalada de la tensión entre Turquía y EEUU, por el apoyo militar estadounidense a las YPG. En los últimos meses del año, Turquía también anunció que las operaciones de gran escala contra el PKK continuarían en invierno, llegando a afirmar en diciembre que el final del PKK estaba muy cerca. Durante el año continuaron las detenciones de políticos, periodistas y activistas del movimiento kurdo, con cientos de personas en prisión. El Estado mantuvo la intervención directa de 94 de 102 municipalidades kurdas del BDP.

Turquía intensificó su lucha contra el PKK dentro de Turquía y en la región, si bien el balance de víctimas mortales asociado al conflicto disminuyó de forma significativa respecto a 2016

1.3.5. Oriente Medio

Golfo

Yemen (al-houthistas)	
Inicio:	2004
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi, seguidores del clérigo al-Houthi (al-Shabab al-Mumen/Ansar Allah), fuerzas leales al ex presidente Alí Abdullah Saleh, milicias tribales vinculadas al clan al-Ahmar, milicias salafistas, sectores armados vinculados al partido islamista Islah, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, Irán
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

El conflicto armado se inició en 2004 cuando los partidarios del clérigo al-Houthi, pertenecientes a la minoría shíi, iniciaron una rebelión en el norte del Yemen. El discurso oficial ha acusado a los insurgentes de pretender la reinstauración de un régimen teocrático como el que imperó durante mil años en la zona, hasta el triunfo de la revolución republicana de 1962. Los al-houthistas lo niegan y han acusado a las autoridades yemeníes de corrupción y de desatender a las regiones montañosas septentrionales y se han opuesto a la alianza de Sanaa con EEUU en la denominada lucha contra el terrorismo. El conflicto se ha cobrado miles de víctimas

mortales y ha provocado también masivos desplazamientos forzados de población. Los diversos intentos por buscar una salida negociada a la crisis han fracasado y las treguas suscritas en los últimos años se han roto sucesivamente. En el marco de la rebelión que puso fin al Gobierno de Alí Abdullah Saleh en 2011, los al-houthistas aprovecharon para ampliar las zonas bajo su control más allá de su feudo tradicional en la provincia de Saada y se vieron crecientemente involucrados en choques con milicias salafistas, sectores afines al partido islamista Islah y milicias tribales. El avance de los al-houthistas hacia el centro y sur del país agudizó la crisis institucional y forzó la caída del gobierno, propiciando una intervención militar internacional liderada por Arabia Saudita en marzo de 2015. En un contexto de internacionalización, el conflicto ha ido adquiriendo tintes sectarios y una dimensión regional.

La situación en Yemen siguió deteriorándose en 2017, con un gravísimo impacto en la población civil, en un año marcado por la desaparición de uno de los actores clave del conflicto armado y hombre fuerte del país durante más de tres décadas, el ex presidente Alí Abdullah Saleh. La violencia causó centenares de víctimas durante el año, aunque no era posible precisar la cifra definitiva. La ONU continuaba utilizando como referencia el balance que barajaba el año anterior, de al menos 10.000 personas fallecidas desde la intensificación de las hostilidades en marzo de 2015, aunque este número se consideraba como una estimación a la baja. Además de las muertes directas de civiles y combatientes, el

conflicto continuó teniendo otras severas consecuencias, precarizando aún más la frágil economía del país –el más pobre del mundo árabe– y convirtiendo a **Yemen en escenario de la peor crisis humanitaria a nivel mundial. Al finalizar 2017 diversas ONG y agencias de la ONU advertían que 22,2 millones de yemeníes requerían asistencia, 3,4 millones de personas más que el año anterior.** De este total, 11,3 millones necesitaba ayuda urgente para sobrevivir. UNICEF y OCHA alertaron especialmente sobre el impacto del conflicto en niños y niñas, ya que 1,8 millones de menores de cinco años estaban malnutridos –incluyendo unos 400.000 que padecían desnutrición severa– y casi dos millones no se estaban escolarizando. A esto se suma que las condiciones creadas por el conflicto facilitaron la expansión de un brote de cólera que hasta finales de año ya había contagiado a un millón de personas y provocado la muerte a más de 2.000, en el que ha sido considerado como el peor brote de esta enfermedad en la historia contemporánea. Las cifras de desplazamiento forzado (principalmente interno), en tanto, se mantenían en torno a los tres millones de personas.

A lo largo del año las hostilidades enfrentaron principalmente a la coalición internacional liderada por Arabia Saudita que apoya al depuesto presidente Abdo Rabbo Mansour Hadi y a las fuerzas al-houthistas, en alianza con los sectores próximos al ex mandatario Saleh. Como en años previos, el conflicto afectó diversas

zonas del país, transcurrió en paralelo a otras dinámicas de tensión y violencia –como las aspiraciones secesionistas de sectores del sur del país⁴⁵ y la presencia en el territorio de una filial de al-Qaeda e ISIS–;⁴⁶ y se vio influido por las tensiones regionales entre Arabia Saudita e Irán. Durante 2017 los frentes más activos de la disputa fueron diversos puntos de la costa del Mar Rojo –entre ellos el puerto de Hodeida, en la provincia del mismo nombre, y Mokha city, en la provincia de Taiz–; las regiones del norte, fronterizas con Arabia Saudita –Hajja, Saadah y al-Jawf–; y la capital yemení, Sanaa, y sus alrededores. **Algunas de las ofensivas causaron numerosas víctimas civiles, en especial como consecuencia de ataques aéreos en áreas residenciales, zonas próximas a mezquitas y mercados.** Las fuerzas al-houthistas atacaron zonas fronterizas de Arabia Saudita y también lanzaron misiles con capacidad de alcanzar la capital, Riad, que fueron interceptados por las fuerzas saudíes. Riad denunció que los misiles lanzados por los al-houthistas habían sido suministrados por Irán, acusación que fue apoyada por EEUU y que estaba siendo investigada por la ONU. Arabia Saudita también acusó a Hezbollah de dar entrenamiento a los al-houthistas. Como respuesta a estas acciones, a principios de noviembre la coalición liderada por Arabia Saudita impuso un férreo bloqueo al puerto de Hodeida, sitio estratégico para la entrada de suministros a Yemen, un país que importa más del 90% de los alimentos, el combustible y las medicinas que consume. Riad mantuvo el cerco durante varias semanas y no lo levantó hasta finales de diciembre, ante las crecientes críticas internacionales que denunciaron que el bloqueo estaba agravando aún más la crisis humanitaria.

Los bandos en conflicto también exhibieron fracturas internas, complejizando aún más el panorama de violencia. Así, se produjeron choques entre partidarios de Hadi y sectores yemeníes del sur del país apoyados por EAU. La ruptura más relevante, sin embargo, se produjo en el bando de los al-houthistas y Saleh, poniendo fin a una alianza de conveniencia vigente desde 2014, cuando el ex presidente dio apoyo a sus antiguos adversarios para que controlaran Sanaa y expulsaran del poder a Hadi. Los roces en este bando se intensificaron desde mediados de año y desembocaron en una lucha abierta en el último trimestre, que culminó en diciembre con **el asesinato de Saleh por parte de fuerzas al-houthistas después de que el ex mandatario se mostrara públicamente dispuesto a cambiar de bando y a dialogar con los saudíes.** La coalición encabezada por Riad intensificó entonces las ofensivas en Yemen, en un aparente intento por aprovechar la desestabilización en el frente al-houthista, motivando críticas internacionales por el impacto de estos ataques

Las luchas internas en los distintos bandos en conflicto en Yemen complejizaron el panorama de violencia en el país y derivaron en el asesinato del ex presidente Saleh por los al-houthistas al finalizar el año

en la población civil. Según datos de la ONU, sólo entre el 6 y el 28 de diciembre unos 225 civiles habían fallecido a causa de la violencia. El conflicto acababa así el año en medio de una escalada. Cabe destacar que en septiembre la ONU aprobó la puesta en marcha de una investigación internacional sobre los abusos perpetrados por los diferentes bandos en pugna en Yemen. Durante 2017, la situación en Yemen también motivó críticas a países como EEUU, Reino Unido o España por continuar suministrando armas a Riad a pesar de las denuncias contra la coalición en sus acciones en Yemen. Tras la asunción del Gobierno de Donald Trump, EEUU también adoptó un papel más activo en su apoyo a los saudíes en la ofensiva en Yemen, intensificando su apoyo logístico en las operaciones.

Yemen (AQPA)	
Inicio:	2011
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, AQPA/Ansar Sharia, ISIS, EEUU, coalición internacional liderada por Arabia Saudita, EAU, milicias tribales, milicias al-houthistas
Intensidad:	1
Evolución:	↓
Síntesis:	Afectado por múltiples conflictos y desafíos internos, en los últimos años el Gobierno yemení ha enfrentado una fuerte presión internacional –sobre todo de EEUU y Arabia Saudita– para dedicar esfuerzos a la lucha contra al-Qaeda en el país, especialmente tras la fusión de la rama saudí y yemení de la organización que a comienzos de 2009 dio origen a al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). Si bien la presencia de al-Qaeda en Yemen se registra desde los noventa –con episodios de alta repercusión como el atentado suicida contra el barco de guerra estadounidense USS Cole en 2000–, se ha observado una escalada en sus acciones. En diciembre de 2009 el fallido atentado contra un avión que se dirigía a Detroit centró la atención internacional en AQPA, considerado por EEUU como una de las principales amenazas a su seguridad. Aprovechando el vacío de poder en Yemen en el marco de la revuelta contra el presidente Alí Abdullah Saleh, AQPA amplió sus operaciones en el sur del país y las zonas bajo su control. A partir de 2011 grupo comenzó a realizar algunas de sus acciones bajo la denominación Ansar Sharia (Partidarios de la Ley Islámica) y desde mediados de 2014 AQPA se vio crecientemente involucrada en enfrentamientos con milicias al-houthistas que avanzaron posiciones desde el norte de Yemen. AQPA ha aprovechado el clima de inestabilidad y la escalada de violencia en el país a partir de marzo de 2015 –en el marco del conflicto entre los al-houthistas y las fuerzas leales al Gobierno de Abdo Rabbo Mansour Hadi– y se ha enfrentado a ambos bandos. Este escenario también ha favorecido el ascenso de ISIS, que ha comenzado a reivindicar diversas acciones en el país.

45. Véase el resumen sobre Yemen (sur) en el capítulo 2 (Tensiones).
 46. Véase el resumen sobre Yemen (AQPA) en este capítulo.

El conflicto protagonizado por AQPA y, más recientemente, por la filial de ISIS en Yemen (ISIS/Provincia Yemen) continuó activo durante el año en las regiones del centro, sur y este del país y transcurrió en paralelo a las hostilidades vinculadas a la disputa entre las fuerzas al-houthistas y las del depuesto presidente Abdo Rabbo Mansour Hadi, que se concentraron en la zona norte y en la costa occidental.⁴⁷ La contienda presentó menores niveles de letalidad respecto al año anterior, aunque las cifras definitivas son difíciles de precisar debido a la falta de acceso a la información sistematizada sobre el impacto del conflicto. Recuentos parciales a partir de informaciones de prensa permiten concluir que, como mínimo, unas 170 personas fallecieron a causa de este conflicto durante el año. A lo largo del período ISIS y AQPA reivindicaron un menor número de ofensivas y ataques explosivos de alto impacto en comparación con 2016. El año **2017 se caracterizó más bien por una intensificación de las operaciones de EEUU en Yemen contra las posiciones de AQPA y de ISIS, que se triplicaron respecto al año anterior.** Según informó en diciembre el Comando Central de EEUU, las fuerzas estadounidenses lanzaron más de 120 ofensivas a lo largo de 2017 (frente a los 38 ataques con aviones no tripulados en 2016 y los 23 de 2015). La ampliación de la campaña de EEUU en Yemen tuvo lugar después de un accidentado episodio ocurrido a principios de año. Días después de asumir la presidencia de EEUU, Donald Trump autorizó el envío de comandos militares (SEAL) contra un complejo de AQPA en la provincia de al-Bayda (sur). La ofensiva –la primera acción en terreno de fuerzas estadounidenses en Yemen que ha trascendido a la luz pública desde 2014– derivó en duros enfrentamientos y acabó con la muerte de uno de los miembros del comando, además de 14 combatientes de AQPA y una treintena de civiles, incluyendo ocho mujeres y siete menores.

En los meses siguientes, EEUU lanzó otra serie de ataques aéreos contra posiciones de al-Qaeda y también de ISIS –grupo que también ha intentado capitalizar la inestabilidad y vacío de poder en Yemen–, principalmente en las provincias de al-Bayda, Shabwah y Marib. Según informaciones de prensa, comandos estadounidenses habrían participado en operaciones junto con fuerzas yemeníes y tropas de EAU, país que forma parte de la coalición internacional liderada por Riad y que desde 2016 juega un papel activo en la lucha contra AQPA en Yemen. **En agosto, entre 2.000 y 4.000 soldados yemeníes –las cifras varían según las fuentes– apoyados por asesores de EAU y de EEUU, lanzaron una operación para expulsar a AQPA de la provincia de Shabwah,** uno de sus bastiones en el centro-sur de Yemen. Las tropas yemeníes aseguraron haber vencido, pero fuentes locales subrayaron que los combatientes de AQPA evacuaron la zona antes de la operación militar (en un repliegue similar al ocurrido en Mukalla en 2016). En los meses siguientes, las tropas yemeníes anunciaron la captura o muerte de diversos militantes de AQPA en Shabwah y también en la provincia de al-Bayda. AQPA también reivindicó algunas

acciones durante el año, entre ellas una ofensiva con coche bomba y ataque armado contra un campo militar en la provincia de Hadramaut (este) en la que murieron una docena de personas, en junio; o el ataque perpetrado por cinco combatientes suicidas en un control carretero en la provincia de Abyan (sur), en el que fallecieron cuatro soldados. **ISIS, por su parte, también reclamó la autoría de varios ataques contra fuerzas pro-gubernamentales en el puerto de Adén que dejaron 56 muertos en noviembre;** así como un ataque contra el edificio del ministerio de Finanzas de la misma ciudad en el que perdieron la vida otras cinco personas. Cabe destacar que a pesar de la campaña contra AQPA y sus retrocesos en Yemen, analistas de seguridad y militares consideraban al finalizar el año que el grupo estaba lejos de ser derrotado, destacando su resiliencia –según informaciones de prensa, el grupo contaría con unos 3.000 afiliados– y su capacidad para explotar el conflicto y las tensiones sectarias en el país para capturar nuevos reclutas e implantarse en el territorio.

Mashreq

Egipto (Sinaí)	
Inicio:	2014
Tipología:	Sistema Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, Ansar Beit al-Maqdis (ABM) o Provincia del Sinaí (PS, filial de ISIS), otros grupos armados (Ajnad Misr, Majlis Shura al-Mujahideen fi Aknaf Bayt al-Maqdis y Katibat al-Rabat al-Jihadiya, Popular Resistance Movement, Liwaa al-Thawra y Hasam), Israel
Intensidad:	3
Evolución:	=

Síntesis:

La península del Sinaí se ha convertido en un creciente foco de inestabilidad. Desde el derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011, la zona ha registrado un aumento de la actividad insurgente, que inicialmente dirigió sus ataques contra intereses israelíes. Esta tendencia abrió diversos interrogantes sobre el mantenimiento de los compromisos de seguridad entre Egipto e Israel tras la firma del acuerdo de Camp David (1979), que condujo a la retirada de las fuerzas israelíes de la península. Sin embargo, y en paralelo a la accidentada evolución de la transición egipcia, los grupos yihadistas con base en el Sinaí han reorientado el foco de sus acciones hacia las fuerzas de seguridad egipcias, en especial tras el golpe de Estado contra el Gobierno islamista de Mohamed Mursi (2013). Progresivamente, los grupos armados –en especial Ansar Beit al-Maqdis (ABM)– han demostrado su capacidad para actuar más allá de la península, han recurrido a arsenales más sofisticados y han ampliado sus objetivos, atacando también a turistas. La decisión de ABM de declarar lealtad a la organización radical Estado Islámico (ISIS) a finales de 2014 marcó un nuevo hito en la evolución de esta disputa. La complejidad del conflicto está influida por múltiples factores, entre ellos la histórica marginación política y económica que ha alentado los agravios de la población beduina, comunidad mayoritaria en el Sinaí; las dinámicas del conflicto árabe-israelí; y la convulsión regional, que ha facilitado el tránsito de armas y combatientes en la zona.

47. Véase el resumen sobre Yemen (al-houthistas) en este capítulo.

La provincia del Sinaí continuó siendo el epicentro del conflicto armado que enfrenta a las fuerzas de seguridad principalmente con el grupo armado ISIS/Provincia Sinaí, aunque también se registraron episodios de violencia en otras zonas del país (Alejandría, Valle del Nilo, alrededores de El Cairo, costa del Mar Rojo, provincia de Ismailia, entre otras) y algunas acciones de menor magnitud fueron perpetradas por otras organizaciones armadas como Ansar al-Islam, Jund al-Islam –presuntamente vinculadas a al-Qaeda– y Hassam –a la que se atribuyen conexiones con los Hermanos Musulmanes. **Durante 2017 persistieron las dificultades para contrastar los datos sobre el impacto de la violencia, pero recuentos informales parciales indican que como mínimo unas 900 personas habrían fallecido a causa del conflicto.** En el Sinaí, las áreas con mayor actividad armada fueron al-Arish, Sheikh Zuweid y al-Barth. A lo largo del año ISIS siguió con sus ofensivas contra las fuerzas de seguridad en forma de tiroteos, atentados explosivos, ataques y emboscadas contra convoyes militares, estaciones policiales y controles en carreteras. Como en años anteriores, ISIS también reclamó la autoría de los disparos de algunos proyectiles hacia Israel. Adicionalmente, ISIS intensificó sus acciones contra cristianos de Egipto, motivando el desplazamiento forzado de más de un centenar de familias de la comunidad copta de la zona norte del Sinaí. En este sentido, una de las ofensivas más destacadas se produjo en abril, cuando dos ataques contra iglesias coptas en el lapso de tres horas –una en Tanta (norte de El Cairo) y otra en Alejandría– causaron la muerte a 48 personas. Los ataques se produjeron días antes del viaje del Papa Francisco a Egipto. El Gobierno de Abdel Fatah al-Sisi –que durante 2017 continuó siendo objeto de críticas por la situación de derechos humanos en el país–⁴⁸ decretó entonces el estado de emergencia por tres meses, medida que se mantenía vigente al finalizar el año tras ser renovada en julio y octubre. Otra ofensiva de ISIS contra un bus en Minya (sur de El Cairo) dejó 29 víctimas mortales en mayo y motivó acciones aéreas egipcias contra supuestas bases del grupo en Libia.⁴⁹

El episodio más cruento de 2017 –un ataque sin precedentes por magnitud y por su objetivo, y el peor perpetrado por militantes armados en la historia reciente de Egipto– se produjo en noviembre, cuando una ofensiva con bomba y posterior tiroteo a manos de una treintena de milicianos provocó la muerte de 305 personas, incluyendo 27 menores, en una mezquita de Bir al-Bed, norte del Sinaí. La acción –que no fue reivindicada por ningún grupo, pero fue atribuida a ISIS– constituyó el primer ataque a una mezquita. El lugar era frecuentado por sufíes, considerados heréticos por ISIS. Según informaciones de prensa, la comunidad sufí también podría haber sido identificada como un blanco por negarse a cooperar con los militantes que operan en la región. Tras el ataque, el presidente egipcio, Abdel Fatah

al-Sisi llamó a las fuerzas de seguridad a responder con “violencia brutal” y aviones militares lanzaron una serie de ataques contra supuestas posiciones de militantes armados. Las redadas, enfrentamientos y operaciones de las fuerzas egipcias contra combatientes y presuntos miembros de organizaciones armadas causaron decenas de fallecidos, además de numerosas detenciones, a lo largo del año. En este contexto, algunas voces alertaron sobre ejecuciones extrajudiciales en el Sinaí y aseguraron que en algunos casos estas acciones se presentaban como bajas durante operaciones antiterroristas. Human Rights Watch difundió videos sobre esta práctica y denunció un patrón de abusos contra la población del Sinaí por parte de las fuerzas de seguridad.⁵⁰

Iraq	
Inicio:	2003
Tipología:	Sistema, Gobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, fuerzas militares y de seguridad iraquíes, fuerzas kurdas (peshmergas), milicias chiíes (Unidades de Movilización Popular), milicias sunníes, ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Irán, Turquía, PKK
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

La invasión de Iraq por parte de la coalición internacional liderada por EEUU en marzo de 2003, utilizando la supuesta presencia de armas de destrucción masiva como argumento y con la voluntad de derrocar al régimen de Saddam Hussein por su presunta vinculación con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EEUU, propició el inicio de un conflicto armado en el que progresivamente se involucraron numerosos actores: tropas internacionales, Fuerzas Armadas iraquíes, empresas de seguridad privadas, milicias, grupos insurgentes, y al-Qaeda, entre otros. El nuevo reparto de poder entre grupos sunníes, chiíes y kurdos en el marco institucional instaurado tras el derrocamiento de Hussein provocó descontento entre numerosos sectores. La violencia persistió y se hizo más compleja, superponiéndose la oposición armada contra la presencia internacional en el país a la lucha interna por el control del poder con un componente sectario, principalmente entre chiíes y sunníes, con un período especialmente cruento entre 2006 y 2007. Tras la retirada de las fuerzas estadounidenses a finales de 2011, las dinámicas de violencia han persistido, con un elevado impacto en la población civil. El conflicto armado se agravó en 2014 como consecuencia del ascenso del grupo armado Estado Islámico (ISIS) y la respuesta militar del Gobierno iraquí, apoyado por una nueva coalición internacional liderada por EEUU.

Iraq siguió siendo escenario de uno de los conflictos armados de mayor intensidad a nivel global durante 2017, un año marcado por la expulsión de ISIS de Mosul y de la mayor parte de territorio iraquí tras una

48. Véase el resumen sobre Egipto en el capítulo 2 (Tensiones).

49. Véase el resumen sobre Libia en este capítulo.

50. Human Rights Watch, *Egypt: Videos Show Army Executions in Sinai*, 21 de abril de 2017.

campaña en la que participaron principalmente las fuerzas armadas y otros cuerpos de seguridad, milicias chífes (Unidades de Movilización Popular, UMP), combatientes kurdos (peshmergas) y la coalición anti-ISIS liderada por EEUU. Las hostilidades vinculadas a la campaña por Mosul, las operaciones militares en otras zonas del país, así como los ataques y ofensivas suicidas de ISIS en Bagdad y otros puntos de Iraq provocaron la muerte de miles de personas. Al finalizar 2017 los balances estimativos de víctimas todavía eran de carácter parcial y se centraban en las bajas entre la población civil. Según los datos de la misión de la ONU en Iraq (UNAMI), al menos 3.300 civiles habían fallecido a causa de la violencia durante el año, aunque advertía que esta cifra debía considerarse como un “mínimo absoluto” debido a las dificultades para verificar la información sobre la letalidad del conflicto. El balance ofrecido por la organización Iraq Body Count (IBC) era muy superior y situaba en **al menos 13.187 el número de civiles muertos a causa de la guerra en el país en 2017**. IBC destacó la provisionalidad de la cifra, ya que la tarea de documentar las bajas en Mosul y sus alrededores –donde se descubrieron fosas comunes de víctimas de ISIS y continuaban las tareas de extracción de cadáveres de entre las ruinas– continuaba y aún tardaría meses. El balance final de víctimas civiles de 2017, por tanto, podría mantenerse en línea con lo registrado en años previos –16.361 en 2016, 17.518 en 2015, 20.218 en 2014–, en el marco de una significativa intensificación de la violencia en los últimos cuatro años.

El elevado número de víctimas civiles del conflicto motivó llamadas de atención de la ONU y organizaciones de derechos humanos durante todo el año. Amnistía Internacional denunció que unos 5.800 civiles habían perdido la vida en las ofensivas de las fuerzas iraquíes y la coalición liderada por EEUU durante la campaña en Mosul, evidenciando la falta de precauciones para no dañar a la población. Este tema tuvo especial notoriedad tras un ataque aéreo estadounidense en la ciudad que causó la muerte a más de 150 civiles el 17 de marzo (un grupo de personas se había refugiado en un edificio de los combates entre ISIS y las fuerzas de seguridad iraquíes). En octubre, **Washington reconoció que su campaña contra ISIS en Iraq y Siria había causado la muerte de al menos 800 civiles desde 2014. Sin embargo, otras fuentes apuntaban a cifras muy superiores**. Según la organización Airwars, 5.961 civiles habían muerto en el mismo período; mientras que una investigación del diario The New York Times sobre 150 zonas afectadas por los bombardeos de la coalición en Iraq concluyó que habían matado 31 veces más civiles de lo que se ha informado oficialmente. **Informes de la misión de la ONU en Iraq (UNAMI) y el Alto Comisionado para los**

Derechos Humanos de la ONU, en tanto, alertaron que el mayor número de víctimas civiles del conflicto era producto de las políticas deliberadas y sostenidas de ISIS contra la población. Durante 2017, sus prácticas incluyeron ofensivas indiscriminadas; uso deliberado de civiles como escudos humanos para proteger a sus combatientes, bases y otras ubicaciones estratégicas; violencia contra personas que intentaban huir de los territorios controlados por ISIS; represalias contra quienes no acataban las rígidas doctrinas impuestas por el grupo armado; y agresiones contra líderes religiosos, dirigentes comunitarios y profesionales médicos y de la educación, en particular mujeres; así como violencia sexual, sobre todo contra mujeres y menores de minorías étnicas y religiosas.⁵¹

En lo que respecta a la evolución de los frentes de batalla, cabe destacar que la campaña de Mosul – iniciada en octubre de 2016– fue el principal foco de hostilidades durante el primer semestre del año. Las ofensivas se centraron en la zona oeste de la urbe y en las localidades de los alrededores, en un intento por bloquear las rutas de escape y de suministro de ISIS.

En este período el grupo armado continuó reivindicando ataques y ofensivas suicidas en otras zonas del país –en especial Bagdad, pero también en otras zonas como Nasiriyah o Kirkuk. **En julio, tras meses de intensa violencia, el Gobierno iraquí anunció la derrota de ISIS en Mosul, en un golpe estratégico y simbólico para el grupo armado que en 2014 había declarado el califato desde esta ciudad**, la segunda del país. La pérdida del principal bastión de ISIS en Iraq, donde impuso su férreo control durante tres años, fue el preludio de la caída, también en 2017, de Raqqa, la capital del grupo armado en Siria.⁵² En

el segundo semestre del año continuaron los combates en diversas localidades de los alrededores de Mosul y en ciudades del noroeste, en el área próxima a la frontera con Siria. En diciembre, y después de tres años de cruentas hostilidades, el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, declaró el fin de la lucha contra ISIS, que en su momento de mayor poderío llegó a controlar un tercio del territorio del país. Pese a esta declaración de “victoria final” sobre ISIS, al acabar el año el Gobierno iraquí enfrentaba múltiples retos. Entre ellos, la posibilidad de que ISIS se mantenga activo en el país a través de células de combatientes que lancen una guerra de guerrillas y operaciones suicidas; el incierto y polémico futuro de las milicias shífes apoyadas por Irán que tuvieron una activa participación en la campaña contra ISIS –EEUU y otros países occidentales, como Francia, pidieron el desmantelamiento de las UMP–; la investigación de abusos perpetrados por los distintos actores armados, la ingente tarea de reconstrucción en las áreas que estuvieron bajo dominio de ISIS; la

Después de meses de intensa violencia, el Gobierno iraquí anunció en julio la derrota de ISIS en Mosul, ciudad desde donde el grupo armado había proclamado la instauración de un califato en 2014

51. UNAMI-OHCHR, *Report on Human Rights in Iraq, January to June 2017*, 2017.

52. Véase el resumen sobre Siria en este capítulo.

situación de los 3,2 millones de iraquíes desplazados a causa de la violencia, de miles de personas que estaban siendo forzadas a retornar, y de los 11 millones de personas que requerían asistencia humanitaria al finalizar 2017;⁵³ y la posibilidad de que el nuevo escenario abra paso a una nueva escalada de tensiones entre las comunidades sunníes, chiíes y kurdas del país. De hecho, durante 2017 se vivió una creciente tensión entre las autoridades de Bagdad y el Gobierno Regional del Kurdistan que derivaron en un importante despliegue militar de tropas iraquíes y sus milicias aliadas en territorios en disputa entre Bagdad y Erbil.⁵⁴ Turquía también atacó posiciones del PKK en Iraq.⁵⁵

Israel – Palestina	
Inicio:	2000
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional ⁵⁶
Actores:	Gobierno israelí, milicias de colonos, AP, Fatah (Brigadas de los Mártires de Al Aqsa), Hamas (Brigadas Ezzedin al Qassam), Yihad Islámica, FPLP, FDLP, Comités de Resistencia Popular, grupos salafistas, Ahfad al-Sahaba knaf Bayt al-Maqdis (vinculado a ISIS)
Intensidad:	1
Evolución:	=
Síntesis:	El conflicto entre Israel y los diferentes actores palestinos se reinicia en el año 2000 con el estallido de la 2ª Intifada propiciada por el fracaso del proceso de paz promovido a principios de los años noventa. El conflicto palestino-israelí se manifiesta en 1947 cuando la resolución 181 del Consejo de Seguridad de la ONU divide el territorio de Palestina bajo mandato británico en dos Estados y poco después se proclama el Estado de Israel (1948), sin poderse materializar desde entonces un Estado palestino. Tras la guerra de 1948-49 Israel se anexiona Jerusalén oeste, y Egipto y Jordania pasan a controlar Gaza y Cisjordania, respectivamente. En 1967, Israel ocupa Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza tras vencer en la llamada Guerra de los Seis Días contra los países árabes. No será hasta los acuerdos de Oslo que la autonomía de los territorios palestinos será formalmente reconocida, aunque su implementación se verá impedida por la ocupación militar y por el control del territorio impuesto por Israel.

El conflicto armado palestino-israelí presentó niveles de violencia similares a años previos, con incidentes que se intensificaron al finalizar el año tras la decisión de EEUU de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Según los datos de OCHA, durante 2017 se registraron 88 muertes directas por el conflicto, de las cuales 75 eran palestinas y 13 israelíes. El balance es ligeramente inferior a los de 2016 y 2015 en los que murieron 122 y en torno a 200 personas, respectivamente. En 2017

los meses más cruentos fueron enero (10 víctimas mortales), julio (14), octubre (13) y diciembre (14). En enero se produjo el episodio con mayor número de víctimas israelíes, cuando un palestino residente en Jerusalén dirigió su camión contra un grupo de soldados, causando la muerte de cuatro. En julio tres palestinos con ciudadanía israelí mataron a tiros a dos policías israelíes a la entrada de la Explanada de las Mezquitas, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, tras lo cual fueron abatidos. El episodio motivó que las autoridades israelíes instalaran detectores de metales en las entradas de la explanada, lo que alentó protestas en Jerusalén, Cisjordania y Gaza ante lo que se consideró como un intento de Israel por incrementar su control del lugar. En las semanas siguientes se produjeron diversos hechos de violencia –seis palestinos murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Cisjordania, tres israelíes fallecieron tras ser acuchillados en el asentamiento de Halamish– e Israel detuvo a decenas de palestinos. En este contexto, la Autoridad Palestina (AP) anunció la suspensión de la coordinación de seguridad con Israel, pero en la práctica la entente continuó. En octubre se produjo otro episodio destacado, después de que las fuerzas israelíes destruyeran un túnel en Gaza provocando la muerte de entre siete y 12 palestinos (la cifra varía según las fuentes), entre ellos un comandante de la Yihad Islámica y dos miembros de Hamas.

La mayor escalada de violencia se produjo a partir del 6 de diciembre, después de que el Gobierno de Donald Trump anunciara que reconocía a Jerusalén como capital de Israel y que trasladaría su embajada a esta ciudad, desafiando el consenso internacional en este tema. La medida recibió duras críticas a nivel internacional, provocó masivas protestas palestinas y alentó disparos de cohetes desde Gaza a los que Israel respondió con ataques aéreos. Según los datos de OCHA, desde el 6 de diciembre y hasta el 30 de enero de 2018 una veintena de palestinos y un israelí habían muerto, y cerca de 5.000 palestinos habían resultado heridos, principalmente a causa de inhalación de gas, balas de goma y disparos. En este contexto, la AP declaró que no aceptaría a EEUU como mediador y pidió a la ONU que se hiciera cargo del proceso de paz. Cabe destacar que **durante el año Israel también mantuvo su política de ampliación de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados palestinos, a pesar de la resolución de la ONU que a finales de 2016 condenó esta práctica** y que fue aprobada con la anuencia del Gobierno de Barack Obama. Cabe mencionar también que durante el año la difusión internacional del caso de la joven palestina Ahd Tamimi, de 16 años, arrestada tras confrontar y abofetear a un soldado israelí, llamó la atención sobre la situación de menores palestinos en cárceles israelíes. Según fuentes palestinas, cerca

53. UNOCHA, *Humanitarian Bulletin: Iraq, November 2017*, 8 de diciembre de 2017.

54. Véase el resumen sobre Iraq (Kurdistán) en el capítulo 2 (Tensiones).

55. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en este capítulo.

56. A pesar de que “Palestina” (cuya Autoridad Nacional Palestina es una entidad política vinculada a una determinada población y a un territorio) no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera el conflicto entre Israel y Palestina como “internacional” y no como “interno” por tratarse de un territorio ocupado ilegalmente y cuya pretendida pertenencia a Israel no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

de 4.000 menores habían sido detenidos por las fuerzas israelíes desde octubre de 2015 y unos 300 permanecían en cárceles israelíes al finalizar 2017.

Siria	
Inicio:	2011
Tipología:	Gobierno, Sistema, Autogobierno, Identidad Interno internacionalizado
Actores:	Gobierno, milicias pro-gubernamentales, Ejército Sirio Libre, Ahrar al-Sham, Fuerzas Democráticas de Siria (coalición que incluye a las milicias PYD/YPJ del PYD), Jabhat Fateh al-Sham (ex Frente al-Nusra), Hay'at Tahrir al-Sham (HTS), ISIS, coalición internacional anti-ISIS liderada por EEUU, Turquía, Hezbollah, Irán, Rusia, entre otros actores armados
Intensidad:	3
Evolución:	↑

Síntesis:

Controlada por el partido Baath desde 1963, la república de Siria ha sido gobernada desde los setenta por dos presidentes: Hafez al-Assad y su hijo, Bashar, que asumió el poder en 2000. Actor clave en Oriente Medio, a nivel internacional el régimen se ha caracterizado por sus políticas hostiles hacia Israel, y en el plano interno por su carácter autoritario y su férrea represión a la oposición. La llegada al Gobierno de Bashar al-Assad despertó expectativas de cambio, tras algunas medidas liberalizadoras. No obstante, el régimen frenó estas iniciativas ante la alarma del *establishment*, integrado por el Ejército, el partido Baath y la minoría alauita. En 2011, las revueltas en la región alentaron a la población siria a pedir cambios políticos y económicos. La brutal respuesta del Gobierno desencadenó una severa crisis en el país y desembocó en el inicio de un cruento conflicto armado con un alto impacto en la población civil. En medio de dinámicas de militarización y proliferación de actores armados de diverso signo, la disputa se ha complejizado y ha adquirido una creciente dimensión regional e internacional.

El conflicto armado en Siria continuó caracterizándose por sus complejas dinámicas de violencia y numerosos frentes de batalla; por la diversidad de actores armados locales, regionales e internacionales involucrados en la contienda; y por sus múltiples y severos impactos en la población civil. Aunque durante 2017 se registró una cierta reducción en las hostilidades en algunas zonas del país, la guerra siguió presentando altos niveles de intensidad y se cobró la vida de miles de personas durante el año. Las dificultades para contabilizar y verificar el número total de víctimas mortales se mantuvieron; pero, pese a ello, algunas organizaciones con redes de información en Siria ofrecieron balances estimativos. **Según la Syrian Network for Human Rights (SNHR), durante el año al menos 10.000 civiles murieron como consecuencia del conflicto** –incluyendo unas 1.500 mujeres y 2.300

menores–, una cifra relativamente menor respecto a la ofrecida por esta misma entidad para el año 2016 (17.000). En marzo de 2017, coincidiendo con el sexto aniversario del conflicto, el Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) informó que unas 465.000 personas habían muerto desde el inicio de las hostilidades. Del total de víctimas, según SOHR, unas 96.000 serían civiles, mientras que la SNHR eleva este cálculo a más de 200.000 personas desde marzo de 2011. De acuerdo con diversos informes periódicos de la propia ONU, de la Comisión de Investigación Independiente sobre Siria y de diversas ONG, el país continuó siendo escenario de numerosas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, incluyendo asedios, desplazamientos forzados, violencia sexual, instrumentalización de la ayuda humanitaria, destrucción de infraestructuras civiles, torturas y ejecuciones sumarias. Un informe de Amnistía Internacional dado a conocer en 2017 denunció que en los primeros cinco años del conflicto armado en el país al menos 13.000 opositores habían sido ejecutados, a través de ahorcamientos masivos, en la prisión militar de Saydanya como parte de una estrategia de exterminio de disidentes ordenada por las máximas autoridades del país.

Adicionalmente, durante el año se continuaron denunciando ataques indiscriminados y/o deliberados contra la población por parte de numerosos actores armados implicados en la guerra. Cabe mencionar algunas ofensivas significativas en 2017 como el doble ataque suicida que golpeó el centro de Damasco y causó más de un centenar de víctimas en marzo (entre ellas 43 peregrinos iraquíes shiíes), en una acción perpetrada por Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) –una nueva alianza de fuerzas rebeldes liderada por el grupo Fath al-Sham (antiguo Frente al-Nusra); o **el ataque con gas del Gobierno de Bashar al-Assad contra la localidad de Khan Sheikhoun (provincia de Idlib), en manos de las fuerzas rebeldes, que provocó la muerte a más de 80 personas en abril (en su mayoría mujeres y menores)**, que motivó en su momento un bombardeo de EEUU a la base del régimen desde donde fue lanzado el ataque químico. Las fuerzas de la coalición internacional liderada por Washington también fueron señaladas por su responsabilidad en diversos ataques con víctimas civiles en territorio sirio. EEUU admitió que desde agosto de 2014 y hasta octubre de 2017 sus campañas contra ISIS habían provocado la muerte de al menos 800 civiles en Siria e Iraq, pero otras fuentes aseguran que la cifra sería mucho mayor y que podría rondar las 6.000 personas.⁵⁷

Como en años previos, durante 2017 la guerra de Siria se mantuvo activa en múltiples frentes y transcurrió en paralelo a gestiones diplomáticas que arrojaron escasos resultados. La decisión de crear cuatro zonas de desescalada en Siria tras un acuerdo

57. Véase el resumen sobre Iraq en este capítulo.

entre Rusia, Turquía e Irán en Astaná (Kazajistán), en mayo –en el marco del proceso paralelo a las negociaciones auspiciadas por la ONU–, favoreció una leve disminución de los enfrentamientos. No obstante, su evolución y consiguiente impacto en la población civil fue desigual. En la zona sur de Siria, por ejemplo, se observó una reducción en las hostilidades; pero en otras áreas, como la provincia de Idlib y el noroeste de Siria hubo una disminución inicial que luego derivó en un nuevo incremento de la violencia. Teniendo en cuenta este trasfondo, **cabe destacar al menos tres dinámicas del conflicto durante 2017: el impacto de la suscripción de una serie de treguas locales, la intensificación de la violencia en Ghouta Oriental y la expulsión de ISIS de Raqqa.** Diversos acuerdos de cese al fuego suscritos a nivel local entre el Gobierno sirio y grupos armados a lo largo del año incluyeron disposiciones relativas a la evacuación de población que provocaron el desplazamiento de miles de civiles, que al finalizar el año sobrevivían en precarias condiciones. Diversas voces alertaron que poblaciones que habían sufrido graves condiciones de asedio e intensos bombardeos y otras formas de violencia no tuvieron más alternativa que abandonar sus hogares en masa en el marco de estos acuerdos de “reconciliación” y denunciaron que el régimen estaba utilizando una estrategia que no ofrecía más opción que rendirse o morir de hambre.⁵⁸ Según datos de la ONU, la cifra de población civil afectada por situaciones de asedio en Siria se redujo en medio millón de personas durante 2017. No obstante, hacia finales de año otro medio millón continuaba viviendo en una decena de áreas asediadas. 95% de ellas permanecían acosadas por las fuerzas del Gobierno en la zona de Ghouta Oriental, suburbio de Damasco en manos de la oposición. La violencia en esta área estuvo presente durante todo el año, pero se intensificó a partir del último trimestre convirtiéndola en un escenario que recordaba a la situación vivida en Alepo en 2016. **Al finalizar 2017, unas 390.000 personas permanecían atrapadas en Ghouta sobreviviendo en condiciones extremas,** con graves problemas para acceder a alimentos y medicinas. Raqqa fue otro de los epicentros de la actividad armada en 2017, en especial a partir de mediados de año cuando se intensificó la campaña para expulsar a ISIS de la ciudad, principal bastión del grupo armado en Siria. Tras asumir el control de territorios adyacentes, la coalición de las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF) –lideradas por los combatientes kurdos del YPG y con el respaldo de la alianza internacional encabezada por EEUU– iniciaron una operación para desalojar a ISIS de Raqqa que tardó varios meses y que supuso intensos niveles de

Según estimaciones de la Syrian Network for Human Rights, al menos 10.000 civiles murieron a causa del conflicto en Siria durante 2017

violencia en el área. **Hasta que se declaró la expulsión de ISIS de Raqqa en octubre –un severo golpe al grupo, que durante 2017 también perdió el control de Mosul, en Iraq–, los combates y bombardeos causaron un elevado número de víctimas civiles y motivaron el desplazamiento de casi toda la población de la ciudad.** La destrucción de infraestructuras y la presencia de explosivos en toda el área dificultaban el retorno de los habitantes a la zona, en la que se descubrieron diversas fosas comunes de víctimas de ISIS.

El régimen sirio también compitió con las fuerzas respaldadas por EEUU a la hora de disputar territorios a ISIS y hacia finales de año uno de los frentes más activos en términos de operaciones militares con participación de múltiples actores armados era la provincia de Deir al-Zour (noreste). Según datos de la ONU, sólo entre octubre y noviembre las hostilidades en esta área habían provocado el desplazamiento forzado de casi 400.000 personas. Algunos análisis advertían que el devenir de Deir al-Zour, con amplias zonas en manos de ISIS, será especialmente determinante para el futuro del grupo y para el curso de la guerra, dada su ubicación estratégica (entre Raqqa y la frontera con Iraq) y por la presencia de los mayores campos de petróleo del país.⁵⁹ A lo largo de todo el año se produjeron otros numerosos enfrentamientos entre diversos actores armados activos en Siria, incluyendo choques entre grupos armados

no gubernamentales de diverso signo –como los combates entre Fath al-Sham y Ahrar al-Sham o Jaish al-Mujahideen a principios de año–, enfrentamientos entre fuerzas del régimen y las SDF apoyadas por EEUU, las acciones de Turquía contra las fuerzas del YPG –en el marco de su disputa con el PKK y de los intentos por evitar una mayor presencia y dominio de elementos kurdos en el norte de Siria y en Iraq–,⁶⁰ o los bombardeos israelíes contra posiciones de Hezbollah en Siria,⁶¹ entre otros. Como resultado de este conjunto de dinámicas de violencia, los niveles globales de desplazamiento forzado a causa del conflicto se mantuvieron en niveles similares a los del año anterior. Así, **se estima que sólo en los primeros nueve meses del año ya se habían producido 1,8 millones de movimientos de personas desplazadas –equivalentes a unas 6.550 cada día–, con muchísimos casos de desplazamientos sucesivos;** mientras que la cifra de refugiados y refugiadas de origen sirio ascendía a 5,5 millones. Otros múltiples indicadores permitían dimensionar la magnitud del impacto del conflicto armado en la población siria. De acuerdo con datos de OCHA de finales de año, 13,1 millones de personas (siete de cada diez personas en el país) requería ayuda

58. Amnesty International, *Syria: ‘Surrender or starve’ strategy displacing thousands amounts to crimes against humanity*, 13 de noviembre de 2017.

59. ICG, *Fighting ISIS: The Road to and Beyond Raqqa*, Middle East Briefing no.53, 28 de abril de 2017.

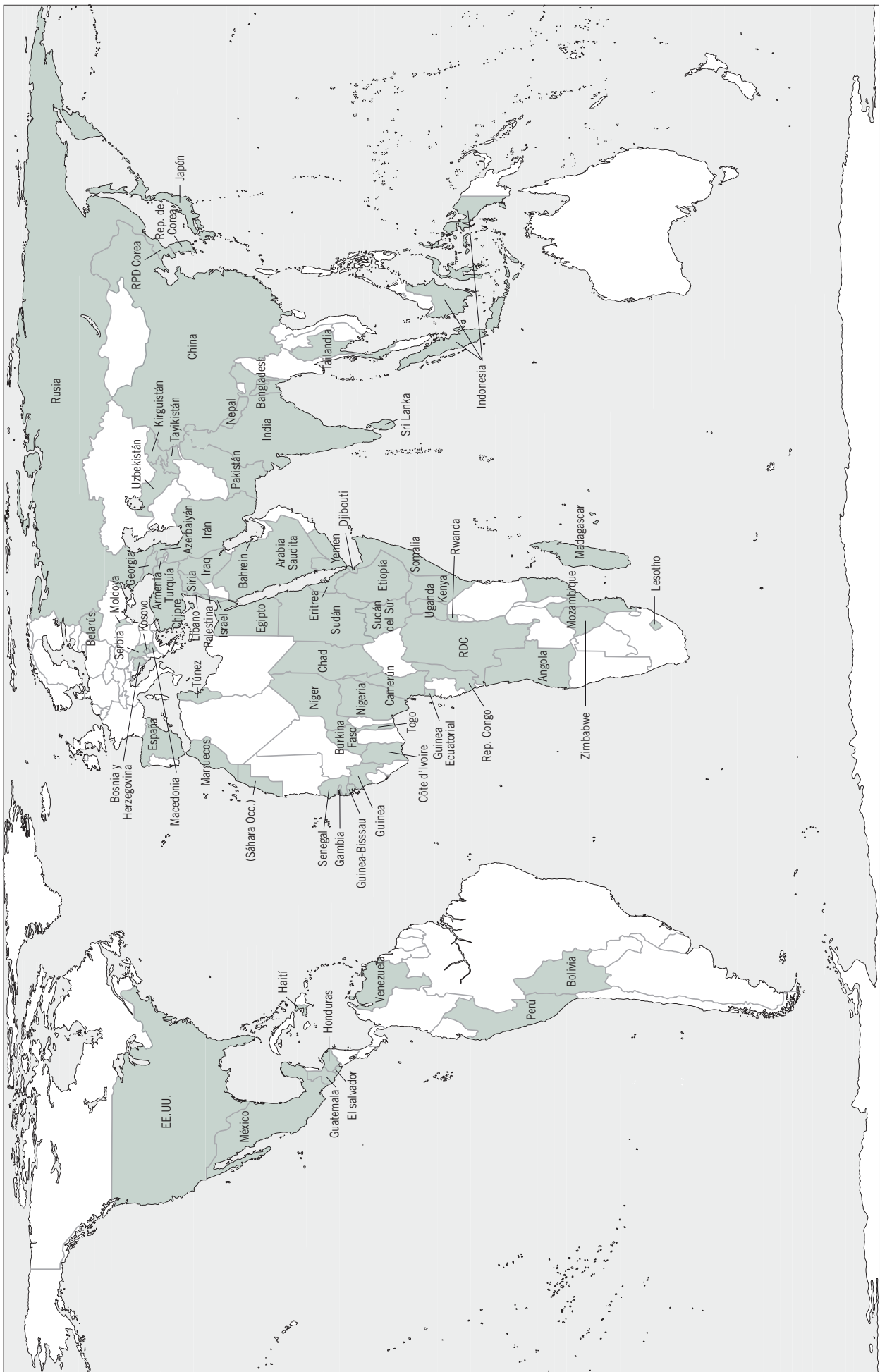
60. Véase el resumen sobre Turquía (sudeste) en este capítulo.

61. Véase el resumen sobre Israel-Siria-Líbano en el capítulo 2 (Tensiones).

humanitaria, de las cuales 5,6 millones la necesitaba de manera urgente.⁶² Los y las menores de edad representaban un 40% de la población necesitada de asistencia. Un 69% de la población siria se encontraba viviendo en condiciones de pobreza extrema. En medio de este dramático panorama, y gracias al apoyo de Rusia e Irán, el régimen continuó perfilándose como vencedor de la contienda. La salida del poder de Bashar al-Assad ha dejado progresivamente de ser un reclamo inmediato de potencias occidentales y Moscú mantenía una gran ascendencia sobre las negociaciones a través del proceso que ha impulsado y que transcurre en paralelo al auspiciado por la ONU. En este contexto, el presidente ruso realizó una visita a Siria a finales de año y, en tono triunfal, anunció el repliegue de tropas rusas de Siria (aunque anuncios similares en el pasado no se cumplieron).

62. UNOCHA, 2018: *Humanitarian Needs Overview: Syrian Arab Republic*, noviembre de 2017.

Mapa 2.1. Tensiones



Países con situaciones de tensión en 2017

2. Tensiones

- Durante 2017 se registraron 88 escenarios de tensión a nivel global. Los casos se concentraron principalmente en África (37) y Asia (18), mientras que el resto de las tensiones se distribuyeron en Europa (13), Oriente Medio (12) y América (ocho).
- Se produjo una escalada de la situación en Camerún como consecuencia de la represión del movimiento secesionista que provocó el surgimiento de milicias que recurrían a la lucha armada para alcanzar la independencia de las provincias anglófonas
- Más de 120 personas murieron y varios miles resultaron heridas y detenidas durante las masivas movilizaciones antigubernamentales de la primera mitad del año en Venezuela.
- Dimitió el primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif después de que la Corte Suprema le inhabilitara para ostentar cargos públicos a raíz de las informaciones reveladas por los Papeles de Panamá.
- Las relaciones entre India y Pakistán estuvieron marcadas por los enfrentamientos militares en la frontera, que dejaron decenas de muertes.
- Se incrementó la tensión en la península coreana a raíz de los ensayos nucleares y con misiles balísticos intercontinentales por parte de Corea del Norte.
- Defensores de derechos humanos denunciaron un grave incremento de los secuestros y desapariciones a manos de agentes de seguridad en la república de Chechenia.
- Las peores protestas en Irán desde 2009 derivaron en hechos de violencia que causaron la muerte de una veintena de personas al finalizar el año.
- Líbano se vio afectado por las repercusiones de la guerra de Siria y por el complejo escenario político interno, incluyendo la sorpresiva renuncia del primer ministro desde Arabia Saudita.

El presente capítulo analiza los contextos de tensión que tuvieron lugar a lo largo del año 2017. Está estructurado en tres apartados. En el primero se definen las situaciones de tensión y sus características. En el segundo se analizan las tendencias globales y regionales de las tensiones durante el año 2017. En el tercer apartado se describe la evolución y los acontecimientos más relevantes del año en los diferentes contextos. Al principio del capítulo se incluye un mapa en el que se señalan Los países afectados por situaciones de tensión durante 2017.

2.1. Tensiones: definición

Se considera tensión aquella situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva altos niveles de movilización política, social o militar y/o un uso de la violencia con una intensidad que no alcanza la de un conflicto armado, que puede incluir enfrentamientos, represión, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada podría degenerar en un conflicto armado en determinadas circunstancias. Las tensiones están normalmente vinculadas a: a) demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; b) la oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado, o a la política interna o internacional de un Gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o c) al control de los recursos o del territorio.

Tabla 2.1. Resumen de las tensiones en 2017

Tensión ¹	Tipología ²	Actores principales	Intensidad ³
			Evolución ⁴
África⁵			
África Central (LRA)	Internacional	Fuerza Regional de la UA (RTF, compuesta por Fuerzas Armadas ugandesas, congoleesas y sursudanesas), Operación Observant Compass (EEUU), milicias de autodefensa de RDC y de Sudán del Sur, LRA, ex coalición armada centroafricana Séléka	2
	Recursos		↓
Angola (Cabinda)	Interna	Gobierno, grupo armado FLEC-FAC, Foro Cabindés para el Diálogo	3
	Autogobierno, Recursos		↑
Burkina Faso	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política, fuerzas de seguridad del Estado, sociedad civil, grupos armados que operan en la región del Sahel	3
	Gobierno		↑
Camerún (Ambazonia/North West y South West)	Interna	Gobierno, oposición política y social de las provincias anglófonas de North West y South West, grupos armados ADF, SOCADEF y SCDF	3
	Autogobierno, Identidad		↑
Chad	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		=
Congo, Rep. del	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Côte d'Ivoire	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias leales al ex presidente Laurent Gbagbo, mercenarios, ONUCI	2
	Gobierno, Identidad, Recursos		↑
Djibouti	Interna	Gobierno, grupo armado FRUD, oposición política y social (coalición UAD/USN)	1
	Gobierno		↑
Eritrea	Interna internacionalizada	Gobierno, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFDM, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos	2
	Gobierno, Autogobierno, Identidad		↑
Eritrea – Etiopía	Internacional	Eritrea, Etiopía	2
	Territorio		=
Etiopía	Interna	Gobierno (coalición EPRDF, liderada por el partido TPLF), oposición política y social, diversos grupos armados	3
	Gobierno		=
Etiopía (Oromiya)	Interna	Gobierno central, Gobierno regional, oposición política (partidos OFDM, OPC) y social, oposición armada OLF, IFLO	3
	Autogobierno, Identidad		=
Gambia	Interna	Gobierno, sectores del Ejército, oposición política	1
	Gobierno		↓
Guinea	Interna	Gobierno, Fuerzas Armadas, partidos políticos de oposición, sindicatos	1
	Gobierno		↑
Guinea-Bissau	Interna internacionalizada	Gobierno de transición, Fuerzas Armadas, oposición política, redes internacionales de narcotráfico	1
	Gobierno		↑

- En esta columna se señalan los Estados o regiones en los que se desarrollan tensiones, especificando entre paréntesis la zona dentro de ese Estado o territorio a la que se circunscribe la tensión o el nombre del grupo armado que protagoniza el conflicto.
- Este informe clasifica y analiza las tensiones a partir de una doble tipología, que aborda por una parte las causas o incompatibilidad de intereses, y por otra la confluencia entre escenario del conflicto y actores. En relación a las causas, se pueden distinguir las siguientes: demandas de autodeterminación y autogobierno (Autogobierno) o aspiraciones identitarias (Identidad); oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado (Sistema) o a la política interna o internacional de un Gobierno (Gobierno), lo que en ambos casos motiva la lucha para acceder o erosionar al poder; o lucha por el control de los recursos (Recursos) o del territorio (Territorio). En relación a la segunda tipología, las tensiones pueden ser internas, internas internacionalizadas o internacionales. De esta forma, se considera tensión interna aquella protagonizada por actores del mismo Estado que operan exclusivamente en y desde el interior del mismo. En segundo lugar, se entiende por tensión interna internacionalizada aquella en la que alguno de los actores principales es foráneo, y/o cuando la tensión se extiende al territorio de países vecinos. En tercer lugar, se entiende por tensión internacional aquella en la que se enfrentan actores estatales o no estatales de dos o más países.
- La intensidad de una tensión (alta, media o baja) y su evolución (escalada, reducción, sin cambios) se evalúan principalmente a partir del nivel de violencia registrado y del grado de movilización política y social.
- En esta columna se compara la evolución de los acontecimientos del año 2017 con la del año 2016 apareciendo el símbolo ↑ si la situación general durante 2017 es más grave que la del año anterior, ↓ si es mejor y = si no ha experimentado cambios significativos.
- Las situaciones de tensión relativas a Camerún, Chad y Níger presentes en el 2016 debidas a la inestabilidad generada por el conflicto armado de Boko Haram se analizan en el capítulo 1 (Conflictos armados) en el caso Región Lago Chad (Boko Haram).

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
Guinea Ecuatorial	Interna	Gobierno, oposición política en el exilio	1
	Gobierno		=
Kenya	Interna internacionalizada	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya, ISIS	3
	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno		↑
Lesotho	Interna	Gobierno, Fuerzas Armadas, oposición política	2
	Gobierno		↑
Madagascar	Interna	Alta Autoridad para la Transición, líderes de la oposición, fuerzas de seguridad del Estado, dahalos (ladrones de ganado), milicias de autodefensa, empresas de seguridad privadas	1
	Gobierno, Recursos		=
Marruecos	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Marruecos – Sáhara Occidental	Internacional ⁶	Marruecos, República Árabe Saharaui Democrática (RASD), grupo armado Frente POLISARIO	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		=
Mozambique	Interna	Gobierno, partido político RENAMO, milicias RENAMO, grupo armado islamista al-Shabaab	3
	Gobierno, sistema		↓
Níger	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados internos y externos (región del Sahel)	3
	Gobierno, Sistema		↑
Nigeria	Interna	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, IMN, IPOB, MASSOB	3
	Identidad, Recursos, Gobierno		↑
Nigeria (Delta Níger)	Interna	Gobierno, grupos armados MEND, MOSOP, NDPVF, NDV, NDA, NDGJM, IWF, REWL, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada	2
	Identidad, Recursos		↑
RDC	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
RDC – Rwanda ⁷	Internacional	Gobiernos de RDC, Rwanda, grupos armados FDLR y M23 (ex CNDP)	1
	Identidad, Gobierno, Recursos		=
RDC – Uganda ⁸	Internacional	Gobiernos de RDC y Uganda, grupos armados ADF, M23 (ex CNDP), LRA, grupos armados que operan en Ituri	1
	Identidad, Gobierno, Recursos, Territorio		=
Rwanda	Interna internacionalizada	Gobierno, grupo armado rwandés FDLR, oposición política, sectores disidentes del partido gubernamental RPF, diáspora rwandesa en otros países de África y en Occidente	1
	Gobierno, Identidad		=
Senegal (Casamance)	Interna	Gobierno, grupo armado MFDC y sus diferentes facciones	1
	Autogobierno		↑
Somalia (Somalilandia-Puntlandia)	Interna	República de Somalilandia, región autónoma de Puntlandia, estado de Khatumo	1
	Territorio		=
Sudán	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Sudán – Sudán del Sur	Internacional	Sudán, Sudán del Sur	1
	Recursos, Identidad		=

6. A pesar de que Sáhara Occidental no es un Estado reconocido internacionalmente, se considera la tensión entre Marruecos y Sáhara Occidental como “internacional” y no como “interna” por tratarse de un territorio por descolonizar cuya pretendida pertenencia a Marruecos no es reconocida por el Derecho Internacional ni por ninguna resolución de Naciones Unidas.

7. Esta denominación hace referencia a la tensión internacional RDC-Rwanda-Uganda aparecida en ediciones anteriores del informe *Alerta!* Aunque comparten características similares, desde el informe *Alerta 2016* se analizan de forma separada RDC-Rwanda y RDC-Uganda.

8. Ibid.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
África			
Togo	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Túnez	Interna	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo el Batallón Uqba bin Nafi o Brigadas Oqba Ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS	2
	Gobierno, Sistema		↓
Uganda	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Zimbabwe	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
América			
Bolivia	Interna	Gobierno, oposición política y social (partidos políticos, autoridades y organizaciones de la sociedad civil de los departamentos orientales, colectivos indígenas)	1
	Gobierno, Autogobierno, Recursos		=
El Salvador	Interna	Gobierno, oposición política y social, Fuerzas de seguridad del Estado, pandillas (Mara Salvatrucha-13, 18 Revolucionarios, 18 Sureños)	2
	Gobierno		↓
Guatemala	Interna	Gobierno, oposición política y social, pandillas	1
	Gobierno		=
Haití	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, MINUSTAH, ex militares	1
	Gobierno		↓
Honduras	Interna	Gobierno, oposición política, movimientos sociales, bandas organizadas (narcotráfico, pandillas)	2
	Gobierno		↑
México	Interna	Gobierno, oposición política y social (organizaciones campesinas, indígenas, sindicatos, estudiantes), grupos armados de oposición (EZLN, EPR, ERPI, FAR-LP), cárteles.	2
	Sistema, Gobierno		↑
Perú	Interna	Gobierno, oposición armada (facciones remanentes de Sendero Luminoso), política y social (organizaciones campesinas e indígenas)	1
	Gobierno, Recursos		=
Venezuela	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		↑
Asia			
Bangladesh	Interna	Gobierno (Awami League), oposición política (partidos Bangladesh National Party y Jamaat-e-Islami), Tribunal para Crímenes Internacionales, grupos armados (Ansar-al-Islami, JMB)	2
	Gobierno		↓
China (Xinjiang)	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social	1
	Autogobierno, Sistema, Identidad		=
China (Tíbet)	Interna internacionalizada	Gobierno chino, Dalai Lama y Gobierno tibetano en el exilio, oposición política y social en el Tíbet y en provincias y países limítrofes	1
	Autogobierno, Identidad, Sistema		=
China – Japón	Internacional	China, Japón	1
	Territorio, Recursos		↓
Corea, RPD –EEUU, Japón, Rep. de Corea ⁹	Internacional	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia	3
	Gobierno		↑
Corea, RPD – Rep. de Corea	Internacional	RPD Corea, Rep. de Corea	2
	Sistema		↓
India (Assam)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB(ICS), KPLT, NSLA, UPLA y KPLT	2
	Autogobierno, Identidad		↓

9. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Asia			
India (Manipur)	Interna	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)	3
	Autogobierno, Identidad		↑
India (Nagalandia)	Interna	Gobierno, grupos armados NSCN-K, NSCN-IM, NSCN (K-K), NSCN-R, NNC, ZUF	1
	Identidad, Autogobierno		↓
India – Pakistán	Internacional	India, Pakistán	3
	Identidad, Territorio		↑
Indonesia (Papúa Occidental)	Interna	Gobierno, grupo armado OPM, oposición política y social (organizaciones autonomistas o secesionistas, indigenistas y de derechos humanos), grupos indígenas papús, empresa minera Freeport	1
	Autogobierno, Identidad, Recursos		=
Kirguistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados regionales, Tayikistán, Uzbekistán	1
	Sistema, Gobierno, Identidad, Recursos, Territorio		↑
Nepal	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Pakistán	Interna	Gobierno, oposición política y social, oposición armada (milicias talibán, milicias de partidos políticos), Fuerzas Armadas, servicios secretos	3
	Gobierno, Sistema		↓
Sri Lanka	Interna	Gobierno, oposición política y social, partidos políticos y organizaciones sociales tamiles	1
	Autogobierno, Identidad		=
Tailandia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		=
Tayikistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán	2
	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio		=
Uzbekistán	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, grupos armados regionales, Tayikistán, Kirguistán	1
	Gobierno, Sistema, territorio		↓
Europa			
Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	Internacional	Gobierno de Azerbaiyán, Gobierno de Armenia, Gobierno de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj	3
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↓
Belarús	Interna	Gobierno, oposición social y política	1
	Gobierno		↑
Bosnia y Herzegovina	Interna internacionalizada	Gobierno central, Gobierno de la República Srpska, Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina, alto representante de la comunidad internacional	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Chipre	Interna internacionalizada	Gobierno de Chipre, Gobierno de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Grecia, Turquía	1
	Autogobierno, Identidad, Territorio		↓
España (Cataluña)	Interna	Gobierno de España, Gobierno de Cataluña, partidos políticos independentistas y no independentistas, actores de la sociedad civil, poder judicial	1
	Autogobierno, Identidad		↑
Georgia (Abjasia)	Interna internacionalizada	Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Abjasia, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Georgia (Osetia del Sur)	Interna internacionalizada	Gobierno de Georgia, Gobierno de la autoproclamada República de Osetia del Sur, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		↑

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Europa			
Macedonia	Interna	Gobierno, oposición política y social	1
	Gobierno		↑
Moldova, Rep. de (Transnistria)	Interna internacionalizada	Gobierno de Moldova, Gobierno de la autoproclamada República de Transnistria, Rusia	1
	Autogobierno, Identidad		↓
Rusia	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición social y política, grupos armados, incluyendo ISIS	2
	Gobierno, Sistema		↑
Rusia (Chechenia)	Interna	Gobierno federal ruso, Gobierno de la República de Chechenia, grupos armados yihadistas (ISIS, Emirato Caucásico)	2
	Sistema, Gobierno, Identidad		↑
Serbia – Kosovo	Internacional ¹⁰	Gobierno de Serbia, Gobierno de Kosovo, representantes políticos y sociales de la comunidad serbia de Kosovo, UNMIK, KFOR, EULEX	1
	Autogobierno, Identidad, Gobierno		↑
Turquía	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, ISIS, organización de Fetullah Gülen	2
	Gobierno, Sistema		↓
Oriente Medio			
Arabia Saudita	Interna internacionalizada	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)	2
	Gobierno, Identidad		=
Bahrein	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno, Identidad		↑
Egipto	Interna	Gobierno, oposición política y social	3
	Gobierno		=
Irán	Interna	Gobierno, oposición política y social	2
	Gobierno		↑
Irán (noroeste)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados PJAK y PDKI, Gobierno Regional del Kurdistan (KRG)	2
	Autogobierno, Identidad		=
Irán (Sistán Baluchistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, grupos armados Jundollah (Soldados de Dios / Movimiento de Resistencia del Pueblo), Harakat Ansar Iran y Jaish al-Adl, Pakistán	2
	Autogobierno, Identidad		=
Irán – EEUU, Israel ¹¹	Internacional	Irán, EEUU, Israel	2
	Sistema, Gobierno		↑
Iraq (Kurdistán)	Interna internacionalizada	Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistan (KRG), Turquía, Irán, PKK	2
	Autogobierno, Identidad, Recursos, Territorio		↑
Israel – Siria – Líbano	Internacional	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia)	2
	Sistema, Recursos, Territorio		=
Líbano	Interna internacionalizada	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupo armado ISIS y Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra), Saraya Ahl al-Sham	3
	Gobierno, Sistema		↑
Palestina	Interna	ANP, Fatah, grupo armado Brigadas de los Mártires de al-Aqsa, Hamas y su brazo armado Brigadas Ezzedin al-Qassam, grupos salafistas	1
	Gobierno		=

10. La tensión entre Kosovo y Serbia se considera “internacional” ya que aunque su estatus legal internacional todavía no está claro, Kosovo ha sido reconocido como Estado por más de un centenar de países.

11. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear iraní.

Tensión	Tipología	Actores principales	Intensidad
			Evolución
Oriente Medio			
Yemen (sur)	Interna	Gobierno, grupos de oposición secesionistas y autonomistas del sur (entre ellos el Movimiento del Sur /Al-Hiraak al-Janoubi)	2
	Autogobierno, Recursos, Territorio		=

1: intensidad baja; 2: intensidad media; 3: intensidad alta.
 †: escalada de la tensión; ‡: reducción de la tensión; =: sin cambios.
 Las tensiones marcadas en negrita son descritas en el capítulo.

2.2. Tensiones: análisis de tendencias en 2017

En este apartado se analizan las tendencias generales observadas en los contextos de tensión sociopolítica a lo largo de 2017, tanto a nivel global como regional.

2.2.1. Tendencias globales

Durante 2017 se identificaron 88 escenarios de tensión a nivel mundial. Como en años anteriores, el mayor número de crisis sociopolíticas se concentró en África, con 37 casos, seguida de Asia (18), Europa (13), Oriente Medio (12) y América Latina (8). A pesar de que el número total de crisis socio-políticas es muy parecido al del año anterior (87), hubo variaciones significativas respecto de los casos que se incluyen en tal cifra, con casos que dejaron de ser considerados crisis-socio-políticas en 2017 por una reducción clara y sostenida de los niveles de tensión, como Indonesia (Aceh), Kazajstán, Tailandia-Camboya, Rusia (Ingushetia), Rusia (Kabardino-Balkaria). Por otro lado, hubo siete casos que se incorporaron al listado de crisis socio-políticas por el incremento de los niveles de violencia o movilización social –Camerún (Ambazonia/North West y South West), Marruecos, Togo, Belarús, España (Cataluña) e Irán – y otro caso más, el de China (Xinjiang), que hasta el año 2016 había sido considerado conflicto armado, pero que dejó de ser considerado como tal por la reducción de violencia que se experimentó durante los años 2016 y 2017.

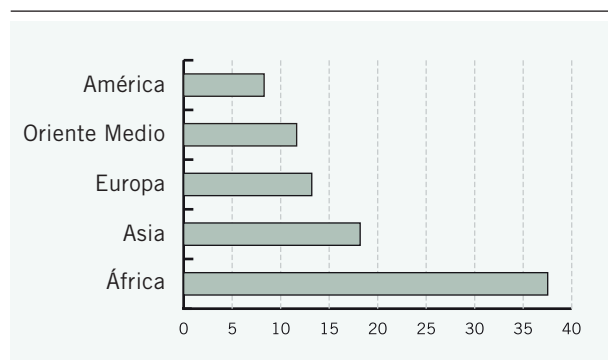
Si bien las situaciones de tensión pueden atribuirse a múltiples factores, el análisis del panorama de crisis en 2017 permite identificar tendencias en lo referido a sus principales causas o motivaciones. En línea con los datos observados en años precedentes, **a nivel global un 68% de las tensiones tuvieron entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos** –lo que propició conflictos para acceder o erosionar el poder– u oposición al sistema político, social o ideológico de los respectivos Estados. En América Latina, por ejemplo, todas las tensiones identificadas estuvieron vinculadas a alguna de estas dos variables. A su vez, **cerca de**

la mitad de las tensiones (45%) tuvieron como una de sus causas principales demandas de autogobierno y/o identitarias, pero este porcentaje fue claramente superior en regiones como Europa (casi el 70%) o Asia (más del 55%). Cabe destacar que en alrededor de una tercera parte de las tensiones (34%) las disputas por el control de territorios y/o recursos fueron un elemento especialmente relevante, si bien se trata de un factor que alimenta numerosas situaciones de tensión en grados diversos.

En línea con años anteriores, **algo más de la mitad de las tensiones en el mundo tuvieron un carácter interno (48 casos o un 54%)**, siendo especialmente paradigmático el caso de América Latina, en el que la práctica totalidad de los casos (excepto Haití) fueron de este tipo. Por otra parte, **casi una tercera parte de las tensiones a escala global fueron internas internacionalizadas (26 casos o un 30%)**, pero este porcentaje fue claramente superior en regiones como Europa (54% de los casos) u Oriente Medio (42%) y significativamente inferior en casos como África (19%) y América Latina (13%). Finalmente, **una sexta parte de las tensiones fueron internacionales (14 casos o un 16%)**, aunque en regiones como América Latina no se identificó ningún contexto de este tipo. En cuanto a la evolución de las tensiones, un 40% de los casos no experimentó cambios significativos, en un 18% de los casos se produjo una cierta mejoría y en el 42% restante de las crisis se registró un deterioro con respecto a 2016. Excepto en el caso de Asia, en todas las regiones del mundo hubo bastantes más casos en los que se registró un deterioro de la tensión que

Durante 2017 se identificaron 88 escenarios de tensión, 37 en África, 18 en Asia, 13 en Europa, 12 en Oriente Medio y ocho en América Latina

Gráfico 2.1. Distribución regional del número de tensiones en 2017



no una mejoría, siendo esta proporción especialmente significativa en África (16 casos que empeoraron por solamente cuatro que mejoraron), Europa (nueve y cinco respectivamente) y Oriente Medio (cinco y cero respectivamente). En términos agregados, el número de tensiones cuya situación empeoró dobló ampliamente a aquellas en las se registró una mejora de la situación.

Respecto de la intensidad de las crisis socio-políticas, durante 2017 casi la mitad de las mismas presentaron una intensidad baja (47%, un porcentaje claramente inferior al 54% que se registró en 2016), un tercio registró una intensidad media (el año pasado el porcentaje fue del 22%) y una quinta parte (18 casos) tuvo altos niveles de tensión, más de la mitad de las cuales en África. En términos comparativos con el año anterior, la cifra de tensiones graves se redujo ligeramente (un 20% en 2017 frente a un 24% en 2016) por la existencia de varios casos que en 2016 habían experimentado altos niveles de tensión, pero cuya situación desescaló durante el año 2017. Fue el caso de Túnez, El Salvador, Corea del Norte-Corea del Sur, India (Assam), Bangladesh, Turquía o Israel-Siria-Líbano. Sin embargo, también hubo tres escenarios que habían registrado niveles medios de tensión en 2016 cuyos niveles de conflictividad se incrementaron sustancialmente y fueron considerados de alta intensidad en 2017: Burkina Faso, Níger y Venezuela.

Las tensiones de mayor gravedad en 2017 en África fueron **Angola (Cabinda)** –donde se mantuvieron los enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas y el FLEC-FAC en el enclave de Cabinda y, además, se incrementó la tensión en el conjunto del país a raíz de las elecciones legislativas y presidenciales y de las movilizaciones y protestas vinculadas a demandas económicas y sociales–; **Burkina Faso** – donde se incrementaron notablemente los ataques por parte de grupos armados de corte yihadista, especialmente en el norte del país–; **Camerún (Ambazonia/ North West y South West)** –donde la proclamación en octubre de la República Federal de Ambazonia, que agrupa a dos regiones anglófonas, provocó un incremento sin precedentes de la violencia en las provincias de North West y South West y dejó al país al borde del conflicto armado–; **Etiopía** –donde prosiguió la que ha sido calificada como la mayor movilización antigubernamental de la última década como consecuencia de la represión de las protestas por parte del Gobierno, que comportó la muerte de cientos de personas y la detención otras 23.000 personas hasta finales de 2017–; **Etiopía (Oromiya)** –donde varios cientos de personas murieron como consecuencia del incremento de las operaciones por parte de la denominada Policía Liyu en la región de Oromiya, epicentro de las protestas contra el régimen

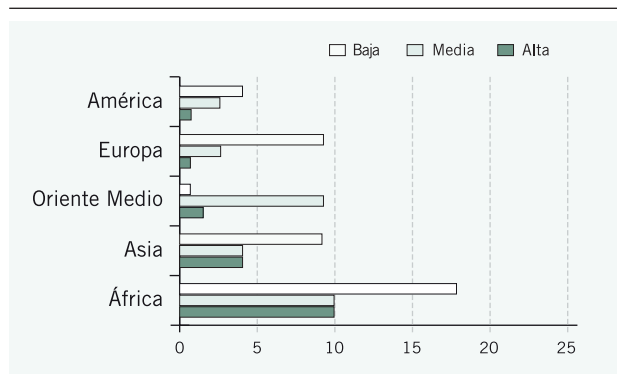
Un 68% de las tensiones tuvieron entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales implementadas por los respectivos gobiernos

Una quinta parte de las tensiones en todo el mundo fueron de alta intensidad, más de la mitad de las cuales en África

etíope iniciadas a finales de 2015 y que provocaron la muerte de cientos de personas–; **Kenya** –donde se vivió una grave y compleja situación de tensión y violencia en la que destacaban las movilizaciones políticas vinculadas a la celebración de las elecciones en 2017, las acciones del grupo armado islamista al-Shabaab, las operaciones contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, la creciente presencia de ISIS desde 2016 o los persistentes enfrentamientos de carácter intercomunitario–; **Mozambique** –donde, a pesar del avance en las negociaciones entre el Gobierno y el grupo opositor RENAMO, se incrementó notablemente la tensión a finales de año por el surgimiento en el norte del país de un grupo armado de inspiración islamista autodenominado al-Shabaab–; **Níger** – donde se incrementó la inseguridad en varias zonas fronterizas por los ataques de Boko Haram y otros grupos armados de inspiración yihadista–; **Nigeria** – donde persistió la campaña militar contra Boko Haram en el noreste, se incrementó la tensión entre el Estado y movimientos secesionistas en la región sureña de Biafra o se registraron numerosas acciones de violencia entre las comunidades ganaderas fulani y comunidades agrícolas en el cinturón central del país–; y **RDC** –donde confluyeron una notable escalada de la violencia en la región de Kasai y la grave crisis política y social a nivel nacional como consecuencia de la expiración del mandato del presidente Joseph Kabila.

Las tensiones de máxima intensidad en el resto de regiones fueron **Venezuela** –donde más de 120 personas murieron en el marco de las mayores protestas antigubernamentales de los últimos años–; **Corea, RPD–EEUU, Japón, Rep. de Corea** –donde se incrementó la tensión entre Corea del Norte y buena parte de la comunidad internacional a raíz de los avances en las capacidades nucleares y balísticas de Corea del Norte–; **India (Manipur)** –donde decenas de personas murieron en el marco del conflicto que enfrenta al Estado con varios grupos insurgentes manipuris–; **India-Pakistán** –donde se produjeron numerosos enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad de los dos países en la denominada Línea de Control que separa a los dos países–; **Pakistán** –donde se registraron episodios de violencia vinculados a varios ejes de tensión, incluyendo la crisis política que afecta al país y que provocó la renuncia del primer ministro, Nawaz Sharif–; **Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)** –donde decenas de personas murieron en 2017 a raíz de las violaciones del alto fuego e incidentes con armamento pesado en torno a la línea de contacto–; **Egipto** –donde persistió la represión a la oposición y a los medios de comunicación críticos– y **Líbano** –donde se vivió una compleja situación política derivada de las

Gráfico 2.2. Intensidad de las tensiones por regiones



consecuencias del conflicto armado en Siria y de la violencia en el seno de la comunidad palestina del país.

2.2.2. Tendencias regionales

Como en años previos, en 2017 **África** se mantuvo como principal escenario de las crisis socio-políticas a nivel global, albergando un 42%, una cifra relativamente parecida a la de años anteriores. Sin embargo, respecto del año anterior cabe destacar la inclusión de tres nuevos casos –Camerún (Ambazonia/North West y South West), Marruecos y Togo– en los que los niveles de conflictividad se incrementaron respecto del año 2016. Como se mencionó, **más de la mitad de las crisis de alta intensidad en todo el mundo –10 sobre un total de 18– se concentraron en el continente africano en 2017: Angola (Cabinda), Burkina Faso, Camerún, Etiopía, Etiopía (Oromiya), Kenya, Mozambique, Níger, Nigeria y RDC.** Respecto de las situaciones de máxima tensión del año anterior, la conflictividad política y social se redujo en Túnez, pero se incrementó en los casos de Burkina Faso –donde se observó escalada de los ataques por parte de grupos armados de corte yihadista que operan en la región del Sahel– y Níger –donde los ataques por parte de Boko Haram y otros grupos armados de corte yihadista motivó la creación de la fuerza contrainsurgente multinacional Sahel G5, conformada por Níger, Malí, Chad, Mauritania y Burkina Faso. En este sentido, cabe señalar que cerca de la mitad de las crisis sociopolíticas en África (16 casos) experimentaron un deterioro, mientras que solamente se observó una cierta mejora en la situación de tensión en tres: Gambia, África Central (LRA) –donde se observó una significativa reducción de la actividad armada por parte del LRA, a pesar de la continuación de las operaciones militares para desarticular al grupo en el triángulo formado entre la RCA, RDC y Sudán del Sur–, Mozambique –donde la tensión se redujo notablemente por la buena evolución de las negociaciones de paz entre RENAMO y FRELIMO y la primera reunión directa en los últimos años entre el presidente del país y el líder del antiguo grupo armado RENAMO¹² y Túnez, país en el que persistieron tanto la actividad de varios grupos armados como el clima de tensión política vinculado a los problemas económicos y sociales que ha tenido el

país en los últimos años, pero en el que se redujeron la intensidad y letalidad de los episodios de violencia respecto del año 2016.

Por otra parte, la gran mayoría de las tensiones en África fueron de carácter interno (65%), en líneas similares a años anteriores. Algo menos de una quinta parte de las crisis presentó elementos de internacionalización (19%), entre ellos la presencia y acción de actores foráneos, ya fueran actores armados no estatales de diverso tipo –como la organización armada al-Shabaab (procedente de Somalia) en Kenya–, las acciones de grupos yihadistas regionales o globales en Níger o Burkina Faso, la creciente consolidación de ISIS en países como Kenya, la presencia de tropas internacionales –como la ONUCI en Côte d’Ivoire– o la influencia de sectores de la diáspora –como por ejemplo en Eritrea o Rwanda. Solo seis de las 37 tensiones en África tuvieron un carácter internacional, la mayor parte de ellas en la región de Grandes Lagos, África Central y Cuerno de África: África Central (LRA), Eritrea-Etiopía, Marruecos-Sáhara Occidental, RDC-Rwanda, RDC-Uganda y Sudán-Sudán del Sur. Sin embargo, en ninguna de ellas se observó un incremento de la tensión durante el año 2017.

En cuanto a las causas de fondo de las tensiones, las crisis fueron de dimensión multicausal, en consonancia con la tendencia a nivel global. **Casi tres cuartas partes de las crisis sociopolíticas acontecidas en África (27 de los 37 casos, un 73%) estuvieron vinculadas a la oposición al gobierno** y en cuatro casos –Kenya, Mozambique, Níger y Túnez– también se observó una oposición al sistema. Tres de estos cuatro casos mencionados –Kenya, Mozambique y Níger– se cuentan entre las tensiones de mayor intensidad del continente, mientras que la restante, Túnez, también fue considerada una tensión de máxima intensidad del año anterior. Por otra parte, el 38% de las tensiones en África tuvo como una de sus causas principales las demandas identitarias y/o de autogobierno, siendo que en cuatro contextos –Camerún (Ambazonia/North West y South West), Eritrea, Etiopía (Oromiya) y Marruecos-Sáhara Occidental– confluyeron ambas variables. De entre éstas, cabe destacar especialmente la situación en Camerún, donde se produjo una movilización sin precedentes en las regiones de mayoría anglófona del país que desembocó incluso en la proclamación de la denominada República de Ambazonia –que incluye las regiones de North West y South West– y en los mayores niveles de confrontación política de los últimos años. Adicionalmente, cabe destacar que la lucha por el control de los recursos también fue un elemento relevante en África en más de una tercera parte (concretamente un 35%) de las tensiones en el continente.

En **Asia** se registraron 18 tensiones, dos menos que el año pasado. Por un lado, el conflicto en la región china de Xinjiang pasó a ser considerado como crisis sociopolítica (y no como conflicto armado) por la reducción clara y

12. Véase “Mozambique: segunda oportunidad para la paz” en el capítulo 5 (Oportunidades de paz para 2018).

sostenida de la violencia en los dos últimos años, a pesar de que numerosas voces sostienen que el Gobierno y determinada prensa afín a Beijing invisibilizan buena parte de los episodios de violencia que ocurren en la región también conocida como Turquestán Oriental o Uiguristán. Sin embargo, hubo otros tres casos que dejaron de ser considerados crisis socio-políticas por la disminución de los niveles de tensión en los últimos años: Indonesia (Aceh), Kazajstán y Tailandia-Camboya. **Los contextos de mayor intensidad en el continente fueron India (Manipur), Pakistán, India-Pakistán y la tensión entre varios países y Corea del Norte a raíz de su programa nuclear.** Además, en todos estos casos excepto en Pakistán, la situación se deterioró respecto del año anterior. Sin embargo, también cabe señalar que hubo varios contextos que en 2016 fueron considerados de alta intensidad –Bangladesh, India (Assam) y la disputa entre Corea del Norte y Corea del Sur– y en los que en 2017 se observaron niveles intermedios de tensión. Al contrario que en buena parte de las otras regiones del mundo, en las que hubo un porcentaje significativo de las tensiones en las que la situación se deterioró a lo largo de 2017, en el caso de Asia en casi la mitad de los casos (ocho) no se registraron cambios significativos, en una tercera parte (seis) se observó una mejora de la situación y solamente en cuatro casos se incrementaron los niveles de conflictividad: la disputa entre Corea del Norte y países como EEUU, Japón o Corea del Sur; India (Manipur), India-Pakistán y Kirguistán. Cabe señalar que, excepto en este último caso, el resto de contextos en los que la situación se deterioró en 2017 eran ya tensiones de alta intensidad.

Asia fue el continente con un mayor porcentaje de tensiones internacionales, tres de las cuales se situaban en Asia Nororiental, concretamente en la zona comprendida entre el Mar Amarillo y el Mar de China Oriental: la disputa entre China y Japón (principalmente acerca de las islas Senkaku/Diaoyu) y la tensión de Corea del Norte con su vecino del sur y también con varios países acerca de su programa armamentístico. La otra tensión internacional fue la disputa histórica entre India y Pakistán. Además, hubo un tercio de las tensiones en Asia que fueron internas pero con una clara dimensión internacional. En la mayor parte de estos casos, el principal factor de internacionalización de la disputa fue la presencia de grupos armados regionales, como en tres de los países de Asia Central –Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán– o bien los vínculos transnacionales de organizaciones armadas locales – como en la provincia china de Xinjiang o el estado indio de Assam. En el caso de la provincia china del Tíbet, la disputa tiene una dimensión internacional por la presencia del Gobierno tibetano en el exilio en el norte de India y por las movilizaciones de la diáspora tibetana, especialmente en varios países colindantes con China.

Asia fue el continente con un mayor porcentaje de tensiones internacionales, tres de las cuales se situaban en Asia Nororiental

En América Latina, Venezuela fue escenario de las protestas antigubernamentales más intensas de los últimos años

En cuanto a las causas de fondo, 10 de las 18 tensiones de la región estuvieron vinculadas a la oposición al sistema o al gobierno. En cuatro de ellas –Pakistán y las tres ex repúblicas soviéticas de Asia Central: Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán– coincidieron ambas variables, mientras que en otras tres –las provincias chinas de Tíbet y Xinjiang y la disputa entre Corea del Norte y Corea del Sur– solamente se identificó la oposición al sistema como una de los ejes fundamentales de la tensión. Por otra parte, otros 10 contextos (55%) estuvieron relacionados con las aspiraciones identitarias y/o demandas de autogobierno. Finalmente, el control de los recursos y el territorio también fue un factor presente en una tercera parte de las tensiones en Asia.

América, en línea con años anteriores, concentró el menor número de tensiones a nivel mundial, con un total de ocho casos en 2018 (9%). La mitad de las mismas fueron de baja intensidad, mientras solamente una de ellas – Venezuela, que en 2017 sufrió las mayores protestas y episodios de violencia de los últimos años– fue de alta intensidad. Sin embargo, **el hecho de que América Latina sea la región del mundo con un menor número de tensiones (y también de conflictos armados), así como el hecho de que las mismas suelen ser de intensidad baja o media, contrasta con la constatación de que varios de los países la región albergan algunas de las tasas de homicidios más altas del mundo.** De hecho, buena parte de las tensiones en América Latina sufren altos índices de homicidios, ya sea en términos relativos (como Honduras, El Salvador, Guatemala o Venezuela) o bien en términos absolutos (como México). Por otra parte, todas las tensiones en América Latina fueron de carácter interno, con la excepción de Haití, país en el que la MINUSTAH durante muchos años ha sido uno de los actores protagonistas de la situación de tensión política y social. Por otra parte, también cabe destacar los vínculos transnacionales de algunos actores (como las denominadas maras) en los países del llamado Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). De hecho, en algunos casos incluso podría considerarse que una única estructura (como la Mara Salvatrucha o la M18) tienen presencia estable en varios países de la región.

En cuanto a la evolución de las tensiones en América, en tres casos se observó un deterioro de la situación: Honduras, México y Venezuela. Honduras vivió la crisis sociopolítica más importante de los últimos años después de que la disputa sobre los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre provocara movilizaciones masivas en las que como mínimo una treintena de personas murieron. En México la tasa de homicidios se incrementó un 27% respecto del año anterior y alcanzó la cifra más alta en los últimos 20 años, según datos públicos, mientras que en Venezuela más de 120

personas murieron y más de 2.000 resultaron heridas en las protestas antigubernamentales que se registraron en la primera mitad del año. Por el contrario, en otros dos casos –El Salvador y Haití– se observó una reducción de la tensión. Cabe destacar especialmente el caso de El Salvador, que a pesar de ser el país centroamericano con mayores índices de violencia, redujo notablemente –un 25% aproximadamente– la tasa de homicidios respecto del año anterior, consolidando así la tendencia a la reducción en el número de homicidios de los dos últimos años. **Las ocho tensiones identificadas en América Latina tuvieron entre sus causas principales la oposición a políticas gubernamentales,** que se materializó en protestas de diversa intensidad y carácter, como las mencionadas en Venezuela o bien en Honduras. En algunos casos, ese factor se dio en combinación con otras causas, como las demandas de autogobierno (Bolivia) o las disputas en torno al acceso o uso de recursos (Bolivia, Perú).

En **Europa**, en línea con la tendencia de años anteriores, la inmensa mayoría de los casos de tensión (casi el 70%) fueron de baja intensidad, pero también fue el continente en el que se deterioró la situación en un mayor porcentaje de contextos de crisis. Concretamente, en nueve de las 13 tensiones se registró un agravamiento de la situación política y social. Cabe destacar especialmente la situación en Rusia, donde se registró un incremento de la actividad armada de organizaciones como ISIS o al-Qaeda y donde se agudizó notablemente la tensión política a raíz de las elecciones presidenciales de marzo de 2018, que motivaron las mayores protestas antigubernamentales de los últimos años. También en Rusia, en el marco del conflicto que enfrenta al Estado con varias organizaciones yihadistas en la república de Chechenia, se incrementaron la frecuencia y letalidad de los episodios de violencia –provocando la muerte de unas sesenta personas– y se produjo el mayor aumento en el número de secuestros desde la segunda guerra chechena de los años noventa. Además, en otros casos como España (Cataluña), que en 2016 no fue considerada como de tensión, la conflictividad política y social se agudizó notablemente. Por el contrario, hubo casos como las repúblicas caucásicas de Ingushetia o Kabardino-Balkaria, que dejaron de ser considerados tensión por la clara disminución de los niveles de conflictividad en comparación con los años anteriores. Cabe destacar también la disminución de las hostilidades armadas en el conflicto que enfrenta a Armenia y Azerbaiyán por el estatus del enclave de Nagorno-Karabaj, el de mayor intensidad en toda la región. A pesar de que más de 50 personas fallecieron como consecuencia de las violaciones del alto fuego e incidentes armados (algunos de ellos con armamento de gran calibre) en torno a la línea de contacto, la situación mejoró respecto del año anterior, en el que más de

En nueve de las 13 tensiones en Europa se registró un agravamiento de la situación política y social

De las 12 tensiones que se registraron en Oriente Medio, no hubo ni un solo caso en el que se observara una mejora de la situación respecto del año anterior

200 personas fallecieron a causa del conflicto, si bien continuaron los llamamientos de alerta por los riesgos de nuevas escaladas. Finalmente, respecto de las tensiones en Europa cuya intensidad disminuyó en 2017 cabe mencionar el caso de Turquía. A pesar de que se mantuvo el estado de emergencia y siguieron produciéndose episodios de violencia y graves y masivas violaciones de derechos humanos, la crisis disminuyó respecto del año 2016, en el que hubo un intento de golpe de Estado que provocó la muerte de más de 260 personas y en el que decenas de personas murieron por varios atentados reivindicados por el grupo armado ISIS.

En relación a las causas de fondo, cabe destacar que Europa fue la región en la que tuvieron una mayor incidencia las disputas vinculadas con las demandas identitarias y/o de autogobierno. Concretamente, casi el 70% de las mismas estuvieron vinculadas a estos factores, en sintonía con los años precedentes. Por otra parte, más del 60% de las crisis sociopolíticas en Europa tuvieron como una de sus causas principales la oposición de determinados colectivos a las políticas del Gobierno o bien al sistema en su conjunto. En los tres casos en los que registraron ambas variables (oposición al gobierno y oposición al sistema) –Rusia, Rusia (Chechenia) y Turquía–, se observó la presencia de grupos yihadistas que pretendían la instauración de sistemas políticos de corte confesional, como ISIS o Emirato Caucásico. Finalmente, cabe señalar que en el control del territorio fue un factor presente en dos de las tensiones más prolongadas de la región: la disputa entre el Gobierno de Chipre y la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre o el contencioso por la región de Nagorno-Karabakh entre Armenia y Azerbaiyán. **Más de la mitad de las tensiones en Europa fueron internas internacionalizadas, destacando el rol que gobiernos foráneos juegan en determinados contextos.** Algunos de los ejemplos más relevantes de la región serían el papel de Grecia y Turquía en el caso de Chipre o el de Rusia en algunas regiones autoproclamadas independientes en el marco de países que habían formado parte de la URSS: Abjasia y Osetia del Sur en Georgia o bien Transdniestria en la República de Moldova. Al menos de un tercio de los casos fueron tensiones internas, mientras que dos casos fueron considerados tensiones internacionales: Armenia-Azerbaiyán (Nagorno-Karabakh) y Serbia-Kosovo.

Por último, en **Oriente Medio** se registraron 12 tensiones, una cifra parecida a la del año anterior pero que incorporó el caso de Irán por el incremento de la tensión que se vivió a finales de 2017. En tales fechas, se registraron importantes movilizaciones por cuestiones económicas –como los precios, el desempleo o la corrupción– que adquirieron un carácter más político y que se convirtieron en una

de las mayores crisis sociales de la década, pues numerosas personas murieron y más de un millar fueron arrestadas. Cabe destacar que Oriente Medio fue la región del mundo con menor número y porcentaje de tensiones de baja intensidad (solamente un caso, que significa el 8%). La mayor parte de los casos fueron de intensidad media, mientras que hubo dos casos con altos niveles de tensión: Egipto y Líbano. A pesar de que hubo solamente estos dos casos de alta intensidad, es importante reseñar que no hubo ni un solo caso en el que se observara una mejora de la situación respecto del año anterior. En siete casos la situación permaneció en niveles parecidos a los del año anterior, mientras que en otros cinco casos la tensión aumentó: Bahrein –donde se incrementaron las manifestaciones y los episodios de violencia, que provocaron la muerte de varias personas, y se agudizó la persecución a sectores opositores–; el mencionado caso de Irán; Irán-EEUU, Israel –donde se volvió a incrementar sustancialmente la tensión tras la posibilidad expresada por el Gobierno de EEUU de revisar el acuerdo nuclear del año 2015–; Iraq (Kurdistán) –donde se intensificó la tensión entre el Gobierno central y el Gobierno Regional del Kurdistán a raíz de la celebración de un referéndum de independencia en la región kurda, y que provocó la reacción de países como Irán o Turquía–; o Líbano, país en el que aumentó la letalidad de los numerosos episodios de violencia ocurridos en el país, principalmente vinculados a la acción de las fuerzas de seguridad libanesas contra varios grupos armados que operan en la frontera con Siria, así como a las operaciones de Hezbollah contra estos mismos grupos a ambos lados de la frontera y en estrecha cooperación con el Gobierno sirio.

La situación en la zona se caracterizó por su complejidad en cuanto a las causas de las disputas. **Un 58% de las tensiones (siete casos) tuvo entre sus causas principales la oposición a las políticas internas o internacionales del gobierno o al sistema.** En la mitad de las crisis (seis casos) el factor de demandas identitarias y/o de autogobierno fue también una de las motivaciones destacadas. Asimismo, como en otras regiones, también la dimensión de disputa por los recursos y/o territorio fue una de las causas principales en una cuarta parte de los casos, si bien este elemento alimentó en diverso grado muchas situaciones. Por otra parte, cinco de las tensiones en la región fueron de carácter interno y dos de carácter internacional: la disputa entre Irán y EEUU e Israel en torno al programa nuclear iraní, a pesar de la firma del acuerdo nuclear en 2015, y el caso de Israel-Siria-Líbano, vinculado a las dinámicas y consecuencias regionales de los conflictos en Siria y en Israel-Palestina, así como al rol desempeñado tanto por Israel como por Siria en Líbano. Entre los elementos de internacionalización de las cinco tensiones internas internacionalizadas en Oriente Medio se cuentan la presencia de grupos de adscripción regional o internacional (como ISIS en Líbano; AQPA en Arabia Saudita) o grupos locales con bases en el exterior o que lanzan ataques desde el exterior (PJAK y PDKI en Irán, entre otros) o la implicación de gobiernos externos,

como el rol que juegan países como Irán o Turquía en la tensión que afecta a la región kurda en Iraq.

2.3. Tensiones: evolución anual

2.3.1. África

África Austral

Mozambique	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna
Actores:	Gobierno, partido político RENAMO, milicias RENAMO, grupo armado islamista al-Shabaab

Síntesis:

El golpe de Estado contra la dictadura portuguesa en 1974 y la guerra de guerrillas llevada a cabo por la insurgencia de origen marxista-leninista FRELIMO condujeron a Mozambique a la independencia de Portugal en 1975. Desde entonces, Mozambique se vio afectado por una guerra civil que enfrentó al Gobierno de FRELIMO contra el grupo armado RENAMO, apoyado por las minorías blancas gobernantes en Rhodesia (antigua Zimbabue) y la Sudáfrica del *apartheid*, en el contexto de la Guerra Fría. Además, el país se vio afectado por una grave hambruna y una pésima gestión económica. En 1992 las partes alcanzaron un acuerdo de paz, visto como un ejemplo de reconciliación, mediado por la Comunidad de Sant'Egidio, que puso fin a 16 años de guerra, un millón de víctimas mortales y cinco millones de desplazados, dando paso a una etapa de estabilidad política y desarrollo económico aunque con elevados niveles de desigualdad en el país. El líder de RENAMO, Afonso Dhlakama, ha sido incapaz de convertir su partido en una plataforma organizada y estructurada con aspiraciones de alcanzar el poder y desde las primeras elecciones en 1994 hasta la actualidad, ha ido perdiendo cuota de poder político en detrimento de FRELIMO y otros partidos, como el MDM (escisión de RENAMO). En paralelo, las crecientes acusaciones de fraude e irregularidades en los sucesivos procesos electorales, algunas corroboradas por observadores internacionales, han ido acompañadas por un creciente autoritarismo y represión de la oposición, así como de la apropiación del Estado (además de los medios de comunicación y la economía) por parte de FRELIMO. RENAMO condicionó en 2013 la continuidad de su participación en la vida política a una serie de reformas, principalmente la reforma de la comisión electoral nacional y un reparto equitativo de la riqueza del país, amenazando con la retirada de su firma del acuerdo de paz de 1992.

Las tensiones entre el Gobierno mozambiqueño y el principal grupo opositor RENAMO se redujeron ostensiblemente durante el año, debido a la evolución positiva de las negociaciones de paz. No obstante, en octubre se produjo una escalada de la violencia política por el surgimiento de un grupo armado de carácter islamista en Cabo Delgado. El origen de la tensión entre RENAMO y FRELIMO deriva de la crisis surgida tras las elecciones presidenciales y legislativas

de 2014 y la demanda del grupo opositor de gobernar en las seis provincias del centro y norte del país donde obtuvieron la mayoría de votos en los comicios. A finales de 2016 el presidente Felipe Nyusi, presidente del país, y Afonso Dhlakama, líder del antiguo grupo armado y actual partido político opositor RENAMO, mantuvieron una conversación telefónica que sirvió para acercar posturas, lo que llevó a que la oposición declarase una tregua unilateral hasta principios de año para que la población mozambiqueña pudiera recibir el año nuevo en un clima de paz. Dhlakama prorrogó durante el año esta tregua, lo que permitió el avance de las negociaciones de paz durante el año. En julio el Gobierno retiró las tropas de ocho posiciones cercanas a las montañas Gorongosa, el feudo de RENAMO, tal y como RENAMO había exigido en junio para proseguir con las negociaciones. En agosto Nyusi y Dhlakama celebraron su primera reunión directa desde 2015. La reunión tuvo lugar en el feudo de RENAMO situado en el distrito montañoso de Gorongosa. La reunión pretende impulsar el proceso de paz. RENAMO señaló que el proceso de descentralización debía presentarse en el Parlamento en diciembre, antes de que se celebren las elecciones locales de 2018. Además, Dhlakama en una entrevista publicada el 31 de agosto destacó que firmaría un acuerdo de paz con el Gobierno a finales de noviembre para poner fin a la disputa que tuvo lugar en las elecciones de 2014.

Sin embargo, **el país sufrió una escalada de la tensión en octubre, cuando un grupo supuestamente islamista llevó a cabo un ataque en la región de Cabo Delgado, en el extremo norte del país.** El grupo, que se autodenominaba al-Shabaab, como su homónimo de Somalia, atacó tres comisarías en la localidad costera de Mocimboa da Praia causando la muerte de dos policías, y la respuesta gubernamental causó 14 víctimas mortales, miembros del grupo, incluyendo la muerte de un líder comunitario. Aunque el gobernador de la provincia afirmó que la situación había retornado a la calma, durante el mes de octubre se produjeron nuevas acciones en otras localidades de la zona. Los atacantes supuestamente no tienen conexión con el grupo somalí, y promovían un discurso similar al de otros grupos islamistas del continente, exigiendo la imposición de la Sharia en la región, la no escolarización secular de los menores y el rechazo al pago de impuestos estatales. El grupo está formado por jóvenes mozambiqueños que han estudiado en escuelas coránicas de Sudán y Arabia Saudita y profesan el wahabismo, según medios locales. Según el centro de estudios ACLED existen similitudes entre este ataque y otros conflictos abiertos en el país, ya que Cabo Delgado es una región rica en recursos naturales y el Gobierno ha hecho importantes inversiones para desarrollar la capital, Pemba, para ampliar la explotación de gas offshore, pero el resto de la región se mantiene en un elevado nivel de pobreza y no se ha beneficiado del boom económico que vive en país desde los años 2000.

Los niveles de violencia en Mozambique aumentaron a partir de octubre de 2017 por el surgimiento de un grupo armado de carácter islamista en Cabo Delgado

A medida que ha aumentado la violencia en Cabo Delgado, las conversaciones de paz entre RENAMO y FRELIMO han conducido a una reducción significativa de las acciones bélicas entre los grupos. Cabo Delgado es un feudo de apoyo gubernamental, ya que ha entablado fuertes relaciones con las organizaciones islámicas del país. Según análisis de ACLED, aunque este brote de violencia puede que no tenga recorrido a largo plazo, es indicativo del fracaso de FRELIMO en corregir los agravios de las periferias del país.

África Occidental

Burkina Faso	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política, fuerzas de seguridad del Estado, sociedad civil, grupos armados que operan en la región del Sahel, G5 Sahel, Francia

Síntesis:

Burkina Faso, antigua colonia francesa, se ha enfrentado desde su independencia en 1960 a diversos golpes militares y numerosos retos socioeconómicos, en un país sin salida al mar y vulnerable a la volatilidad de los precios globales de materias como el algodón. La etapa bajo la presidencia de Blaise Compaoré, quien tomó el poder mediante golpe militar en 1987 y que ganó sucesivas elecciones, afrontó progresivamente numerosos ejes de tensión, vinculados al déficit de derechos humanos, a las alegaciones de participación del país en conflictos de países vecinos, al alza de precios y deterioro del nivel de vida de la población y a las críticas a los intentos del presidente por perpetuarse en el poder. En 2011 se incrementaron las protestas y se produjeron diversos motines militares, generándose una grave crisis de desconfianza entre el Gobierno y sectores diversos. A finales de 2014 Compaoré abandonó el poder tras amplias protestas ciudadanas contra los planes del presidente de eliminar los límites a su mandato presidencial y tras la toma de poder del Ejército. Ante el rechazo social al golpe militar, se dio paso a un proceso de transición bajo liderazgos compartidos, incluyendo las Fuerzas Armadas. A finales de 2015, y tras la celebración de elecciones, el país cerró el periodo transicional y devolvió las instituciones a la ciudadanía. No obstante, en los últimos años se ha producido una escalada de las acciones de la militancia islamista armada en el norte del país.

La llegada a la presidencia en noviembre de 2015 de Roch Marc Christian Kaboré **dio comienzo a una nueva etapa en el país, cerrando el período de transición iniciado con la caída de Blaise Compaoré a finales de 2014. No obstante, 2017 se caracterizó por la continuación de la escalada de los ataques provenientes de grupos armados de corte yihadista que operan en la región del Sahel que ya se había experimentado en 2016.** Así, durante el año se registraron diferentes incidentes que agravaron la situación de seguridad

nacional. El grave atentado de enero de 2016 (ataque a hotel en la capital, Ougadougou, que causó la muerte de 3 islamistas y 30 civiles) contribuyó a dinamizar los esfuerzos regionales y el despliegue del grupo regional de lucha contra terrorismo denominado G-5 Sahel group, conformado por Burkina Faso, Mauritania, Malí, Níger y Chad, países que crearon la fuerza de acción rápida regional en mayo de 2017. Durante el año las tropas francesas, malienses y burkinabesas llevaron a cabo acciones conjuntas. Francia a finales de abril ejecutó o capturó a una veintena de combatientes cerca de la frontera entre Burkina y Malí. El 2016 acabó con una escalada de las acciones con un ataque en la frontera entre Burkina Faso y Níger, donde un grupo armado atacó a las fuerzas de seguridad burkinesas en la gendarmería de Nassoumbou, matando a 12 soldados. Este ataque fue reivindicado por un nuevo grupo asociado a al-Qaeda y a Ansar Dine, Ansarul Islam.

Así, durante el año persistieron las acciones por parte de la insurgencia contra las Fuerzas Armadas y la población civil generando un clima de inseguridad en el norte, principalmente en la provincia de Soum, fronteriza con Malí, y en menor medida en la norteña Oudalan y otras provincias fronterizas occidentales como Kossi o Sourou, donde también se constataron acciones insurgentes. Cabe destacar el atentado que tuvo lugar en agosto en Ouagadougou, el primero desde enero de 2016, en el que dos supuestos militantes islamistas irrumpieron en un café en el que ejecutaron a 19 personas antes de ser tiroteados por las fuerzas de seguridad. Ningún grupo reivindicó el atentado. En diciembre, tras la Cumbre del Clima celebrada en París, se reunieron los presidentes del G5 Sahel y de Francia junto a la canciller alemana, el primer ministro italiano, el ministro saudí de Exteriores y el presidente de la Comisión de la UA con el objetivo de discutir la financiación de la fuerza conjunta antiterrorista, que se eleva a 450 millones de euros, de los que se estima que a finales de 2017 se habían recabado dos tercios del total, destacando las contribuciones de Arabia Saudita (100 millones de dólares), EAU (30 millones de dólares) y una ayuda bilateral de 60 millones de dólares de EEUU a los países miembros del G5 Sahel. En octubre la misión llevó a cabo el lanzamiento de su primera operación en las fronteras de Malí, Burkina Faso y Níger, y se estima que la fuerza conjunta G5 Sahel estará plenamente operativa durante el primer semestre de 2018 y contará con 5.000 soldados pertenecientes a los cinco países miembros.

Camerún (Ambazonia/North West y South West)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interno
Actores:	Gobierno, oposición política y social de las provincias anglófonas de North West y South West, grupos armados ADF, SOCADEF y SCDF

Síntesis:

Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Camerún quedó bajo el mandato de la Sociedad de Naciones y se dividió entre el Camerún francés y el Camerún británico. En 1961 los dos territorios del Camerún británico celebraron un plebiscito en el que se limitaba su autodeterminación a la unión con la ya independiente República de Camerún (antiguo Camerún francés) o a la unión con Nigeria. La parte sur del Camerún británico decidió unirse a la República del Camerún, mientras que el norte prefirió adherirse a Nigeria. Una reunificación mal conducida en los años sesenta, basada en la centralización y la asimilación, ha llevado a la minoría anglófona del antiguo sur del Camerún británico (20% de la población del país) a sentirse marginada política y económicamente por parte de las instituciones del Estado, controlado por la mayoría francófona. Sus frustraciones se incrementaron a finales de 2016 cuando una serie de agravios sectoriales se transformaron en demandas políticas, lo que provocó huelgas, disturbios y una escalada creciente de la tensión y de la represión gubernamental. Este clima ha contribuido a que una mayoría de la población de la región exija un nuevo estatus político de carácter federal sin excluir la secesión de la región. Esta movilización ha comportado el resurgir de los movimientos identitarios que datan de los años setenta. Estos movimientos exigen un retorno al modelo federal que existió entre 1961 y 1972. La confianza entre los activistas anglófonos y el Gobierno se ha visto socavada por el arresto de las principales figuras del movimiento federalista en enero de 2017, que ha dado alas a sectores favorables a la lucha armada como única vía para alcanzar la independencia. Desde entonces, las dos regiones anglófonas han vivido huelgas generales, boicots escolares y violencia esporádica. A partir de la declaración de independencia el 1 de octubre y la subsiguiente represión gubernamental para sofocar el movimiento secesionista, se ha producido una escalada de las actividades insurgentes.

Camerún sufrió durante el año una escalada de la tensión que dejó al país al borde del conflicto abierto.

La crisis afloró en la segunda parte de 2016, con protestas sectoriales de abogados (por el despliegue de jueces francófonos, decisión percibida como un intento de eliminar la identidad anglófona), docentes y estudiantes. Estas protestas derivaron en la demanda de transformaciones políticas de fondo tendentes a dar un mayor grado de autonomía a las regiones de mayoría anglófona del país, las provincias de North West y South West, ante el subdesarrollo de la región, su falta de representación política y la erosión percibida de una herencia cultural anglófona. Las protestas de octubre de 2016, ignoradas en un primer momento y posteriormente reprimidas por la fuerza y tachadas de extremistas, fueron acompañadas de la detención de centenares de opositores, entre ellos diversos líderes de los movimientos independentistas. Los meses de noviembre de 2016, enero y febrero de 2017 fueron meses intensos en protestas, que vinieron seguidos de la escalada de la respuesta gubernamental. A principios de año el Gobierno cortó el acceso a internet en la región de mayoría anglófona durante tres meses, argumentando que las redes sociales se estaban utilizando para instigar los disturbios. La respuesta social combinó una campaña de desobediencia civil de seis meses de huelgas generales y boicots escolares que significaron todo un año escolar perdido. Aunque el Gobierno camerunés llevó a cabo algunas medidas para distender la situación (retirada de cargos y

liberación de los líderes anglófonos detenidos en enero), la declaración de independencia el 1 de octubre y la proclamación de la República Federal de Ambazonia, que agrupa a las dos regiones anglófonas, aceleraron los acontecimientos. En vísperas del 1 de octubre (fecha en que se conmemora el Día de la Unificación camerunesa), el Gobierno realizó un intenso despliegue de cuerpos de seguridad, impuso restricciones de circulación y reunión y cortó el acceso a las redes sociales. Decenas de miles de personas se manifestaron y el 1 de octubre proclamaron la independencia de la región, conocida como Ambazonia, lo que contribuyó a alimentar una respuesta represiva del Gobierno central, día en el que se produjeron decenas de muertes como consecuencia de la intervención represiva. Los movimientos secesionistas formaron un gobierno interino, nombraron a Julius Ayuk Tabe como nuevo presidente interino y éste nombró a su gabinete en el exilio.

La represión y el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad de Camerún provocaron decenas de víctimas mortales y exacerbaron los llamamientos a promover la secesión de ambas regiones respecto de Camerún. Aunque en octubre hubo varios llamamientos al diálogo por parte del Gobierno central, entre noviembre y diciembre se produjo un incremento significativo de la violencia en estas regiones. Los militantes secesionistas llevaron a cabo diversos ataques a puestos de control y se produjeron explosiones, incendios de colegios y operaciones de búsqueda de armas en domicilios de supuestos miembros del movimiento secesionista, algunos de los cuales se encontraban en búsqueda y captura. En el campo de la insurgencia, se produjo el reclutamiento de combatientes y se organizaron campos de entrenamiento en las zonas fronterizas con Nigeria, y surgió una proliferación de pequeñas milicias que han llevado a cabo ataques a pequeña escala y otras tres milicias con una mayor envergadura, la Ambazonia Defence Forces (ADF) liderada por Ayaba Cho Lucas y Ben Kuah, las Southern Cameroons Defence Forces (SOCADEF) lideradas por Ebenezer Derek Mbongo Akwanga, y el grupo homónimo Southern Cameroons Defence Forces (SCDF) liderado por Nso Foncha Nkem. La violencia no se circunscribió a las provincias de North West y South West sino que también alcanzó la capital, Yaoundé. A principios 2018 el presidente, Ayuk Tabe, y otros seis miembros de su Gobierno interino fueron detenidos en Nigeria y permanecen en custodia en un hotel de Abuja. En los últimos meses del año las relaciones bilaterales entre Nigeria y Camerún se tensionaron ante la huida hacia Nigeria de miles de cameruneses como consecuencia de la violencia. En diciembre tropas camerunesas penetraron en territorio nigeriano en persecución de los rebeldes sin la autorización nigeriana, lo que derivó en un conflicto diplomático entre ambos países. El think tank ICG hizo un llamamiento

La represión y el uso excesivo de la fuerza contra el movimiento secesionista por parte de las autoridades de Camerún provocó un aumento de los partidarios de la lucha armada para alcanzar la secesión

a implementar reformas y promover un diálogo inclusivo y de alto nivel promovido por la ONU o la UA.

Níger	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados internos y externos (región del Sahel)

Síntesis:

En el año 2009 un golpe de Estado acabó con el Gobierno de Mamadou Tandja, después de que éste iniciara una serie de reformas constitucionales para mantenerse en el poder. Posteriormente, las elecciones de enero y marzo de 2011 restauraron el sistema democrático en el país después de que la Junta Militar cumpliera con el calendario establecido para el retorno del poder a la sociedad civil. Pese a la normalización de la situación en el país persiste la inestabilidad generada por la creciente presencia de células del grupo armado argelino AQMI y otros grupos armados que operan en la región de Sahel así como la extensión del conflicto que afecta a la región del Lago Chad como consecuencia de las actividades del grupo armado nigeriano Boko Haram.

Durante el año se mantuvo el clima de inseguridad en varias regiones fronterizas del país debido a ataques provenientes de grupos armados de corte yihadista.

La región sureña de Diffa, fronteriza con Nigeria, siguió padeciendo los ataques de la insurgencia nigeriana de Boko Haram.¹³ El Gobierno acordó el 4 de mayo la creación la fuerza militar conjunta contra insurgente Sahel G5 junto con otros países de la región (Malí, Chad, Mauritania y Burkina Faso) y que entraría en acción a finales de año. La fuerza conjunta Sahel G5 llevó a cabo su primera operación en la zona fronteriza entre Malí-Níger-Burkina Faso entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre, involucrando tropas de los tres países. La continuidad de los ataques de Boko Haram (BH) obligó al Gobierno a extender el estado de emergencia en la región durante todo el año, el cual había sido decretado dos años antes. Entre las acciones más relevantes del año, cabe destacar la muerte de 57 combatientes de BH en Gueskerou en abril a manos de tropas chadianas y nigerianas y de 39 combatientes de BH cerca de Barwa, en la región de Diffa, en agosto, a manos de tropas nigerinas. La derrota de BH en su feudo en Sambissa implicaba que en el futuro la situación en Níger dependería del grado de reorganización del grupo en Borno, estado de Nigeria. En octubre, Chad completó la retirada de sus tropas de la región de Diffa anunciada a finales de septiembre, oficialmente para reforzar su presencia en el norte de Chad, por lo que

13. Véase el resumen sobre región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

el Gobierno nigerino decretó que la región de Diffa se había convertido en una zona prohibida a la presencia occidental, temiendo que se cometieran secuestros.

Por otro lado, las zonas fronterizas con Burkina Faso y Malí (regiones de Tillabéri y Tahoua), al oeste del país, también sufrieron durante diversos momentos del año la presión de diferentes movimientos armados vinculados con al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y otros grupos de corte yihadista. El Gobierno decretó el estado de emergencia en la zona el 3 de marzo y lo fue renovando durante el año. En este sentido, cabe destacar que en marzo se dio a conocer que AQMI, Ansar Dine, Macina Liberation Front y al-Mourabitoun habían fusionado sus organizaciones creando “Jama’at Nusrat al-Islam wal Muslimeen, o Nusrat al-Islam (Apoyo al Islam y a los Musulmanes), bajo el liderazgo de Iyad -Ag Ghali, hasta entonces líder de Ansar Dine. Estas organizaciones siguieron activas llevando a cabo ataques y emboscadas en las áreas rurales en la zona fronteriza con Malí. A finales de 2016 se constató la presencia de ISIS en la misma área, también teniendo como objetivo patrullas policiales, cuestión que se constata desde 2014 cuando algunas facciones de AQMI prometieron lealtad a ISIS. Una de las acciones más destacadas del yihadismo en esta zona fue la emboscada perpetrada por Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS) el 4 de octubre en la localidad de Tongo Tongo, en la región de Tillabéri, contra una patrulla militar conjunta de Níger y EEUU, en la que murieron cinco soldados nigerinos y cuatro estadounidenses, y el 21 de octubre murieron 13 gendarmes en una emboscada en la gendarmería de Ayrou, en la región de Tillabéri. Cabe reseñar que el Gobierno y EEUU alcanzaron un acuerdo el 2 de diciembre por el que se autorizaba a EEUU llevar a cabo ataques con aviones no tripulados contra los grupos armados en el país.

Nigeria	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Recursos, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política, comunidades cristianas y musulmanas, ganaderas y agrícolas, milicias comunitarias, IMN, IPOB, MASSOB

Síntesis:

Desde 1999, año en el que el poder político volvió a manos civiles después de sucesivas dictaduras y golpes de Estado, el Gobierno no ha logrado establecer un sistema democrático estable en el país. Todavía persisten grandes diferencias económicas y sociales entre los diferentes estados que conforman Nigeria por la falta de descentralización y entre las diferentes capas sociales, hecho que fomenta la inestabilidad y los estallidos de violencia. Igualmente, las fuertes divisiones interreligiosas, interétnicas y políticas

alimentan la persistencia de la violencia en todo el país. La falta de transparencia y la corrupción en el terreno político son otros de los grandes lastres para la democracia en Nigeria. Las prácticas mafiosas y el recurso al asesinato político como estrategia electoral han impedido el libre ejercicio del derecho a voto de la población, aumentando el descontento y las prácticas fraudulentas.

Persistió el elevado clima de inestabilidad y violencia en diversas regiones del país, destacando la campaña militar contra Boko Haram en el noreste¹⁴, **las acciones de violencia de las comunidades ganaderas fulani contra comunidades agrícolas en el cinturón central del país (middle belt)** y **las crecientes tensiones y reactivación de la violencia en el Delta del Níger y en la región de Biafra**, lo que contribuyó a deteriorar la situación de seguridad en el conjunto del país. Por último, la marcha a Reino Unido del presidente Buhari por enfermedad entre junio y agosto fue un factor de fragilidad. La violencia intercomunitaria entre pastores nómadas procedentes del norte de Nigeria y las comunidades agrícolas del centro y sur del país continuó presente, siguiendo la tendencia de los últimos años, sobre todo coincidiendo con la temporada seca, entre septiembre y mayo, que provoca el desplazamiento de comunidades ganaderas hacia el sur del país incrementando la presión sobre los recursos y suponiendo un factor de inestabilidad. Desde el año 2011, según un informe del think tank ICG de septiembre, se han producido unas 2.000 víctimas mortales al año, y en el año 2016 murieron aproximadamente 2.500 personas como consecuencia de los enfrentamientos y las represalias. Las reacciones de los estados sureños a estas incursiones no han sido conciliadoras y, en este sentido, a finales de 2016 el estado de Bayelsa rechazaba una ley federal para establecer reservas para pastoreo en todo el país, y los estados de Abia y Ekiti aprobaron leyes anti-pastoreo. El Gobierno, poco activo para intentar frenar la evolución de la situación, según el ICG, intentó hacer frente a la persistencia de la violencia durante el año llevando a cabo consultas con líderes fulani. Con el inicio de la nueva estación seca en septiembre se reactivaron los conflictos. El 31 de octubre el estado de Benue introdujo una ley similar a los estados de Abia y Ekiti, con el objetivo de desalentar nuevos ataques pero a la vez provocó un éxodo de la comunidad fulani de ese estado hacia los vecinos Nasarawa y Cross River, lo que comportó que a su vez, el estado de Taraba también considerara la aprobación de una legislación similar en 2018. Estados sureños como Delta, Abia y Ogun, se vieron también afectados por las actividades de las milicias fulani. En diciembre el vicepresidente Osinbajo se reunió con líderes fulani para intentar frenar la escalada de la violencia.

En la región sureña de Biafra las tensiones entre el Estado y los movimientos pro secesionistas, reiniciadas en agosto de 2015 por la detención del líder secesionista Nnamdi Kanu, líder de Indigenous People of Biafra (IPOB), se incrementaron a lo largo del año. Se llevaron a cabo acciones y movilizaciones de cara a la celebración

14. Véase el resumen sobre región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

del 50° aniversario de la guerra secesionista de Biafra. Los cuerpos de seguridad intervinieron con dureza para reprimir las acciones del movimiento secesionista de Biafra, agravando el clima de abusos contra los derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil de Biafra convocaron un parón el 30 de mayo para conmemorar el mencionado 50° aniversario, que fue secundado en los estados del sudeste. Ello vino acompañado de un incremento del rechazo contra la comunidad igbo en el resto del país, hasta el punto de que el 6 de junio 16 organizaciones juveniles del norte denunciaron el parón y exigieron a la comunidad igbo esparcida por el norte que lo abandonara antes del 1 de octubre. Este ultimátum fue condenado por numerosos líderes del norte, sin embargo, ocho organizaciones activistas del Delta exigieron el 10 de junio que el gobierno reasignara los bloques petroleros de los norteños al pueblo del delta del Níger y que todos los norteños abandonaran la región antes del 1 de octubre. El 14 de septiembre el Ejército asaltó la residencia de Nnamdi Kanu, líder de Indigenous People of Biafra (IPOB) en Umuahia, la capital del estado de Abia, y aunque el Ejército negó haberle retenido, a principios de 2018 permanecía desaparecido. Además, el 20 de septiembre el Gobierno declaró IPOB organización terrorista.

Aumentaron las tensiones en la región de Biafra entre el Gobierno y los movimientos secesionistas en el marco de la celebración del 50° aniversario de la declaración de la República de Biafra

La escalada de la violencia que afectó la región sureña del Delta del Níger en 2016 persistió durante 2017.

Con la llegada del presidente Buhari al poder, en mayo de 2015, hubo un cambio de enfoque en las políticas hacia el Delta, así como una reducción del presupuesto para implementar los acuerdos de paz impulsados desde 2009 (DDR, programa de amnistía) lo que sumado a los pocos avances en hacer frente al subdesarrollo y las desigualdades en la región provocaron una escalada de la violencia desde 2016.

Así, durante el año se produjeron numerosos actos de criminalidad contra los oleoductos y diversos grupos armados amenazaron durante todo el año con reanudar los ataques contra las infraestructuras petroleras, e incluso hubo acciones esporádicas por parte de los grupos insurgentes que fueron reprimidas causando decenas de víctimas mortales durante todo el año. La organización del Delta, el Pan-Niger Delta Forum (PANDEF) instó durante todo el año a poner en marcha las medidas que habían propuesto en noviembre de 2016 al presidente Buhari y en agosto el presidente en funciones Osinbajo se reunió con el PANDEF para discutir los planes del Gobierno federal para desarrollar la región, aunque los grupos armados desconfiaron de las conversaciones y amenazaron con reactivar los ataques si no se producían resultados concretos de los diálogos entre PANDEF y el Gobierno. A mediados de noviembre el presidente Buhari visitó por primera vez desde que alcanzó el poder en marzo de 2015 los estados Ebonyi y Anambra.

Nigeria (Delta Níger)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, grupos armados, MEND, MOSOP, NDPVF, NDV, NDA, NDGJM, IWF, REWL, Joint Revolutionary Council, milicias de las comunidades ijaw, itsereki, urhobo y ogoni, grupos de seguridad privada

Síntesis:

La inestabilidad en el Delta del Níger es fruto de la pérdida de los medios de vida de la población debido a la actividad petrolera en la zona. La falta de compensaciones económicas, desarrollo y la marginalización de las comunidades llevó a exigir una mayor participación en los beneficios obtenidos por la explotación del petróleo. Desde los años noventa, surgieron formaciones armadas que propiciaron ataques contra instalaciones petroleras y puestos militares, además del secuestro de trabajadores. La respuesta del Gobierno fue militar, con la presencia permanente de las fuerzas especiales en la región del Delta, acusadas de cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. En 2009 el Gobierno decretó una ley de amnistía para todos los grupos armados que decidieran dejar la lucha armada. El ofrecimiento de programas de reinserción animó a los líderes de muchas de estas formaciones a deponer las armas, lo que generó una reducción pronunciada de la violencia armada en la zona. Sin embargo, el estancamiento de los proyectos de reinserción y desarrollo prometidos por el Gobierno ha vuelto a propiciar el retorno a la lucha armada por algunos actores.

Cuerno de África

Eritrea	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Autogobierno, Identidad Interna Internacionalizada
Actores:	Gobierno, coalición opositora político-militar EDA (EPDF, EFD, EIPJD, ELF, EPC, DMLEK, RSADO, ENSF, EIC, Nahda), otros grupos

Síntesis:

El régimen de partido único que gobierna Eritrea desde 1993, antigua insurgencia que contribuyó a la caída del régimen de Mengistu Haile Mariam en Etiopía en 1991, ha gobernado el país con un marcado autoritarismo y ha silenciado y reprimido a la oposición política. El Gobierno, liderado por la vieja guardia de la época de la independencia, se enfrenta a una serie de movimientos opositores que reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, respeto por las minorías étnicas, un mayor grado de autogobierno, reivindican el árabe como lengua oficial, el fin de la marginación del islam en el país y el freno a la imposición cultural de la comunidad tigray, o tigrinización, que lleva a cabo el Frente Popular para la Democracia y la Justicia (PFDJ, por sus siglas en inglés), que controla

todos los mecanismos de poder. Esta situación, además de la política de Eritrea en la región del Cuerno de África, ha llevado al país a un creciente aislacionismo. En diciembre de 2009 el Consejo de Seguridad de la ONU impuso un embargo de armas, restricción de vuelos y congelación de bienes a los principales altos cargos del país por su apoyo al grupo armado somalí al-Shabaab.

Durante el año 2017 no se produjeron hechos destacables en Eritrea que permitan intuir un cambio en la situación. Alrededor del 12% del país ha huido como consecuencia del régimen opresivo y del prolongado servicio militar obligatorio. Solo en 2016, 52.000 personas huyeron del país, según UNHCR. El hecho más destacable del año tuvo lugar el 31 de octubre, cuando **la Policía dispersó una excepcional protesta en Asmara después de que fuera arrestado el director de una escuela islámica** por oponerse a las demandas de prohibición de uso del hijab y contra la educación religiosa. Se produjeron tiroteos según fuentes de la embajada de EEUU en Eritrea y **activistas afirmaron que la Policía había ejecutado a 28 personas y otras 100 habrían resultado heridas**, según fuentes de la agencia AP en Etiopía, aunque esta información fue desmentida por el Gobierno eritreo. Tras estos hechos, las autoridades bloquearon internet y arrestaron a centenares de estudiantes en conexión con la protesta, además de desplazar contingentes militares hacia la capital. En paralelo, en marzo, el Gobierno etíope anunció que había repelido un ataque de unos 20 miembros del grupo con base en Eritrea Benishangul Gumuz People's Liberation Movement (BPLM), que pretendía atacar la Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) el 28 de febrero. En el ataque murieron 13 combatientes del BPLM, mientras que los siete restantes buscaron refugio en Sudán, según fuentes etíopes recabadas por Newsweek. El 2 de marzo el Gobierno etíope acusó a Eritrea de entrenar, armar y dirigir dicho grupo, información que Asmara desmintió. No obstante, el número de contacto del manifiesto disponía de prefijo eritreo. Benishangul Gumuz es una región en el oeste de Etiopía, fronteriza con Sudán. El BPLM forma parte de una coalición de grupos opuestos a Etiopía, la Peoples Alliance for Freedom and Democracy (PAFD), según un anuncio que hizo la PAFD en 2015.

Finalmente, a raíz de la retirada de la misión de Qatar de monitoreo del alto el fuego en la península de Ras Doumeira a mediados de junio, el 16 de junio Eritrea desplegó sus tropas en el territorio. Esta zona se encuentra en disputa entre Djibouti y Eritrea desde que en 2008 se enfrentaran por su control, hecho que provocó la mediación de Qatar. Este país, dos años después, en 2010, estableció una misión de interposición en la zona que ha estado presente desde entonces, sin que se haya resuelto el contencioso fronterizo. En consecuencia, Djibouti se dirigió a la UA para buscar su apoyo de cara a resolver el contencioso territorial y solicitar el envío de observadores a la zona en disputa. Eritrea señaló que solo reconocería a Qatar como posible mediador en el contencioso.

Etiopía	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno (coalición EPRDF, liderada por el partido TPLF), oposición política y social, diversos grupos armados

Síntesis:

El régimen que gobierna Etiopía desde 1991 se enfrenta a una serie de movimientos opositores que reclaman avances en la democracia y la gobernabilidad del país, así como un mayor grado de autogobierno. La coalición gubernamental EPRDF (Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front) está controlada por el partido Tigrayan People's Liberation Front (TPLF) de la minoría tigré, que rige el país con un creciente autoritarismo y con el beneplácito de las élites amhara. Existe un descontento en el país con el régimen federal étnico implantado por el EPRDF, que no ha resuelto la cuestión nacional, lo que ha alimentado la consolidación de una fuerte oposición política y social. Hay sectores político-militares que cuestionan el federalismo étnico como insuficiente para sus demandas nacionales mientras otros sectores de las clases dominantes y con presencia en el conjunto del país consideran el federalismo étnico un freno a la consolidación del Estado-nación, en paralelo a las exigencias de una democratización de las instituciones. En las elecciones de 2005 esta diversa oposición supuso un reto para el EPRDF, que reprimió con dureza las protestas postelectorales, renuente a la competencia multipartidista. Los siguientes comicios (2010, 2015) limitaron todavía más la apertura democrática al incrementar la verticalidad del régimen y la represión de la oposición política. La Ley antiterrorista de 2009 contribuyó a diezmar a la oposición. El intento desde 2014 de llevar a cabo el Addis Abeba Master Plan, plan que preveía la expansión territorial de la capital a costa de varias ciudades de la región de Oromiya, y la organización del desarrollo de la ciudad generó importantes protestas y represión mortal en la región de Oromiya, lo que contribuyó a incrementar la tensión.

Persistió el clima de inestabilidad y de movilización social contra el régimen etíope iniciado en noviembre de 2015, y que ha causado la muerte de centenares de personas. No obstante, a principios de agosto el Gobierno levantó el estado de emergencia tras 10 meses de vigencia, desde octubre de 2016, y que había permitido la detención de miles de activistas y restricciones a la libertad de movimiento y comunicaciones, según destacó HRW en agosto. **De las 23.000 personas arrestadas, 8.000 se encontraban a la espera de juicio o estaban siendo juzgadas. Sin embargo, lo que ha sido calificado como la mayor movilización antigubernamental de la última década continuó activa como consecuencia de la represión de las protestas por parte del Gobierno.** Entre los motivos iniciales de la movilización se encuentran agravios acumulados entre las diferentes comunidades del país y que tienen sus raíces en el devenir autoritario del Estado desde 1991, además de las protestas derivadas contra el Plan de Desarrollo Integrado de Addis Abeba y de la Zona Colindante Especial de Oromiya (Addis Abeba Master Plan), y que fueron reprimidas con dureza causando decenas de víctimas, lo que provocó

el abandono del Plan por parte del Gobierno en enero de 2016.¹⁵

El 4 de agosto se levantó el estado de emergencia. Sin embargo, aunque las detenciones en masa habían comportado el retorno a una cierta normalidad en el marco de los poderes derivados de la aplicación del estado de emergencia, la reanudación de las protestas y las movilizaciones alcanzaron unos niveles similares a los que condujeron a la declaración del estado de emergencia en octubre de 2016 pusieron de manifiesto el fracaso del Gobierno etíope en corregir las preocupaciones de las movilizaciones de protesta y en abrir el espacio político a la oposición, según señaló el proyecto Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).¹⁶ Además, aunque durante la vigencia del estado de emergencia la violencia para aplacar las protestas remitiera debido a la prohibición de llevar a cabo movilizaciones, los enfrentamientos y operaciones militares por de la Policía Liyu en zonas remotas de la región de Oromiya, el epicentro de la rebelión, se incrementaron en frecuencia y letalidad.¹⁷ Diversos líderes opositores continuaron bajo arresto y las fuerzas de seguridad siguieron actuando con impunidad. Además, la actividad militante se incrementó a la par con los disturbios populares. ACLED destacó que desde noviembre de 2015 alrededor de 1.200 civiles fueron ejecutados durante las protestas por parte de los cuerpos de seguridad en el país, y otras 2.000 personas murieron en brotes de violencia y conflictos no directamente relacionados con las protestas, como enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos rebeldes y milicias, o por situaciones de violencia por parte de estos grupos insurgentes contra la población civil.

Las acciones de la Policía Liyu en la región de Oromiya causaron más de 400 muertos entre enero y noviembre de 2017

Estado independiente para la comunidad oromo. A pesar de sus diferencias, los movimientos políticos y armados de carácter nacionalista oromo participan junto a otros movimientos insurgentes del país para derrocar el régimen de Mengistu en 1991. Sin embargo, el OLF se desmarca en 1992 del Gobierno de transición liderado por el partido TPLF de Meles Zenawi, que controla la coalición en el poder, el Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF), y desde entonces inicia la lucha armada contra el Gobierno central y contra otros movimientos políticos oromos progubernamentales exigiendo la independencia de la comunidad oromo. En diversas ocasiones ha colaborado con el ONLF de Ogadén en acciones contra el Gobierno central.

Persistió el clima de inestabilidad iniciado en noviembre de 2015 que ha causado la muerte de centenares de personas en la región de Oromiya, epicentro de las protestas contra el régimen etíope.

Aunque durante el año se redujeron las protestas contra el régimen en el marco de la dura aplicación del estado de emergencia, vigente desde octubre de 2016 hasta agosto de 2017, la violencia por parte de los cuerpos de seguridad se incrementó en zonas remotas de la región. Este conflicto tiene su origen en las protestas estudiantiles iniciadas en 2014 y que escalaron a finales de 2015 forzando en enero de 2016 la retirada por parte del Gobierno de los planes de desarrollo de la capital, Addis Abeba, y de la Zona Colindante Especial de Oromiya (Addis Abeba Master Plan). Este plan preveía la expansión de la capital a costa de varias ciudades de la región de Oromiya, que pasarían a formar parte de Addis Abeba. El Master Plan pretendía organizar el crecimiento demográfico y urbanístico de la ciudad, aunque suscitó numerosas críticas por su impacto en la región de Oromiya y por la marginación del pueblo oromo en su diseño.¹⁸

Así, durante el año 2017 Oromiya sufrió un incremento de las actividades militares de la Policía Liyu (“Policía Especial”).

La Policía Liyu¹⁹ fue creada para llevar a cabo acciones contra los grupos opositores en Ogadén, y su actividad se concentra en esta región, aunque en los últimos años también ha dado apoyo a las acciones de la misión de la UA en Somalia (AMISOM) en la zona fronteriza entre ambos países y, sobre todo, ha ampliado sus actividades en el territorio de la región de Oromiya desde diciembre de 2016, donde ha sido acusada de perpetuar graves violaciones de los derechos humanos contra comunidades en zonas fronterizas. Aunque durante la vigencia del estado de emergencia la violencia para aplacar las protestas remitiera debido a la prohibición de llevar a cabo movilizaciones, los enfrentamientos y

Etiopía (Oromiya)	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna
Actores:	Gobierno central, Gobierno regional, oposición política (partidos OFDM, OPC) y social, oposición armada OLF, IFLO
Síntesis:	Etiopía es escenario de movimientos de carácter secesionista o de rechazo del poder central desde los años setenta. El oromo OLF surge entre 1973 y 1974 en la región etíope de Oromiya, en el centro y sur del país, en contra de la dictadura de Mengistu y con el objetivo de establecer un

15. Véase “El incremento de la tensión en Etiopía y sus consecuencias” en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017), en Alerta 2017! Informe sobre sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz. Icaria, Barcelona.
 16. Armed Conflict Location & Event Data Project's, *Ethiopia*, November ACLED-Africa Conflict Trends Report, noviembre de 2017.
 17. Véase el resumen sobre Etiopía (Ogadén) en el capítulo 1 (Conflictos armados) y el resumen de Etiopía (Oromiya) en este capítulo.
 18. Véase el resumen sobre Etiopía en este mismo capítulo y “El incremento de la tensión en Etiopía y sus consecuencias”, en el capítulo 6 (Escenarios de riesgo para 2017), en Alerta 2017! Informe sobre sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz.
 19. En 2008, la Policía Liyu se convirtió en un grupo contrainsurgente poderoso y liderado por el jefe de seguridad de la región, Abdi Mohammed Omar, conocido como Abdi Illey, quien en 2010 se convirtió en presidente de la región de Somalí, aunque la Policía Liyu continuó bajo su mando. HRW, *Ibid*.

operaciones militares por de la Policía Liyu en zonas remotas de la región de Oromiya, se incrementaron en frecuencia y letalidad. Centenares de personas fueron detenidas durante el año. Según el proyecto Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED),²⁰ se produjeron 64 ataques y enfrentamientos entre milicias de la región de Oromiya y la Policía Liyu entre enero y noviembre de 2017 en los que habrían muerto 434 personas. A esto se sumaron los brotes esporádicos de violencia y enfrentamientos entre comunidades ganaderas oromo y somalíes a lo largo de la frontera entre las regiones de Oromiya y de Somalí, aunque la participación de Policía Liyu para aplacar estos brotes elevó los niveles de violencia y las sospechas de la oposición política de Oromiya, ya que la comunidad oromo identifica el incremento de la actividad de la Policía Liyu como una forma indirecta del Gobierno para usurpar las tierras pertenecientes a la comunidad oromo y anular aún más a la disidencia, según destacó ACLED.²¹ Fuentes oficiales del gobierno regional anunciaron en septiembre que los enfrentamientos habrían provocado el desplazamiento de 55.000 oromos de la región somalí. Ante el incremento de la violencia la UE hizo un llamamiento a que se creara una comisión para investigar los hechos, y el Parlamento regional manifestó su preocupación y creó una comisión de investigación.

Kenya	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Identidad, Autogobierno Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, milicias de adscripción étnica, oposición política y social (partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil), grupo armado SLDF, secta Mungiki, partido MRC, grupo armado somalí al-Shabaab y grupos simpatizantes de al-Shabaab en Kenya, ISIS

Síntesis:

La política y la economía de Kenya han estado dominadas desde su independencia en 1963 por el partido KANU, controlado por la comunidad más numerosa del país, los kikuyus, en detrimento del resto de etnias. En 2002 el sucesor del autoritario y cleptócrata Daniel Arap Moi (en el poder durante 24 años) fue derrotado por Mwai Kibaki. Sin embargo, las promesas incumplidas de Kibaki fomentaron un clima de frustración, por lo que el opositor Raila Odinga, se convirtió en una amenaza a la hegemonía en el poder de Kibaki. El fraude electoral de diciembre de 2007 fue el detonante de un brote de violencia en el que murieron 1.300 personas y unas 300.000 se vieron desplazadas. Tras esta situación se alcanzó un acuerdo entre ambos sectores a través de la creación de un frágil Gobierno de unidad nacional. En 2013 se celebraron nuevas elecciones que dieron a Uhuru Kenyatta la presidencia del país, enjuiciado por la CPI por su vinculación con los hechos de 2007 aunque el tribunal retiró los cargos en 2015. En paralelo, diversas zonas del país se ven afectadas por disputas intercomunitarias por la

propiedad de la tierra y también instigadas políticamente en periodo electoral. Asimismo, las actividades ilegales de la secta Mungiki, la intervención militar de Kenya en Somalia, que ha desencadenado ataques del grupo armado somalí al-Shabaab en Kenya, y la subsiguiente animadversión hacia la población somalí en Kenya, suponen retos a la estabilidad del país. A esto se le sumó en 2012 la presión gubernamental contra el movimiento secesionista Mombasa Republican Council (MRC), que pretende la independencia de la región costera del país.

El país continuó inmerso en un grave clima de tensión y violencia, destacando la creciente tensión y movilización política vinculada a la celebración de las **elecciones en 2017**, las acciones del grupo armado islamista **al-Shabaab**, las **operaciones contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad**, la **creciente presencia de ISIS desde 2016** en el país y **los persistentes enfrentamientos de carácter intercomunitario**. Así, el grupo armado islamista de origen somalí al-Shabaab continuó llevando a cabo ataques insurgentes en el noreste de Kenya, en concreto en la zona fronteriza entre Somalia y Kenya (los condados de Mandera, Wajir y Garissa) y en la zona costera de Kenya (condado de Lamu y en Mombasa), que causaron decenas de víctimas mortales durante todo el año. Además, se constató un incremento de las actividades del al-Shabaab en vísperas de las elecciones que tuvieron lugar en el país el 8 de agosto como consecuencia de un aumento de bombardeos aéreos sobre feudos del grupo.

Respecto al proceso electoral de agosto, el clima de tensión política y movilización social fue en aumento durante todo el año. Murieron decenas de personas en enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y opositores políticos, así como entre simpatizantes y opositores de la coalición gubernamental. La jornada electoral del 8 de agosto, celebrada en medio de un clima de alta tensión, estuvo plagada de irregularidades y fue calificada de fraudulenta hasta el punto que el Tribunal Supremo aceptó las reclamaciones y anuló los resultados, en una decisión histórica, y ordenó la celebración de nuevas elecciones el 26 de octubre. El presidente en funciones, Uhuru Kenyatta, realizó movilizaciones de protesta y condenó la decisión del tribunal, aunque previamente ya había afirmado que respetaba sus decisiones. Ante la ausencia de mejoras respecto a las condiciones que facilitaron el fraude electoral en las elecciones de agosto, el líder opositor, Raila Odinga, y su coalición opositora, NASA, boicotearon las elecciones de octubre, en las que Uhuru Kenyatta obtuvo la victoria para un segundo y último mandato de cinco años. Kenyatta ganó con el 98% de los votos y una participación de solo el 38%, claramente inferior al 80% de participación registrado en las elecciones de agosto, por lo que también generó dudas sobre su legitimidad. El derrotado Raila Odinga amenazó con autoproclamarse presidente y formar gobierno el 12 de diciembre, coincidiendo con el Día

20. Armed Conflict Location & Event Data Project's, *Ethiopia*, November ACLED-Africa Conflict Trends Report, noviembre de 2017.

21. Armed Conflict Location & Event Data Project's, Conflict Trends Num. 60, Julio de 2017. *Ethiopia*, November ACLED-Africa Conflict Trends Report, noviembre de 2017.

de la Independencia, aunque las presiones regionales e internacionales le hicieron posponer esta decisión. NASA hizo un llamamiento a iniciar una campaña de desobediencia civil con el objetivo de conseguir la convocatoria de unas nuevas elecciones. El país acabó el año en un clima de movilizaciones y alta polarización social tan grave como el que en el ciclo electoral de diciembre de 2007 desencadenó la muerte de más de 1.000 personas y el desplazamiento forzado de centenares de miles, según diversos análisis.

Organizaciones locales e internacionales denunciaron durante diciembre la muerte de decenas de personas en enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y simpatizantes opositores. **HRW detalló los actos de violencia sexual y otras graves violaciones de los derechos humanos y abusos cometidos durante el ciclo electoral y los impactos de género que habían supuesto**, muchos de los cuales fueron responsabilidad de los cuerpos de seguridad.²² La Kenyan National Commission on Human Rights documentó la muerte de 92 personas como consecuencia de los enfrentamientos entre simpatizantes de los partidos políticos y por la actuación policial, y por otro lado también constató la existencia de un mínimo de 86 casos documentados de violencia sexual durante el periodo electoral. En este sentido, cabe destacar el incremento del número de muertes a manos de la Policía en el año 2017 según desveló Deadly Force.²³ En 2015 murieron 143 personas a manos de la Policía, pasando a 205 personas en 2016 y a 243 en 2017, lo que supone un aumento del 41% en dos años. Por último, cabe destacar los diferentes enfrentamientos entre milicias vinculadas a diferentes comunidades durante todo el año, por cuestiones de robos de ganado, represalias por ataques previos y usos y propiedad de la tierra, entre las principales cuestiones.

Las elecciones en Kenya de agosto, plagadas de irregularidades, fueron anuladas y pospuestas por el Tribunal Supremo lo que supone una decisión histórica

Grandes Lagos y África Central

África Central (LRA)	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Recursos Internacional
Actores:	Fuerza Regional de la UA (RTF, compuesta por Fuerzas Armadas ugandesas, congoleesas y sursudanesas), Operación Observant Compass (EEUU), milicias de autodefensa de RDC y de Sudán del Sur, LRA, ex coalición armada centroafricana Séléka

22. Véase el capítulo 3 (Género, paz y seguridad).

23. Deadly Force es una base de datos de asesinatos cometidos por la Policía. El proyecto, de Nation Newsplex, proyecto del rotativo keniano Daily Nation, busca registrar todas las muertes de resultantes de operaciones policiales en Kenya, basándose en informes públicos, incluyendo informaciones de individuos y organizaciones del sector público y privado. La base está configurada a partir de la recopilación de informaciones de los medios de comunicación, el Independent Policing Oversight Authority, otras agencias gubernamentales y recuentos realizados por organizaciones de defensa de los derechos humanos.

24. Véase Invisible Children – Resolve, *LRA Crisis Tracker*, 13 de enero de 2018.

Síntesis:

El LRA nació en 1986, movido por el mesianismo religioso de su líder, Joseph Kony, con el objetivo de derrocar al Gobierno de Uganda, instaurar un régimen basado en los Diez Mandamientos de la Biblia y sacar de la marginación a la región norte de este país. La violencia y la inseguridad causada por los ataques del LRA contra la población civil, el secuestro de menores para engrosar sus filas (alrededor de 25.000 desde el inicio del conflicto) y los enfrentamientos entre el grupo armado y las Fuerzas Armadas (junto a las milicias de autodefensa) han provocado la muerte de unas 200.000 personas y el desplazamiento forzado de alrededor de dos millones en el momento más álgido del conflicto. La creciente presión militar ejercida por las Fuerzas Armadas ugandesas forzó al grupo a refugiarse primero en el sur de Sudán, posteriormente en RDC, y finalmente en RCA. Así, el LRA fue ampliando sus actividades a los países vecinos donde estableció sus bases, por la incapacidad para frenarle en RDC y RCA, y por la complicidad de Sudán. Entre 2006 y 2008 se celebró un proceso de paz que consiguió establecer un cese de hostilidades, aunque fracasó y en diciembre de 2008 los Ejércitos ugandés, congolés y sursudanesés llevaron a cabo una ofensiva contra el LRA, lo que provocó la disgregación del grupo hacia el noreste de RDC, el sureste de RCA y el suroeste de Sudán del Sur, donde continuó su ofensiva. En noviembre de 2011 la UA autorizó la creación de una fuerza regional transfronteriza compuesta por contingentes militares de estos tres países que se desplegó en septiembre de 2012 y que cuenta con el apoyo logístico de EEUU. La reducción sostenida de la violencia en los últimos años ha provocado que deje de ser considerado conflicto armado a principios de 2015.

Durante el año continuaron las actividades del grupo armado LRA y las operaciones militares para desarticular al grupo en el triángulo formado entre la RCA, RDC y Sudán del Sur. Las zonas más afectadas fueron el este de RCA (Haut Kotto, Mbomou y Haut Mbomou) y el noreste de RDC (las provincias de Haut Uélé y Bas Uélé y el parque nacional de Garamba), ya que del lado sursudanesés de la zona fronteriza entre RDC y Sudán del Sur no se constataron actos de violencia por parte del LRA. **Según el proyecto LRA Crisis Tracker se contabilizaron 125 incidentes violentos durante el año (200 en 2016), en los que murieron 14 civiles (22 en 2016) y fueron secuestrados temporalmente o permanentemente 406 personas (729 en 2016), lo que supone una reducción general de las actividades cometidas por el LRA.**²⁴ El parque nacional de Garamba siguió siendo un centro clave de la caza furtiva y la extracción de oro para el LRA. La mayoría de las actividades de los subgrupos del LRA activos consistieron en saqueos, emboscadas, secuestros temporales y violencia sexual. La estación seca, que se extiende de marzo a junio, coincidió con la intensificación de los incidentes atribuidos al LRA.

El 29 de marzo EEUU anunció que ponía fin a la Operación *Observant Compass*, de apoyo a la AU-Regional Task Force que llevaba a cabo operaciones de contrainsurgencia contra el LRA debido a que el grupo se había visto ostensiblemente debilitado en los últimos años, pasando a disponer de un centenar de combatientes. El coste de la misión, según HRW, también fue un factor determinante de cara a la retirada de la misión. Uganda, país sobre el que recaía el peso de la operación, también anunció su retirada de misión regional, y en mayo la seguridad del sureste de RCA fue formalmente entregada a los cuerpos de seguridad de la RCA. Aunque el grupo ya no supone una amenaza militar, diversas organizaciones centroafricanas alertaron que la retirada podía tener consecuencias negativas para la población civil, ya que las milicias ex Séléka podrían ocupar el vacío de seguridad. La disminución de ataques por parte del LRA en los últimos tiempos se ha visto sustituida por los secuestros de civiles, lo que implica nuevos enfoques para la protección de los civiles. Los ataques contra la MINUSCA por los grupos armados restringieron la capacidad de la misión de responder a los incidentes en las zonas afectadas por el LRA. El 4 de julio, la Task Forces finalizó su retirada de Yambio, en Sudán del Sur y trasladó su cuartel general a Koboko (Uganda).

En la región de Cabinda, Angola, persistió la escalada de la tensión y la violencia iniciada en 2016

Se mantuvo el clima de tensión y de incidentes esporádicos de violencia iniciado en 2016 en el enclave de Cabinda, en paralelo al incremento de la tensión en el conjunto del país derivado de las elecciones legislativas y presidenciales y de las movilizaciones y protestas vinculadas a demandas económicas y sociales. A raíz del anuncio del retorno a las hostilidades realizado el 18 de febrero de 2016, debido a la negativa del Gobierno a retomar las conversaciones de paz, se registraron los peores incidentes en el enclave de Cabinda en años, que acciones que continuaron durante 2017. No obstante, diversos analistas señalaron que la muerte de Nzita Tiago en 2016 había dejado un vacío en el liderazgo del grupo que podría ser aprovechado por facciones más beligerantes del grupo para incrementar las acciones contra los cuerpos de seguridad angolanos. Así, durante el año se registraron diferentes enfrentamientos armados **entre el FLEC-FAC y las Fuerzas Armadas angolanas**. El Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) confirmó que se produjo un aumento significativo de las protestas, movilizaciones y de la violencia contra civiles entre el año 2016 y el 2017, aunque existen dificultades para contabilizar las bajas reales porque el Gobierno de Angola siguió desmintiendo las informaciones relativas a un incremento de la violencia en el enclave.

Angola (Cabinda)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Recursos Interna
Actores:	Gobierno, grupo armado FLEC-FAC, Foro Cabindés para el Diálogo

Síntesis:

Tras la independencia de Angola de Portugal en 1975, el enclave de Cabinda, separado geográficamente del resto del territorio angolano, quedó incorporado a Angola en el tratado de independencia, el cual contó con la firma de los principales movimientos para la independencia del país (MPLA, UNITA y FNLA), pero no con el Frente de Liberación del Enclave de Cabinda (FLEC). Desde ese momento, el FLEC, quien ya había luchado contra la ocupación extranjera de Portugal, ha mantenido la lucha armada contra el Estado angolano por la independencia del enclave. En el año 2002, y tras el final de la guerra civil post colonial, el movimiento secesionista había quedado bastante reducido, manteniéndose la violencia de manera esporádica. En el 2006 una sección del FLEC y el Gobierno firmaron un alto el fuego a cambio de una repartición mayor de los ingresos petrolíferos para Cabinda –región que produce más de la mitad del crudo nacional– que fue rechazado por la facción del FLEC-FAC (Fuerzas Armadas de Cabinda) comandada por N’Zita Tiago, que ha mantenido las reclamaciones secesionistas.

Entre las acciones más relevantes, el FLEC-FAC reportó diversas emboscadas entre las que destaca la muerte de siete soldados en un ataque el 19 de junio en la zona de Buco-Zau y la muerte de ocho soldados el 28 de febrero en Munenga. La acción más destacada del año se produjo entre el 3 y el 10 de febrero en Necuto, con un saldo de 18 soldados muertos y otros 10 que resultaron heridos. En febrero, el movimiento insurgente hizo un llamamiento a la población local a boicotear las elecciones de agosto y el comandante Alfonso Nsau reiteró que no aceptaría ninguna presencia extranjera en el territorio y alertó a los partidos políticos del país a no realizar campaña electoral en Cabinda. Las elecciones fueron ganadas sin sorpresas por Joao Lorenço, el candidato del MPLA a suceder al presidente José Eduardo Dos Santos, quien llevaba en el poder desde 1979. No obstante, a pesar de las acusaciones de fraude electoral –cuatro partidos hicieron un llamamiento en septiembre para que se hiciera un recuento– el MPLA obtuvo menos escaños que en las elecciones anteriores, 150 de los 220 escaños, mientras que en 2012 obtuvo 175 de los 220 escaños y en 2008 191 de 220. Así mismo, ACLED destacó que en 2017 se quintuplicaron el número de protestas respecto a las elecciones de 2012 y además se produjo un incremento de presión sobre la disidencia con la detención de activistas y periodistas. Por último, cabe destacar el incremento de la tensión en la región de Lunda, donde diversos grupos se movilaron exigiendo una mayor autonomía para la región.

Chad	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

El golpe de Estado frustrado de 2004 y la reforma de la Constitución de 2005 boicoteada por la oposición fueron el germen de una insurgencia que intensificó su actividad durante el año 2006, con el objetivo de derrocar al Gobierno autoritario de Idriss Déby. Esta oposición estaba compuesta por diversos grupos y militares desafectos al régimen. A esto se añadió el antagonismo entre tribus árabes y poblaciones negras en la zona fronteriza entre Sudán y Chad, vinculado a agravios locales, competencia por los recursos y la extensión de la guerra que padece la vecina región sudanesa de Darfur, como consecuencia de las operaciones transfronterizas de los grupos armados sudaneses y las milicias árabes progubernamentales sudanesas *janjaweed*. Éstas atacaron las poblaciones y campos de refugiados de Darfur situados en el este del Chad, lo que contribuyó a una escalada de la tensión entre Sudán y Chad, que se acusaron de apoyar cada uno de ellos a la insurgencia del otro país. La firma de un acuerdo entre ambos países en enero de 2010 desencadenó el paulatino retorno y desmovilización de los grupos armados chadianos, aunque todavía existen algunos focos de resistencia. En paralelo, Idriss Déby continuó controlando el país de forma autoritaria.

Chad continuó afectado por la grave crisis política y social vinculada a la crisis económica como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, y a las acciones del grupo armado nigeriano Boko Haram (BH) en la región del Lago Chad.²⁵ Tras las elecciones de 2016, ganadas sin sorpresas por Idriss Déby, persistió el clima de fragilidad e inestabilidad social. La economía chadiana siguió estando bajo gran presión a causa de los elevados gastos de seguridad en un contexto de disminución de los ingresos procedentes del petróleo, lo que dio lugar a una tensa situación social. Los intentos de diálogo entre el Gobierno y la oposición política y social fueron infructuosos. En paralelo, en lo relativo al conflicto regional con la insurgencia de Boko Haram, aunque las acciones armadas insurgentes y contrainsurgentes fueron de baja intensidad durante el año, cabe destacar los enfrentamientos que tuvieron lugar entre el 23 y el 25 de junio entre el Ejército chadiano y los militantes del grupo en una serie de islas del Lago Chad en la región de Bol, que causaron 170 víctimas mortales (162 militantes y ocho soldados chadianos), la cifra más alta de víctimas mortales en el país de la última década.

Congo, Rep. del	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Desde su independencia de Francia en 1960, el país se ha visto sometido a un clima de inestabilidad y violencia política. Denis Sassou-Nguesso lo gobernó desde 1979 –a través de un golpe de Estado militar– hasta 1992, etapa de régimen de partido único de ideología marxista-leninista. Tras el colapso del bloque comunista y de la Unión Soviética, y por presiones de su principal aliado, Francia, inició la transición a la democracia, estableciendo un sistema multipartidista que celebró elecciones en 1992 en las que fue Sassou-Nguesso derrotado por Pascal Lissouba. El país ha sido víctima de diversos conflictos armados (1993-1994, 1997-1999). Entre junio de 1997 y diciembre de 1999 se desencadenó una guerra civil entre las fuerzas de los dos candidatos a la presidencia, Nguesso y Lissouba. En paralelo al conflicto político entre Lissouba y Sassou-Nguesso, también jugaron un papel determinante los intereses franceses en el petróleo congolés. Brazzaville resultó destruida por la guerra y la multitud de milicias que competían por el poder. Entre ellas, las milicias Ninjas leales a Frédéric Bintsamou (pastor Ntoumi) y al líder político Bernard Kolélas, primer ministro tras el acuerdo de paz que puso fin al conflicto entre 1993 y 1994; las milicias Cocoyes, del presidente derrocado Lissouba; y las Cobras, del presidente golpista Nguesso. El apoyo de Francia a Nguesso fue un factor crucial en esta guerra, que terminó con la invasión de las tropas de Angola y el retorno de Nguesso al poder, el cual continúa en el cargo hasta la actualidad. Los Ninjas del reverendo Ntoumi siguieron activos en su feudo, la región de Pool, y se enfrentaron a Nguesso entre 2002 y 2003. Los intentos de Nguesso de reformar la Constitución para facilitar su permanencia en el poder, provocaron importantes movilizaciones en su contra protagonizadas por el movimiento #Sassoufit, creado en 2014, en referencia al lema de las movilizaciones.

Persistió la inseguridad y la violencia esporádica en la región de Pool iniciada en 2016. Durante el año se produjeron acciones por parte de los cuerpos de seguridad contra las milicias del reverendo Ntoumi y persistió la inseguridad en la región de Pool. **El país se encuentra inmerso en un nuevo ciclo de inestabilidad política** desde que el Gobierno promoviera la reforma constitucional en octubre de 2015 que levantaba el límite de dos mandatos presidenciales, lo que permitió al presidente, Denis Sassou-Nguesso (74 años), presentarse a un nuevo mandato presidencial en marzo de 2016, que venció ampliamente. Generó preocupación la detención prolongada sin juicio de dirigentes políticos tras las elecciones presidenciales. A pesar de que el Gobierno anunció que garantizaría la celebración de juicios justos, a finales de 2017 todavía debían celebrarse las audiencias iniciales para los dos ex candidatos a la presidencia, Jean-Marie Michel Mokoko y André Okombi Salissa. En agosto, el Gobierno autorizó la evacuación médica a Francia de otro líder de la oposición detenido, Modeste Boukadia, que había sido condenado a 30 años de trabajos forzados.

En relación al conflicto en la región de Pool, una de las acciones más destacadas del año fue la operación que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad en marzo en la que se enfrentaron a una milicia, causando la

25. Véase el resumen sobre la Región Lago Chad (Boko Haram) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

muerte de 15 combatientes, que según el Gobierno planeaban boicotear las operaciones de construcción de la vía férrea Congo-Ocean. En diversos momentos del año la situación de inseguridad congeló las operaciones de construcción de esta vía férrea, que debe conectar Brazzaville con Pointe Noire, el principal eje económico del país. La ONU anunció en julio que 81.000 personas se encontraban desplazadas como consecuencia de la violencia y la inseguridad en la región de Pool desde 2016. Además, la situación humanitaria de unas 138.000 personas se vio afectada por la violencia y la inseguridad en la región, y en julio de 2017 la OCHA hizo un llamamiento de 23,7 millones de dólares para hacer frente a la situación humanitaria en la zona. El conflicto provocó la cancelación de las elecciones parlamentarias en julio en nueve de las 14 circunscripciones electorales de la región. No obstante, a mediados de noviembre el Gobierno liberó a algunas figuras cercanas al reverendo Ntoumi, detenidas después de varios meses, lo que fue la antesala de la firma en diciembre del acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno y representantes opositores del reverendo Ntoumi. El ministro de Interior congolés Raymond Zéphyrin Mboulou supervisó la firma del acuerdo, que pretende poner fin a la rebelión iniciada contra el Gobierno en abril. Según el acuerdo, el reverendo Ntoumi se comprometía a facilitar el desarme de sus combatientes, la restauración de la autoridad estatal en Pool, y el Gobierno se comprometía a garantizar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración social y económica de los ex combatientes, así como el reasentamiento de la población desplazada por la violencia en la zona y la libertad de movimiento. Se prevé la creación de una comisión conjunta que deberá supervisar la implementación del acuerdo.

RDC	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Entre 1998 y 2003 transcurrió en RDC la llamada “primera guerra mundial africana”.²⁶ La firma de diversos acuerdos de paz entre 2002 y 2003 comportó la retirada de las tropas extranjeras y la configuración del Gobierno Nacional de Transición (GNT) donde se integraron el antiguo Gobierno, la oposición política, los grupos armados RCD-Goma, RCD-K-ML, RCD-N, MLC y las milicias Mai Mai. A partir de junio de 2003 el GNT estuvo dirigido por el presidente Joseph Kabila y cuatro vicepresidentes, dos de los cuales pertenecían a la antigua insurgencia: Azarias Ruberwa del RCD-Goma y Jean-Pierre Bemba del MLC. El GNT elaboró la Constitución, refundada en diciembre de 2005. Entre julio y octubre de 2006 se celebraron elecciones legislativas y presidenciales, en las que Kabila fue elegido presidente, y

Jean-Pierre Bemba resultó segundo, en medio de un clima de alta tensión y acusaciones de fraude. La formación del nuevo Gobierno en el año 2007 no frenó la inestabilidad y las disputas en el ámbito político. Las elecciones de noviembre de 2011, en las que se cometieron numerosas irregularidades, contribuyeron a avivar la inestabilidad.

El país permaneció afectado por la grave crisis política y social a nivel nacional como consecuencia de la expiración del mandato del presidente Joseph Kabila en diciembre de 2016 y el aplazamiento de las elecciones nacionales, así como por **la grave escalada de la violencia en la región de Kasai**.²⁷ Aunque el Gobierno y la oposición alcanzaron un acuerdo el 31 de diciembre, según el cual se iniciaba una fase de transición en la que el presidente Joseph Kabila permanecía en el cargo hasta la celebración de las elecciones presidenciales en diciembre de 2017, la aplicación de dicho acuerdo fue lenta, incompleta y no inclusiva, lo que se sumó a un empeoramiento del contexto socioeconómico y un aumento de la represión por las fuerzas de seguridad nacionales, que alimentaron el descontento en la capital y en los principales centros urbanos.

Diferentes factores contribuyeron a empeorar el contexto político y social. En primer lugar, la muerte del histórico opositor y gran defensor de la democracia y el multipartidismo en el país, Étienne Tshisekedi, líder del partido opositor UDPS, afectó a la situación política. Su liderazgo era reconocido en medio de una oposición fragmentada. Su muerte provocó una lucha por el liderazgo y divisiones en el seno del partido UDPS y del resto de la oposición de cara a liderar la nueva etapa que fueron aprovechadas por la mayoría presidencial. En segundo lugar, la creciente violencia e inseguridad en la región de Kasai, que generó preocupación por sus consecuencias en torno a la implementación del acuerdo y la convocatoria electoral. En tercer lugar, la oposición política y social intentó mantener durante el año la presión sobre el Gobierno y la mayoría presidencial con movilizaciones y protestas de cara a dar cumplimiento al acuerdo del 31 de diciembre y convocar elecciones antes de finales de 2018, con un seguimiento desigual y que fueron reiteradamente reprimidas con dureza por parte de los cuerpos de seguridad, en un creciente uso de la fuerza que causó decenas de víctimas mortales y centenares de heridos durante todo el año. Aunque fueron más moderadas que en años anteriores, debido a la represión sistemática por parte de los cuerpos de seguridad y la fragmentación de la oposición, el Gobierno incrementó la presión. Según destacó la ONU, el espacio democrático continuó reduciéndose, y existieron violaciones de los derechos civiles y políticos, en particular las libertades de reunión pacífica, de opinión y de expresión. Algunos periodistas, opositores políticos y activistas de la sociedad civil seguían siendo objeto de amenazas, acoso y violencia.

26. Véase el resumen sobre RDC (este) en el capítulo 1 (Conflictos armados).

27. Véase el resumen de RDC (Kasai) en el capítulo 1 (conflictos armados).

Entre los hechos más destacados del año respecto al proceso de implementación del acuerdo, cabe destacar que en julio el Gobierno designó al Consejo Nacional para el Seguimiento del Acuerdo (CNSA) y la CENI declaró que era imposible organizar las elecciones en 2017, tal y como establecía el acuerdo de 31 de diciembre de 2016, ya que aunque el registro de votantes estaba prácticamente acabado (por retrasos en Kasai debido a la inseguridad), había todavía numerosas cuestiones logísticas, técnicas y de financiación del proceso pendientes de resolver que impedían avanzar el mismo proceso. En agosto se hizo un llamamiento desde la sociedad civil congoleña para promover una movilización no violenta para obligar a Kabila a dimitir si las elecciones no se celebraban en diciembre de 2017. Finalmente, el 5 de noviembre la CENI publicó el calendario electoral. Éste prevé la celebración de las elecciones nacionales (presidenciales y legislativas) y provinciales el 23 de diciembre de 2018 y el nombramiento del presidente en enero de 2019, más de un año más tarde respecto al acuerdo del 31 de diciembre de 2016. La oposición política y la sociedad civil unánimemente rechazaron el calendario, y el anuncio provocó la convocatoria de nuevas huelgas y movilizaciones con seguimiento desigual en diversas localidades para mostrar el rechazo ante el retraso electoral y el mantenimiento en el poder de Kabila. Estas movilizaciones fueron prohibidas y sistemáticamente dispersadas. Numerosos miembros de la oposición fueron detenidos. El Gobierno justificó el retraso electoral por la situación de seguridad y por dificultades logísticas y técnicas. La Conferencia Episcopal congoleña (CENCO) realizó un llamamiento a Kabila para que hiciera una declaración pública en la que asegurara que él no sería candidato a su reelección. El Consejo de Seguridad de la ONU validó el calendario electoral presentado y, junto a la UA y la CENCO, insistieron que no se produjeran nuevos retrasos. EEUU y la UE establecieron sanciones a altos cargos de los cuerpos de seguridad y diversas organizaciones y países amenazaron con interrumpir el flujo de recursos al país en caso de nuevos incumplimientos. El 19 de diciembre, un año después del fin del segundo y último mandato de Kabila, se convocó una nueva movilización con bajo seguimiento, y el año finalizaba en medio de un clima de preocupación y pesimismo por la evolución negativa de la situación y la actuación desproporcionada de los cuerpos de seguridad dispersando las manifestaciones convocadas el 31 de diciembre en las que murieron siete personas.

Magreb - Norte de África

Túnez	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna

Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados incluyendo el Batallón Oqba bin Nafi o Brigadas Oqba Ibn Nafaa (filial de AQMI), Jund al-Khilafa (filial de ISIS), ISIS
-----------------	---

Síntesis:

Desde su independencia en 1956 y hasta principios de 2011, Túnez fue gobernado por sólo dos presidentes. Durante tres décadas Habib Bourghiba sentó las bases del régimen autoritario en el país, al que luego Zine el Abidine Ben Alí dio continuidad tras un golpe de Estado en 1987. La concentración del poder, la persecución de la oposición política laica e islamista y el férreo control social que caracterizaban la situación interna del país contrastaban con su imagen internacional de estabilidad. A pesar de las denuncias de corrupción, fraude electoral y violaciones de los derechos humanos, Túnez se erigió durante años como aliado privilegiado de Occidente. En diciembre de 2010 el estallido de una revuelta popular expuso las contradicciones del régimen, motivó la caída del Gobierno de Ben Alí a principios de 2011 e inspiró movilizaciones contra gobiernos autoritarios de todo el mundo árabe. Desde entonces, Túnez se ha visto inmerso en un accidentado proceso de transición en el que se han hecho evidentes las tensiones entre los sectores seculares e islamistas del país. Paralelamente, el país ha sido escenario de una mayor actividad de grupos armados, entre ellos filiales de AQMI e ISIS.

Túnez continuó viéndose afectado por la actividad de grupos armados y por un clima de tensión política interna como consecuencia de problemas económicos y sociales. **Los hechos de violencia armada tuvieron un menor impacto en términos de letalidad respecto a años anteriores.** Si en 2015 y 2016 los ataques, ofensivas y enfrentamientos en el marco de operaciones de las fuerzas de seguridad arrojaron un balance cercano al centenar de personas fallecidas, respectivamente, los hechos ocurridos en 2017 provocaron la muerte de una decena de personas. Los incidentes tuvieron lugar durante todo el año, principalmente en forma de ataques yihadistas contra sedes policiales o patrullas, atentados explosivos, operaciones de las fuerzas de seguridad contra presuntas células armadas y enfrentamientos entre tropas y presuntos yihadistas en distintos puntos del territorio, entre ellos Kebili (sur), Sidi Bouzid (centro), Hassi Ferid y Mount Salloum (oeste), Mount Mghilla (noreste) o la región de Kasserine. En esta última zona, fronteriza con Argelia, las fuerzas de seguridad dieron muerte, en agosto, al líder de Oqba bin Nafaa, grupo armado alineado con AQMI.²⁸ A lo largo del período también se informó del desbaratamiento de una presunta ofensiva de ISIS destinada a tomar control de territorio en el sur del país, así como de la detención de personas supuestamente vinculadas a grupos armados. Fuentes locales e internacionales de seguridad alertaron sobre el retorno al país por parte de combatientes que se habían afiliado a organizaciones armadas en Libia, Siria o Iraq. Según estimaciones de la ONU, unas 5.000 personas de nacionalidad tunecina se habían sumado a actividades armadas de línea yihadista, aunque fuentes locales reducían esta cifra a unas 3.000.

28. Véase el resumen sobre Argelia en el capítulo 1 (Conflictos armados).

Cabe destacar que durante 2017 se renovó periódicamente el estado de emergencia vigente en el país desde 2015 y que algunas voces críticas –incluyendo la Liga Tunecina para los Derechos Humanos– alertaron que las políticas gubernamentales no estaban garantizando el debido proceso a los sospechosos de terrorismo. En esta línea, **Amnistía Internacional denunció que las fuerzas de seguridad tunecinas estaban recurriendo a tácticas del pasado, incluyendo torturas, detenciones arbitrarias y acoso a familiares de sospechosos.** En un informe publicado en febrero la organización expuso la aplicación arbitraria de una serie de medidas en el marco del estado de emergencia y documentó 23 casos de tortura y malos tratos.²⁹ Paralelamente, durante el año Túnez fue escenario de diversas protestas contra el alto desempleo, el deterioro de las condiciones de vida y la corrupción, que en algunos casos derivaron en enfrentamientos con la Policía y causaron al menos un muerto y decenas de heridos. Sectores críticos cuestionaron a la coalición gobernante y al presidente. El mandatario, a su vez, hizo explícitos sus cuestionamientos al sistema político delineado por la nueva Constitución –por considerar que limita los poderes del Ejecutivo– e impulsó una reforma de gabinete para situar a aliados en puestos clave. Algunas de las medidas que despertaron mayores críticas fueron la aprobación, en septiembre, de la llamada “ley de reconciliación administrativa”, que otorgó una amnistía a funcionarios del antiguo régimen involucrados en casos de corrupción y el anuncio de una nueva postergación de las elecciones municipales, que debían celebrarse en diciembre y fueron reprogramadas para marzo de 2018. Se trata de los primeros comicios locales desde la revuelta contra el régimen de Ben Alí y servirán para escoger a los responsables de 350 municipios, desde 2011 administrados por entes provisionales.

Las fuerzas de seguridad tunecinas fueron acusadas de recurrir a torturas y detenciones arbitrarias en el marco de la aplicación del estado de emergencia

El Salvador se ha caracterizado por altos niveles de pobreza y desigualdad, por la proliferación de pandillas juveniles y otras estructuras de crimen organizado, así como por unas altas tasas de homicidios que han convertido al país en uno de los más violentos de la región y del mundo. Durante el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) se logró una tregua con las pandillas que comportó una reducción significativa en la tasa de homicidios, pero la llegada a la presidencia de Sánchez Cerén en 2015 comportó un endurecimiento de las políticas de seguridad y un sustancial incremento en los niveles de violencia, generado ello una crisis de desprotección y de desplazamiento forzado de miles de personas.

Se redujo notablemente la tasa de homicidios respecto del año anterior, pero El Salvador siguió siendo claramente el país centroamericano con mayores índices de violencia y se incrementó la preocupación por la situación de los derechos humanos y por las repercusiones que pueda tener en la estabilidad y seguridad del país la posibilidad de una deportación masiva de personas provenientes de EEUU. En efecto,

en 2017 se produjeron 3.954 homicidios, un 25% menos que los 5.280 que se produjeron en 2016. En ese año la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de 81,7, mientras que en 2017 fue de 60. Ello supone una reducción significativa de los niveles de violencia por segundo año consecutivo, puesto que dicha tasa se situó en los 103 homicidios en 2015, año en que El Salvador fue considerado el país más violento del mundo. Según el Gobierno, la tasa de homicidios de 2017 fue parecida a las de los del período entre 2012 y 2014 conocido como “La Tregua”, en el que el Gobierno auspició una tregua entre y con

las principales maras del país. A pesar de esta reducción en los niveles de violencia, la tasa de homicidios en El Salvador siguió siendo la más elevada de Centroamérica y de hecho dobló la media regional. Un análisis de los patrones de violencia durante el 2017 revela que el número de homicidios se incrementó a lo largo del año. Entre enero y abril, la media de asesinatos diarios fue de 9,2, que se incrementó hasta 10,8 entre mayo y agosto y que escaló hasta más de 12 entre septiembre y diciembre. Algunos analistas consideran que ello tiene que ver con el cese unilateral de la violencia por parte de la Mara Salvatrucha en los primeros meses del año que acompañó un ofrecimiento de diálogo por parte de este grupo y con la subsiguiente reacción de algunas maras a las medidas de seguridad que el Gobierno implementó durante el año. En el mes de septiembre, coincidiendo con un incremento en los niveles de violencia respecto de los meses anteriores, los fiscales generales de los tres países del denominado Triángulo Norte llevaron a cabo una operación simultánea contra la Mara Salvatrucha que comportó la detención de cientos de personas. Pocos días más tarde, el Gobierno de EEUU señaló que una de sus prioridades era

2.3.2. América

América del Norte, Centroamérica y Caribe

El Salvador	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, sectores de las fuerzas de seguridad del Estado, pandillas (Mara Salvatrucha-13, Mara/Barrio/Calle 18, entre otras) y otras estructuras de crimen organizado
Síntesis:	
Tras el fin de un conflicto armado (1980-1992), que dejó un balance de alrededor de 75.000 muertes, la situación en	

29. Amnistía Internacional, ‘We want an end of fear’: Abuses under Tunisia’s state of emergency, 10 de febrero de 2017.

precisamente la lucha contra esta organización. Otros analistas sostienen que la tasa de homicidios en 2017 se redujo en las regiones históricamente más violentas y se incrementó en aquellas zonas tradicionalmente menos inestables, sugiriendo que la creciente presión por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas sobre las pandillas juveniles habría provocado un desplazamiento de algunas pandillas a áreas en las que hasta el momento no estaban asentadas.

Por otra parte, **algunos analistas expresaron su preocupación por la repercusión que pueda tener para la seguridad del país la posibilidad, hecha pública en varios momentos del país por parte del Gobierno de EEUU, de suspender el denominado Estatus Temporal de Protección que ha estado en vigor durante más de dos décadas en EEUU y que afecta a más de 200.000 personas de origen salvadoreño residiendo en EEUU** (y a más de 270.000 descendientes de personas con el mencionado estatus). Esta decisión, que durante el 2017 ya afectó a las personas de origen haitiano y nicaragüense, podría comportar una deportación masiva de personas y, según algunas organizaciones de derechos humanos, incrementar la inseguridad en el país. De hecho, el propio Gobierno denunció a finales de año que el número de pandilleros deportados al país se había incrementado en más de un 100% respecto del año anterior. Meses antes también había advertido que cada día estaban regresando al país de media entre cuatro y cinco líderes de maras. También cabe destacar que durante el año se produjeron varias denuncias sobre violaciones de derechos humanos que afectaron a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De hecho, en julio el propio Fiscal especial sobre los derechos humanos hizo público un informe en el que se citaban unos 800 abusos de derechos humanos en los que se habían visto involucradas la Policía y las Fuerzas Armadas. Poco después, varios medios de comunicación reportaron la existencia de grupos de autodefensa civil en varias partes del país e incluso de escuadrones de la muerte dentro de la Policía. En el mes de septiembre, un miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunció que las cifras de víctimas mortales fruto de enfrentamientos entre varias pandillas y los cuerpos de seguridad del Estado escondían ejecuciones extrajudiciales. Finalmente, cabe destacar que el Gobierno reconoció durante el año que el desplazamiento forzado era un problema de alcance nacional y anunció la preparación de un protocolo para atender a las víctimas de este fenómeno.

Honduras	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política, movimientos sociales, estructuras de crimen organizado (narcotráfico, pandillas)

Síntesis:

La situación política y social del país se caracteriza principalmente por las altas tasas de homicidios de Honduras, que en los últimos años suele considerarse entre los países más violentos del mundo, así como por la polarización social y política que se produjo tras la llegada al poder de Manuel Zelaya en 2006. Las críticas de amplios sectores de la población por su intención de convocar un referéndum para reformar la Constitución y poder presentarse a un nuevo mandato o bien por su relación con a los Gobiernos que integran la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), en especial a Venezuela, desembocaron en un golpe de Estado en 2009 que provocó la condena de la comunidad internacional, la suspensión de su membresía en la OEA y el exilio de Zelaya, que le impidió participar en las elecciones presidenciales de 2009. A pesar de que Zelaya pudo regresar al país en 2011, desde entonces se ha producido una cierta polarización social del país que se reflejó en la crisis política derivada de los comicios presidenciales del 2017 entre el presidente saliente y un candidato muy cercano políticamente a Zelaya.

A pesar de que durante 2017 se registró una importante reducción en la tasa de homicidios, el país vivió la crisis sociopolítica más importante de los últimos años tras la celebración de las elecciones presidenciales el 26 de noviembre. Los dos candidatos que concurrían a los comicios –el presidente saliente, Juan Orlando Hernández, y el candidato opositor, Salvador Nasralla– reivindicaron el triunfo electoral, lo cual provocó el inicio de **varias semanas de protestas y movilizaciones en las que, al finalizar el año, más de 30 personas habían muerto** –31 según la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 36 según Nasralla–, cientos habían resultado heridas y más de 1.600 habían sido detenidas –a mediados de diciembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había reportado la detención de 1.675 personas, pero en enero de 2018 Nasralla pidió la liberación de 800 presos políticos–. A mediados de diciembre, el Tribunal Supremo Electoral había decretado a Hernández como vencedor de los comicios por un estrecho margen de un punto y medio porcentual, pero la Alianza de Oposición contra la Dictadura no reconoció dicho resultado e instó a la población a movilizarse de manera permanente y a evitar la toma de posesión del cargo de Hernández. A principios de enero de 2018, el Gobierno decretó el estado de emergencia y el toque de queda, suspendido algunos días más tarde. La oposición denunció que en el primer recuento de votos Nasralla obtuvo el 57% de los sufragios, que finalmente se redujo al 41,25% definitivo después de que el sistema de escrutinio sufriera varias interrupciones, por lo que pidió un nuevo recuento de votos ante un organismo internacional independiente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró que el estrecho margen de votos, así como las irregularidades y problemas que se evidenciaron en las elecciones, impedían saber con certeza quién ganó los comicios, de modo que llamó a la celebración de unas nuevas elecciones. El Partido Nacional, que apoya a Hernández, desaprobó tales declaraciones y señaló que Almagro se había extralimitado en el cumplimiento de sus funciones. La misión electoral de la UE no se pronunció al respecto para no interferir en los asuntos

internos del país y el Gobierno de EEUU tomó nota de la decisión del TSE –aunque no felicitó a Hernández–, instó a una resolución pacífica de las diferencias políticas y se reunió con Nasralla en Washington. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch criticaron medidas como el toque de queda e instaron al Gobierno a garantizar el derecho de manifestación. Cabe destacar que, además de Nasralla, las manifestaciones opositoras estuvieron lideradas por el ex presidente Manuel Zelaya, depuesto en 2009 en un golpe de Estado.

Por otra parte, a finales del año el Gobierno declaró que **en 2017 se registraron 3.791 asesinatos, un 26,4% menos que en el año anterior, de modo que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se redujo de 59,1 a 42,8**. El Gobierno declaró que la tasa de homicidios, tras alcanzar un máximo histórico de 86,4 en 2011 (año en el que Honduras fue considerado el país más violento del mundo), había experimentado un descenso continuado y acumulaba una reducción de 34 puntos en los últimos cuatro años (en 2013 la tasa de homicidios era del 77,4). Las cifras oficiales coinciden en buena medida con las publicadas por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma Nacional de Honduras, que a finales de año señaló que la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes se situó en el 46,2, con una media de 11 asesinatos diarios y 338 mensuales. Además, la Policía declaró que durante el año se habían incautado 5.765 armas de fuego y se habían detenido a 2.976 miembros de estructuras criminales, entre ellos 831 de la Mara Salvatrucha. El Gobierno también declaró que la acción policial había afectado la capacidad operativa de 726 estructuras criminales. Cabe señalar que en el mes de abril, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas urgió al Gobierno a desmilitarizar la seguridad interna y a fortalecer los mecanismos de transparencia y control civil de la seguridad. Durante el año, tanto la oposición como varias organizaciones de derechos humanos siguieron denunciando numerosas violaciones de los derechos humanos, así como una campaña de hostigamiento y asesinato de líderes políticos y sociales. Finalmente, cabe señalar que en el mes de julio el Gobierno declaró que más de 22.500 personas hondureñas indocumentadas (entre ellas 2.122 menores) habían sido deportadas desde EEUU, México y Centroamérica en los primeros seis meses del año. A pesar de que estas cifras suponen una reducción de 32% respecto del mismo período en 2016, las autoridades hondureñas estiman que cada día alrededor de un centenar de personas abandonan el país con destino a EEUU, en muchos casos a través de organizaciones criminales. En este sentido, a finales de octubre se celebró en Honduras una cumbre regional sobre desplazamiento forzado para acordar mecanismos de protección y abordar las consecuencias humanitarias de desplazamiento interno y los flujos de personas refugiadas en los países del denominado Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador).

México	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social (organizaciones campesinas, indígenas, sindicatos, estudiantes), grupos armados de oposición (EZLN, EPR, ERPI, FAR-LP), cárteles.

Síntesis:

Desde el año 2006, en el que el presidente Felipe Calderón inició la llamada “guerra al narcotráfico”, tanto los niveles de violencia como las violaciones de derechos humanos en todo el país se incrementaron sustancialmente hasta convertir al país en uno de los que concentra más homicidios en todo el mundo. Desde entonces, se han multiplicado el número de estructuras de crimen organizado vinculadas principalmente al narcotráfico, que en algunas partes del país disputan al Estado el monopolio de la violencia. Según algunas estimaciones, a finales de 2017 la “guerra contra el narcotráfico” había provocado la muerte de más de 150.000 personas y la desaparición de más de 30.000. Además, en México existen algunos movimientos insurgentes en estados como Guerrero y Oaxaca –entre ellos el EPR, el ERPI o las FAR-LP. En el estado de Chiapas, tras el breve alzamiento armado del EZLN en 1994, se han mantenido ciertos niveles de conflictividad en las comunidades zapatistas.

La tasa de homicidios se incrementó un 27% respecto del año anterior y alcanzó la cifra más alta en los últimos 20 años según datos públicos. Aunque estas cifras no especifican las causas ni la autoría de los homicidios, el Gobierno declaró que la gran mayoría de los mismos están relacionados con las acciones de los cárteles de la droga y otras estructuras de crimen organizado. El incremento de los niveles respecto del año anterior es significativo por cuanto en 2016 México ya había sido, según datos del International Institute of Strategic Studies, el segundo país más letal del mundo (por detrás de Siria), con más de 23.000 homicidios relacionados con la violencia criminal. En 2017 los estados con mayores índices de violencia fueron Guerrero, Baja California, Estado de México, Veracruz y Chihuahua. Según algunos analistas, **la principal causa que explica el incremento en el número de homicidios, que alcanzó los 29.168, fue la creciente fragmentación en el número de organizaciones criminales**. Según un estudio por parte del semanario Proceso, el número de grupos de crimen organizado se ha incrementado desde los seis en 2007 hasta más de 400 actualmente, lo cual incrementa la violencia entre carteles de la droga, como se observó en 2017 con el cartel de Sinaloa o el cartel del Golfo. En este sentido, en el mes de abril **la Comisión Nacional de Derechos Humanos declaró que entre 2007 y finales de 2016 se identificaron 855 fosas comunes clandestinas** de las que se habían exhumado 1.584 cuerpos y que prácticamente 30.000 personas habían desaparecido. Sin embargo, el informe no concreta la responsabilidad tanto de las fosas clandestinas como de las desapariciones forzadas. En

la misma línea, durante el año varias ONG señalaron que más de 300.000 personas se habían tenido que desplazar desde el año 2009 a causa de la violencia. Según fuentes periodísticas, más de 150.000 personas han muerto en México desde que el presidente Felipe Calderón iniciara la llamada guerra contra las drogas.

Durante el año también se registraron numerosas denuncias por parte de ONG sobre un incremento de la violencia y vulneraciones de derechos humanos contra periodistas, defensores de derechos humanos, líderes indígenas o migrantes. En el mes de diciembre, por ejemplo, los relatores especiales sobre libertad de expresión para las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtieron que los niveles de temor y violencia que sufre el colectivo periodístico en México son superiores a Siria u otros países inmersos en conflicto armado o bajo régimen autoritario. En octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos instó al Gobierno a reaccionar ante el drástico incremento de peticiones de refugio, especialmente de personas provenientes del llamado Triángulo Norte de Centroamérica. Según esta comisión, el número de peticiones se ha incrementado en un 578% respecto del año anterior, alcanzando las 10.262. Finalmente, cabe destacar la fuerte oposición por parte de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ante la aprobación, en el mes de diciembre, de la llamada Ley de Seguridad Interna, que prevé un marco legal que normaliza y legitima el uso de las Fuerzas Armadas en el combate del crimen organizado, la corrupción, el terrorismo u otros crímenes. Varias de las instituciones que se opusieron a dicha ley consideran que la seguridad pública corresponde a la policía civil y no al Ejército. En este sentido, en el mes de agosto el centro de investigación Ethos Laboratorio de Políticas Públicas publicó un informe en el que señalaba que el incremento del presupuesto de seguridad en un 60% entre 2008 y 2015 no había comportado una reducción en la tasa de homicidios ni en los altos niveles de impunidad judicial, que llegaba a cifrar en un 99%. Del mismo modo, en noviembre WOLA publicó un informe en el que advertía que solamente se había dictado sentencia en 16 de los 505 casos de presuntas violaciones de derechos humanos en las que se habían visto involucradas las Fuerzas Armadas entre 2012 y 2016.

América del Sur

Venezuela	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

La actual crisis política y social que atraviesa el país se remonta a la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998 y a su impulso de la llamada Revolución Bolivariana, pero se agudizó durante la transición política que provocó la muerte de Chávez en marzo de 2013 y su sustitución por el entonces vicepresidente del país, Nicolás Maduro, que fue considerada inconstitucional por parte de la oposición. La tensión se incrementó notablemente tras las elecciones presidenciales de abril de 2013, en las que Maduro se impuso por un escaso margen (50,6% de los votos) y en las que la oposición denunció numerosas irregularidades y solicitó, con el apoyo de varios Gobiernos y de la OEA, el recuento y la verificación de los sufragios. En un contexto de creciente crisis económica y de movilizaciones recurrentes y en ocasiones masivas, la crisis política en Venezuela se agudizó después de que la oposición ganara cómodamente las elecciones legislativas de diciembre de 2015, obteniendo su primera victoria en unos comicios en dos décadas. Tal victoria provocó una situación de una cierta parálisis institucional entre la Asamblea Nacional, por un lado, y el Gobierno y buena parte del poder judicial por otra.

La tensión política y social entre el Gobierno y la oposición se agudizó nuevamente a raíz de pulso institucional entre el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional y de los cuatro procesos electorales que se vivieron en el país durante el 2017. A finales de julio, **la Fiscal General del Estado declaró que 121 personas habían muerto y unas 2.000 habían resultado heridas desde el 1 de abril en el marco de las movilizaciones y las protestas que se produjeron en la mayor parte de estados del país** tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJV) de retirar la inmunidad parlamentaria a los miembros del Congreso y de asumir las competencias de la Asamblea Nacional –controlada por la oposición desde las elecciones legislativas de diciembre de 2015– por considerar que incumplía y desacataba varias sentencias judiciales. La Asamblea Nacional declaró que no asumía la decisión judicial y que desconocería todos los fallos del máximo tribunal del país y, además, llamó a activar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) para expulsar al país del organismo regional, por considerar que la sentencia suponía un “golpe de Estado”. Poco después de que la Fiscal General del Estado declarara que estas sentencias del TSJV violaban varios aspectos de la Constitución, el propio tribunal retiró las medidas más controvertidas de sus resoluciones. A pesar de ello, 19 países votaron una resolución de la OEA en la que instaban al Gobierno a restaurar la democracia y a respetar la separación de poderes, mientras que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó de “autogolpe de Estado” la decisión del TSJV. Las movilizaciones que se iniciaron en el mes de abril, las más masivas de los últimos meses, también estuvieron motivadas por la inhabilitación de 15 años para el ex candidato presidencial en 2012 y 2013 y actual gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, por presuntas irregularidades cometidas en tanto que gobernador de Miranda. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) emitió un informe en el que afirmaba que 124 personas habían muerto entre el 1 de abril y finales de julio y en el que se hacía eco de

los datos de algunas ONG según los que, en ese mismo periodo, más de 5.000 personas habrían sido detenidas. El ACNUDH también denunció que varias de estas detenciones podrían ser consideradas desapariciones forzadas, que más de 600 de las personas detenidas habrían sido sometidas a la jurisdicción militar, que los distintos cuerpos policiales habían utilizado la violencia de manera intencional e innecesaria y que las acciones de varios grupos de civiles armados habrían provocado la muerte de decenas de personas.

La tensión entre el Gobierno y la oposición se agudizó nuevamente en el mes de julio por la decisión del Gobierno de convocar unas elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, una institución impulsada por el Gobierno y que se otorgaría la potestad de asumir las competencias del Parlamento y de la Fiscalía General, así como de redactar una nueva Constitución. Según el Consejo Nacional Electoral, la participación fue del 41,4% (más de ocho millones de personas), pero la oposición declaró que ésta había sido de unos tres millones de personas. Además, la Fiscal General del Estado declaró que 10 personas habían muerto en acciones vinculadas a las elecciones del 30 de julio. Pocas semanas antes, la oposición había convocado una consulta unilateral no reconocida por el Gobierno en la que, según la oposición, habrían participado unos 7,5 millones de personas, la inmensa mayoría de las cuales se opuso a las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente y votó a favor del nombramientos de nuevos jueces del TSJV, del establecimiento de una nueva autoridad electoral y de la formación de un gobierno de unidad nacional. En el mes de agosto, la nueva Asamblea Nacional Constituyente votó la asunción de poderes de la Asamblea Nacional (decisión rechazada por ésta), la destitución de la Fiscal General, Luisa Ortega, y la imputación de varios líderes opositores por traición y por su participación en las protestas antigubernamentales que se produjeron desde el mes de abril. Tanto las elecciones del 30 de julio como las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente fueron condenadas por numerosos gobiernos y por organismos internacionales como la OEA, y comportaron la imposición de sanciones por parte de países como Canadá, EEUU o la UE, mientras que el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que no descartaba el uso de la fuerza para propiciar la restauración de la democracia en Venezuela.

El último trimestre del año estuvo marcado por las elecciones regionales y municipales, celebradas en octubre y diciembre respectivamente, así como por los intentos de diálogo entre el Gobierno y la oposición en República Dominicana, que contaron con la facilitación de varios países y que no lograron un acercamiento significativo de posturas. Las elecciones regionales celebradas el 15 de octubre y originalmente previstas para diciembre de 2016 provocaron una nueva escalada de tensión entre el Gobierno y la oposición por las acusaciones de irregularidades de ésta última. En este sentido, tanto la oposición como el Grupo de Lima,

compuesto por 12 países latinoamericanos, pidieron una auditoría independiente e internacional de todo el proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral declaró que el oficialismo había ganado en 18 de los 23 estados del país, mientras que la oposición lo hizo en los cinco restantes. En cuanto a las elecciones municipales celebradas el 10 de diciembre, el CNE señaló que el oficialismo había obtenido 308 de los 335 cargos municipales en disputa y que la participación había sido del 47%, pero tanto la oposición como numerosos analistas señalaron que la participación había sido mucho más baja y que se habían cometido numerosas irregularidades y anomalías como coerción, compra de votos, o violación del secreto de voto. A finales de diciembre, supuestamente como resultado del diálogo que mantuvieron el Gobierno y la oposición durante la primera mitad del mes de diciembre en República Dominicana, 44 prisioneros políticos fueron liberados, aunque la oposición señaló que el acuerdo entre las partes había sido de 80.

2.3.3. Asia y Pacífico

Asia Central

Tayikistán	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Sistema, Recursos, Territorio Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, antiguos señores de la guerra, grupos armados regionales, Uzbekistán, Kirguistán

Síntesis:

La tensión que afecta a Tayikistán está vinculada en gran parte al conflicto armado de 1992-1997, que enfrentó a dos bloques marcados por fuertes divisiones regionales: la alianza opositora de fuerzas islamistas y sectores liberales anticomunistas (centro y este del país) contra las fuerzas gubernamentales heredadas del régimen soviético (norte y sur). El acuerdo de paz de 1997 resultó en un compromiso de reparto de poder, con la incorporación de la oposición al Gobierno. En su etapa de rehabilitación posbélica, los problemas a los que hace frente el país incluyen tensiones regionales (con descontento de la población leninabadi en el norte del país hacia sus antiguos aliados del sur, los kulyabis, grupo de población predominante en el poder tras el fin de la guerra), la presencia de algunos señores de la guerra y ex combatientes opositores no desmovilizados en algunas zonas del país, el autoritarismo del régimen, la corrupción, los altos niveles de pobreza y desempleo, las tensiones con sus vecinas Uzbekistán y Kirguistán, la inestabilidad asociada a su frontera con Afganistán y la amenaza potencial de grupos armados yihadistas.

Continuó la situación de tensión en torno a diversos ejes, incluyendo la represión contra el islam político, así como las alertas por los riesgos de seguridad procedentes de insurgencias regionales. En clave interna, las autoridades mantuvieron su persecución

contra actores considerados cercanos al ilegalizado Partido del Renacimiento Islámico (PRI). Actor clave del conflicto armado de los años noventa y de los acuerdos de paz de 1997 y objeto de una política de persecución gubernamental desde 2015, el PRI fue designado ese año como organización terrorista y en 2016 se vio afectado por la prohibición de partidos religiosos en el país, desmantelándose los acuerdos de paz, que garantizaban su participación política, tendencia que continuó en 2017. **Durante el año se agravó la represión contra familiares de miembros encarcelados o exiliados del PRI**, a través de presentación de cargos considerados fabricados por organizaciones de derechos humanos, incluyendo acusaciones de intentos de derrocar el orden constitucional por vías violentas. En 2017, 105 activistas políticos permanecían encarcelados, según el Central Asia Labour Rights Monitoring Mission. El propio líder del PRI, Muhiddin Kabiri, cifró en más de un centenar los miembros del PRI en prisión, de los cuales una veintena tendrían sentencias de más de 20 años de cárcel, mientras cargos locales y activistas del partido cumplían sentencias de diez y veinte años. Kabiri, quien recibió asilo político en febrero en Alemania, afirmó que continuaría con la actividad política desde el exilio. Medios estatales advirtieron que la misión de la OSCE en el país podría ser cerrada si Muhiddin Kabiri participaba en una conferencia de la OSCE sobre derechos humanos en Polonia en septiembre, a la que finalmente Kabiri asistió. Amnistía Internacional denunció palizas, amenazas, insultos y acoso cometido contra el abogado de derechos humanos y representante de varios acusados en la causa penal contra el PRI Buzurgmekhr Yorov. Siguiendo la política de persecución contra expresiones del islam no oficialista, en enero de 2018 las autoridades cerraron en torno a un centenar de mezquitas en el norte del país.

Por otra parte, durante el año **las autoridades tayikas mantuvieron la alerta por los percibidos riesgos de extensión de la violencia de la vecina Afganistán a Tayikistán**, así como, por otra parte, por los riesgos que puede suponer el retorno de combatientes de ISIS procedentes de Tayikistán. El Ministerio de Interior afirmó en enero que se habían impedido 36 ataques terroristas en el país en 2016, mientras cifró en 1.100 el número de ciudadanos de Tayikistán que combatían en las filas de ISIS en Siria e Iraq, de los cuales 300 habrían fallecido y 60 retornaron a Tayikistán acogidos a una amnistía. Cuatro familiares del ex coronel tayiko Gulmurod Khalimov, que se sumó a las filas de ISIS en 2015 como “ministro de guerra”, murieron a manos de las fuerzas de seguridad en julio en el distrito de Vose (provincia de Khatlon, suroeste, fronteriza con Afganistán y Uzbekistán). Otros familiares fueron detenidos y encarcelados. Un comandante de una unidad fronteriza de Tayikistán murió y cuatro guardias fronterizos resultaron heridos en un tiroteo en la frontera con Afganistán a comienzos de diciembre. Tayikistán instó a las autoridades afganas a reforzar la frontera. Según las autoridades, durante el año se habrían producido al menos 26 incidentes armados

en la frontera, en los que habrían muerto al menos 13 personas, definidos como traficantes de droga. Durante el año Tayikistán acogió ejercicios militares de gran escala. En marzo, 50.000 tropas tayikas y 2.000 rusas llevaron a cabo maniobras en el sur del país. En mayo, el país fue escenario de nuevos ejercicios militares, por primera vez bajo el paraguas del Centro Antiterrorista de la Comunidad de Estados Independientes (CEI). En ellos, Rusia utilizó por vez primera en ejercicios fuera de su territorio el sistema de misiles balísticos Iskander-M. Por otra parte, continuaron produciéndose situaciones de tensión en la frontera con Uzbekistán. La guardia fronteriza tayika denunció la incursión de varios guardias fronterizos de Uzbekistán, que habrían tiroteado a un ciudadano de Tayikistán alegando actuar en defensa propia.

Asia Meridional

India (Assam)	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, ULFA, ULFA(I), NDFB, NDFB-IKS, KPLT, NSLA, UPLA y KPLT
Síntesis:	El grupo armado de oposición ULFA surge en 1979 con el objetivo de liberar el estado de Assam de la colonización india y establecer un Estado soberano. Las transformaciones demográficas en el estado tras la partición del subcontinente indio, con la llegada de dos millones de personas procedentes de Bangladesh, están en el origen de la reclamación de la población de origen étnico asamés de un reconocimiento de sus derechos culturales, civiles y de creación de un Estado independiente. Durante las décadas de los ochenta y noventa se producen varias escaladas de violencia, así como intentos de negociación que fracasan. En el año 2005 se inicia un proceso de paz que tiene como consecuencia una reducción de la violencia y que se interrumpirá en el año 2006 dando lugar a una nueva escalada del conflicto. Por otra parte, en los ochenta surgen grupos armados de origen bodo, como el NDFB, que reivindican el reconocimiento de su identidad frente a la población mayoritaria asamesa. Desde 2011 se ha producido una reducción significativa de la violencia y numerosos grupos armados han entregado las armas o iniciado conversaciones con el Gobierno.

El estado indio de Assam continuó siendo escenario de violencia, como consecuencia de la actividad de diversos grupos insurgentes y de la acción de las fuerzas de seguridad indias, pero se registró un notable descenso de la mortalidad asociada a la situación de conflicto con respecto a años anteriores. Durante 2017 se produjeron 26 víctimas mortales como consecuencia de la violencia, frente a las 86 que se registraron el año anterior, y en claro contraste con las 305 que se llegaron a producir en el año 2014, de acuerdo con las cifras recogidas por el South Asia Terrorism Portal. No obstante, no desaparecieron los diversos focos de tensión y se registraron enfrentamientos entre

grupos insurgentes y fuerzas de seguridad, numerosas detenciones de personas acusadas de pertenecer a estos grupos armados, operaciones de las fuerzas de seguridad y prácticas como atentados y extorsiones. Además, persistieron las tensiones comunitarias, sobre todo entre la población local y la población llegada de Bangladesh en las últimas décadas, así como entre diferentes grupos étnicos. Se registraron enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad indias y grupos armados como el ULFA-I o el NDFB-IKS, que dejaron varias víctimas mortales en diferentes momentos del año. Uno de los episodios más graves de violencia se registró en diciembre, cuando integrantes del ULFA-I tirotearon a dos hombres, padre e hijo, en el distrito de Tinsukia a quienes acusó de colaboración con las Fuerzas Armadas indias. El primero era un líder local del partido nacionalista hindú BJP y su hijo había sido dirigente de la organización estudiantil AASU y tras su muerte se convocaron diversas protestas sociales. Por otra parte, cabe destacar que las fuerzas de seguridad advirtieron de que en los últimos años se ha producido un incremento de la actividad insurgente en todos los estados del nordeste de la India en la zona fronteriza con Myanmar, país en el que algunos grupos tienen sus bases, trasladándose aquí enfrentamientos que anteriormente tenían lugar con mayor frecuencia en la frontera con Bangladesh. Respecto a la actividad de las fuerzas de seguridad, cabe destacar que por primera vez en 27 años, el gobierno del estado de Assam decidió prolongar la aplicación de la legislación antiterrorista de excepción, la Armed Forces Special Powers Act, tarea que hasta entonces había quedado en manos del Gobierno central indio. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado las múltiples violaciones a los derechos de la población civil que esta legislación ha amparado a lo largo de décadas de conflicto.

India (Manipur)	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Autogobierno Interna
Actores:	Gobierno, grupos armados (PLA, PREPAK, PREPAK (Pro), KCP, KYKL, RPF, UNLF, KNF, KNA)

Síntesis:

La tensión que enfrenta al Gobierno con los diferentes grupos armados que operan en el estado de Manipur y varios de éstos entre sí tiene su origen en las demandas de independencia de varios de estos grupos, así como en las tensiones existentes entre los diferentes grupos étnicos que conviven en el estado. En las décadas de los sesenta y setenta surgen varios grupos armados, algunos de inspiración comunista y otros de adscripción étnica, que permanecerán activos a lo largo de las décadas posteriores. Por otro lado, el contexto regional, en un estado fronterizo con Nagalandia, Assam y Myanmar, también marcará el desarrollo de la conflictividad en Manipur, y serán constantes las tensiones entre grupos étnicos manipuris con población naga. El empobrecimiento económico del

estado y el aislamiento con respecto al resto del país han contribuido decisivamente a consolidar un sentimiento de agravio en la población de Manipur. En los últimos años se ha producido una progresiva reducción de la violencia armada.

En el estado de Manipur persistió la situación de tensión y violencia y se registró un aumento en el número de víctimas mortales como consecuencia del conflicto que transcurre en el estado. **A lo largo de 2017 se produjo la muerte de 55 personas como consecuencia de la violencia armada, frente a las 33 registradas en 2016**, según las cifras recopiladas por el South Asia Terrorism Portal. Durante todo el año se registraron enfrentamientos esporádicos entre los grupos insurgentes que operan en el estado y las fuerzas de seguridad indias, así como enfrentamientos entre los propios grupos armados. Además, las fuerzas de seguridad protagonizaron múltiples operaciones contrainsurgentes a lo largo de todo el año que derivaron en detenciones de insurgentes así como también en diversas muertes. También se registraron asesinatos de civiles. Por otra parte, cabe destacar que durante los primeros meses del año persistió la situación de bloqueo económico que se inició en noviembre de 2016 por parte de organizaciones nagas contra la decisión del estado de crear nuevos distritos. A finales del mes de marzo se pactó el levantamiento del bloqueo y se inició un proceso de negociaciones con las organizaciones nagas respecto a la configuración territorial del estado que al finalizar el año no había concluido ni había dado lugar a avances significativos en lo que respecta a un nuevo acuerdo territorial. Por otra parte, cabe destacar que el Tribunal Supremo de la India ordenó en julio una investigación de las acusaciones de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad en el estado entre 1979 y 2012, que según las organizaciones de derechos humanos serían más de 1.500. Tanto el Gobierno como las fuerzas de seguridad se opusieron a esta investigación, acusando a los grupos insurgentes de estar detrás de los asesinatos.

India – Pakistán	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Identidad, Territorio Internacional
Actores:	India, Pakistán

Síntesis:

La tensión entre los Estados de India y Pakistán se originó con la independencia y partición de ambos y la disputa por la región de Cachemira. En cuatro ocasiones (1947-1948; 1965; 1971, 1999) se han enfrentado en un conflicto armado, reclamando ambos países la soberanía sobre esta región, dividida territorialmente entre India, Pakistán y China. El conflicto armado en 1947 dio lugar a la actual división y frontera de facto entre ambos países. Desde 1989, el conflicto armado se traslada al interior del estado indio de Jammu y Cachemira. En 1999, un año después de que ambos países llevaran a cabo pruebas nucleares, la tensión derivó en

el hasta ahora último conflicto armado, paralizado por la mediación estadounidense. En 2004 se inició un proceso de paz, sin avances sustantivos en la resolución de la disputa por Cachemira, aunque sí acercamientos significativos sobre todo en las relaciones económicas. No obstante, las acusaciones indias a Pakistán sobre su apoyo a la insurgencia que opera en Jammu y Cachemira han persistido, así como episodios esporádicos de violencia en la frontera *de facto* que divide ambos Estados. En el año 2008 se produjeron graves atentados en la ciudad india de Mumbai que llevaron a la ruptura formal del proceso de paz ante las acusaciones indias de que éstos habían sido organizados en suelo pakistaní. Desde entonces las relaciones entre los dos países han permanecido estancadas aunque se han producido algunos contactos diplomáticos.

La situación de tensión entre India y Pakistán continuó profundamente deteriorada durante todo el año, con múltiples incidentes de violencia que empañaron las relaciones diplomáticas entre ambos países y que dificultaron cualquier avance en un proceso de diálogo para solventar los diversos conflictos que enfrentan a ambos Estados. **A lo largo del año se repitieron los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad de los dos países en diferentes emplazamientos de la Línea de Control, frontera de facto que separa a los dos países, con violaciones al acuerdo de alto el fuego de 2003 por parte de los dos países.**

Como consecuencia de estos incidentes podrían haber muerto en torno a un centenar de personas según las diferentes informaciones aparecidas en prensa, aunque muchas de las acusaciones mutuas de asesinato no pudieron ser confirmadas de manera independiente. En mayo, la Corte Internacional de Justicia paralizó la ejecución de un exoficial de la Armada india acusado de espionaje y de promover actividades terroristas en Baluchistán y condenado a pena de muerte en Pakistán. Por otra parte, el Gobierno indio denunció el asesinato y mutilación de dos soldados indios por parte de las fuerzas de seguridad de Pakistán a principios de mayo e instó al embajador pakistaní a exigir a su Gobierno que emprendiera acciones contra estos hechos. Además, la muerte en Jammu y Cachemira a finales de mayo del insurgente Sabzar Ahmad Bhat, líder del grupo armado Hizbul Mujahideen, como consecuencia de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad indias, incrementó la tensión en la zona y en junio se produjeron nuevos choques transfronterizos que causaron la muerte de dos civiles en el distrito de Poonch en Pakistán y de una persona en Jammu y Cachemira. India acusó a Pakistán de haber iniciado la violencia. En septiembre, el Gobierno indio acusó de haber tiroteado a una niña pakistaní, lo que generó protestas sociales tras su muerte. En diciembre, tres soldados murieron como consecuencia de disparos indios en Rakh Chikri Sector del distrito de Poonch. Estas muertes se producían días después de que el Gobierno indio acusase a Pakistán de ser el responsable de la muerte de cuatro soldados indios en el distrito de Rajauri de Jammu y Cachemira.

Se produjeron múltiples violaciones del alto el fuego entre India y Pakistán a lo largo del año, que provocaron decenas de víctimas mortales

Pakistán	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social, oposición armada (milicias talibán, milicias de partidos políticos), Fuerzas Armadas, servicios secretos

Síntesis:

En 1999 un golpe de Estado perpetrado por el General Pervez Musharraf puso fin al Gobierno del entonces primer ministro Nawaz Sharif, que evitó una condena exiliándose a Arabia Saudita. El golpe de Estado le valió al nuevo régimen militar el aislamiento internacional, que acabó tras los atentados de septiembre de 2001, cuando Musharraf se convirtió en el principal aliado de EEUU en la región en la persecución de al-Qaeda. La perpetuación de Musharraf en el poder, la ostentación simultánea de la Jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas, los ataques al poder judicial, la impopularidad de la alianza con EEUU en un periodo de aumento del antiamericanismo, la crisis económica y medioambiental, o la creciente presencia de grupos terroristas en otras zonas del país (más allá de las áreas tribales), con el consecuente aumento de la inseguridad, son algunos de los elementos que han explicado durante años la frágil situación política del país. En 2008 Musharraf dimitió como presidente tras las elecciones legislativas, con gran parte del Parlamento en su contra. Asif Ali Zardari del PPP fue votado para sucederle en la presidencia. A pesar del retorno de la democracia al país, y de vivir hitos históricos como el primer traspaso de un Gobierno (PPP) que finaliza su legislatura de cinco años de forma pacífica al siguiente Gobierno electo (Liga Musulmana de Nawaz), Pakistán sigue siendo un país inestable.

En paralelo a los diferentes conflictos armados que asolan Pakistán,³⁰ el país atravesó también una grave crisis política, con algunos episodios de violencia asociados a sus diferentes focos de tensión. La ciudad de Karachi continuó gravemente afectada por la violencia y se registraron 337 homicidios violentos. En

lo que respecta a la situación del Gobierno pakistaní, cabe destacar que en el mes de julio **el primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, se vio forzado a renunciar a su cargo después de que la Corte Suprema le inhabilitara para ostentar cargos públicos a raíz de las informaciones reveladas por los Papeles de Panamá** relativas a varias empresas de su familia vinculadas a casos de corrupción y ordenara que se iniciara una investigación contra el primer ministro y su familia. Sharif rechazó las acusaciones de corrupción. El partido de Sharif decidió la nominación del hermano del ex mandatario y ministro jefe de Punjab, Shahbaz Sharif como primer ministro y que el cargo fuera ocupado de forma interina por el antiguo ministro federal Shahid Khaqan Abbasi hasta la elección de Sharif por el Parlamento. Algunos medios de comunicación se hicieron eco de pequeños

30. Véase el resumen de Pakistán en el capítulo 1 (Conflictos armados).

enfrentamientos entre seguidores de Sharif y del líder de la oposición Imran Khan en varias localidades. En noviembre se produjo una nueva crisis gubernamental, que en este caso afectó al ministro de Justicia, que también se vio forzado a dimitir tras las intensas protestas y disturbios en diferentes ciudades del país que tuvieron lugar a lo largo del mes de noviembre en los que murieron al menos seis personas y otras 200 resultaron heridas. La dimisión se produjo después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con los líderes de las protestas, encabezadas por la organización religiosa TLYR, que acusaban al ministro de blasfemia por haber impulsado una reforma electoral en la que se modificaba la formulación de la creencia en el Profeta Mahoma y que el TLYR interpretaba también como una suavización de la designación de la comunidad ahmadí como no musulmana. El acuerdo contemplaba la puesta en libertad de todas las personas detenidas en el marco de los disturbios. Por otra parte, persistieron las denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos en el país, incluyendo serias restricciones a la libertad de expresión, desapariciones forzadas y asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos, además de graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres, con una estimación de 1.000 asesinatos “por honor” anuales.

Asia Oriental

China (Xinjiang)	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Autogobierno, Sistema, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, oposición armada (ETIM, ETLO), oposición política y social

Síntesis:

Xinjiang, también conocida como Turquestán Oriental o Uiguristán, es la región más occidental de China, alberga importantes yacimientos de hidrocarburos y ha estado habitada históricamente por la población uigur, mayoritariamente musulmana y con importantes vínculos culturales con países de Asia Central. Tras varias décadas de políticas de aculturación, explotación de los recursos naturales e intensa colonización demográfica, que ha alterado sustancialmente la estructura de la población y ha provocado tensiones comunitarias desde los años cincuenta, varios grupos armados secesionistas iniciaron acciones armadas contra el Gobierno chino, especialmente en los años noventa. Beijing considera terroristas a tales grupos, como ETIM o ETLO, y ha tratado de vincular su estrategia contrainsurgente a la llamada lucha global contra el terrorismo. En 2008, con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos en Beijing, se registró un incremento de las acciones armadas de los grupos insurgentes, mientras que en 2009 se produjeron los enfrentamientos comunitarios más intensos de las últimas décadas. En los años siguientes la violencia se hizo más intensa, frecuente y compleja, hasta alcanzar su apogeo en 2014. Posteriormente, la creciente militarización de la región y la aplicación de medidas de contrainsurgencia provocaron una drástica reducción de los episodios de violencia, aunque también se incrementaron las denuncias por violaciones de los derechos humanos.

Aunque se mantuvo la tendencia a la baja en los niveles de violencia de los años anteriores, **el Gobierno expresó su preocupación por un repunte de las acciones armadas a principios de año y por la identificación de Xinjiang por parte de ISIS y al-Qaeda como un lugar estratégico para los movimientos yihadistas, lo cual generó un notable incremento de la militarización de Xinjiang y el consiguiente incremento de denuncias por violaciones de los derechos humanos.** Durante el primer trimestre del año, un centro de investigación de la Academia China de Ciencias Sociales publicó un artículo en el que, sin dar cifras, señalaba que los niveles de violencia se habían reducido desde el año 2016, pero a la vez también reconocía que éstos podrían volver a incrementarse nuevamente por la existencia de sólidos vínculos entre grupos armados locales y grupos yihadistas foráneos. Por su parte, algunas organizaciones de la sociedad civil consideran que es difícil hacer un análisis riguroso de la evolución de los niveles de violencia en la región porque el Gobierno suele restar importancia o directamente no informar sobre la mayor parte de incidentes armados que ocurren en Xinjiang. Sea como sea, tras varios meses de relativa calma y sin episodios significativos de violencia en Turquestán Oriental, la preocupación del Gobierno chino se incrementó a principios de año por la muerte de tres personas a manos de las Fuerzas Armadas en el marco de un operativo antiterrorista que se puso en marcha después de que a finales de diciembre de 2016 cinco personas fallecieron cuando intentaban atentar con explosivos contra un edificio del Partido Comunista en el condado de Moyu. Posteriormente en febrero, ocho personas murieron y otras cinco resultaron heridas después de que, según el Gobierno, un grupo de personas armadas con cuchillos atacara a varios civiles en el condado de Pishan. Por otra parte, a finales de febrero, ISIS y el Partido Islámico del Turkestán, afiliado a al-Qaeda, lanzaron sendos vídeos en los que amenazaban directamente al Gobierno chino y en el que llamaban a incrementar el número de ataques en Xinjiang. Según algunos analistas, el vídeo emitido por ISIS es importante porque es el primero en lengua uigur y porque supone que China, a diferencia de lo que sucedía hasta el momento, pasa a ser un objetivo importante en la retórica de organizaciones yihadistas. En los días posteriores al lanzamiento del mencionado vídeo, el Gobierno chino expresó su preocupación por los vínculos transnacionales de los grupos armados que operan en Xinjiang y anunció su intención de incrementar la cooperación internacional para dificultar que el tránsito de combatientes que vayan a Siria o que regresen de ella. Además, el presidente chino, Xi Jinping, llamó públicamente a construir un muro de acero alrededor de Xinjiang y, ya hacia finales de mes, el poder legislativo aprobó nuevas medidas antiterroristas, que fueron criticadas por varias organizaciones por considerar que atentan contra los derechos humanos y contra la libertad religiosa de la comunidad musulmana.

Ante esta situación, en las semanas posteriores a los incidentes violentos de principios de año, el Gobierno desplegó a decenas de miles de fuerzas y cuerpos de

seguridad del estado sin precedentes, llevó a cabo desfiles militares en varias ciudades de Xinjiang y anunció el refuerzo de las medidas de control fronterizo. En esta línea, según algunos medios, en el mes de mayo el Gobierno habría ordenado a todos los estudiantes de Xinjiang estudiando en el extranjero de regresar bajo la amenaza de que sus familiares fueran detenidos. Además, en las mismas fechas el Gobierno anunció su intención de introducir el uso de drones para reforzar la vigilancia de fronteras en Xinjiang, que limita con ocho países de Asia central y meridional y tiene unos 5.600 kilómetros de trazado fronterizo. Además, como parte de la nueva legislación sobre control fronterizo que entró en vigor en diciembre de 2016, el Gobierno también anunció su intención de instalar cámaras de vigilancia y alambre de espino a lo largo de toda la frontera. Según Beijing, uno de los principales retos en la región es la posible infiltración en Xinjinag de organizaciones yihadistas foráneas o bien de grupos armados uigures que hayan recibido entrenamiento, santuario y financiación en países de la región. En este sentido, el Gobierno chino volvió a recalcar su preocupación por los vínculos transnacionales de los grupos armados que operan en Xinjiang y anunció su intención de incrementar la cooperación internacional para dificultar que el tránsito de combatientes que vayan a Siria o que regresen de ella. Finalmente, cabe destacar que en diciembre **Human Rights Watch publicó un informe en el que denunciaba que el Gobierno, a través de un sistema de chequeos médicos, está creando bases de datos con información biométrica (como el ADN, las huellas dactilares o muestras de sangre) sobre millones de ciudadanos en Xinjiang entre 12 y 65 años con finalidades de control y vigilancia.**

Corea, RPD – Rep. de Corea	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Sistema Internacional
Actores:	RPD Corea, Rep. de Corea

Síntesis:

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la ocupación de la península coreana por parte de tropas soviéticas (norte) y estadounidenses (sur), ésta quedó dividida en dos países. La Guerra de Corea (1950-53) finalizó con la firma de un armisticio –por lo que técnicamente ambos países permanecen en guerra– y con el establecimiento de una frontera *de facto* en el paralelo 38. A pesar de que ya en los años setenta se inició el diálogo acerca de la reunificación, ambos países han amenazado en varias ocasiones con emprender acciones bélicas. Así, en las últimas décadas se han registrado numerosos incidentes armados, tanto en la frontera común entre ambos países (una de las zonas más militarizadas de todo el mundo) como en la frontera marítima en el Mar Amarillo o Mar Occidental. Aunque en el año 2000 los líderes de ambos países mantuvieron una reunión histórica en la que acordaron el establecimiento de medidas de confianza, tras la llegada a la presidencia surcoreana de Lee Myung-bak en el año 2007 la tensión

volvió a incrementarse significativamente y volvieron a producirse algunos enfrentamientos bélicos en la frontera. Posteriormente, la muerte de Kim Jong-il a finales de 2011, sucedido en el cargo por su hijo Kim Jong-un, así como la elección de Park Geun-hye como nueva presidenta surcoreana a finales de 2012, abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

La elección de Moon Jae-in en el mes de mayo conllevó una mejora sustancial en las relaciones bilaterales entre ambos países, aunque tanto Seúl como Pyongyang siguieron cruzando acusaciones acerca del programa nuclear norcoreano, la situación de los derechos humanos en Corea del Norte o los ejercicios militares conjuntos entre Corea del Norte y EEUU. En efecto, en el mes de mayo, Moon Jae-in –cuyos padres nacieron en Corea del Norte pero abandonaron el país durante la Guerra de Corea– ganó los comicios prometiendo un acercamiento a Corea del Norte, pero a la vez reforzando las capacidades militares del país para hacer frente al programa nuclear norcoreano. Poco después de tomar posesión del cargo, delegaciones de Corea del Norte y Corea del Sur se reunieron con motivo de una reunión de la iniciativa One Belt, One Road (también conocida como La Nueva Ruta de la Seda) auspiciada por China en la que la delegación surcoreana habría trasladado su disposición al diálogo. Más tarde, **en el mes de julio, Moon Jae-in propuso la celebración de conversaciones militares para rebajar la tensión en la frontera en la localidad fronteriza de Panjunmon, las primeras de este tipo desde diciembre de 2015.** Del mismo modo, el nuevo presidente surcoreano también propuso la celebración de conversaciones de tipo humanitario para abordar los encuentros de familias separadas por la guerra, así como la posibilidad de que ambos países desfilaran conjuntamente en los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en febrero de 2018 en la localidad surcoreana de Pyeongchan. Esta propuesta se realizó pocos días después de que Pyongyang llevara a cabo un ensayo con un misil balístico intercontinental y poco antes de realizar unos ejercicios militares conjuntos que provocaron las críticas de Corea del Norte. En agosto, las Fuerzas Armadas surcoreanas volvieron a llevar a cabo maniobras militares conjuntas con EEUU. Además, ambos Gobiernos anunciaron que había sido testado con éxito el nuevo sistema de defensa anti-misiles instalado por EEUU en territorio surcoreano, y que cuenta con la firme oposición tanto de Corea del Norte como de China. Sin embargo, en el mismo mes de agosto, en plena escalada verbal de amenazas de guerra entre Corea del Norte y EEUU a raíz del lanzamiento de varios misiles por parte de Pyongyang, Moon Jae-in recordó que cualquier acción militar en la península coreana debe ser decidida únicamente por Corea del Sur y que su Gobierno trataría de evitar cualquier confrontación bélica a toda costa. En los últimos meses del año el Gobierno de Corea del Sur impuso sanciones por el ensayo nuclear que llevó a cabo Pyongyang a principios de septiembre y por el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales a finales de noviembre, pero a la vez ambos Gobiernos

acordaron la celebración de conversaciones de alto nivel en la frontera común a principios de 2018. Además, Mae Jae-in obtuvo el compromiso de EEUU de no celebrar ejercicios militares conjuntos antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno si a su vez Pyongyang se comprometía a congelar cabo nuevos ensayos balísticos o nucleares. Según el presidente surcoreano, estas medidas podrían facilitar las conversaciones entre Corea del Norte y del Sur, así como un acercamiento de posiciones entre Corea del Norte y EEUU.

Corea, RPD – EEUU, Japón, Rep. de Corea ³¹	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Internacional
Actores:	RPD Corea, EEUU, Japón, Rep. de Corea, China, Rusia

Síntesis:

La preocupación internacional por el programa nuclear de Corea del Norte se remonta a principios de los años noventa, cuando el Gobierno norcoreano ya restringió la presencia en el país de observadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y llevó a cabo varios ensayos con misiles. Sin embargo, la tensión internacional se incrementó notablemente después de que en el año 2002 la Administración estadounidense de George W. Bush incluyera al régimen norcoreano en el llamado “eje del mal”. Pocos meses después de que Pyongyang reactivara un importante reactor nuclear y de que se retirara del Tratado de No proliferación Nuclear, en 2003 se iniciaron conversaciones multilaterales sobre la cuestión nuclear en la península de Corea en las que participaron los Gobiernos de Corea del Norte, Corea del Sur, EEUU, Japón, China y Rusia. En abril de 2009, Corea de Norte anunció su retirada de dichas conversaciones después de que Naciones Unidas le impusiera nuevas sanciones por el lanzamiento de un misil de largo alcance.

Se incrementó notablemente la tensión entre Corea del Norte y parte de la comunidad internacional por el ensayo nuclear que llevó a cabo Pyongyang a principios de septiembre, el de mayor alcance hasta el momento, así como por el ensayo con un misil balístico intercontinental llevado a cabo por Corea del Norte a finales de noviembre. Ya a principios de año, **el Gobierno de EEUU mostró su preocupación por los avances en las capacidades nucleares y balísticas de Corea del Norte que se habían producido en 2016**, un año en el que Pyongyang llevó a cabo el mayor número de ensayos armamentísticos de su historia: 24 de misiles y dos de bombas nucleares. Durante el 2017 Pyongyang también llevó a cabo numerosos ensayos con misiles balísticos, propiciando críticas y algunas nuevas sanciones por parte de Naciones Unidas y varios países, pero los que generaron mayor preocupación fueron los que se lanzaron el 4 y el 28 de julio y, especialmente, el ensayo con un misil balístico intercontinental (Hwasong-15)

a finales de noviembre. Este ensayo, que provocó la imposición de nuevas sanciones por parte de Naciones Unidas o de los Gobierno de Corea del Sur o EEUU, generó una enorme inquietud porque, según algunos expertos, el mencionado misil habría alcanzado una altitud netamente superior a la de ensayos anteriores y denota la capacidad de Corea del Norte de impactar en cualquier parte del EEUU continental. En este sentido, algunos científicos señalaron que, si bien el recorrido del mencionado misil fue de unos 4.500 kilómetros, tendría un alcance de unos 13.000 kilómetros. Además, Corea del Norte anunció que este tipo de misiles podían llevar adosadas cabezas nucleares de grandes dimensiones y declaró que con este ensayo se finalizaba el programa balístico y se culminaba la tarea de convertir a Corea del Norte en una potencia nuclear. El Gobierno de EEUU mostró su preocupación y admitió que este nuevo tipo de misiles podían impactar en prácticamente cualquier parte del mundo y suponían una seria amenaza a la paz y la seguridad internacionales.

Pocos meses antes, a principios de septiembre, **Pyongyang declaró haber detonado con éxito una bomba nuclear de hidrógeno, generando preocupación entre la comunidad internacional por tratarse del mayor ensayo nuclear hasta el momento (el sexto)** y, según varios analistas, por tratarse de la bomba atómica más fácilmente adosable a misiles balísticos. En las semanas siguientes a este ensayo, que provocó la imposición de nuevas sanciones por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de varios países, se incrementó la tensión en la península, especialmente la retórica entre EEUU y Corea del Norte. Así, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU en el mes de septiembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que destruiría totalmente Corea del Norte si ésta amenazaba a EEUU o cualquiera de sus aliados. Además, bombarderos estadounidenses sobrevolaron partes orientales de Corea del Norte. Por su parte, el Gobierno norcoreano declaró que Trump había declarado la guerra a su país y se reservó el derecho de tomar medidas defensivas como el derribo de los mencionados bombarderos. Aunque en términos generales el Gobierno de EEUU se mostró partidario de una solución dialogada para la desnuclearización de la península coreana, en algunas ocasiones altos cargos del Gobierno o congresistas declararon públicamente que no descartaban la opción militar para poner fin al programa nuclear norcoreano. En este sentido, la tensión entre Corea del Norte y EEUU también pivotó sobre otros tres ejes. En primer lugar, por los ejercicios militares de este país en la región, en ocasiones en conjunto con Corea del Sur. En 2017 se llevaron a cabo algunos de los ejercicios militares de mayor envergadura de la historia. En segundo lugar, por la instalación en Corea del Sur de un sistema de defensa de misiles por parte de EEUU, que cuenta con la oposición de países como Corea del Norte, China o Rusia. En tercer lugar, por la inclusión por parte de EEUU de Corea del Norte

31. Esta tensión internacional hace referencia principalmente a la disputa en torno al programa nuclear norcoreano.

en el listado de países que auspician y promocionan el terrorismo, de la que había sido retirado años atrás como medida del fomento de la confianza para iniciar las conversaciones multilaterales a seis bandas sobre la desnuclearización de la península coreana.

Sudeste Asiático y Oceanía

Tailandia	
Intensidad:	1
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Aunque ya desde la llegada al poder de Thaksin Shinawatra en 2001 numerosos sectores denunciaron su estilo autoritario, su campaña contra el narcotráfico (en la que murieron más de 2.000 personas) o su aproximación militarista al conflicto en el sur, la crisis sociopolítica que ha padecido Tailandia en los últimos años escaló en 2006. Ese año, tras hacerse público un caso de corrupción, se registraron masivas movilizaciones para exigir la renuncia de Thaksin Shinawatra hasta que, en el mes de septiembre, una junta militar llevó a cabo un golpe de Estado que le obligó a exiliarse. A pesar de que en agosto de 2007 fue aprobada en referéndum una nueva Constitución, el nuevo Gobierno no logró disminuir la polarización política y social y siguieron produciéndose de forma periódica manifestaciones multitudinarias impulsadas tanto por del Frente Unido para la Democracia y Contra la Dictadura (movimiento conocido como “camisas rojas”, que apoya el retorno del ex primer ministro Thaksin Shinawatra) como por la Alianza Popular para la Democracia (movimiento conocido como “camisas amarillas”. Dicha inestabilidad desembocó en numerosos actos de violencia, en la renuncia de varios Gobiernos y en el derrocamiento del Gobierno de Yingluck Shinawatra –hermana de Thaksin Shinawatra– a través de un golpe de estado en mayo de 2014. Desde entonces, el país está gobernado por una junta militar denominada Consejo Nacional para la Paz y el Orden, que ha sido acusada en numerosas ocasiones de prohibir la acción de los partidos, restringir libertades fundamentales y derechos y de querer institucionalizar y perpetuar una situación de excepcionalidad constitucional y democrática.

No se produjeron movilizaciones sociales ni episodios de violencia significativos, pero sí se registraron una serie de atentados en las semanas anteriores al tercer aniversario del golpe de Estado de mayo de 2014, así como numerosas críticas por la vulneración de derechos humanos, por la prohibición de la actividad de los partidos políticos y por la creciente represión contra la oposición política y social, especialmente contra el movimiento denominado de Camisas Rojas y contra la primera ministra depuesta en dicho golpe de Estado, Yingluck Shinawatra. Respecto de este último punto, cabe señalar que **Shinawatra, hermana de un primer ministro también depuesto en golpe de Estado en 2006, abandonó el país en el mes de agosto, pocas semanas antes de que el Tribunal Supremo la condenara *in absentia* a cinco años de cárcel por cargos de corrupción** vinculados a un programa de subsidios

del sector del arroz. Coincidiendo con ambos hechos y anticipando posibles protestas, la Junta Militar incrementó las medidas policiales en todo el país. Poco antes, había sido secuestrado en Vientiane (Laos) un destacado líder del movimiento de los Camisas Rojas acusado de organizar un movimiento de resistencia armada contra el llamado Consejo Nacional para la Paz y el Orden (CNPO). Cabe destacar que en las semanas inmediatamente anteriores al tercer aniversario del golpe de Estado de mayo de 2014 que instaló en el poder al actual CNPO se produjeron varios atentados –a principios de abril en una venida importante, a mediados de mayo en un teatro, a finales de mayo en un hospital militar– en los que unas 30 personas resultaron heridas en Bangkok, además de la identificación de un artefacto explosivo en el metro de la capital a finales de mayo. Estos incidentes, atribuidos por el Gobierno a un mismo grupo que tendría el objetivo de desacreditar a la Junta Militar, provocaron un incremento significativo en el número de detenciones. En este sentido, en varios momentos del año organizaciones de derechos humanos e incluso del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas criticaron que prosiguiera la detención de numerosos activistas políticos y sociales, la continua vulneración de derechos fundamentales, la ley de delitos de lesa majestad o la propia constitución interina auspiciada por la Junta Militar.

Por otra parte, **tanto la oposición como organizaciones de la sociedad civil también criticaron que siguiera vigente la prohibición de cualquier actividad a los partidos políticos, los retrasos en la aprobación de la nueva Constitución o en el anuncio de la fecha para la celebración de las elecciones generales que deberían comportar una normalización democrática del país.** Respecto de este último aspecto, aunque en 2016 se había especulado con la posibilidad de que las elecciones tuvieran lugar durante el 2017, el propio primer ministro, Prayuth Chan-ocha, declaró que en junio de 2018 anunciaría la fecha elegida para los comicios. Si bien circuló la información de que podrían celebrarse en diciembre de 2018, el CNPO dejó claro que éstas no se celebrarían hasta que se hubieran ultimado las cuatro leyes orgánicas que regulan el funcionamiento de los partidos políticos y las elecciones. En cuanto al proceso de tramitación de la nueva Constitución, en el mes de abril el rey finalmente sancionó el borrador, solamente después de que se hubieran incorporado varias enmiendas que refuerzan las competencias reales. En el ámbito institucional, también cabe destacar el inicio en enero por parte del Gobierno de un proceso de reconciliación nacional, el restablecimiento de varias instituciones por parte de la Asamblea Legislativa –como la Comisión Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Defensor del Pueblo– o la enmienda en noviembre de la ley de seguridad, que incrementa los poderes en el ámbito local del Mando de Operaciones de Seguridad Interna. Finalmente, cabe señalar en el mes de diciembre la UE decidió restablecer los contactos políticos a todos los niveles con el Gobierno para, según Bruselas, facilitar la

transición a la democracia y el diálogo sobre cuestiones como los derechos humanos, restableciendo así las relaciones políticas anteriores al golpe de Estado de mayo de 2014.

2.3.4. Europa

Rusia y Cáucaso

Armenia – Azerbaiyán (Nagorno-Karabaj)	
Intensidad:	3
Evolución:	↓
Tipología:	Autogobierno, Identidad, Territorio Internacional
Actores:	Gobierno de Azerbaiyán, Gobierno de Armenia, Gobierno de la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj

Síntesis:

La tensión entre ambos países en relación a la región de Nagorno-Karabaj –enclave de mayoría armenia formalmente parte de Azerbaiyán aunque independiente de facto– está asociada a la no resolución de las cuestiones de fondo del conflicto armado transcurrido entre diciembre de 1991 y 1994. Éste comenzó como un conflicto interno entre las milicias de autodefensa de la región y las fuerzas de seguridad de Azerbaiyán por la soberanía y control de Nagorno-Karabaj y progresivamente degeneró en una guerra interestatal entre ésta y su vecina Armenia. El conflicto armado, que causó 20.000 muertos y 200.000 desplazados y que homogeneizó de forma forzosa la composición étnica de la población en ambos lados de la línea de alto el fuego, dio paso a una situación de conflicto no resuelto, con la cuestión del estatus de Nagorno-Karabaj y el retorno de la población como principales ejes de tensión, y con violaciones periódicas del alto el fuego.

El conflicto en torno a Nagorno-Karabaj se mantuvo en niveles elevados, con episodios graves de confrontación militar que, sin embargo, no alcanzaron los umbrales de letalidad de la grave crisis de abril de 2016, en que murieron al menos dos centenares de personas, incluyendo civiles. En 2017 se produjeron violaciones del alto fuego e incidentes en torno a la línea de contacto durante todo el año, incluyendo con armamento pesado y armas antitanque, especialmente graves en febrero y mayo, con un balance anual de al menos una cincuentena de víctimas mortales y otros tantos heridos. En febrero, en medio de enfrentamientos que causaron al menos una quincena de víctimas mortales y que fueron los más graves desde abril de 2016, fuerzas armenias y azerbaiyanas se acusaron de intentos de incursión y el grupo de Minsk de la OSCE –órgano mediador en el proceso de paz– alertó de que las partes habían desplazado equipamiento militar pesado a posiciones más próximas a la línea de contacto. A mediados de mayo se produjeron de nuevo incidentes graves. El Ejército azerbaiyano disparó un misil contra

un equipo militar armenio en la línea de contacto el 15 de mayo, y entre el 16 y 17 de mayo fuerzas armenias respondieron con fuego de mortero de varios calibres. Así lo describió el comunicado del Grupo de Minsk, que señaló también que había informaciones contradictorias sobre los objetivos y víctimas. El Gobierno azerbaiyano lo criticó, denunciando que se posicionaba a favor de Armenia. En los enfrentamientos, las partes hicieron uso de misiles dirigidos y se llevaron ataques contra instalaciones militares cerca de zonas densamente pobladas.³² Según el ejecutivo azerbaiyano, el sistema armenio de defensa aérea destrozado había sido desplegado a una nueva posición en un intento por ganar control sobre el espacio aéreo. A su vez, con motivo del aniversario de los hechos de abril de 2016, los líderes de Armenia y de Azerbaiyán expresaron su disposición a involucrarse en una guerra. Asimismo, el líder armenio afirmó en medios de comunicación que usaría el sistema de misiles Iskander contra Azerbaiyán si era necesario, declaraciones respondidas por Azerbaiyán en marzo advirtiendo de que las represalias azerbaiyanas supondrían balances de víctimas y niveles de destrucción de gran escala en Armenia. En meses siguientes continuaron produciéndose episodios periódicos de violaciones del alto el fuego, aunque de menor intensidad. Durante el año, las partes llevaron a cabo maniobras militares, incluyendo maniobras conjuntas de Armenia y Rusia, así como de Azerbaiyán y Turquía –de gran escala, con 15.000 militares y más de 150 tanques, y en las que Azerbaiyán mostró nuevo equipamiento de artillería, incluyendo de origen checo, lo que llevó a las autoridades checas a anunciar una investigación al respecto, dado el embargo de armas de la UE y la OSCE.³³ Por otra parte, en el plano interno de Nagorno-Karabaj, la región celebró en febrero un referéndum no reconocido internacionalmente en que se aprobaron cambios constitucionales que la convierten en república presidencialista y que permitirán a su actual líder continuar en el cargo transitoriamente y concurrir de nuevo a elecciones en 2020.

Rusia	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición social y política, grupos armados –incluyendo ISIS–.

Síntesis:

Rusia, el país con mayor superficie del mundo y de vastos recursos naturales –principalmente gas y petróleo–, sucedió a la URSS en 1991 tras la caída del bloque soviético. Desde entonces ha atravesado etapas complejas, incluyendo un proceso de reformas económicas y políticas, privatización y liberalización en los primeros años, de la mano del presidente Boris Yeltsin en los años noventa, que reforzó a núcleos de poder empresarial; y de tránsito hacia un estado

32. International Crisis Group, *Nagorno-Karabakh's Gathering War Clouds*, Europe Report, no. 244, 1 de junio de 2017.

33. Véase el apartado sobre embargos de armas en el capítulo 1 (Conflictos armados).

autoritario, principalmente en la etapa de las presidencias de Vladimir Putin (2000-2008 y 2012 en adelante). Ante la inconstitucionalidad de un tercer mandato, su aliado Dmitri Medvédev le sucedió en la presidencia entre 2008 y 2012, generando expectativas de mayor apertura democrática, que no llegaron a consolidarse. Medvedev fue nombrado primer ministro en 2012 tras la vuelta de Putin a la presidencia. En clave interna, desde su llegada al poder, Putin reforzó el control político vertical de las instituciones y los medios de comunicación y desmanteló el poder adquirido por oligarcas en la etapa Yeltsin, algunos simpatizantes de la oposición liberal. En paralelo, las restricciones en materia de derechos y libertades han reducido el margen de contestación política. Aun así, en 2012 se asistió a numerosas movilizaciones contra supuestas irregularidades en las elecciones y en demanda de apertura política. Otros ejes de tensión interna incluyen la violencia de corte yihadista que afecta al norte del Cáucaso –derivada de la transformación y regionalización de la violencia que afectó a Chechenia en las guerras de los noventa– y que ha resultado también en atentados y violencia en otros puntos de Rusia. Asimismo, se han incrementado las alertas por la participación de ciudadanos con nacionalidad de Rusia en las filas de ISIS en Siria e Iraq.

Rusia fue escenario de tensión en torno a diversos ejes, incluyendo diversos atentados terroristas durante el año, así como movilizaciones opositoras. Durante el año se produjeron diversos ataques, algunos reivindicados por ISIS. Un atentado contra el metro de San Petersburgo el 3 de abril causó 15 víctimas mortales y más de 40 heridos, mientras una segunda bomba fue localizada y desactivada en otra estación del metro. Según las autoridades, el ataque fue perpetrado por un hombre originario de Osh (Kirguistán) con vínculos con organizaciones islamistas. Otras diez personas fueron detenidas en relación al ataque. El grupo “Batallón del Imam Shamil”, vinculado a Al-Qaeda, reivindicó el atentado. Ese mismo mes, ISIS reivindicó un ataque en Astrakhan (región homónima, sur de Rusia), que causó la muerte de dos policías, así como otra acción en la misma ciudad que hirió a tres soldados de la guardia nacional. Por otra parte, ISIS se atribuyó un ataque con arma blanca en agosto en una zona céntrica de la ciudad de Surgut (región de Siberia), en el que resultaron heridos siete viandantes. No obstante, las autoridades descartaron que hubiera sido un acto de terrorismo. Asimismo, un atentado con bomba en un establecimiento de una cadena de supermercados de San Petersburgo a finales de diciembre causó heridas a diez personas. Fue calificado de atentado terrorista por las autoridades, e ISIS reivindicó el ataque. Unas semanas después el Kremlin informó de que había frustrado ese mes varios atentados en la ciudad, incluyendo planes de ataque contra la catedral de Kazán (principal catedral de la ciudad) con apoyo de información facilitada por la agencia de inteligencia estadounidense. Varias personas fueron detenidas ese mes. Durante el año Rusia fue identificado como el principal país de origen de combatientes extranjeros de ISIS, con 3.417 combatientes de origen ruso, por encima de Arabia Saudita (3.244), según un informe de la consultoría de inteligencia y seguridad Soufan Group.³⁴

Por otra parte, se incrementó la tensión política y social en Rusia, un año antes de las elecciones presidenciales de marzo de 2018. Miles de personas –60.000 según la radio Eco de Moscú, 150.000 según la Fundación Anticorrupción, convocante– se manifestaron en marzo en diversas localidades de Rusia –82, según Eco de Moscú–, en protesta contra la corrupción por parte del Gobierno y en respuesta al llamamiento del líder opositor Alexei Navalny, cuya Fundación Anticorrupción desveló en un documental prácticas de corrupción del primer ministro, Dmitri Medvédev. Más de un millar de personas fueron detenidas, incluyendo el propio Navalny. Organizaciones como Amnistía Internacional denunciaron uso excesivo de la fuerza. Fueron calificadas **como las protestas antigubernamentales más numerosas desde las movilizaciones de 2011-2012, previas a las elecciones de 2012.** En junio se produjeron nuevas protestas, que movilizaron a decenas de miles de personas, según informaciones de prensa, y que conllevaron la detención de un millar de personas. Navalny fue condenado a un mes de prisión. Se sucedieron protestas en meses posteriores, como octubre y noviembre, con numerosas detenciones. El Comité Electoral Central anunció en diciembre que Navalny no podrá concurrir a los comicios, por cargos de corrupción que pesan sobre él, y que el líder opositor denunció como cargos fabricados con motivación política. **El líder opositor llamó al boicot de las elecciones presidenciales de 2018.**

Rusia (Chechenia)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Identidad, Gobierno Interna
Actores:	Gobierno federal ruso, Gobierno de la República de Chechenia, grupos armados de oposición

Síntesis:

Tras la llamada primera guerra de Chechenia (1994-1996), que enfrentó a la Federación de Rusia con la república chechena principalmente por la independencia de esta última (autoproclamada en 1991 en el contexto de descomposición de la URSS) y que terminó en un tratado de paz que no resolvió el estatus de Chechenia, el conflicto se reabre en 1999, en la llamada segunda guerra chechena, con el detonante de unas incursiones en Daguestán por rebeldes chechenos y atentados en ciudades rusas. En un contexto preelectoral y con un discurso antiterrorista, el Ejército ruso entró de nuevo en Chechenia para combatir al régimen independentista moderado surgido tras la primera guerra y asolado a su vez por disputas internas y creciente criminalidad. Rusia dio por acabada la guerra en 2001, sin acuerdo ni victoria definitiva, y propició un estatuto de autonomía y una administración chechena pro-rusa, pero los enfrentamientos persisten, en paralelo a la islamización de las filas rebeldes chechenas y una regionalización de la lucha armada. Asimismo, la población civil hace frente a graves violaciones de derechos humanos, en gran parte cometidas por las fuerzas de seguridad locales.

34. Moore, James, *Russia overtakes Saudi Arabia and Tunisia as largest exporter of ISIS fighters*, Newsweek, 24 de octubre de 2017.

Se incrementó la tensión en la república chechena, con un aumento de víctimas mortales por tercer año consecutivo en el marco del conflicto entre fuerzas de seguridad y actores armados yihadistas, mientras se agravó también la situación de vulneraciones de los derechos humanos, con el mayor incremento de secuestros desde los inicios de la segunda guerra chechena de los años noventa, según alertaron defensores de derechos humanos. Durante el año murieron unas sesenta personas por el conflicto, según el balance de Caucasian Knot, lo que situó a Chechenia como la república del norte del Cáucaso con mayor número de víctimas mortales, por encima de Daguestán –que dejó de considerarse conflicto armado en 2017–. Además, una veintena de personas resultaron heridas, según la misma fuente. A su vez, se denunció el secuestro de al menos 51 personas, de acuerdo a las estadísticas de la **organización rusa Memorial, que denunció que la situación de secuestros, detenciones ilegales y retenciones ilegales bajo custodia por parte de agentes de seguridad volvía a ser sistémica.** El Centro para el Análisis de Conflictos y la Prevención también señaló que la república sufría una situación de secuestros en masa.

Entre los hechos de violencia durante el año, se produjeron enfrentamientos a principios de enero en el marco de una operación especial en la localidad de Tsotsi-Yurt (distrito de Kurchaloi), que seguía a los ataques de diciembre de 2016 en las afueras de la capital, y que resultó en la detención de al menos 20 personas, así como la muerte de cuatro supuestos insurgentes y dos miembros de las fuerzas de seguridad. Centros escolares y establecimientos fueron cerrados por la operación. Se produjeron detenciones masivas en esas fechas en otras localidades de ese y otros distritos, con en torno a un centenar de detenidos, según Novaya Gazeta. A su vez, choques tras un ataque contra un puesto de control de tropas de la Guardia Nacional de Rusia en el distrito de Naursky en marzo causaron la muerte de seis militares y seis combatientes y diversos heridos, tras lo que se desencadenaron nuevos arrestos masivos. ISIS reivindicó el ataque. Novaya Gazeta publicó en julio una lista de 27 varones ejecutados sin juicio a finales de enero, de entre decenas de detenidos en operaciones de seguridad tras la violencia de diciembre de 2016. La organización Memorial también publicó en julio una lista de 13 hombres desaparecidos desde diciembre de 2016, tras ser detenidos por las autoridades. También el alto comisionado de Rusia para los derechos humanos visitó Chechenia en septiembre, por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales de familiares de víctimas. Por otra parte, a partir de marzo trascendió información sobre secuestros de hombres homosexuales llevadas a cabo por actores armados no estatales y fuerzas de seguridad, seguidas de detenciones arbitrarias, violencia, tortura y otros malos tratos. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos se

Defensores de derechos humanos denunciaron un grave incremento de los secuestros y desapariciones a manos de agentes de seguridad en la república de Chechenia

hizo eco de las denuncias, instó al fin de los abusos y a la investigación y persecución de lo que calificó como actos de persecución y violencia de una escala sin precedentes en la región y graves violaciones de las obligaciones de Rusia bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Novaya Gazeta y Human Rights Watch publicaron información y denuncias sobre los abusos, buena parte de los cuales habría tenido lugar en un centro de detención no oficial cerca de Argun.

Sudeste de Europa

Turquía	
Intensidad:	2
Evolución:	↓
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno de Turquía, oposición política y social, ISIS, organización de Fetullah Gülen

Síntesis:

La actual República de Turquía fue fundada por Mustafa Kemal “Atatürk” en 1923, tras la derrota del Imperio Otomano en la I Guerra Mundial –y la consiguiente partición de sus territorios (Tratado de Lausanne de 1923)–, y la guerra de independencia (1919-1923). Se fundó bajo principios como el laicismo, el nacionalismo y el estatismo, promoviendo un estado nación secular con un papel predominante del Ejército, como actor garante. A lo largo de su historia, Turquía –país puente entre Occidente y Oriente, de mayoría musulmana y segundo Ejército de la OTAN– se ha visto afectada por periodos de inestabilidad en torno a diversos ejes y actores. Por una parte, la falta de soluciones a la cuestión kurda ha resultado en rebeliones kurdas de diversa naturaleza y persecución estatal de sectores prokurdos, sobresaliendo la guerra entre Turquía y el PKK iniciada en 1984. Por otra parte, el país ha sufrido diversos golpes de estado militares (1960, 1971, 1980, 1997). Asimismo, la etapa de poder bajo el islamista AKP (en el poder desde 2002) y el liderazgo de Recep Tayyip Erdogan (primer ministro entre 2003 y 2014 y presidente desde entonces) ha ido acompañada de medidas iniciales de democratización y de denuncias, en años posteriores, de autoritarismo, incrementándose los niveles de tensión interna social y política. Asimismo, la confrontación creciente entre el régimen del AKP –en el poder desde 2003– y su antigua aliada organización del clérigo musulmán Fetullah Gülen se puso de manifiesto en un intento de golpe militar, en julio de 2016, que resultó fallido y que fue atribuido a sectores de las FFAA vinculadas a Gülen. La intentona desencadenó la declaración de estado de emergencia y purgas masivas. La situación de derechos humanos, ámbito de grave preocupación en los años 80 y 90, se deterioró de nuevo en el contexto de reinicio de la guerra con el PKK en 2015 y de las medidas de emergencia tras el intento de golpe. Por otra parte, el grave deterioro regional vinculado a las guerras en Siria e Iraq también generó nuevos ejes de conflictividad para Turquía: incremento de atentados atribuidos a ISIS contra objetivos civiles en suelo turco y un complejo escenario de relaciones exteriores.

La tensión política y social en Turquía se mantuvo elevada, en un contexto de estado de emergencia, purgas masivas y polarización, si bien se redujo la intensidad de la violencia tras un 2016 con un intento de golpe de Estado (con 265 fallecidos y en torno a 2.200 heridos) y más de un centenar de fallecidos en atentados reivindicados por ISIS. Entre los hechos que marcaron el curso político en 2017, Turquía celebró un referéndum de reforma de la Constitución en abril, aprobado con un 51,4% de los votos y un 84% de participación, precedido por una campaña en que las autoridades equipararon al campo del “no” (liderado por los opositores CHP y HDP) con el terrorismo. La oposición denunció irregularidades en la votación y, según la misión de observación de la OSCE, la consulta transcurrió en condiciones desiguales para las partes, la ciudadanía no recibió información imparcial y hubo limitaciones a las libertades fundamentales, que tuvieron un efecto negativo. El “no” a la reforma ganó en las tres principales ciudades del país (Estambul, Ankara e Izmir), que suman una cuarta parte de la población, así como –entre otras– en la mayoría de la región kurda, aunque con pérdida de votos respecto a los recibidos por el prokurdo HDP (defensor del “no”) en pasadas elecciones. La reforma aprobada transformará el país república presidencialista. Así, la presidencia detendrá la jefatura de Estado y de Gobierno, eliminándose el cargo de primer ministro, se amplían los supuestos en los que el presidente podrá gobernar por decreto, y se incrementa el número de miembros de altos tribunales nombrados directamente por el presidente, entre otros cambios.

Por otra parte, la tensión política y social continuó elevada, de la mano del estado de emergencia, en vigor todo el año (con renovaciones en enero, abril y octubre) y purgas masivas contra población acusada de vínculos con el fallido golpe de Estado de 2016 y con el actor al que se le atribuye su autoría –la organización religiosa bajo liderazgo del clérigo exiliado en EEUU, Fetullah Gülen, denominada por el Gobierno como FETÖ–. Entre las medidas, en torno a 4.4000 funcionarios fueron despedidos, incluyendo cientos de académicos y personal de los ministerios de Interior, Economía, Exteriores, Educación, así como de la gendarmería y de los servicios de seguridad, ascendiendo así a 125.000 las personas que han sido destituidas o suspendidas de sus puestos desde el intento del golpe. Se produjeron detenciones masivas de personas acusadas de vínculos con la organización de Gülen. Durante el año también se produjeron detenciones de activistas de derechos humanos, como el caso del presidente de Amnistía Internacional Turquía, detenido y encarcelado en junio, y de diez defensores de derechos humanos detenidos en julio, incluyendo la directora de Amnistía Internacional Turquía, con cargos de pertenencia a grupo terrorista – de éstos últimos, dos de ellos fueron puestos en libertad ese mes, y los restantes ocho en libertad condicionada en octubre–, o de reconocidas figuras civiles, como el filántropo Osman Kavala, en octubre. Políticos y activistas kurdos también fueron detenidos, incluyendo cargos electos, y se despojó de sus escaños a varios

parlamentarios kurdos, incluyendo en febrero a la co-líder del HDP Figen Yuksekdog, condenada con cargos de propaganda terrorista. Defensoras de los derechos humanos de las mujeres expresaron grave preocupación por el impacto del estado de emergencia sobre las organizaciones de mujeres, que impactó de manera específica y en mayor escala sobre organizaciones de mujeres kurdas –afectadas por cierres e ilegalizaciones– o que trabajan en áreas kurdas. En su informe publicado en marzo sobre la situación de derechos humanos en el sur de Turquía, ACNUDH señalaba que la protección y supervisión de derechos humanos se había visto severamente afectada por el uso de la legislación antiterrorista para retirar a oficiales electos de origen kurdo, el hostigamiento a periodistas independientes, el cierre de medios de comunicación independientes y en lengua kurda, así como el cierre de asociaciones ciudadanas y la suspensión masiva de jueces y fiscales. Ante las medidas de persecución, la oposición política puso en marcha iniciativas como la “marcha de la justicia” desde Ankara a Estambul, promovida por el CHP y que concluyó en junio, o las manifestaciones de “observación de la justicia” promovidas por el HDP en Estambul y otros puntos del país, entre agosto y noviembre. En medio de la tensión política y social, el HDP boicoteó la primera sesión del curso parlamentario, en octubre. Por otra parte, Turquía experimentó una reducción de la violencia asociada a ISIS, en contraste con un 2016 de numerosos atentados reivindicados por el grupo armado. Según las autoridades turcas, durante el año se detuvo a unas 2.000 personas acusadas de vínculos con ISIS.

2.3.5. Oriente Medio

Golfo

Arabia Saudita	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, oposición política y social, grupos armados, incluyendo AQPA y filiales de ISIS (Provincia de al-Hijaz, Provincia de Najd)

Síntesis:

Gobernada desde el siglo XVIII por la familia al-Saud y establecida como Estado en 1932, Arabia Saudita se caracteriza por su conservadurismo religioso y su riqueza, sustentada en las reservas de petróleo. Potencia regional, a nivel interno la monarquía sunní concentra el poder político y lidera las instituciones de gobierno, dejando escaso margen para la disidencia. Los partidos políticos no están permitidos, la libertad de expresión constreñida y muchos derechos básicos limitados. La minoría chií, concentrada en la zona este del país, ha denunciado marginación y exclusión de las estructuras del Estado. Las autoridades han sido acusadas de emprender acciones represivas en nombre de la seguridad del país y en el marco de campañas antiterroristas, que tienen entre sus objetivos militantes de al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA). En el contexto de la denominada

Primavera Árabe de 2011, las protestas pro-reformas y democracia suscitaron una respuesta represiva del Gobierno –en especial en las zonas de mayoría chií del país–, y las autoridades han denunciado la existencia de intentos de desestabilización desde el exterior, señalando a Irán. El país es escenario de acciones armadas esporádicas de AQPA y, más recientemente, de células vinculadas presuntamente a ISIS.

Al igual que el año anterior, la tensión en Arabia Saudita estuvo determinada por dinámicas internas y por las consecuencias de su política exterior, caracterizada por una creciente implicación en asuntos regionales y una pugna de poder con Irán. **Durante 2017 se produjeron diversos hechos de violencia en el país que provocaron la muerte de al menos 17 personas, una cifra similar a la del año anterior**, principalmente vinculados con la actividad de grupos armados y a la contestación en la zona de mayoría chií del país. El episodio más cruento tuvo lugar en agosto, en la ciudad de Awamiya en la región de Qatif (Provincia Oriental), donde los enfrentamientos de las fuerzas de seguridad y presuntos combatientes chiíes habrían acabado en la muerte de nueve civiles. En esta misma localidad, en medio de una redada, hombres armados atacaron una patrulla militar provocando la muerte de un soldado y heridas a dos policías, en mayo. Otros incidentes destacados tuvieron como protagonistas a ISIS: dos atacantes hicieron detonar su carga explosiva en Jeddah tras ser rodeados por la policía, en enero; y otros dos presuntos miembros del grupo murieron a manos de las fuerzas de seguridad durante redadas en Riad, en octubre. Ese mismo mes, un hombre que asesinó a dos guardias en las afueras del palacio real acabó muerto por la policía. A lo largo del año las autoridades saudíes anunciaron detenciones de personas acusadas de pertenecer a células de ISIS o de dar apoyo a la organización. Durante el último semestre, en tanto, se intensificaron los arrestos de clérigos, intelectuales, figuras políticas y empresarios, incluyendo una treintena de altos cargos.

Arabia Saudita también se vio implicada en una escalada de tensión con diversos actores regionales. A mediados de año y a instancias de Riad, **Arabia Saudita y otros países árabes incluyendo Bahrein, EAU y Egipto cortaron lazos comerciales y diplomáticos con Qatar, acusándole de alinearse con Irán**, de promover actividades terroristas a través del apoyo a diversos grupos –incluyendo los Hermanos Musulmanes– y de intentar desestabilizar la región. Riad promovió la imposición de 13 condiciones a Qatar para revertir estas medidas y sortear el bloqueo, que seguía vigente al finalizar el año. Qatar, que recibió el apoyo de Turquía e Irán, acusó a Riad de agresión. En paralelo, Arabia Saudita continuó directamente implicada en el conflicto armado en Yemen.³⁵ Los al-houthistas dispararon misiles contra Yanbu, en julio, y contra Riad, en noviembre, que fueron interceptados por las fuerzas saudíes. Riad acusó a Irán de proveer estos arsenales a los al-houthistas y consideró que los disparos de estos proyectiles constituían una agresión militar

directa. Además señaló al grupo chií libanés Hezbollah como responsable de entrenar al grupo armado yemení en el uso de estas armas. Cabe destacar que uno de los disparos de misiles coincidió con la decisión del primer ministro libanés Saad Hariri de anunciar su renuncia desde Riad, citando como motivos amenazas de muerte y una excesiva influencia de Hezbollah e Irán en los asuntos libaneses.³⁶ Hezbollah y el presidente de Líbano acusaron a Arabia Saudita de secuestrar a Hariri, quien tras una mediación de Francia regresó a su país y retiró su dimisión.

Bahrein	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Identidad Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

Las revueltas populares que se propagaron por países del Magreb y Oriente Medio durante 2011 repercutieron también en Bahrein. Gobernado desde el siglo XVIII por la monarquía de los al-Khalifah y protectorado británico entre 1861 y 1971, en 2002 el país se constituyó formalmente en una monarquía constitucional. La familia en el poder es sunní, a diferencia de la mayoría de la población del país que es de confesión chií y que denuncia políticas sistemáticas de discriminación. Las tensiones internas, que se habían incrementado en los últimos años, se convirtieron en una contestación abierta a partir de febrero de 2011. Las demandas de reformas políticas y sociales fueron respondidas por el Gobierno con incentivos económicos y ofertas de diálogo político, pero también con represión y persecución a los detractores del Gobierno. La amenaza a la estabilidad del régimen motivó una intervención del Consejo de Cooperación del Golfo, que envió tropas al país. La situación en Bahrein ha alimentado la confrontación entre Irán y los países del Golfo –en especial con Arabia Saudita–, y preocupa a EEUU, que tiene a su V Flota estacionada en el archipiélago.

La situación en Bahrein continuó caracterizándose por manifestaciones contra el régimen, persecución a opositores y diversos hechos de violencia que se intensificaron respecto al año anterior y causaron una decena de víctimas mortales en 2017. El incidente más grave se produjo en mayo, cuando **las protestas contra la condena judicial a un destacado clérigo chií, el ayatollah Isa Qassim, derivaron en choques con las fuerzas de seguridad que acabaron con cinco personas fallecidas y más de 280 detenidas en Diraz** (noroeste). Otros hechos de violencia incluyeron un ataque con bomba también en Diraz que causó la muerte de un policía, en junio; y una ofensiva contra un bus policial en Manama en el que murió otro policía, en octubre. Otras dos explosiones en la capital, en febrero y en octubre, causaron heridas a cinco efectivos policiales, respectivamente. Durante febrero se produjeron otras cuatro deflagraciones en Manama que no causaron

35. Véase el resumen sobre Yemen en el capítulo 1 (Conflictos armados).

36. Véase el resumen sobre Líbano en este capítulo.

víctimas ni fueron reivindicadas. Como en años anteriores, las protestas del 14 de febrero –en un nuevo aniversario de la revuelta de 2011 en el país– derivaron en choques con la policía. A estos hechos se suma la ejecución, en enero, de tres chiíes acusados del asesinato de tres policías en 2014, en las primeras sentencias a muerte hechas efectivas en veinte años. Las ejecuciones fueron condenadas por activistas de la oposición chií y por Irán, que continuó siendo acusado por las autoridades bahreiníes de intentos de desestabilización y promoción de la violencia en el país. Durante el año se informó de arrestos de presuntos miembros de células terroristas y de nuevas condenas contra dirigentes políticos de oposición y activistas de derechos humanos por incitación al odio y difusión de noticias falsas, entre otros delitos. Paralelamente se denegó la apelación del partido opositor al-Wafaq a la decisión, en 2016, de disolver la organización bajo acusaciones de terrorismo y el Gobierno inició un proceso para desarticular a otra organización disidente, Waad, con cargos similares. Las autoridades también aprobaron una reforma constitucional para permitir que civiles sean juzgados en cortes militares. Tras la crisis diplomática entre Qatar y varios países de la región, encabezados por Arabia Saudita, Bahrein criminalizó las expresiones de simpatía hacia Qatar.

En este contexto, **Amnistía Internacional publicó un informe sobre la situación en Bahrein denunciando el uso de tácticas represivas, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual**; y alertando sobre la existencia de una campaña sistemática para desmantelar a la oposición política y eliminar la libertad de expresión.³⁷ Según el informe, las acciones de las autoridades bahreiníes para sofocar las protestas habrían causado la muerte de al menos seis personas, entre ellas un menor, entre junio de 2016 y junio de 2017. Amnistía Internacional documentó arrestos, torturas, amenazas y prohibiciones de viajes a 169 disidentes y sus familias en este período y denunció la falta de reacción internacional. EEUU, que en 2016 condicionó la venta de aviones a Bahrein a progresos en materia de derechos humanos, dio un giro en su política con la llegada de Donald Trump a la presidencia y en 2017 eliminó las condiciones para esta operación.

Irán vivió las peores protestas desde 2009, que derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y en la muerte de una veintena de personas

Irán	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social

Síntesis:

La tensión se enmarca en un contexto político caracterizado por la polarización, desde hace décadas, entre sectores conservadores y reformistas en Irán, y por el papel clave que juegan las autoridades religiosas y los cuerpos armados –en particular la Guardia Republicana– en el devenir de Irán. La tensión interna se agudizó a mediados de 2009, cuando Ahmadinejad fue reelecto en unos comicios denunciados como fraudulentos por la oposición que motivaron las mayores protestas populares en el país desde la revolución islámica de 1979. El fin de los dos mandatos consecutivos de Ahmadinejad y la llegada al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani en 2013 parecieron abrir una nueva etapa en el país, despertando expectativas respecto a una posible reducción de la tensión política interna y sobre un eventual cambio en las relaciones de Irán con el exterior. No obstante, las tensiones internas persisten.

La tensión se intensificó al finalizar el año en Irán, tras una serie de protestas en distintas ciudades del país que derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y en numerosas detenciones, en la mayor convulsión interna en el país desde 2009. Según informaciones de prensa, **desde el 28 de diciembre hasta la primera semana de enero de 2018 un total de 21 personas había muerto en los incidentes –en su mayoría manifestantes, pero también agentes de seguridad– y más de un millar de personas habían sido arrestadas.** Inicialmente las movilizaciones denunciaron cuestiones económicas, como el alza en los precios o el nivel de desempleo, y temas de corrupción, pero rápidamente adquirieron un cariz más político. Los mensajes de las protestas pusieron en entredicho la política exterior iraní y, en particular, la costosa participación de Irán en conflictos regionales como Siria e Iraq –exigiendo abandonar estos escenarios para concentrarse en la situación interna–; y criticaron al presidente Hassan Rouhani y al líder supremo, Ali Khamenei. En un hecho sin precedentes, durante las manifestaciones se lanzaron proclamas llamando a la renuncia e incluso a la muerte de Khamenei y también se escucharon algunos mensajes en apoyo a la antigua monarquía del sha. La naturaleza de las movilizaciones y su rápida expansión a diferentes localidades del país –Mashad, Kermanshah, Isfahan, Rasht, Qom, Sari, Hamedan, Qazvin, Teherán, Arak, Zanjan entre otras– alimentaron diversas interpretaciones e interrogantes sobre el origen y desarrollo de las protestas. Las manifestaciones se iniciaron en la segunda ciudad del país, Mashad, feudo de Ebrahim Raisi, clérigo ultraconservador que fue derrotado por Rouhani en las elecciones presidenciales celebradas en mayo (Rouhani obtuvo 57% de los votos frente a 38,5% de Raisi). Así, sectores reformistas iraníes consideraron que el movimiento había sido promovido sectores de la oposición a Rouhani. Algunos observadores, en tanto, destacaron que si el movimiento había sido auspiciado por algún sector,

37. Amnesty International, 'No one can protect you': Bahrain's year of crushing dissent, 7 de septiembre de 2017.

rápidamente evolucionó de manera propia. Otras voces subrayaron que a diferencia de las protestas de 2009 –protagonizadas por sectores de clase media y élites del país– las recientes manifestaciones estaban dominadas por sectores de la clase trabajadora iraní y se producían en un contexto en que el Gobierno de Rohuani enfrentaba dificultades para impulsar mejoras económicas a pesar del levantamiento de sanciones tras el pacto por el programa nuclear. Mientras, otros analistas pusieron el foco en las rivalidades internas entre las diferentes facciones iraníes, que se estarían intensificando a medida que Khamenei envejece y la carrera por su sucesión se convierte en un tema más relevante.

Ante la oleada de protestas, Rohuani reconoció que las personas tenían el derecho a criticar, pero advirtió que las autoridades no tolerarían el uso de la violencia o la destrucción de propiedades. Sectores conservadores, en tanto, admitieron la existencia de agravios económicos y políticos, pero acusaron a potencias extranjeras de explotar la situación e incitar a la violencia, en especial después de que el presidente de EEUU expresara su apoyo a las manifestaciones. Cabe destacar que en 2017 **la situación en Irán también estuvo marcada por el primer atentado de ISIS en el país, ocurrido en el mes de junio. Cinco atacantes perpetraron dos ofensivas simultáneas contra el Parlamento y el mausoleo del ex líder supremo, el Ayatollah Khomeini, causando la muerte de 17 civiles** en la capital iraní. Teherán señaló entonces a EEUU, Arabia Saudita, ISIS y sectores kurdos iraníes como posibles perpetradores, pero ISIS reivindicó el ataque. Días después las autoridades iraníes anunciaron la muerte del cabecilla de la ofensiva y lanzaron un ataque con misiles desde la ciudad de Kermanshah (oeste) contra presuntas posiciones de ISIS en Deir al-Zour, en Siria.

Irán – EEUU, Israel ³⁸	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Sistema, Gobierno Internacional
Actores:	Irán, EEUU, Israel

Síntesis:

Desde la revolución islámica de 1979, que derrocó al régimen del Sha Mohamed Reza Pahlevi (aliado de Washington) y proclamó al Ayatolá Khomeini como líder Supremo del país, las relaciones entre EEUU, Israel e Irán han sido tensas. La presión internacional sobre Irán se intensificó tras los atentados del 11-S, cuando el Gobierno de George W. Bush declaró a Irán junto a Iraq y Corea del Norte como parte del “eje del mal” y como Estado enemigo por sus supuestos vínculos con el terrorismo. En este contexto, el programa nuclear iraní ha sido una de las cuestiones que ha generado mayor preocupación en Occidente, que sospecha de sus propósitos militares. Así, el programa iraní se ha desarrollado en paralelo a la aprobación

de sanciones internacionales y a las amenazas de uso de la fuerza, en especial de Israel. La aproximación de Irán al conflicto durante los mandatos consecutivos del ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) no contribuyó a distender la tensión. El ascenso al poder del clérigo moderado Hassan Rouhani, en cambio, despertó expectativas sobre un giro en las relaciones entre Irán con el exterior, en especial tras el inicio de negociaciones sobre el dossier nuclear iraní a fines de 2013 y la firma de un acuerdo en este ámbito a mediados de 2015.

Después de dos años de reducción de la tensión internacional en torno al programa nuclear iraní, durante 2017 se registró un giro en sentido contrario, fruto de **acusaciones cruzadas, incidentes y del anuncio del nuevo Gobierno de EEUU sobre una eventual revisión del acuerdo alcanzado en julio de 2015** (Joint Comprehensive Plan of Action). A lo largo del año los informes de la Agencia Internacional para la Energía Atómica (AIEA) certificaron que la república islámica estaba cumpliendo con los compromisos alcanzados en el pacto. No obstante, algunas actividades, principalmente vinculadas al programa de misiles balísticos de Irán, motivaron denuncias de terceros países, con opiniones divergentes sobre la capacidad de estos aparatos para transportar armas nucleares. Teherán aseguró que sus acciones no contravenían lo dispuesto en el acuerdo sobre el programa nuclear y las defendió como parte del desarrollo de sus capacidades defensivas convencionales. Francia, Alemania, Reino Unido y, sobre todo EEUU e Israel –que acusó a Irán de cooperar con Corea del Norte en este ámbito–, alertaron sobre algunos ensayos balísticos iraníes, como el que tuvo lugar en Khorramshar, en enero, con misiles de medio alcance; o el lanzamiento de un vehículo espacial, en julio, por considerar que podrían transgredir disposiciones del acuerdo (relativas a la capacidad y potencial de recorrido de los aparatos). Otros países como Rusia, en tanto, subrayaron que la resolución 2231 –que ratificó el acuerdo sobre el programa nuclear iraní en 2015– no incluye una prohibición al desarrollo del programa espacial o balístico iraní. En este contexto, EEUU aprobó nuevas sanciones contra personas y entidades vinculadas a las pruebas balísticas iraníes, medida que Teherán denunció como una violación al acuerdo nuclear de 2015. La república islámica, a su vez, aprobó sanciones contra compañías estadounidenses a las que acusó de violar los derechos humanos y cooperar con Israel. A lo largo del año también se denunciaron otras actividades iraníes, como los viajes del mayor general Qassem Soleimani a Iraq y Siria a pesar de la prohibición dispuesta en la resolución 2231 y, en particular, la posible transferencia de misiles balísticos de Teherán a los al-houthistas, grupo armado yemení que habría utilizado estas armas en su confrontación con Arabia Saudita. En diciembre, en su informe sobre la implementación del acuerdo nuclear, la ONU informó que estaba investigando esta última denuncia y los restos de misiles recuperados tras ataques en

38. Esta tensión internacional afecta a otros países no citados, los cuales están involucrados con diferentes grados de implicación.

territorio saudí, en Yanbu y Riad, ocurridos en julio y noviembre, respectivamente.³⁹ Irán, en tanto, rechazó haber entregado asistencia militar a los al-houthistas.

Paralelamente, durante 2017 tuvieron lugar diversos incidentes, entre ellos tiros de advertencia de barcos de EEUU a naves iraníes en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Ormuz; simulacros y ejercicios militares en el Golfo Pérsico en los cuales Irán habría probado nuevos misiles de crucero; acusaciones de que naves de EEUU habían ingresado en aguas territoriales iraníes; denuncias de Irán contra Arabia Saudita por la muerte de un pescador iraní a manos de la Guardia Costera saudí y el arresto de tres Guardianes de la Revolución, presuntamente en aguas saudíes; así como amenazas cruzadas tras la decisión de EEUU de declarar a los Guardianes de la Revolución iraníes como una amenaza terrorista. Cabe destacar que esta tensión internacional también se vio influida por la posición de la nueva administración estadounidense respecto al acuerdo nuclear y una postura más hostil hacia Irán. El Gobierno de Donald Trump, que desacreditó el pacto en numerosas ocasiones durante la campaña electoral y tras llegar al poder (en enero), decidió en octubre no certificarlo y planteó la posibilidad de aprobar nuevas sanciones. Según el secretario general de la ONU, estas acciones crearon una “considerable incertidumbre” respecto al futuro del acuerdo. **Washington se mostró partidario de introducir cambios en el acuerdo, pero otros actores internacionales involucrados en la negociación –como la UE– descartaron renegociar todo o partes del pacto.** Algunos sectores en EEUU, entre ellos 90 científicos y expertos en temas atómicos, destacaron la importancia del pacto nuclear y pidieron al Congreso estadounidense que lo preserve. Durante el año, el nuevo Gobierno estadounidense también se manifestó explícitamente a favor de un cambio de régimen en Irán. En junio, el secretario de Estado, Rex Tillerson, acusó a Irán de buscar la hegemonía en Oriente Medio y aseguró ante el Congreso de EEUU que se estaba apoyando a elementos dentro de Irán que pudieran liderar una transición. Trump también apoyó las movilizaciones contra las autoridades iraníes de finales de año.

Mashreq

Egipto	
Intensidad:	3
Evolución:	=
Tipología:	Gobierno Interna
Actores:	Gobierno, oposición política y social
Síntesis:	En el marco de las llamadas “revueltas árabes”, las movilizaciones populares en Egipto llevaron al derrocamiento

de Hosni Mubarak a principios de 2011. Durante tres décadas, Mubarak había liderado un gobierno autoritario caracterizado por la acumulación de poder en torno al oficialista Partido Nacional Democrático, las Fuerzas Armadas y élites empresariales; así como por un pluralismo político artificial, con constantes denuncias de fraude en las elecciones, políticas de acoso a la oposición y la ilegalización del principal movimiento disidente, los Hermanos Musulmanes (HM). La caída del régimen de Mubarak dio paso a un escenario político inestable, en el que se hizo evidente el pulso entre sectores que exigían profundizar en los objetivos de la revuelta, los grupos islamistas que aspiraban una nueva posición de poder y el estamento militar que deseaba garantías de preservación de su influencia y privilegios en el nuevo esquema institucional. En este contexto, y tras un gobierno de transición liderado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), el triunfo electoral de los HM en los comicios parlamentarios y presidenciales pareció abrir una nueva etapa en el país en 2012. Sin embargo, el derrocamiento del presidente islamista Mohamed Mursi en julio de 2013, cuando cumplía su primer año de mandato, abrió nuevas interrogantes sobre el futuro del país en un contexto de persistente violencia, polarización, persecución política y de creciente control por parte de sectores militares.

Durante 2017 se mantuvo el clima interno de represión a la disidencia, en paralelo a las denuncias sobre abusos a los derechos humanos por parte de agentes de seguridad del Estado. La persecución de voces críticas y organizaciones de la sociedad civil alcanzó a principios de año al Centro Nadeem para la Rehabilitación de Víctimas de la Violencia y Tortura, organización de referencia que fue cerrada tras ser acusada de infringir la ley de ONG. La declaración del estado de emergencia tras un doble atentado perpetrado por ISIS en abril amplió las facultades de los cuerpos de seguridad para arrestar, vigilar y detener. En este contexto **se denunció que el Gobierno de Abdel Fatah al-Sisi estaba aprovechando la situación de inseguridad para intensificar la represión a la oposición y a los medios de comunicación críticos.** Así, se informó de la detención de activistas, periodistas y del bloqueo de sitios web –un total de 429 desde mayo a septiembre, parte importante de ellas de noticias, según la Asociación para la Libertad de Expresión y Prensa egipcia–, incluyendo al-Jazeera, Huffington Post en árabe y Mada Masr. En este sentido, cabe destacar que en el índice 2017 sobre Libertad de Prensa publicado por Reporteros Sin Fronteras Egipto ocupaba el lugar 161 de 180 países. Las autoridades egipcias también bloquearon la web de Human Rights Watch en septiembre después de que la organización publicara un informe en el que denunció que la tortura constituye una práctica habitual de las fuerzas de seguridad egipcias. El documento se hace eco de las múltiples denuncias recogidas por ONG locales, alerta sobre arrestos arbitrarios y desapariciones forzadas y documenta una veintena de casos de torturas, incluyendo prácticas

39. UNSC, *Fourth report of the Secretary General on the implementation of Security Council resolution 2231 (2015)*, 8 de diciembre de 2017.

de violencia sexual.⁴⁰ Las protestas contra medidas adoptadas por las autoridades –como la aprobación por el Parlamento de la transferencia de dos islas a Arabia Saudita o la eliminación de subsidios a los combustibles y la electricidad– también derivaron en arrestos de manifestantes durante el año. Cabe destacar que durante el último trimestre también se intensificó la persecución y violencia contra el colectivo LGTBI, con el arresto de más de ochenta personas. Desde que al-Sisi tomó el poder en 2013 más de 230 personas han sido procesadas por “libertinaje” según un informe de la Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) publicado en noviembre, que también documenta casos de tortura.

Cabe destacar que, como en años previos, a lo largo de 2017 también se conocieron nuevas sentencias contra dirigentes de los Hermanos Musulmanes, así como la condena a muerte de una cuarentena de personas –y otras numerosas sentencias a prisión perpetua– por participación en hechos de violencia tras el derrocamiento de Mohamed Mursi en 2013. El ex presidente egipcio Hosni Mubarak, en tanto, fue liberado después de seis años de detención en un hospital militar, tras ser exonerado de los cargos vinculados al asesinato de manifestantes durante la revuelta contra su régimen a principios de 2011. Finalmente, cabe mencionar que **hacia finales de año el clima político comenzó a estar marcado por las elecciones presidenciales de mayo de 2018**. Sectores favorables a al-Sisi hicieron llamamientos a postergar los comicios debido a la situación de seguridad, a extender el mandato del actual mandatario por otros dos años y a eliminar las restricciones que establecen como límite una reelección presidencial. El ex primer ministro Ahmed Shafiq anunció su intención de presentar su candidatura en noviembre desde EAU, pero las autoridades de ese país lo arrestaron y deportaron a Egipto. Semanas más tarde Shafiq declinó postularse a los comicios. Otro potencial candidato, el general Ahmed Konsowa –que según informaciones de prensa intentó sin éxito renunciar a su carrera militar para ser elegible–, fue arrestado y condenado a seis años de prisión por expresar opiniones políticas.

Iraq (Kurdistán)	
Intensidad:	2
Evolución:	↑
Tipología:	Autogobierno, Territorio, Recursos, Identidad Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Gobierno Regional del Kurdistán (KRG), Turquía, Irán, PKK
Síntesis:	Concentrada en la zona norte de Iraq, la población kurda representa entre un 15 y un 20% del total de habitantes del país. Desde la creación del Estado iraquí, y tras el incumplimiento de las promesas sobre un Estado kurdo

independiente en la región, la población kurda ha vivido un difícil encaje con el Estado iraquí y ha padecido severos casos de represión. En 1992, tras el fin de la Guerra del Golfo, el establecimiento de la zona de exclusión aérea en el norte de Iraq sentó las bases para la creación del Gobierno Regional del Kurdistán (KRG). Esta experiencia de autogobierno kurdo se vio reforzada después del derrocamiento del régimen de Saddam Hussein en 2003 y ganó reconocimiento en el esquema federal consagrado en la Constitución iraquí de 2005. Desde entonces, las divergentes interpretaciones sobre los derechos y competencias de cada una de las partes han alimentado las tensiones entre Erbil y Bagdad. La disputa se ha focalizado principalmente en el estatus de los llamados “territorios en disputa” y el control de los recursos energéticos. En el período más reciente, la guerra siria y la evolución del conflicto armado en Iraq han repercutido en las dinámicas de esta disputa, reavivando los debates sobre las perspectivas de un eventual Estado kurdo independiente.

A diferencia del año anterior, en que prevalecieron las dinámicas de cooperación en el marco de la campaña conjunta contra ISIS, durante 2017 **la tensión entre Erbil y Bagdad se intensificó principalmente con motivo de la celebración de un referéndum de independencia impulsado por el Gobierno Regional del Kurdistán (KRG)**. Bajo el liderazgo del presidente Massoud Barzani, el KRG anunció en junio que llevaría a cabo una consulta sobre la independencia de la región (formada por las gobernaciones de Erbil, Suleimaniya y Dohuk) y de territorios en disputa con el Gobierno federal, incluyendo Kirkuk; y fijó el 25 de septiembre como fecha para el referéndum. La medida fue respaldada en septiembre por el legislativo regional, que se reunió por primera vez en dos años, aunque partidos como Gorran o Komal expresaron su oposición a la iniciativa. La convocatoria de referéndum encontró el rechazo del Gobierno de Haidar al-Abadi y fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema y por el Parlamento de Iraq, que autorizó al primer ministro iraquí a adoptar todas las medidas necesarias para preservar la unidad del país. La consulta también motivó el rechazo de Turquía –hasta entonces país aliado del KRG– y de Irán, dos países con minorías kurdas y, por tanto, no interesados en alentar un Kurdistán iraquí independiente. La iniciativa del KRG tampoco contó con el apoyo de EEUU ni de Europa, que se mostraron a favor de la unidad territorial de Iraq. Washington expresó su preocupación por que el referéndum incrementara las tensiones con Bagdad e interfiriera en la campaña contra ISIS. La ONU tampoco dio su apoyo al plebiscito. Pese a este clima adverso a nivel regional e internacional, con la excepción de Israel, el referéndum se celebró en la fecha prevista, contó con un 72% de participación y arrojó un 93% de votos favorables a la independencia. Según algunos análisis, el Gobierno de Barzani mantuvo la convocatoria a pesar de la falta de respaldo externo por diversas razones, entre ellas la necesidad de recuperar legitimidad en medio de las críticas a su gestión y a su permanencia en el cargo tras el cierre del Parlamento en 2015, y por el contexto de pugnas internas en su partido, el KDP, en particular entre su hijo Masrour Barzani, favorable al

40. Human Rights Watch, “We Do Unreasonable Things Here”: Torture and National Security in al-Sisi’s Egypt, 5 de septiembre de 2017.

referéndum, y su sobrino y primer ministro, Nechervan Barzani, partidario de mantener buenas relaciones con Bagdad y Ankara (ambos candidatos a suceder a Massoud Barzani).⁴¹

La celebración del referéndum propició duras respuestas y amenazas del Gobierno iraquí, Ankara y Teherán; y motivó algunas medidas de represalia, como el cierre del espacio aéreo del Kurdistán iraquí para vuelos internacionales y de la frontera terrestre con Irán, así como maniobras militares de tropas iraníes, iraquíes y turcas en las zonas fronterizas. **La acción más significativa fue la decisión del Gobierno federal de recuperar el control de Kirkuk y otras áreas en disputa, en octubre.** Kirkuk se encontraba bajo dominio kurdo desde 2014, cuando el avance de ISIS propició el colapso de las fuerzas iraquíes en la zona. El avance de las tropas iraquíes y de las milicias shíes (PMU) que participaron en la ofensiva se vio facilitado por un acuerdo entre el Gobierno de Abadi y el partido kurdo PUK, rival del KDP, en el que Irán también habría tenido un papel relevante. Tras el repliegue de los peshmergas en Kirkuk, las fuerzas de Bagdad penetraron en la ciudad sin encontrar resistencia y en los días siguientes recuperaron el control de otras localidades como Bashiqa, Khanaqin y Sinjar, también sin enfrentamientos. En este contexto se anunció la suspensión de las elecciones legislativas y presidenciales previstas para el 1 de noviembre en el Kurdistán iraquí y Barzani anunció su dimisión como presidente. En las semanas siguientes Bagdad insistió en que no mantendría negociaciones con Erbil hasta que el KRG anulara los resultados del referéndum e intensificó las presiones en materia de exportaciones petroleras y de la cuota del presupuesto federal que corresponde al Kurdistán iraquí. El KRG, en tanto, anunció recortes de salarios al finalizar el año que motivaron protestas en Suleimaniya y acabaron con tres personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad. En paralelo a esta dinámica de tensión, cabe destacar que, al igual que el año pasado, en 2017 se produjeron tensiones intra-kurdas entre el KDP y el PKK en Sinjar que causaron ocho víctimas mortales en marzo. Los ataques de Turquía a posiciones del PKK al noroeste de Sinjar también provocaron la muerte a 14 miembros del grupo y también a cinco peshmergas del KRG, en lo que Ankara reconoció como un error. Finalmente, cabe mencionar que durante 2017 murió el histórico líder del PUK y ex presidente de Iraq, Jalal Talabani.

Israel – Siria – Líbano	
Intensidad:	2
Evolución:	=
Tipología:	Sistema, Recursos, Territorio Internacional
Actores:	Israel, Siria, Líbano, Hezbollah (partido y milicia)

Síntesis:

La tensión tiene como telón de fondo el conflicto israelí-palestino y sus consecuencias en la región. Por una parte, la presencia de miles de personas refugiadas palestinas que se establecieron en el Líbano a partir de 1948, junto con la dirección de la OLP en 1979, propició continuos ataques por parte de Israel en el sur del país hasta ocuparlo en 1982. El nacimiento del grupo armado chií Hezbollah a principios de los ochenta en el Líbano, con una agenda de resistencia contra Israel y de liberación de Palestina, originó enfrentamientos periódicos hasta culminar con la ofensiva israelí a gran escala de julio de 2006. Por otra parte, la guerra de 1967 significó la ocupación israelí de los Altos del Golán sirios que, junto al apoyo de Siria a Hezbollah, explica la tensión entre Israel y Siria. Desde 2011, el estallido del conflicto armado en Siria ha tenido un impacto directo en las dinámicas de esta tensión y en el posicionamiento de los distintos actores involucrados en la disputa.

La tensión internacional que protagonizan Israel, Siria y Líbano evolucionó de manera similar al año anterior. Durante 2017 el clima continuó estando marcado por una retórica beligerante entre las partes. A través de varios de sus dirigentes –incluyendo su máximo líder, Hassan Nasrallah–, **el grupo shií libanés Hezbollah amenazó con atacar el reactor nuclear israelí de Dimona, advirtió que no habría “líneas rojas” en una próxima confrontación con Israel** y subrayó que las hostilidades tendrían lugar en los territorios ocupados palestinos. El presidente libanés, Michel Aoun, aseguró que eventuales acciones israelíes encontrarían una respuesta por parte de Líbano y defendió la posesión de arsenales por parte de Hezbollah como complementarios a los de las Fuerzas Armadas libanesas para hacer frente a Israel, una posición que no comparten todos los integrantes del Gobierno libanés. Según trascendió, Aoun rechazó los llamamientos de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en Líbano (UNIFIL) para adoptar una actitud más firme frente a las actividades de Hezbollah en el sur del país, argumentando que no podía exigir la deposición de armas al grupo shií en un contexto de amenazas de seguridad. Diversos miembros del Gobierno y altos cargos militares de Israel, en tanto, advirtieron en distintos momentos del año que en una futura contienda con Hezbollah las instituciones libanesas, así como diversas infraestructuras –aeropuertos, centrales de energía– serían considerados blancos legítimos. Durante el período ambos bandos se acusaron mutuamente de transgredir las disposiciones relativas a la resolución 1701 –aprobada tras la última guerra entre Israel y Hezbollah–, aunque UNIFIL aseguró que la situación en el área bajo su supervisión continuó tensa, pero estable. Israel insistió en denunciar la presencia de armas e infraestructuras de Hezbollah en el área bajo control de UNIFIL, aunque la misión no pudo constatarlas de manera independiente. Como en años previos, UNIFIL documentó recurrentes violaciones del espacio aéreo libanés por parte de Israel, con frecuencia diaria, principalmente con aeronave son tripuladas. Según datos de UNIFIL, estas transgresiones aumentaron en

41. International Crisis Group, *Oil and Borders: How to Fix Iraq's Kurdish Crisis*, Middle East Briefing no.55, 17 de octubre de 2017.

número y duración. Así, por ejemplo, entre el 1 de julio y el 31 de octubre se registraron 758 violaciones del espacio aéreo, un 80% más que en el mismo período del año anterior. En este período Israel realizó maniobras simulando un eventual conflicto armado con Hezbollah. La demarcación de la frontera marítima entre Israel y Líbano fue otro de los focos de tensión entre las partes.

Líbano	
Intensidad:	3
Evolución:	↑
Tipología:	Gobierno, Sistema Interna internacionalizada
Actores:	Gobierno, Hezbollah (partido y milicia), oposición política y social, grupo armado ISIS y Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra), Saraya Ahl al-Sham

Síntesis:

El asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri en febrero de 2005 desencadenó la llamada “Revolución del Cedro” que, tras manifestaciones masivas, forzó la retirada de las Fuerzas Armadas sirias –presentes en el país desde hacía tres décadas– exigida en la resolución 1559 del Consejo de Seguridad, impulsada por EEUU y Francia en septiembre de 2004. La inmediata polarización entre, por una parte, opositores a la influencia de Siria (encabezados por el hijo de Hariri, quienes culpaban al régimen sirio del asesinato) y, por otra parte, sectores más vinculados a Siria como Hezbollah, originó una crisis política, social e institucional marcada por divisiones confesionales. En un clima de persistente división política interna, el conflicto armado que estalló en Siria en 2011 ha influido en un agravamiento de la tensión entre sectores políticos y sociales libaneses y ha favorecido un significativo incremento de la violencia en el país.

La situación interna continuó estando determinada por las consecuencias del conflicto armado en Siria, por episodios de violencia en el seno de la comunidad palestina en Líbano y por las tensiones internas fruto del complejo escenario político del país. Al igual que en años anteriores, **el impacto de la guerra en Siria fue especialmente evidente en las zonas fronterizas y, en particular, en el área de Aarsal**. Las fuerzas de seguridad libanesas participaron en acciones contra grupos armados que operan en esta área –ISIS, Jabhat Fatah al-Sham (ex Frente al-Nusra), Saraya Ahl-Sham, entre otros–, mientras que Hezbollah también se implicó en acciones armadas contra estos grupos a uno y otro lado de la frontera en alianza con las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad. Mientras, otro conjunto de libaneses continuó combatiendo en las filas de organizaciones armadas opuestas al Gobierno de Damasco. El balance de letalidad de los hechos de violencia durante 2017 es difícil de establecer dadas las informaciones imprecisas sobre algunos incidentes –que habrían causado “decenas” de víctimas–, pero en términos generales sería superior al de 2016. Sólo en agosto, los enfrentamientos entre combatientes de Hezbollah y Jabhat Fatah al-Sham en las afueras de Aarsal

habrían causado la muerte de 28 y 150 milicianos, respectivamente. En este contexto, se informó de diversos acuerdos de cese el fuego que derivaron en masivos movimientos de población. Así, por ejemplo, un pacto en julio entre Hezbollah y Jabhat Fatah al-Sham condujo al intercambio de prisioneros y a la marcha a la provincia siria de Idlib de un grupo de combatientes de Jabhat Fatah al-Sham y sus familias, entre 7.000 y 9.000 personas en total. Un acuerdo similar en agosto con una facción de unos 300 combatientes de Saraya Ahl al-Sham también motivó el repliegue de los milicianos y sus familias hacia Siria, mientras que otro alcanzado con ISIS se habría visto obstaculizado por bombardeos de la coalición liderada por EEUU en Siria. En este contexto, la ONU y grupos de derechos humanos denunciaron repatriaciones no consensuadas de población refugiada.

Cabe destacar que el impacto del conflicto sirio también se evidenció en la situación de la población refugiada. Durante el año las operaciones de fuerzas de seguridad libanesas en campamentos de refugiados motivaron la detención de más de 350 personas, cuatro de las cuales murieron en custodia. En junio, durante una operación de rastreo cinco atacantes suicidas provocaron heridas a siete soldados libaneses y la muerte de una niña en dos campamentos en la zona de Aarsal. Paralelamente, **se incrementó la vulnerabilidad económica del millón de personas refugiadas de origen sirio, con un 58% viviendo en condiciones de extrema pobreza –5% más que el año anterior–** y 74% bajo el umbral de pobreza, además de la mitad de las y los menores en edad escolar primaria fuera del sistema educativo. Según encuestas, también se incrementó el sentimiento anti-refugiados en el país –en 2014 un 40% opinaba que no había tensión entre ambas comunidades, frente a un 2% en 2017–, con protestas por la competencia laboral que supone la población siria. En este sentido, el presidente libanés aseguró que la población refugiada siria constituía un “desafío existencial” para el país y llamó a la comunidad internacional a crear las condiciones para su retorno a zonas estables y de baja tensión en Siria. La situación en la mayoría de los campamentos de refugiados palestinos, en tanto, permaneció relativamente estable, a excepción de Aïn el-Helweh, donde la violencia se intensificó. Este campo fue escenario durante todo el año de choques entre grupos de línea yihadista y fuerzas de seguridad palestinas que causaron al menos 20 víctimas mortales, además de decenas de personas heridas y el desplazamiento forzado de más de 400 familias.

Finalmente, en términos de política interna, cabe mencionar que después de varios retrasos el Parlamento libanés acordó una nueva ley electoral que debe permitir la celebración de elecciones legislativas –previstas inicialmente para junio de 2017– en mayo de 2018, las primeras en una década. A lo largo del año, siguieron haciéndose evidentes las diferencias en el seno del Gobierno respecto al papel de Hezbollah. Así, el presidente Michel Aoun

defendió en varias ocasiones la posesión de arsenales por parte del partido-milicia shíí, como complementarios a los de las fuerzas armadas libanesas y necesarios ante una eventual confrontación con Israel. Mientras, el primer ministro, Saad Hariri, insistió en considerar esta posesión de armas como ilegítima. **Hariri protagonizó un confuso incidente en noviembre, tras**

presentar por sorpresa su renuncia desde Arabia Saudita bajo el argumento de excesiva influencia de Hezbollah e Irán en Líbano y amenazas de muerte. El partido-milicia y el presidente Aoun acusaron a Riad de detener a Hariri, quien (tras una mediación de Francia) finalmente regresó al país y se retractó de su dimisión.

3. Género, paz y seguridad

- El 75% de los conflictos armados para los que existían datos sobre igualdad de género tuvieron lugar en contextos con graves o muy graves desigualdades de género.
- De los 17 conflictos armados en los que se registró violencia sexual en 2016 según el informe del Secretario General de la ONU, diez de ellos registraron los niveles máximos de intensidad durante 2017 –Libia, Región Lago Chad (Boko Haram), RDC (Kasai), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Myanmar, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas).
- Naciones Unidas señaló que la violencia sexual en Myanmar contra la población rohingya había sido comandada, orquestada y perpetrada por las Fuerzas Armadas y había involucrado a otros actores, como la policía fronteriza y las milicias integradas por población rakhine y de otras etnias.
- El informe del Secretario General sobre mujeres paz y seguridad constató que durante 2016 se produjo un retroceso en la participación de las mujeres en los procesos de paz y en la participación del conjunto de la sociedad civil. Además, también se redujo el número de acuerdos de paz que incluyó cuestiones de género en su redactado.
- Organizaciones de la sociedad civil anunciaron una petición ante la Corte Penal Internacional para que este tribunal presentara cargos contra ISIS por la persecución y asesinato de población LGTBI.

El capítulo Género, paz y seguridad analiza los impactos de género de los conflictos armados y las tensiones sociopolíticas, así como la integración de la perspectiva de género en diversas iniciativas de construcción de paz en el ámbito internacional y local por parte de las organizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas, de los Gobiernos, así como de diferentes organizaciones y movimientos de la sociedad civil locales e internacionales.¹ Además se hace un seguimiento de la implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad. La perspectiva de género permite visibilizar cuáles son los impactos diferenciados de los conflictos armados sobre las mujeres y sobre los hombres, pero también en qué medida y de qué manera participan unas y otros en la construcción de paz y cuáles son las aportaciones que las mujeres están haciendo a esta construcción. El capítulo está estructurado en tres bloques principales: el primero hace una evaluación de la situación mundial en lo que respecta a las desigualdades de género mediante el análisis del Índice de Instituciones Sociales y Género; en segundo lugar se analiza la dimensión de género en el impacto de los conflictos armados y crisis sociopolíticas; y el último apartado está dedicado a la construcción de la paz desde una perspectiva de género. Al principio del capítulo se adjunta un mapa en el que aparecen señalados aquellos países con graves desigualdades de género según el Índice de Instituciones Sociales y Género. El capítulo lleva a cabo de manera específica un seguimiento de la implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad, establecida tras la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad por el Consejo de Seguridad de la ONU.

3.1. Desigualdades de género

El Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI)² es una medición de la discriminación contra las mujeres en las instituciones sociales, que refleja las leyes, normas y prácticas discriminatorias en 160 países teniendo en cuenta cinco dimensiones: la discriminación en el seno de la familia, la violencia contra las mujeres, la preferencia por hijos varones, el acceso de las mujeres a los recursos y su acceso al espacio público. Las instituciones sociales discriminatorias (normas formales e informales, actitudes y prácticas) restringen el acceso de las mujeres a los derechos, la justicia y el empoderamiento, y perpetúan las desigualdades de género en áreas como la educación, la salud, el empleo o la participación política.

1. El género es la categoría analítica que pone de manifiesto que las desigualdades entre hombres y mujeres son un producto social y no un resultado de la naturaleza, evidenciando su construcción social y cultural para distinguirlas de las diferencias biológicas de los sexos. El género pretende dar visibilidad a la construcción social de la diferencia sexual y a la división sexual del trabajo y el poder. La perspectiva de género busca evidenciar que las diferencias entre hombres y mujeres son una construcción social producto de las relaciones de poder desiguales que se han establecido históricamente en el sistema patriarcal. El género como categoría de análisis tiene el objetivo de demostrar la naturaleza histórica y situada de las diferencias sexuales.
2. El SIGI es un índice elaborado por la OCDE que mide cinco subíndices integrados por 14 indicadores que incluyen: edad legal de matrimonio, matrimonio precoz, autoridad parental, violencia contra las mujeres, mutilación genital femenina, autonomía reproductiva, abortos selectivos por sexo, preferencias de fertilidad, acceso seguro a la tierra, acceso seguro a la propiedad de otros recursos, acceso a servicios financieros, acceso al espacio público, acceso a la participación y la representación política. OCDE, *Social Institutions & Gender Index. 2014 Synthesis Report*. OCDE, 2014.2014.

Tabla 3.1. Países en conflicto armado y tensión con niveles de discriminación de género altos o muy altos³

	Niveles altos de discriminación	Niveles muy altos de discriminación
Conflictos armados	Afganistán Camerún ⁵ Etiopía India (2) ⁴ Iraq Myanmar Pakistán (2) RCA	Chad ⁶ Egipto Malí Níger ⁷ Nigeria ⁸ RDC (3) Siria Somalia Sudán (2) Yemen (2)
Tensiones	Armenia ⁹ Azerbaiyán Burkina Faso Camerún Côte d'Ivoire Etiopía (3) Guinea India (4) ¹⁰ Iraq Líbano (2) ¹¹ Nepal Pakistán (2)	Bangladesh Chad Egipto Gambia Níger Nigeria (2) RDC (4) ¹² Siria Somalia Sudán (2) Yemen

De acuerdo con el SIGI, los niveles de discriminación contra las mujeres fueron altos o muy altos en 38 países, concentrados principalmente en África, Asia y Oriente Medio. El análisis que se obtiene cruzando los datos de este indicador con el de los países que se encuentran en situación de conflicto armado revela que **21 de los 33 conflictos armados que tuvieron lugar a lo largo de 2017 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género, con niveles altos o muy altos de discriminación, y que cinco conflictos armados tenían lugar en países sobre los que no hay datos disponibles al respecto –Argelia, Libia, Israel-Palestina, Rusia, Sudán del Sur–**. Así, el 75% de los conflictos armados para los que existían datos sobre igualdad de género tuvieron lugar en contextos con graves o muy graves

21 de los 33 conflictos armados que tuvieron lugar en 2017 se dieron en países donde existían graves desigualdades de género

desigualdades de género. Asimismo, en otros seis países en los que existía uno o más conflictos armados, los niveles de discriminación eran inferiores, en algunos casos con niveles medios (Burundi, Filipinas) y en otros con niveles bajos (Ucrania, Colombia, Tailandia y Turquía). En lo que respecta a las crisis sociopolíticas, al menos 32 de las 88 tensiones activas durante el año 2017 transcurrieron en países en los que existían graves desigualdades de género (niveles altos o muy altos según el SIGI), lo que supone un 45% de las tensiones para las que existían datos. 16 tensiones transcurrían en países sobre los que no hay datos disponibles (Eritrea, Guinea Ecuatorial, México, Japón, Corea RPD, Rep. de Corea, Chipre, Rusia, Arabia Saudita, Irán y Palestina).

3.2. El impacto de la violencia y los conflictos desde una perspectiva de género

En este apartado se aborda la dimensión de género en el ciclo del conflicto, en especial en referencia a la violencia contra las mujeres. La perspectiva de género es una herramienta de utilidad para el análisis de los conflictos armados y las tensiones de carácter sociopolítico y que permite dar visibilidad a aspectos generalmente obviados en este análisis tanto en términos de causas como de consecuencias.

3.2.1. Violencia sexual en conflictos armados y tensiones

Al igual que en años anteriores, durante 2017 la violencia sexual estuvo presente en un gran número de los conflictos armados activos.¹³ Su utilización, que en algunos casos formó parte de las estrategias de guerra deliberadas de los actores armados,

- Tabla elaborada a partir de los niveles de la discriminación de género del SIGI (OCDE) señaladas en el último informe disponible (2014) y de las clasificaciones de conflicto armado y tensión de la Escola de Cultura de Pau (véase capítulo 1, Conflictos armados y capítulo 2, Tensiones). El SIGI establece cinco niveles de clasificación en función del grado de discriminación: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo.
- Entre paréntesis el número de conflictos armados o tensiones en dicho país.
- Nigeria, Camerún, Chad y Níger protagonizan un único conflicto armado, denominado Región Lago Chad (Boko Haram). Véase el resumen en el capítulo 1 (Conflictos armados).
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid.
- Armenia y Azerbaiyán protagonizan una única tensión internacional, la relativa a la disputa en torno a Nagorno-Karabaj. Véase el resumen en el capítulo 2 (Tensiones).
- Una de las tensiones protagonizadas por la India hace referencia a la que mantiene con Pakistán.
- Una de las tensiones en Líbano hace referencia a la que mantiene con Israel y Siria.
- En el caso de RDC una de las tensiones es la tensión internacional denominada África Central (LRA), en la que intervienen tanto las Fuerzas Armadas congoleesas como milicias de autodefensa de la RDC. Véase el capítulo 2 (Tensiones).
- La ONU considera violencia sexual relacionada con los conflictos los “incidentes o pautas de violencia sexual [...], es decir, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable que se cometa contra las mujeres, los hombres, los niños o las niñas. Estos incidentes o pautas de comportamiento se producen en situaciones de conflicto o posteriores a los conflictos o en otras situaciones motivo de preocupación (por ejemplo, durante un enfrentamiento político). Además, guardan una relación directa o indirecta con el propio conflicto o enfrentamiento político, es decir, una relación temporal, geográfica o causal. Aparte del carácter internacional de los supuestos crímenes, que, dependiendo de las circunstancias, constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, actos de genocidio u otras violaciones manifiestas de los derechos humanos, la relación con el conflicto puede ser evidente teniendo en cuenta el perfil y las motivaciones del autor, el perfil de la víctima, el clima de impunidad o la situación de colapso en que se encuentre el Estado en cuestión, las dimensiones transfronterizas o el hecho de que violen lo dispuesto en un acuerdo de cesación del fuego”. UN Action Against Sexual Violence In Conflict, *Marco analítico y conceptual de la violencia sexual en los conflictos*, noviembre de 2012.

Cuadro 3.1. Actores armados y violencia sexual en conflictos¹⁴

El informe del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos publicado en abril de 2017 incluyó una lista de actores armados sobre los que pesan sospechas fundadas de haber cometido actos sistemáticos de violación y otras formas de violencia sexual o de ser responsables de ellos en situaciones de conflicto armado, que son objeto de examen por el Consejo de Seguridad.¹⁵

Côte d'Ivoire	Agentes no estatales: Alianza Patriótica de la Etnia Wé, el Frente para la Liberación del Gran Oeste, el Movimiento de Liberación del Oeste de Côte d'Ivoire y la Unión Patriótica de Resistencia del Gran Oeste
Iraq	ISIS
Malí	MNLA, Ansar Dine, MUYAO, AQMI, Grupos de Autodefensa de los Tuareg Imgad y sus Aliados
RCA	LRA; antigua coalición de Séléka; fuerzas antibalaka, incluidos elementos asociados de las fuerzas armadas de la RCA; Revolución y Justicia; Frente Democrático del Pueblo Centroafricano
RDC	Grupos armados: APCLS; ADF-NALU; Fuerzas para la Defensa del Congo; FDLR; Fuerzas de Resistencia Patrióticas de Ituri/ "Coronel" Adirodhu Mbadhu/ "Coronel" Kakado; LRA; Mai-Mai Cheka/Defensa de Nduma para el Congo; Mai-Mai Kifuafua; Mai-Mai Simba/Manu; Mai-Mai Simba Mangaribi; Mai-Mai Simba/Lumumba; Nyatura; Raia Mutomboki (todas las facciones) Fuerzas Armadas de la RDC; Policía nacional de la RDC
Siria	ISIS; Hay'at Tahrir Al-Sham (antes Frente Al-Nusra); Ejército del Islam, Ahrar Al-Sham; fuerzas pro gubernamentales que incluyen las milicias de las Fuerzas de Defensa Nacional; Fuerzas Armadas sirias y los servicios de inteligencia sirios
Somalia	Al-Shabaab; Ejército Nacional Somalí; Policía Nacional de Somalia y sus milicias aliadas; fuerzas militares de Puntlandia
Sudán	Movimiento por la Justicia y la Igualdad; Fuerzas Armadas Sudanesas; Fuerzas de Apoyo Rápido.
Sudán del Sur	LRA; Movimiento por la Justicia y la Igualdad; Ejército/Movimiento de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición; Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán; Policía Nacional de Sudán del Sur
Otros casos	Boko Haram

fue documentada en diferentes informes, así como por medios de comunicación locales e internacionales.

En el mes de abril se celebró en el Consejo de Seguridad el debate sobre violencia sexual en el que el secretario general de la ONU presentó su informe anual de seguimiento de la violencia sexual relacionada con los conflictos relativo al periodo de enero a diciembre de 2016, en el que se identifican actores armados responsables de haber cometido actos sistemáticos de violación y otras formas de violencia de sexual. El informe también documenta los patrones y tendencias en la utilización de la violencia sexual en el marco de los conflictos de Afganistán, RCA, Colombia, RDC, Iraq, Libia, Malí, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Darfur (Sudán), Siria, Yemen; de los casos de posconflicto de Bosnia y Herzegovina, Côte d'Ivoire, Nepal y Sri Lanka, además de la situación en Burundi y Nigeria. En el informe se recogen también diferentes iniciativas de respuesta llevadas a cabo por los Gobiernos o desde otras instancias, como Naciones Unidas o la sociedad civil.

Cabe destacar que de los 17 conflictos armados¹⁶ en los que se registró violencia sexual en 2016 según el informe del Secretario General de la ONU, diez de ellos registraron los niveles máximos de intensidad durante 2017 –Libia, Región Lago Chad (Boko Haram), RDC

(Kasai), Somalia, Sudán del Sur, Afganistán, Myanmar, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas)– superando en general el millar de víctimas mortales anuales y generando graves impactos en las personas y el territorio, entre los que se incluía la violencia sexual relacionada con el conflicto armado. Además, en diez de ellos también se produjo una escalada de la violencia durante el 2017 con respecto al año anterior –Libia, Malí (norte), RCA, RDC (este), RDC (Kasai), Somalia, Myanmar, Iraq, Siria y Yemen (al-houthistas)–.

Entre los conflictos armados de 2017, cabe destacar que actores armados de **Sudán del Sur** continuaron perpetrando violencia sexual a una escala masiva y dirigida contra personas de grupos étnicos considerados rivales. Así lo denunció un informe de 2017 elaborado por Amnistía Internacional y 10 personas defensoras de derechos humanos de Sudán del Sur.¹⁷ Según el informe, sobrevivientes de la violencia sexual señalaban una situación de violencia sexual generalizada por parte de actores armados, incluyendo durante ataques militares contra localidades, registros en áreas residenciales, puestos de control y tras secuestros y detenciones. El informe denuncia que la mayoría de la violencia sexual se perpetró junto a otras formas de violencia, incluyendo asesinatos, saqueos y destrucción de casas. Asimismo, la mayor parte de casos documentados involucraron

14. Consejo de Seguridad de la ONU, *Violencia sexual relacionada con los conflictos. Informe del Secretario General*, S/2017/249, 15 de abril de 2017.

15. En esta tabla se utiliza la denominación de los actores armados tal y como aparece recogida en el informe del Secretario General y que no necesariamente coincide con la utilizada en los capítulos 1 y 2 de este anuario.

16. En algunos países recogidos en el informe del secretario general de la ONU se produjo más de un conflicto armado de acuerdo con la definición de la ECP. El listado completo de conflictos armados es: Libia, Malí (norte), Región Lago Chad (Boko Haram) –incluye Nigeria–, RCA, RDC (este), RDC (este-ADF), RDC (Kasai), Somalia, Sudán del Sur, Sudán (Darfur), Colombia, Afganistán, Myanmar, Iraq, Siria, Yemen (al-houthistas) y Yemen (AQPA).

17. Amnistía Internacional, *"Do not remain silent": Survivors of Sexual violence in South Sudan call for justice and reparations*, AI, 2017.

violaciones individuales y colectivas contra mujeres y niñas. Además, las prácticas de violencia sexual formaban parte de una estrategia de terror y humillación contra las víctimas así como sus grupos étnicos o políticos, según se desprende de los testimonios de las víctimas. El informe señala también la impunidad que acompaña a esta violencia, así como la falta de medidas de reparación.

La red de alerta preventiva West Africa Early Warning and Early Response Network (WARN) de la plataforma West Africa Network for Peacebuilding (WANEP) alertó sobre la violencia sexual y de género por parte de actores armados en el norte y centro de **Malí**.¹⁸ Su sistema nacional de alerta preventiva registró 70 casos de violaciones en 2017, sin contar otras formas de acoso sexual. WANEP señaló que la violencia sexual en Malí estaba infra-denunciada. Según WANEP, la solución al extremismo violento no debería limitarse a la acción militar. La red abogó por la participación activa de las comunidades locales, incluyendo a través de la construcción de confianza entre la población y las fuerzas de seguridad. WANEP también instó a ECOWAS, la UA y otros actores internacionales a llevar a cabo labores de diplomacia preventiva con vistas a las elecciones en 2018, e hizo un llamamiento a prestar una mayor atención a la violencia de género en el centro y norte del país.

Uno de los conflictos armados en los que la violencia sexual tuvo un mayor impacto durante el año 2017 fue el de **Myanmar**, en el que numerosas organizaciones de derechos humanos internacionales y locales denunciaron la violencia sexual perpetrada por las fuerzas de seguridad de Myanmar contra la población civil rohingya, especialmente las mujeres y las niñas. En el marco de la operación militar que se desarrolló desde el mes de agosto y que se prolongó en los meses restantes, numerosas mujeres fueron víctimas de esta violencia sexual, en medio de una gravísima crisis de desplazamiento forzado a consecuencia de la cual cerca de 700.000 personas rohingyas tuvieron que abandonar sus hogares. La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) publicó un informe,¹⁹ en el que documenta la violación colectiva de mujeres y niñas rohingyas por parte de las Fuerzas Armadas en el marco de una campaña de limpieza étnica contra esta población. HRW entrevistó a más de 50 mujeres refugiadas en Bangladesh que habían huido de la violencia, entre las que había cerca de 30 supervivientes de violencia sexual que denunciaron las violaciones cometidas por soldados birmanos durante los ataques contra poblaciones. Además, alertaron de que civiles

de la etnia rakhine también acosaron sexualmente a mujeres rohingyas. HRW señala que la práctica totalidad de las agresiones sexuales documentadas son violaciones colectivas y que cientos de mujeres habrían sido víctimas. Esta organización ya había documentado

actos de violencia sexual durante anteriores operaciones militares en el estado Rakhine, aunque estas acusaciones habían sido rechazadas por las autoridades birmanas, que nunca investigaron lo sucedido ni persiguieron a los culpables. Por otra parte, la representante especial de la ONU para la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten, viajó a Bangladesh para visitar los campos que acogen a la población refugiada rohingya procedente de Myanmar y denunció que se habían producido múltiples agresiones sexuales incluyendo violaciones, violaciones colectivas, desnudos forzados, humillaciones y esclavitud sexual por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas de Myanmar contra la población civil rohingya. La representante de la ONU señaló que la violencia sexual

había sido comandada, orquestada y perpetrada por las Fuerzas Armadas y había involucrado a otros actores, como la policía fronteriza y las milicias integradas por población rakhine y de otras etnias.

En relación al conflicto armado en **Ucrania**, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó violencia sexual relacionada con el conflicto entre marzo de 2014 y finales de enero de 2017. En un nuevo informe, presentado en febrero de 2017, ACNUDH presentó una muestra de 31 casos de violencia sexual para ejemplificar y denunciar las pautas y tendencias de este tipo de violación de derechos humanos.²⁰ ACNUDH señaló que la violencia sexual está infradenunciada y que no ha podido verificar todas las denuncias, especialmente en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, debido a factores como obstáculos de acceso. Entre las tendencias, ACNUDH señala que no hay evidencias para pensar que la violencia sexual se ha usado con fines estratégicos o tácticos por las fuerzas gubernamentales ni los actores rebeldes. No obstante, en el mismo informe ACNUDH describe que en **la mayoría de casos documentados, que ocurrieron en contextos de privación de libertad, la violencia sexual se usó como método de tortura y malos tratos para castigar, humillar o extraer confesiones**. En algunos casos también para que las víctimas abandonaran sus propiedades o llevaran a cabo ciertas acciones. **La violencia sexual afectó a hombres y mujeres**, según el informe, e incluyó prácticas como golpes y electrocuciones en zonas genitales, violación, amenazas de violación y desnudez forzada. Además, se perpetraron amenazas de llevar a cabo detenciones,

En Sudán del Sur sobrevivientes de la violencia sexual señalaban una situación de violencia sexual generalizada por parte de actores armados, incluyendo durante ataques militares contra localidades, registros en áreas residenciales, puestos de control y tras secuestros y detenciones

18. West Africa Network for Peacebuilding, *West Africa Early Warning Outlook for 2018. Potential Flashpoints & Simmering Conflicts*. WANEP, febrero de 2018.

19. Human Rights Watch, *"All of My Body Was Pain" Sexual Violence against Rohingya Women and Girls in Burma*, Human Rights Watch, 2017.

20. Office of the United Nations High Commissioner of Human Rights, *Conflict-Related Sexual Violence in Ukraine 14 March 2014 to 31 January 2017*, 16 de febrero de 2017.

secuestros, violaciones, daños o asesinato de familiares, especialmente de niños y niñas. Además de en situaciones de privación de libertad –principal situación de riesgo–, también se documentaron casos de violencia sexual, principalmente contra mujeres, en puestos de control en la línea de contacto. ACNUDH señaló que la presencia de las fuerzas armadas ucranianas y de los grupos armados en áreas pobladas incrementaba el riesgo de violencia sexual contra la población civil. Además, **el informe identifica una situación general de impunidad hacia las violaciones de derechos humanos, incluyendo la violencia sexual.**

Un estudio de Naciones Unidas reveló el **impacto de la violencia sexual en hombres y niños sirios refugiados**, señalando que la violencia sexual y la tortura están mucho más extendidas de lo que se había estimado hasta el momento, y que gran parte de la violencia sexual tuvo lugar como forma de tortura en centros de detención o prisiones, aunque fue perpetrada por todas las partes en conflicto.²¹ Esta violencia sexual afectó a hombres y niños de todas las edades. La violencia sexual contra la población LGTBI se produjo por parte de actores armados en Siria y también por parte de otros actores en los países de asilo de forma oportunista, dada su situación de doble vulnerabilidad por su condición de refugiados y por la discriminación sufrida por su orientación y/o identidad sexual. Los niños sufren violencia sexual en sus países de refugio tanto por parte de la población local, como por parte de otros hombres o niños de su propia comunidad. También se producen múltiples casos de explotación sexual de hombres y niños refugiados en el contexto laboral en los países de acogida. El estudio recoge los múltiples impactos psicológicos, de salud, sociales, económicos, familiares y comunitarios que esta violencia tiene sobre hombres y niños, incluyendo fuertes traumas psicológicos e importantes dolencias físicas, así como el estigma, que no afecta solo a los individuos, sino también al conjunto de la familia. El informe señala que el estigma comunitario es uno de los más graves impactos y que con frecuencia fuerza a las víctimas a romper sus lazos con el entorno más cercano y a desplazarse a las ciudades en las que es más fácil mantener el anonimato.

En **Libia** a lo largo de 2017 continuaron las denuncias sobre las detenciones arbitrarias de mujeres, en algunos casos debido a sus filiaciones familiares, para ser utilizadas en el intercambio de prisioneros o como forma de castigo por presuntos “crímenes morales”, como mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. En estos períodos de privación de libertad muchas mujeres –libias, pero también extranjeras– sufren torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, según ha denunciado de manera recurrente la ONU en sus informes sobre la situación en el país norteafricano. Cabe destacar que tanto la ONU como diversas ONG alertaron

sobre la situación de grave vulnerabilidad de la población migrante y refugiada en Libia –en especial mujeres y menores–, que estaba padeciendo diversas formas de violencia sexual, incluyendo violaciones en grupo y prostitución forzada, además de ser objeto de explotación a manos de diferentes actores, entre ellos oficiales libios, organizaciones armadas y traficantes de personas. En este sentido, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó en 2017 sobre el establecimiento de mercados de esclavos y esclavas en Libia.

3.2.2. Respuesta frente a la violencia sexual en conflictos armados

A lo largo del año se produjeron diferentes iniciativas de respuesta frente a la violencia sexual en el marco de los conflictos armados, así como de lucha contra la impunidad en diferentes estamentos judiciales. A continuación se recogen algunas de ellas.

En RDC se condenó a cadena perpetua a 11 miembros de la milicia Djeshi ya Yesu por la violencia sexual contra 40 niñas, en un proceso apoyado por la sociedad civil y Naciones Unidas

En diciembre se produjo una sentencia de enorme relevancia para la lucha contra la impunidad de la **violencia sexual en el marco del conflicto armado en la RDC**, cuando 11 milicianos fueron condenados a cadena perpetua por la violación de 40 niñas, incluyendo un bebé, con edades entre ocho meses y 12 años entre los años 2013 y 2016. El líder de la milicia Djeshi ya Yesu, que también fue encarcelado, era el parlamentario Frederic Batumike.

La sentencia estableció que se trataba de crímenes contra la humanidad. Además, las víctimas recibieron compensaciones económicas, incluyendo también a las familias de víctimas que fueron asesinadas. Las representantes especiales del secretario general de la ONU para la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten, y para los niños y los conflictos armados, Virginia Gamba, celebraron la sentencia, destacando el papel jugado por la sociedad civil en que el juicio pudiera llevarse a cabo y también el hecho de que el equipo de personas expertas en estado de derecho y violencia sexual de Naciones Unidas se desplegara para prestar apoyo tanto a las autoridades congoleesas como al sistema de justicia militar, para que este caso fuera prioritario.

En relación al conflicto armado en **Ucrania y la violencia sexual relacionada con el conflicto**, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) constató un clima de impunidad y de inacción por parte del Gobierno y grupos armados en cuanto a la respuesta frente a este tipo de violencia, infradenunciada. Según un informe publicado por ACNUDH en febrero, la legislación nacional y práctica legal en Ucrania contra la violencia sexual es limitada y no está plenamente en línea con los estándares y prácticas internacionales.²²

21. Sarah Chynoweth, *We Keep it in our Heart. Sexual Violence Against Men and Boys in the Syria Crisis*, UNHCR, 2018.

22. Office of the United Nations High Commissioner of Human Rights, *Conflict-Related Sexual Violence in Ukraine 14 March 2014 to 31 January 2017*, 16 de febrero de 2017.

El informe señala que los casos de violencia sexual son registrados con frecuencia bajo la tipificación de otros crímenes, incluyendo lesiones corporales. En ese sentido, ACNUDH señala también lagunas legislativas y falta de conocimientos del personal policial y de justicia (policías, abogacía, fiscales, jueces) para documentar, investigar y considerar como violencia sexual relacionada con el conflicto tales situaciones.

En **Kosovo** se dieron **avances en el ámbito de reparación de las personas víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto, si bien también persistieron graves obstáculos y limitaciones.**

Estaba previsto para enero de 2018 el inicio del periodo de acceso a reparaciones económicas para mujeres y hombres víctimas de violencia sexual, tras la creación en 2017 de la Comisión de Verificación y la asignación de presupuesto. Se trata de las primeras medidas de reparación desde el fin del conflicto armado y son resultado de los esfuerzos activistas de organizaciones locales de mujeres, que resultaron en enmiendas en 2014 a la ley sobre derechos de los combatientes y otras víctimas civiles de la guerra.²³ Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) celebraron en 2017 el próximo inicio de las reparaciones. Al mismo tiempo, AI alertó sobre las limitaciones significativas y retos pendientes en justicia transicional en relación a la violencia sexual en el conflicto de Kosovo e instó a la UE y al Gobierno de Kosovo, entre otros a adoptar medidas específicas al respecto. Entre las limitaciones de la legislación, AI señaló que **la ley regulaba el acceso a la reparación a víctimas de violencia sexual cometida hasta junio de 1999, lo que excluía a víctimas de la violencia sexual perpetrada en la fase inmediatamente posterior al conflicto, en su mayoría mujeres de minorías étnicas de Kosovo (serbias, romaníes) y algunas mujeres albanokosovares, a manos del Ejército de Liberación de Kosovo (ELK).** AI también subrayó, entre otras limitaciones, la falta de provisiones de acceso gratuito o asequible a asistencia sanitaria –contemplada en cambio para otras víctimas civiles de la guerra–, asistencia psicológica y psicosocial, así como de empoderamiento económico y acceso a empleo. El informe también aborda los fracasos de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) y de la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX) en el abordaje del legado de violencia sexual relacionada con la guerra, alerta sobre la situación de impunidad y la clara falta de voluntad política de perseguir la violencia sexual, e insta a adoptar medidas de reparación integral y transformativa. **AI también subrayó que el legado de impunidad no ha sido nunca abordado en el proceso negociador facilitado por la UE encaminado a la normalización de relaciones entre Serbia y Kosovo.**

Amnistía Internacional señaló que el legado de impunidad frente a la violencia sexual no se ha abordado nunca en el proceso negociador facilitado por la UE encaminado a la normalización de relaciones entre Serbia y Kosovo

Por otra parte, en relación a la violencia sexual perpetrada por el personal militar y civil desplegado en misiones de Naciones Unidas, el informe del secretario general de la ONU Medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales –presentado en febrero de 2017 y que analiza lo sucedido en 2016– constató un año más un aumento de las denuncias.²⁴

Así, en 2016 se denunciaron 145 casos de explotación y abusos sexuales (65 casos que habrían sido perpetrados por personal civil y 80 por personal uniformado), frente a las 99 del año 2015 y 80 de 2014.

Las denuncias afectaban a 311 víctimas, de las cuales 309 eran mujeres. Además, 103 de las 145 denuncias hacían referencia a misiones de mantenimiento de la paz y misiones políticas especiales, mientras otras 42 hacían referencia a entidades distintas. El informe vinculó el aumento a las medidas de apoyo a la presentación de denuncias. Además, el documento recoge otras 20 denuncias de abusos cometidas por otras fuerzas internacionales, diferentes a Naciones Unidas, pero que operan con mandato del Consejo de Seguridad. A su vez, durante 2017 la unidad de conducta y disciplina del departamento

de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas registró 62 denuncias de explotación y abuso sexual de misiones de mantenimiento de la paz. Cabe señalar, según el registro de esta unidad, que en 2017 Naciones Unidas envió 242 comunicaciones a Estados miembros, requiriendo acciones en relación a casos de explotación y abusos sexuales, pero recibió solo 153 respuestas, con información sobre las acciones adoptadas o los procedimientos administrativos o disciplinarios iniciados (frente a 189 comunicaciones y 174 respuestas en 2016; o 107 comunicaciones y 115 respuestas en 2015).

Por otra parte, el secretario general de la ONU presentó los cuatro pilares de la nueva estrategia para combatir la explotación y abusos sexuales: los derechos y dignidad de las víctimas; la lucha contra la impunidad; la cooperación con la sociedad civil, personas expertas externas y otras organizaciones; y la reorientación de la comunicación, para promover la concienciación. La nueva estrategia responde a los planteamientos del grupo multidisciplinar, establecido en enero bajo coordinación de Jane Holl Lute y que llevó a cabo consultas con los Estados miembros, organismos de la ONU y organizaciones externas. Como parte de la nueva estrategia **se estableció en 2017 un nuevo cargo, el de defensora de las Naciones Unidas para los derechos de las víctimas de abuso sexual.** El secretario general designó en agosto para el puesto a la australiana Jane Connors, con una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la asistencia humanitaria en el ámbito académico, de sociedad civil

23. Con la enmienda, la ley 03/L-054 pasó a llamarse Ley sobre el Estatus y Derechos de los Mártires, Inválidos, miembros del Ejército de Liberación de Kosovo, Víctimas de Violencia Sexual de la Guerra, Víctimas Civiles y sus Familias.

24. Asamblea General de las Naciones Unidas, *Medidas especiales de protección contra la explotación y los abusos sexuales: un nuevo enfoque. Informe del Secretario General, A/71/818*, Asamblea General, 28 de febrero de 2017.

y Naciones Unidas. Desde el nuevo cargo, la defensora dará apoyo a la estrategia de asistencia a las víctimas en coordinación con el sistema de Naciones Unidas. Asimismo, en el marco también de la nueva estrategia, el secretario general instó a los Estados miembros que participan en misiones de paz a la firma de un pacto voluntario que fija los compromisos en la lucha contra los abusos, a impulsar la aplicación de medidas y a reforzar la coordinación. En septiembre, 72 Estados habían firmado el pacto y otros 18 habían expresado su intención de firmarlo.

3.2.3. Otras violencias de género en contextos de tensión o conflicto armado

Además de la violencia sexual, los conflictos armados y las tensiones tuvieron otros graves impactos de género. El Salvador continuó afectado por elevadas tasas de feminicidio. En 2017 se produjeron 468 feminicidios, según las cifras del Instituto de Medicina Legal del país,²⁵ lo que supone un incremento con respecto al año anterior. El 15,5% eran niñas y mujeres menores de 19 de años. El 45% eran menores de 29 años, según la misma fuente. **En 2016, El Salvador ya era el país con la tasa más elevada de feminicidios de América Latina,** según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, con una tasa de 11,2 feminicidios por cada 100.000 mujeres (371 muertes en 2016), seguido de Honduras, con una tasa ese año de 10,2 feminicidios (y una cifra absoluta de 466 asesinatos). Asimismo, **las mujeres salvadoreñas continuaron viéndose afectadas por la prohibición absoluta del aborto y la persecución legal contra las mujeres y el personal médico.** Organizaciones feministas y de derechos humanos de El Salvador denunciaron la grave vulneración de los derechos sexuales y reproductivos e instaron a la asamblea legislativa a reformar el artículo 133 del Código penal para despenalizar el aborto por causas de salud.²⁶ Según cifras de La Colectiva Feminista, más de 150 mujeres han sido procesadas, incluyendo más de 35 con condenas a más de 30 años de prisión con acusaciones de homicidio agravado. Además, las organizaciones locales denunciaron la grave situación a la que se enfrentan mujeres, adolescentes y niñas con embarazos resultantes de violaciones o abusos y que se ven forzadas a continuarlos **(3.947 denuncias por delitos sexuales en 2016, según cifras de la Policía Nacional, de los cuales el 47% fueron violaciones de menores de 15 de años, y el 26% de adolescentes de entre 15 y 18 años).**²⁷ Al finalizar el año, en la Asamblea legislativa aguardaban dos propuestas de reforma, una centrada en despenalizar cuatro causas (presentada en 2016) y otra con dos

causales. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, que visitó El Salvador a finales de año –la primera visita al país de un alto comisionado para los derechos humanos– alertó de que la prohibición absoluta del aborto estaba penalizando a mujeres por abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas. Además, señaló que las penas de prisión se llevaban a cabo solamente contra mujeres de orígenes pobres. Por otra parte, la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador (COMCAVIS TRANS) denunció en 2017 28 ataques graves, mayormente asesinatos, contra población lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersex.²⁸ La situación de violencia de género transcurrió en un contexto general de violaciones de derechos humanos, como señaló Amnistía Internacional en su informe anual, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, así como medidas de seguridad extraordinarias en la lucha contra la delincuencia organizada que incumplían los estándares internacionales, incluyendo detención y régimen de aislamiento en condiciones inhumanas y suspensión de las visitas de familiares.

En Chechenia se denunciaron prácticas de secuestro de hombres homosexuales llevados a cabo por actores armados no estatales y fuerzas de seguridad, seguidas de detenciones arbitrarias, violencia, tortura y otros malos tratos. Las primeras informaciones fueron publicadas por Novaya Gazaeta a principios de abril. A su vez, la Red Rusa LGBT llevó a cabo una misión de investigación de los hechos y evacuó de la región a varias víctimas. Las organizaciones OurRight International, Human Rights Watch, ILGA-Europa y la Red Rusa LGBT emitieron un llamamiento urgente al secretario general de la ONU en abril para que interviniese con carácter de urgencia ante la situación de violencia detectada contra un centenar de hombres homosexuales y bisexuales y aquellos percibidos como tales. Las denuncias abarcaban la muerte de al menos tres hombres, retención en prisión ilegal y un patrón de abusos contra los detenidos.²⁹ Las ONG denunciaron que se trataba de una grave escalada de la violencia contra hombres homosexuales chechenos, precedida por años de amenazas y golpes. La Red Rusa LGBT presentó denuncias ante las autoridades rusas. Por su parte, las autoridades chechenas emitieron declaraciones homófobas y negaron la existencia de la homosexualidad en Chechenia. El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos instó al fin de los abusos y a la investigación y persecución de lo que calificó como actos de persecución y violencia de una escala sin precedente en la región y de graves violaciones de las obligaciones de Rusia bajo el derecho internacional de los derechos humanos.

25. Observatorio de la Violencia de Género contra las Mujeres, Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz.

26. Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico; Colectiva Feminista para el Desarrollo Local; Centro de Derechos Reproductivos; Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, *Situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos en El Salvador*, 28 de noviembre de 2017.

27. Ibid

28. Amnistía Internacional, *Informe 2017/2018. La situación de los derechos humanos en el mundo*, Amnistía Internacional, 2018.

29. OutRight Action International, Human Rights Watch, ILGA-Europe, The Russian LGBT Network, *Letter to the Secretary-General on Re: The Arbitrary Detention, Torture and Murder of Gay Men in Chechnya*, 14 de abril de 2017, <https://www.outrightinternational.org/sites/default/files/UNSGChechnyaLetter.pdf>

En **Libia**, las mujeres que habitan en el este del país se vieron afectadas por los intentos de restringir su libertad de movimiento por parte de los actores armados que controlan la zona. En febrero, y tras esgrimir razones de seguridad, las autoridades militares en el área oriental de Libia prohibieron viajar solas a las mujeres menores de 60 años, exigiendo la presencia de un hombre que actuara como “guardián” para sus desplazamientos. Uno de los dirigentes militares locales de la zona argumentó que mujeres libias que viajaban al extranjero en representación de grupos de la sociedad civil estaban siendo utilizadas por servicios de inteligencia foráneos. La controvertida medida fue ampliamente condenada y poco después fue suspendida de manera temporal por las autoridades del este del país. No obstante, a lo largo del año mujeres activistas denunciaron interrogatorios y acoso mientras viajaban sin contar con un hombre que oficiara como “guardián”.

Después de varios años de tendencia positiva en la participación de las mujeres en los procesos de paz, se constatan retrocesos que evidencian la falta de sostenibilidad de los avances

3.3. La construcción de la paz desde una perspectiva de género

En este apartado se analizan algunas de las iniciativas más destacadas para incorporar la perspectiva de género en los diferentes ámbitos de la construcción de la paz.

3.3.1. La resolución 1325 y la agenda sobre mujeres, paz y seguridad

La implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad estuvo marcada por los dos debates monográficos en el Consejo de Seguridad. El primero de ellos, en abril, trató sobre la violencia sexual y los conflictos armados. El Secretario General presentó su informe anual sobre esta materia.³⁰ La sociedad civil resaltó nuevamente la importancia de entender la violencia sexual en los conflictos armados en un marco más amplio de violencias de género perpetradas tanto por actores militares como por civiles en un contexto de profundas desigualdades internacionales entre hombres y mujeres, agravadas por el armamentismo y el militarismo.

En el mes de octubre se celebró el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad, con la participación de Estados miembros, Naciones Unidas, así como de representantes de la sociedad civil. El Secretario General presentó su informe anual de evaluación de la implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad, integrada por ocho resoluciones del Consejo de Seguridad sobre esta materia – 1325 (2000); 1820 (2009); 1888 (2009); 1889 (2010); 1960 (2011); 2106 (2013); 2122 (2013) y 2242

(2015)–. El informe constató nuevamente las enormes carencias en la implementación de la agenda, que dista mucho de acercarse a los compromisos adquiridos a lo largo de los últimos 17 años, desde que se aprobó la resolución 1325 en el año 2000. El secretario general de la ONU evaluó las iniciativas y avances en las siguientes áreas: a) la participación y el liderazgo de las mujeres en las iniciativas de paz y seguridad; b) la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas durante los conflictos y después de ellos; c) la planificación con perspectiva de género y la rendición de cuentas; d) el fortalecimiento de la arquitectura de género y los conocimientos técnicos; y e) la financiación de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad. Además, el secretario general destacó que desde su acceso al cargo había impulsado que uno de los pilares centrales de la prevención de conflictos, tema que durante 2017 fue especial objeto de atención, fuera la igualdad de género a través de acciones efectivas en los ámbitos anteriormente mencionados. **Sin embargo en la evaluación concreta de los progresos, el propio informe recoge la fragilidad de los avances e incluso constata algunos retrocesos.**

Así pues, en el ámbito de la participación, por ejemplo, se constató que **durante el año 2016 se produjo un retroceso en la participación de las mujeres en los procesos de paz** puesto que el informe recoge que “de los nueve procesos a los que se hizo un seguimiento, había mujeres en puestos de categoría superior en 11 delegaciones, en comparación con ocho procesos y 12 delegaciones en 2015 y nueve procesos y 17 delegaciones en 2014”. Y en lo que respecta a las demandas de asesoramiento especializado sobre igualdad de género en las negociaciones de paz, éstas se redujeron y sólo tuvieron lugar en cuatro de los siete (57%) procesos de mediación dirigidos o co-dirigidos por la ONU, lo que representa una reducción con respecto a años anteriores en los que se registraron solicitudes en el 89% de los procesos en 2015, el 67% en 2014 y el 88% en 2013. También se constató un retroceso con respecto a la participación del conjunto de la sociedad civil, ya que si bien en 2014 y 2015 se llevaron a cabo consultas en el 100% de los procesos en los que intervenía Naciones Unidas, en 2016 se llevaron a cabo consultas en el 86% de los procesos. Además, también se redujo el número de acuerdos de paz que incluyó cuestiones de género en su redactado, pasando del 70% en 2015 al 50% en 2016. Así pues, **después de varios años de tendencia positiva, se constatan retrocesos que evidencian la falta de sostenibilidad de los avances logrados.** De hecho, el propio Estudio Global de Naciones Unidas de evaluación de 15 años de implementación de la agenda ya apuntaba a que el ámbito de la participación y el liderazgo de las mujeres era uno de los ámbitos en el que persistían mayores retos.

30. Véase el apartado 3.2.1. de este capítulo.

En lo que respecta a la protección de los derechos de las mujeres, el informe se hizo eco de los 19 contextos de preocupación y los 46 actores en conflicto sobre los que pesan acusaciones creíbles de ser responsables de actos de violencia sexual en el marco de conflictos armados. Además, se recogieron 145 nuevas denuncias de abuso y explotación sexual por parte de personal de Naciones Unidas, la mayoría de las cuales estuvieron dirigidas contra personal de operaciones de mantenimiento de la paz. El informe también constata preocupación por la creciente participación de mujeres en organizaciones acusadas de terrorismo, señalando que las mujeres podrían constituir entre el 20 y 30% de las combatientes extranjeras de estos grupos. Además, en el caso de grupos como Boko Haram, casi uno de cada cinco atacantes suicidas es menor de edad y tres cuartas partes de éstos son niñas. Otro de los principales retos pendientes continúa siendo la financiación de la agenda que, según constata el secretario general en el informe, es insuficiente y está lejos de las cifras óptimas. Naciones Unidas recomienda que el 15% de los fondos destinados a la construcción de la paz esté específicamente dedicado a acciones de promoción de la igualdad de género. Solo 12 Planes de Acción Nacional cuentan con presupuesto específico.

Sobre la celebración del debate, cabe destacar las acciones de incidencia llevadas a cabo por las organizaciones de mujeres para lograr un mayor compromiso por parte de los Estados miembros con la participación activa de la sociedad civil y la protección de las mujeres defensoras de los derechos humanos, así como una mayor vinculación de la agenda mujeres, paz y seguridad con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, destacaron la importancia de redoblar los esfuerzos para promover el desarme. **Y se hicieron llamamientos para garantizar que las políticas antiterroristas, incluyendo en el ámbito financiero, no impidan o restrinjan el trabajo de las organizaciones de mujeres. Desde la sociedad civil se denunció que la implementación de la agenda de mujeres, paz y seguridad continúa siendo fragmentaria.** En el contexto de preocupación entre las organizaciones de la sociedad civil por los recortes en 2017 de las funciones de género en las misiones de mantenimiento

de la paz de la ONU (incluyendo en cuanto a número de posiciones de género y grado de experiencia requerido para el cargo), las organizaciones de mujeres llamaron a los Estados a no permitir la reducción de provisiones de género en los mandatos ni en los presupuestos de la agenda de mujeres, paz y seguridad. En ese sentido, la plataforma de organizaciones NGO Working Group on Women, Peace and Security alertó en octubre sobre la reducción de categoría de los puestos de género en las misiones de paz en RCA, Haití y Liberia, la vacante en Malí y la ausencia de personas expertas de género en los equipos responsables de la evaluación estratégica de las misiones de Chipre y Sudán del Sur.³¹ Las intervenciones por parte de los Estados estuvieron centradas especialmente en dos ámbitos: la participación de las mujeres en la prevención, la mediación y la construcción y mantenimiento de la paz; y la protección frente a la violencia sexual y de género en los conflictos armados.

Otro ámbito de implementación de la agenda sobre mujeres, paz y seguridad de especial relevancia fue la elaboración de Planes de Acción Nacional (NAP, por sus siglas en inglés), puesto que se trata de las principales herramientas con las que cuentan los Estados para aplicar dicha agenda al ámbito nacional y local. Al finalizar el año 2017, 73 países contaban con un Plan de Acción Nacional (NAP por sus siglas en inglés) propio. Durante 2017 fueron diez los Estados que aprobaron un NAP –Jordania, Angola, Guatemala, El Salvador, Camerún, Islas Salomón, Palestina, República Checa, Montenegro, Brasil–, uno de los años en los que más avances se han producido en este sentido, solo superado por el año 2010, en el que coincidiendo con el décimo aniversario de la aprobación de la resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad se aprobaron 11 nuevos NAP. Otros países, como por ejemplo España, revisaron su plan de acción y aprobaron un nuevo plan actualizando el vigente hasta ese momento. Cabe destacar que varios de los países que aprobaron un plan por primera vez en 2017 se hallaban en situación de conflicto armado (Camerún, Palestina) o afectados por importantes niveles de violencia (Brasil, Guatemala, El Salvador).³² A finales del mes de julio el Gobierno español aprobó

Cuadro 3.2. El II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad en España

el II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad 2017-2023. El primer NAP había sido aprobado 2007 y desde entonces su contenido no había sido revisado, a pesar de las persistentes deficiencias puestas de manifiesto por las organizaciones de la sociedad civil que han monitoreado su implementación a lo largo de su década de vigencia. El II Plan de Acción se aprobó en un contexto internacional muy diferente al del primer plan. En 2017 más de 70 países contaban con un NAP propio, a diferencia de 2007, cuando únicamente siete países lo habían aprobado. El II NAP, por tanto, debía dar respuesta a nuevos retos en la implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad y, al mismo tiempo, incorporar los aprendizajes acumulados a lo largo de 17 años de vigencia de esta agenda y más de una década de existencia de los NAP como principal herramienta para vehicular la acción de los Estados al respecto. Además, la aprobación del II NAP se realizó con posterioridad a la evaluación de alto nivel sobre la implementación de la agenda llevada a cabo por Naciones Unidas en el año

31. Louise Allen, *Gender Continues to be Overlooked by UN Peacekeeping*, NGO Working Group on Women, Peace and Security, 23 de octubre de 2017.
32. Geneva Declaration Secretariat. *Global Burden of Armed Violence 2015: Every Body Counts*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

2015, y en la que España tuvo un papel destacado con la promoción de la resolución 2242. Por otra parte, cabe destacar que son varios los países que ya cuentan con NAP de segunda e incluso tercera generación y que, en el caso europeo, también se cuenta con plan regional que debe orientar no solo la acción de la organización, sino también la de los Estados miembros. Así pues, en este contexto se produce la aprobación del nuevo NAP que establece cuatro objetivos principales:

- 1) Integrar la perspectiva de género en la prevención, gestión y resolución de conflictos y la consolidación de la paz
- 2) Hacer realidad la participación significativa de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones en relación a la prevención, gestión y solución de conflictos
- 3) Garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto y postconflicto
- 4) Introducir de forma efectiva la perspectiva de género en la definición de las medidas concretas de reparación y recuperación de las víctimas de los conflictos

Una de las reivindicaciones históricas de la sociedad civil involucradas en la agenda sobre mujeres, paz y seguridad era que se garantizase la participación significativa de las organizaciones sociales. Aunque en el proceso de diseño del segundo NAP, la sociedad civil tuvo una mayor participación que en el primero, esta se limitó a un proceso de consultas con escaso impacto en el redactado final del NAP. Otras hacían referencia a la dotación al plan eventualmente aprobado de mecanismos y recursos económicos e institucionales suficientes para asegurar su aplicación y supervisión efectiva y no meramente retórica. Sin embargo, estas reivindicaciones solamente han sido respondidas de forma parcial en el nuevo NAP.³³ El II NAP español no cuenta con un presupuesto propio dedicado específicamente a su implementación, lo que la limita enormemente y refuerza el carácter meramente declarativo del documento, en detrimento de su operatividad. Por otra parte, a pesar de que el NAP cuenta con un marco temporal, carece de un cronograma concreto que permita definir mejor el proceso de implementación. Además, el lenguaje de derechos en el NAP ha resultado debilitado, así como su vinculación a otras herramientas jurídicas y políticas clave en la agenda de los derechos de las mujeres, como la CEDAW o la Plataforma de Acción de Beijing. Además, el plan tampoco cuenta con indicadores de impacto y proceso, sino fundamentalmente con indicadores descriptivos. En cuanto al contenido político del mismo, el plan no promueve de forma clara el apoyo a las organizaciones de mujeres ni se sirve de terminología feminista, ni tampoco cuestiona las estructuras patriarcales que sostienen los graves impactos de género de los conflictos armados. Tampoco cuestiona, como sí lo hacía el Estudio Global de Naciones Unidas sobre la 1325 las políticas internacionales de carácter militarista que obstaculizan la paz y la seguridad a nivel internacional. En este sentido, cabe destacar que desde el NAP tampoco se promueve una coherencia de políticas que permita garantizar que la política exterior española no contribuya a la generación o agravamiento de los conflictos armados en aspectos como por ejemplo el comercio de armas.

Por otra parte, cabe destacar la visita conjunta a **RDC y Nigeria** llevada a cabo por Naciones Unidas y la Unión Africana, con una delegación de alto nivel integrada por la Vicesecretaria General de la ONU, Amina Mohammed, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, la Representante Especial del Secretario General de la ONU para la Violencia Sexual en los Conflictos, Pramila Patten, y la Enviada Especial de la UA para las mujeres, la paz y la seguridad, Bineta Diop. La visita, especialmente centrada en la implementación de la agenda mujeres, paz y seguridad fue la primera de estas características, y las delegadas se reunieron con las principales autoridades locales, así como con mujeres víctimas y organizaciones de la sociedad civil. La Vicesecretaria General de la ONU destacó que, tras la visita, el presidente en funciones de Nigeria estableció una comisión judicial para investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas por

las fuerzas de seguridad nigerianas. Celebrando esta iniciativa, Mohammed destacó la importancia de que la violencia sexual y de género fuera abordada por esta comisión y ofreció el apoyo de Naciones Unidas para ello. No obstante, miles de mujeres continúan siendo víctimas del desplazamiento forzado y de la violencia y la explotación sexual como consecuencia del conflicto armado con Boko Haram. En lo que respecta a la RDC, la Vicesecretaria también destacó las frágiles condiciones de vida de miles de mujeres desplazadas como consecuencia de la violencia, y la insuficiente asistencia humanitaria debido a la falta de recursos disponibles. No obstante, también destacó el nombramiento de un Representante Personal del Presidente para la violencia sexual y el reclutamiento de menores, así como otros esfuerzos para abordar la violencia sexual recogida en diversos informes del Secretario General de la ONU.

33. Documento del grupo de organizaciones de la sociedad civil involucrado en la revisión del Plan Nacional de Acción Mujeres, Paz y Seguridad: *Las organizaciones de la sociedad civil reclamamos una apuesta real del gobierno español para el cumplimiento efectivo de la Agenda Mujer, Paz y Seguridad.*

Con respecto a la **implementación de la resolución 1325 por parte de otras organizaciones**, en diciembre de 2017 el Comité Político y de Seguridad (CPS) de la UE aprobó el “Tercer Informe sobre los Indicadores de la UE sobre el Enfoque Integrado para la Implementación de la UE de las Resoluciones 1325 y 1820 sobre mujeres, paz y seguridad del Consejo de Seguridad de la ONU”.³⁴ En este informe se recogen datos aportados por los Estados miembro de la UE sobre la implementación de compromisos de la UE con la agenda de mujeres, paz y seguridad durante el periodo enero de 2013 y diciembre de 2015, partiendo de los indicadores de la UE, aprobados en 2010 y actualizados en 2016. Pese a que una de las áreas de prioridad de este nuevo informe había de ser la participación de mujeres en procesos de paz—según el informe anterior (periodo 2010-2012)—, en el nuevo documento se admite que la recopilación de datos llevada a cabo no posibilita una evaluación sustantiva sobre el grado de apoyo de la UE a la participación de mujeres en procesos de paz. Del informe se desprende la falta de sistematización de información por la UE y sus Estados miembro sobre los indicadores y sub-indicadores de la UE en materia de mujeres y procesos de paz (indicadores 11 a 14, sub-indicadores 11.1, 12.1, 13.1. y 14.1.), así como el foco mayoritariamente anecdótico y no sistemático del seguimiento a estos indicadores. Por otra parte, el informe también identifica como reto el estancamiento en cuanto a la proporción de mujeres jefas de Delegación (22,8% en 2013, el 22,1% en 2014 y 19,5% en 2015). El informe destaca la ventana de oportunidad abierta para el periodo 2017-2019, dado el elevado número de jefes de Delegación que acabarán su mandato en esos años. La proporción de mujeres entre el personal senior del Servicio Europeo de Acción Exterior fue aún más limitada (13,8% en 2013; 10% en 2014; y 13,6% en 2015). Por otra parte, en relación a cargos de género en las misiones civiles de la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE, en el primer trimestre de 2017 el 44% de esas misiones tenía una persona asesora de género a tiempo completo, el 33% una asesora de género con doble función, y el 22% tenía punto(s) focal(es) de género. En lo que respecta a las misiones militares, el 50% tenía una persona asesora de género de dedicación exclusiva o con doble función y el 50% tenía punto(s) focal(es) de género. Asimismo, el informe señala el margen de maniobra existente para una mayor integración de la perspectiva de género en los mandatos y documentos de planificación y rendición de cuentas. Entre las líneas de futuro, el informe señala que se concluirá la revisión del Enfoque Integrado de la UE y la presentación de resultados al CPS, aunque sin calendario concreto.

**En Colombia
inició su trabajo la
Instancia Especial
para garantizar
el enfoque de
género en la
implementación
del acuerdo de
paz y colaborar
con la CSIVI para
fortalecer este
enfoque**

3.3.2. La dimensión de género en las negociaciones de paz

Varios procesos de paz fueron relevantes desde un punto de vista de género durante el año 2017. Organizaciones de mujeres reclamaron una mayor participación en diferentes negociaciones en todo el mundo así como la inclusión de agendas de género. Sin embargo, en la mayoría de los procesos negociadores no se pusieron en marcha transformaciones de calado para incluir la participación de las mujeres de forma significativa.³⁵

Colombia

En lo que respecta a Colombia, cabe destacar que durante el año se iniciaron de manera oficial las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla del ELN. Ambas delegaciones incluyeron a mujeres y el proceso fue respaldado por las organizaciones de mujeres, que se pronunciaron públicamente al respecto, con un comunicado emitido por la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, plataforma surgida durante el proceso de negociaciones con las FARC para promover la participación activa de las mujeres en las negociaciones de paz y la inclusión de la perspectiva de género en los acuerdos. No obstante, las cuestiones de género no ocuparon un lugar relevante en la agenda de las negociaciones a lo largo del año.

Por otra parte, y con respecto a la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, cabe destacar que **inició su trabajo la Instancia Especial para garantizar el enfoque de género en la implementación de dicho acuerdo y colaborar con la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) para fortalecer este enfoque**. No obstante, se identificaron dificultades y retrasos en la aplicación del enfoque. Además, cabe destacar las advertencias que hizo la Defensoría del Pueblo, sobre el aumento de riesgo de violencia sexual contra mujeres y niñas como consecuencia de la expansión de grupos armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el EPL y el ELN, así como la disidencia de las FARC.

Chipre

En relación al proceso de paz en **Chipre**, el secretario general de la ONU señaló en su informe de septiembre sobre la misión de buenos oficios en el país que las

34. Consejo de la Unión Europea, *Third Report on the EU Indicators for the Comprehensive Approach to the EU Implementation of the UN Security Council Resolutions 1325 and 1820 on Women, Peace and Security*, 22 de noviembre de 2017.

35. Para una información más exhaustiva sobre la integración de la perspectiva de género en los procesos de paz actualmente activos, puede consultarse en el anuario de la Escuela de Cultura de Pau, *Negociaciones de paz 2017. Análisis de tendencias y escenarios*. Icaria, 2018.

recomendaciones del comité de género no siempre fueron incorporadas en la mesa de negociaciones y que las repercusiones del Comité fueron limitadas.³⁶ Nueva evidencia investigadora en 2017 también mostró las barreras a la participación de mujeres en el proceso. Así, una investigación de la Fundación Berghof (Alemania) y el Centre for Sustainable Peace and Democratic Development (Chipre) evidenció que las delegaciones negociadoras no incorporaban la perspectiva de género.³⁷ Además, según el informe, el comité de género ocupaba una posición marginal en las dinámicas del proceso.

Myanmar

En lo que respecta a la inclusión de la perspectiva de género en el proceso de paz y la participación significativa de las mujeres, cabe destacar que diferentes organizaciones y plataformas elevaron reivindicaciones en este sentido a lo largo del año. El proceso de paz siguió siendo excluyente con respecto a la participación efectiva de las mujeres y la inclusión de la perspectiva de género en los acuerdos alcanzados y las discusiones que se llevaron a cabo fue muy limitada. De acuerdo con las cifras ofrecidas por el Gobierno, durante la segunda sesión de la conferencia Panglong 21, de las 910 personas que asistieron, solo 154 eran mujeres, lo que representó el 17%, lejos del 30% comprometido anteriormente. En agosto se celebró en Yangon un foro sobre mujeres, paz y seguridad al que asistieron 180 delegadas para discutir sobre el papel de las mujeres en los procesos de paz. La Alliance for Gender Inclusion in the Peace Process (AGIPP), plataforma que agrupa a diferentes organizaciones de mujeres para promover su inclusión en las negociaciones de paz, señaló que de los 37 puntos acordados en la conferencia, solamente tres hacían referencia de manera directa a cuestiones vinculadas a los derechos de las mujeres y cuatro lo referenciaban de forma indirecta.

Libia

En Libia, a lo largo de 2017 se pusieron en marcha algunas iniciativas en un intento por facilitar la implementación del acuerdo político de Skhirat, suscrito en 2015, en las que las mujeres libias tuvieron una presencia muy limitada. Entre abril y mayo la Cámara de Representantes y el Alto Consejo de Estado –instituciones que mantienen una pugna de poder y legitimidad en el marco del conflicto libio– designaron a sus respectivas delegaciones para discutir posibles cambios al acuerdo de Skhirat. El grupo de la Cámara de Representantes estuvo integrado por 24 personas, de las cuales tres eran mujeres; mientras que el comité

nombrado por el Consejo de Estado estuvo conformado por 13 personas, con tan solo una mujer. Estas delegaciones solo mantuvieron contactos informales en los meses siguientes. No fue hasta septiembre, tras la asunción de un nuevo enviado especial de la ONU para Libia, Ghassan Salamé, que se reactivaron las gestiones diplomáticas, en el marco de un nuevo plan para desbloquear el proceso político en el país norteafricano. Tanto la delegación de la Cámara de Representantes como del Consejo de Estado nombraron entonces a un grupo de personas, incluyendo en cada caso a una mujer, para formar un comité conjunto que debatiera la reestructuración de la autoridad ejecutiva de Libia.

Cabe destacar que durante 2017 el ministerio de Asuntos de la Mujer y Desarrollo Comunitario lanzó un estudio sobre el liderazgo de las mujeres libias que destacó su escasa presencia en espacios de decisión. A lo largo del año también tuvo lugar un encuentro para identificar lecciones aprendidas sobre la participación de mujeres libias en el proceso de diálogo político y una conferencia –realizada en Túnez– sobre la agenda para la paz de las mujeres libias, en la que participaron más de sesenta mujeres. En esta última reunión se decidió poner en marcha una campaña de coexistencia pacífica a nivel nacional y local. Siete mujeres de las distintas regiones de Libia asumieron la tarea de convertirse en “focal points” para esta campaña de divulgación, que contaría con el apoyo de la misión de la ONU en Libia, UNSMIL. La misión proporcionó asistencia técnica para facilitar que las perspectivas de las mujeres se incorporen al acuerdo político. UNSMIL –que ha asumido la tarea de promover y apoyar la participación de mujeres libias en el proceso político y propiciar una representación mínima del 30%, en línea con la implementación de las resoluciones 1325 y 2122 del Consejo de Seguridad de la ONU –(aprobada en 2013 con la intención de fortalecer el rol de las mujeres en todas las etapas de la prevención y resolución de conflictos)– también llevó a cabo actividades de capacitación de mujeres que forman parte de la Cámara de Representantes. Cabe destacar que la misión de la ONU pasó a tener un mandato más explícito en materia de género tras la aprobación en septiembre de 2017 de la resolución 2376 del Consejo de Seguridad de la ONU. El texto solicita a la UNSMIL que tenga en consideración la perspectiva de género en todo su mandato y en su labor de asistencia a las autoridades libias con el fin de asegurar una participación efectiva de las mujeres en la transición a la democracia, los esfuerzos para la reconciliación, en el sector de seguridad y en las instituciones nacionales, en línea con la resolución 1325. Asimismo, se hace un llamamiento a tomar medidas para prevenir y responder ante la violencia sexual, evitando la impunidad de este fenómeno.

36. Consejo de Seguridad de la ONU, *Informe del Secretario General sobre su misión de buenos oficios en Chipre*, S/2017/814, 28 de septiembre de 2017.

37. Anna Koukkides-Procopiou, *Gender and Inclusive Security: A new approach to the Cyprus Problem within the framework on Security Dialogue*, Security Dialogue Project, Background Paper, 2017. Editado por Ahmet Sözen y Jared L. Ordway. Berlín: Berghof Foundation y SeeD.

Malí

En cuanto al proceso de paz en Malí, cabe destacar que a nivel general las mujeres malienses continuaron siendo marginadas de la mayor parte de los espacios relacionados con la implementación y supervisión del acuerdo de paz de 2015. Entre el 27 de marzo y el 2 de abril de 2017 tuvo lugar la Conferencia de Concordia Nacional, en la que participaron más de un millar de representantes de partidos políticos, grupos armados y organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Las mujeres representaron un 32% en esta instancia, sin embargo, en la posterior comisión encargada de redactar la Carta para la Paz, Unidad y Reconciliación –que recogió las principales recomendaciones de la conferencia– sólo hubo seis mujeres entre sus 53 integrantes (11%). Algunos análisis destacaron que las mujeres malienses estuvieron subrepresentadas – en promedio, su presencia habría oscilado en torno a un 3%– en los mecanismos de implementación y supervisión del acuerdo de paz de 2015, incluyendo el Comité de Supervisión del Acuerdo, la Comisión de DDR, el Consejo Nacional para la Reforma al Sector de Seguridad y la Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación. Ello, a pesar de que en los últimos años colectivos de mujeres malienses se han movilizado para reclamar una mayor presencia, de iniciativas de la misión de la ONU en el país (MINUSMA) y de ONU Mujeres para favorecer su participación y de que el país cuenta con un Plan de Acción Nacional para la Implementación de la Resolución 1325 que incluye específicamente el objetivo de favorecer la participación de mujeres en la implementación del acuerdo de paz. En este contexto, y en clave positiva, cabe destacar que hacia finales de año el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) y el Gobierno de Suecia promovieron la primera reunión de la Red de Mujeres Malienses para la Resolución 1325, en colaboración con la Coalición Nacional de la Sociedad Civil de Malí para la Lucha contra la Proliferación de Armas Ligeras (CONASCIPAL). En el encuentro, celebrado en noviembre, participaron mujeres representantes de 36 localidades de diez regiones del país que debatieron sobre cómo las mujeres impactan y se ven impactadas por el conflicto y para discutir sobre su papel en el proceso de paz.

Siria

En lo referente a las negociaciones de paz sobre Siria promovidas por Naciones Unidas, a lo largo de 2017 continuó activo el Syrian Women's Advisory Board (SWAB), instancia en la que participan mujeres sirias de distintas sensibilidades. El SWAB mantuvo reuniones con el enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, quien invitó a dos mujeres –una representante del SWAB y otra delegada del Civil Society Support Room, plataforma en la que participan actores de la sociedad civil siria– a la sesión de apertura de las negociaciones de febrero de 2017 (la primera

de las cinco rondas celebradas durante el año en el marco de este proceso). De Mistura recordó entonces a las delegaciones del régimen sirio y de la oposición la importancia de la presencia de mujeres y de la sociedad civil en las conversaciones intra-sirias. Paralelamente, mujeres que forman parte del Women's Advisory Committee (WAC) del opositor High Negotiations Committee (HNC) –creado en 2016 para dar una presencia más sólida a la implicación de mujeres en la delegación de la oposición siria en las negociaciones auspiciadas por la ONU– reivindicaron públicamente su papel en las conversaciones. Una de sus principales demandas durante 2017 fue una mayor implicación de la ONU y del International Syria Support Group en la vigilancia de un cese el fuego en Siria.

En el marco de este proceso, otra iniciativa que contó con una presencia destacada de mujeres fue la del movimiento Families for Freedom, que denuncia las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en Siria. Mujeres de este colectivo fueron las principales protagonistas de las manifestaciones en Ginebra para recordar a las delegaciones negociadoras la relevancia de este asunto y exigir la publicación de listas de personas que han sido arbitrariamente detenidas en el marco del conflicto. Mujeres de esta plataforma también se reunieron con De Mistura y reiteraron la necesidad de conocer el paradero y destino de sus familiares desaparecidos.

Yemen

En el caso de Yemen, durante 2017 se mantuvo el bloqueo en las negociaciones entre las partes contendientes, pero mujeres yemeníes persistieron en sus reclamos con el fin de contar con una mayor presencia en las iniciativas de paz. Mujeres yemeníes vienen insistiendo en esta reivindicación desde la escalada de violencia en el país en marzo de 2015, pero pese a ello han sido mayoritariamente marginadas de los espacios formales de negociación activados desde entonces. En este contexto, iniciativas de mujeres como el Yemeni Women's Pact for Peace and Security se mantuvieron activas. En sus encuentros esta plataforma identificó prioridades para abordar el conflicto yemení, entre las cuales se incluyen la adopción inmediata de un cese el fuego, el acceso urgente de ayuda humanitaria que debe ser distribuida de manera equitativa entre la población yemení –80% de la cual necesitaba asistencia–, la priorización de la búsqueda de soluciones políticas por encima de las vías armadas para afrontar la crisis y la reanudación de las negociaciones de paz. Respecto a este último punto, se planteó que las conversaciones deben ser amplias, inclusivas y tener en cuenta los resultados de la Conferencia de Diálogo Nacional –que culminó a principios de 2014, pero cuyas recomendaciones no llegaron a implementarse–, en especial en lo referente a la representación de mujeres en todos los ámbitos de la vida pública. Cabe destacar que el Yemeni Women's Pact for Peace and Security –que ha contado con el apoyo de UN Women

para su génesis y desarrollo— está integrado por mujeres de diversas sensibilidades políticas y grupos sociales, tanto de entornos rurales como urbanos, que han unido sus voces para hacer un llamado a poner fin al conflicto armado y promover una visión de país sustentada en la no violencia y en el mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población del país, el más pobre del mundo árabe. Según trascendió, durante 2017 esta plataforma mantuvo al menos dos encuentros con el enviado especial de la ONU para Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, para analizar la deriva del conflicto, los principales retos de la crisis y las perspectivas de paz.

3.3.3. Iniciativas de la sociedad civil

Tres organizaciones anunciaron una petición ante la Corte Penal Internacional para que este tribunal presentara cargos contra ISIS por la persecución y asesinato de población LGTBI. Las organizaciones Madre, Organization for Women's Freedom in Iraq y la City University of New York School of Law presentaron ante la fiscal jefa de la CPI evidencias de graves violaciones de los derechos humanos de población LGTBI perpetradas por ISIS, incluyendo ejecuciones públicas, decapitaciones y violaciones, entre otras, perpetradas por 60 personas en Mosul y sus alrededores durante 14 meses. Según señalaron las organizaciones denunciadoras, se trataba de la primera vez que se había logrado elaborar una documentación tan exhaustiva y consistente de este tipo de crímenes, por lo que podría sentarse un importante precedente. La petición sostiene que la comunidad internacional debería procesar a los integrantes de ISIS responsables de esta violencia por persecución por motivos de género y crímenes que incluyen la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Ni Siria ni Iraq son estados parte de la CPI, lo que dificulta que la fiscal tome en consideración esta petición, pero existe la posibilidad de que se persiga a los integrantes de ISIS originarios de países que sí son parte de la CPI.

Mujeres de los países del G5 Sahel (Mauritania, Malí, Níger, Chad y Burkina Faso) participaron en sesiones de diálogos entre enero y febrero de 2017 promovidas por la red West Africa Network for Peacebuilding (WANEP) en colaboración con ONU Mujeres para abordar retos de seguridad transfronterizos y vínculos con el extremismo violento. Entre los resultados, se desarrollaron sub-indicadores para reforzar la prevención, que serán integrados en el sistema de alerta preventiva de WANEP. Entre las vías de actuación, las participantes identificaron oportunidades de reducir las amenazas en base a su capacidad de detectar personas ajenas a las comunidades locales y conectarse a los puntos focales de los sistemas de alerta preventiva. Las participantes también instaron al fortalecimiento del liderazgo de

las mujeres y sus plataformas en el nivel local y a la colaboración con los actores de la sociedad civil para promover aproximaciones inclusivas a la prevención del extremismo violento.

A su vez, ante el incremento registrado en **Nigeria** en el número de mujeres perpetradoras de atentados suicidas, WANEP identificó en 2017 oportunidades para abordar la situación y emitió recomendaciones al respecto.³⁸ Así, aconsejó incrementar la sensibilización de la población a través de la cultura radiofónica existente en el país, con el fin de reducir la vulnerabilidad de mujeres y niñas a ser utilizadas por Boko Haram; así como contribuir a una mayor concienciación entre las familias sobre los riesgos del extremismo religioso mediante sistemas tradicionales de comunicación (“Sankira”, “Masu-shela”). WANEP también recomendó despliegue de operativos de seguridad adecuados y formados en detonación de explosivos, que incluyan a mujeres, para registros espontáneos en áreas del noreste; así como esfuerzos de los gobiernos al nivel federal y estatal en educación y empoderamiento de las niñas; y trabajo conjunto de los gobiernos federal y estatales con las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de mujeres en el noroeste del país, así como formación en mecanismos de alerta preventiva. Según el balance del sistema de alerta preventiva de WANEP, entre enero y mediados de agosto de 2017, 99 mujeres y niñas participaron en atentados suicidas, principalmente en el estado de Borno. Los atentados se llevaron a cabo en puestos de control, instituciones educativas, campos de personas desplazadas, mercados, mezquitas, aparcamiento y áreas residenciales, entre otros. En 2014 se documentó el primer caso de atentado suicida de Boko Haram perpetrado por una mujer, cifra que ascendió en años posteriores (4 en total en 2014, 56 en 2015, 30 en 2016).³⁹

La coalición de organizaciones de mujeres de **Sudán del Sur** Women's Monthly Forum on the Peace Process (WMF) presentó en 2017 recomendaciones para fortalecer la participación de mujeres y la perspectiva de género en el proceso de paz, resultantes de una investigación del WMF sobre el acuerdo de paz alcanzado en 2015.⁴⁰ WMF llevó a cabo presentaciones del informe y consultas durante el año con diversos actores, incluyendo líderes políticos, organizaciones de mujeres y de la sociedad civil, grupos de jóvenes, autoridades tradicionales y líderes religiosos, entre otros. Entre las recomendaciones, la inclusión de la perspectiva de género en el proceso, incluyendo a través de la demanda de la inclusión de mujeres en el proceso de paz en diversos roles y funciones, así como el monitoreo del proceso por parte de las organizaciones de mujeres. Según el WMF, el acuerdo llama a la creación de diversas instituciones —económicas, judiciales, de gobernanza— para abordar las necesidades de las mujeres

38. West Africa Network for Peacebuilding, *News Situation Tracking – Nigeria. Female Suicide Bombings*, agosto de 2017.

39. West Africa Network for Peacebuilding, *West Africa Early Warning Outlook for 2018. Potential Flashpoints & Simmering Conflicts*. WANEP, febrero de 2018.

40. Women's Monthly Forum on the Peace Process, *South Sudan: Gender Analysis of the Peace Agreement*, enero de 2016.

sursudanesas, y obliga a ocho principales instituciones a designar a mujeres (el Tribunal Híbrido de Sudán del Sur, la Comisión Nacional de Revisión de la Constitución, la Comisión Conjunta de Supervisión y Evaluación de la Unión Africana, la Autoridad para las Compensaciones y Reparaciones, el Mecanismo de Monitoreo y Acuerdos de Cese del Fuego y Seguridad Transicional, la Revisión de Defensa Estratégica y Seguridad, el Gobierno Transicional de Unidad Nacional y la Autoridad para la Gestión Financiera y Económica). WMF subrayó que el acuerdo señalaba entre las finalidades del Gobierno de transición y de la Constitución la igualdad de género y los derechos de las mujeres. No obstante, WMF destacó los retos pendientes en implementación y planteó a las mujeres la opción de la acción más allá de los parámetros del acuerdo. Según las cifras de 2017 de WMF, en el diálogo nacional en Sudán del Sur solo hay 18 mujeres, de un total de 110 personas, y todos las posiciones de co-presidentes, secretarios y diputados las ocupaban hombres. No obstante, según el informe del secretario general de la ONU de junio, el 31 de mayo, el presidente Kiir nombró a tres mujeres en el órgano de dirección del Comité Directivo del Diálogo Nacional, compuesto por nueve miembros.

En lo que respecta a **Yemen**, más de una cuarentena de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo varias entidades de mujeres –entre ellas Southern Women

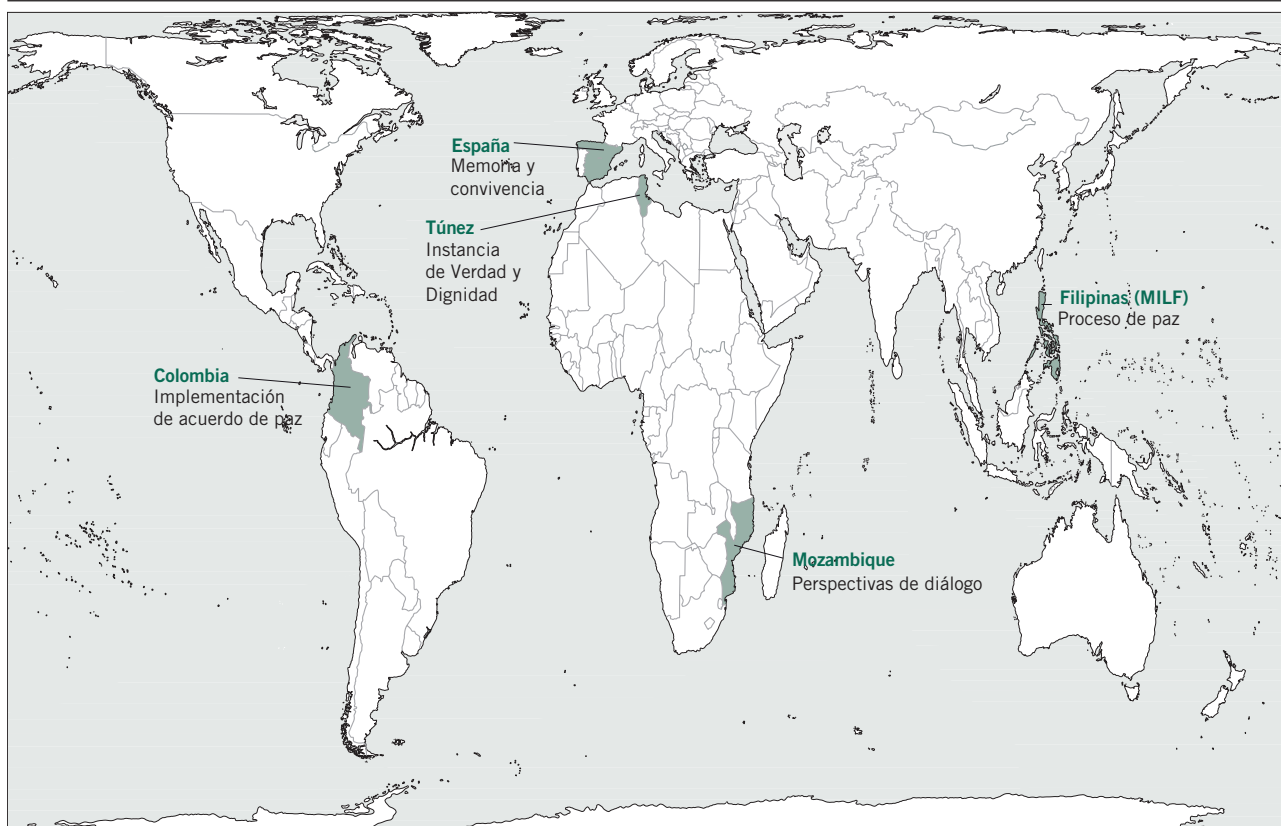
Coalition (Najm), Association of Abductee's Mothers, The Sisters Arab Forum for Human Rights, Yemen Organization for Women Policies, Arab Association to Support Women and Juvenile– hicieron un llamamiento al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos para promover el establecimiento de una comisión internacional independiente que investigue las múltiples violaciones y abusos cometidos en el marco del conflicto que enfrenta el país. En la misiva, las organizaciones denuncian el severo impacto de la violencia en Yemen en los últimos años y aseguran que la violencia de género se ha incrementado en un 70%. Las ONG advierten que 2,6 millones de mujeres y niñas enfrentan riesgo de violencia e indican que a lo largo de 2016 se denunciaron 10.000 casos de violencia, incluyendo violaciones, contra mujeres y niñas. En este contexto, las entidades consideraron indispensable una comisión de investigación independiente de todos los abusos cometidos en Yemen desde 2011 –año de inicio de la revuelta que acabó con el régimen de Alí Abdullah Saleh–, que trabaje en coordinación con la sociedad civil yemení y que cuente con una adecuada representación de mujeres. La comisión, reclamaron, debería ser sensible a las cuestiones de género, asegurar la accesibilidad de las mujeres y trabajar en coordinación con organizaciones feministas y entidades lideradas por mujeres.

4. Oportunidades de paz para 2018

Tras analizar el año 2017 en materia de conflictividad y construcción de paz, la Escola de Cultura de Pau de la UAB destaca en este capítulo cinco ámbitos que constituyen oportunidades de paz para el año 2018. Se trata de contextos donde existe o ha habido en el pasado una situación de conflicto armado o de tensión en los que confluyen una serie de factores que pueden conducir a su transformación positiva. Las oportunidades identificadas de cara a 2018 hacen referencia al proceso de implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC en Colombia, a la eventual aprobación de la Ley Fundamental de Bangsamoro como culminación del proceso de paz entre el MILF y el Gobierno de Filipinas, a las posibilidades de acuerdo para dar una respuesta política a la situación de tensión en Mozambique, al escenario de desaparición de ETA y de avances en temas de memoria y convivencia en el País Vasco, y a las perspectivas sobre el trabajo de la Instancia de la Verdad y Dignidad en Túnez, que eventualmente podría convertirse en un mecanismo de referencia en materia de justicia transicional.

Todas estas oportunidades de paz requerirán del esfuerzo y compromiso real de las partes implicadas y, en su caso, del apoyo de actores internacionales para que las sinergias y factores positivos ya presentes favorezcan la construcción de la paz. En este sentido, el análisis de la Escola de Cultura de Pau pretende ofrecer una visión realista de estos escenarios y temáticas, identificando los elementos positivos que alimentan las expectativas de cambio, pero también poniendo de manifiesto las dificultades y problemáticas que existen y que podrían suponer obstáculos para su materialización como oportunidades de paz.

Mapa 4.1. Oportunidades de paz para 2018



4.1. La implementación del acuerdo de paz con las FARC, una oportunidad para la paz en Colombia

La firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC supuso el inicio de un proceso de construcción de una paz sostenible y duradera en Colombia. El acuerdo, uno de los más exhaustivos y novedosos en el momento de su firma, es un activo de enorme importancia, ya que sentaba unas bases sólidas para la transformación de las causas profundas que dieron lugar al conflicto armado y también para hacer frente a problemas inmediatos de seguridad y violencia en la sociedad colombiana. La firma del acuerdo, si bien generó el rechazo de amplios sectores de la sociedad, también generó grandes expectativas en gran parte de la sociedad civil, que durante décadas se había movilizado exigiendo el fin del conflicto. Evaluar la terminación de un conflicto armado es siempre un proceso complejo que requiere de análisis que aborden multiplicidad de factores. En el caso colombiano se constata una finalización de la violencia asociada a la confrontación directa entre Gobierno y FARC. Así, CERAC documenta un cumplimiento casi total del acuerdo de alto el fuego que se prolongó hasta la completa desmovilización y desarme del grupo armado.¹ Aunque se registraron algunos incidentes de violencia y se produjeron varios asesinatos de personas vinculadas a las FARC, la reducción de la violencia fue drástica y la mayoría de analistas coincide en dar por terminado el conflicto armado.²

Sin embargo, más allá del cese de las confrontaciones armadas entre las partes en conflicto, el proceso central es el de la implementación del acuerdo de paz, que se inició tras la firma definitiva del acuerdo en noviembre de 2016, liderado por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, organismo creado por el propio acuerdo de paz, que a su vez constituye un mecanismo novedoso de institucionalización del proceso de implementación. Evaluar esta implementación es esencial para garantizar el cumplimiento de lo acordado entre las partes y determinar cuáles son las principales dificultades y retos que requieren de un mejor acompañamiento por parte de diferentes actores implicados en la construcción de la paz, incluyendo la comunidad internacional. En el caso colombiano, varias entidades e instituciones han realizado evaluaciones de esta implementación en los últimos meses. Estas evaluaciones constatan que el acuerdo sigue representando una oportunidad única para la paz en Colombia, si bien reconocen múltiples obstáculos y desafíos.

Es significativo que el propio acuerdo de paz reconocía la necesidad de estos mecanismos de evaluación y así, designó al Kroc Institute for International Peace Studies de la Universidad de Notre Dame como institución encargada del seguimiento independiente de la implementación. En su primer informe sobre la situación de la aplicación

del acuerdo, Kroc Institute recoge avances importantes, destacando que se ha iniciado la implementación del 45% de las disposiciones pactadas en las negociaciones de La Habana y, de éstas, se ha finalizado el 17%, el 6% se encuentra en un estadio intermedio y el 22% en un estadio mínimo de implementación.³ El 55% de las disposiciones no han sido iniciadas. En lo que respecta a la implementación del enfoque de género, se señala que se ha iniciado la implementación del 41% de las disposiciones, el 6% ha sido completado, el 5% está en un estadio intermedio y el 22% está en un estadio mínimo, mientras que no se ha iniciado la implementación del 59% de disposiciones.

Es importante destacar que, de acuerdo con otros estudios realizados por este centro de investigación, el acuerdo de Colombia en términos comparativos, está siendo implementado con más celeridad de lo que generalmente ha sucedido con otros acuerdos de paz, sobre todo en lo que respecta a medidas que debían ser implementadas en el corto plazo y que generalmente la implementación completa de los acuerdos se alarga durante siete u ocho años. El informe destaca que se hayan logrado avances importantes en el cese al fuego definitivo, el acantonamiento de tropas y dejación de armas o en las garantías para la participación política de la oposición, aspectos sin los que difícilmente se puede avanzar en otros ámbitos. Sin embargo, otras evaluaciones de la implementación destacan las enormes fragilidades del proceso, señalando que en los territorios afectados en mayor medida por el conflicto armado, la implementación del acuerdo de paz apenas ha sido percibida por la población local y destacando la proliferación de violencias que, si bien no están directamente relacionadas con el conflicto, han aumentado tras el cese de la actividad armada de las FARC.⁴ Destacan la falta de recursos dedicados a la implementación, así como la modificación de algunos de los acuerdos durante el proceso de transformación en legislación, lo que pone en riesgo su implementación, sobre todo en lo que respecta a la lucha contra la impunidad y las garantías de no repetición.

Los avances en la implementación en el acuerdo, unidos a los múltiples obstáculos y retos pendientes evidencian la encrucijada en la que se encuentra el país. Así pues, es clave un adecuado acompañamiento e impulso de la implementación por parte de todos los actores con responsabilidades al respecto, puesto que la plena aplicación de todo lo acordado por los actores enfrentados durante décadas es la mejor garantía para la sostenibilidad del proceso de paz.

1. CERAC, *Un conflicto largo, de terminación negociada*. Monitor del Cese el Fuego Bilateral y de Hostilidades – Reporte Final. Periodo de monitoreo: del 29 de agosto de 2016 al 27 de junio de 2017, 30 de junio de 2017.
2. Véase el resumen sobre Colombia en el capítulo 1 (Conflictos armados).
3. Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, *Informe sobre el estado efectivo de implementación del acuerdo de paz en Colombia*, Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, Universidad de Notre Dame, noviembre 2017.
4. Mundubat y PBI, *En los territorios la paz no se siente, la esperanza se mantiene*, Informe de Misión Internacional de Verificación sobre la Implementación del Acuerdo de Paz con enfoque de género, Mundubat y PBI, diciembre de 2017.

4.2. La aprobación de la Ley Fundamental de Bangsamoro como culminación del proceso de paz entre el Gobierno de Filipinas y el MILF

Veinte años después del inicio de las conversaciones de paz entre el Gobierno y el MILF en 1997, durante el año confluyeron dos factores que permiten albergar ciertas esperanzas respecto del futuro del proceso de paz. En primer lugar, los avances en la discusión y tramitación de la Ley Fundamental de Bangsamoro –una suerte de estatuto de autonomía para la nueva Región Autónoma de Bangsamoro prevista en el acuerdo de paz entre Manila y el MILF en 2014–, así como el apoyo decidido que el presidente, Rodrigo Duterte, ha mostrado en varias ocasiones hacia la misma. En segundo lugar, los graves enfrentamientos que se produjeron en la ciudad de Marawi (provincia de Lanao del Sur, Mindanao) entre los meses de mayo y octubre entre las Fuerzas Armadas y el llamado Grupo Maute y varias organizaciones armadas que han manifestado su lealtad a ISIS, y que provocaron la muerte de más de 1.100 personas y el desplazamiento forzoso de más de 600.000 personas, llevaron al MILF, el Gobierno, numerosos analistas y varios gobiernos a reivindicar la importancia del proceso de paz entre Manila y el MILF para prevenir la creciente expansión de ISIS en la región y la radicalización de sectores importantes de la sociedad en Mindanao.⁵

Respecto del primer punto, en 2017 se produjeron notables avances en la tramitación de la Ley Fundamental de Bangsamoro. Tras varios meses de inactividad, en febrero Duterte reactivó el mandato de la Comisión de Transición de Bangsamoro –redactar un borrador de la ley– y aumentar su membresía de 15 a 21 miembros para ampliar la inclusividad y representatividad del acuerdo. Cabe destacar que de entre las 10 personas designadas por el Gobierno (el MILF detenta la presidencia del organismo y nombra a 11 personas) se incluyó a tres miembros de la facción mayoritaria del MNLF liderada por Yusoph Jikiri y Muslimin Sema. Este factor es importante por cuanto supone un apoyo explícito de una parte del MNLF al acuerdo de paz que alcanzaron el MILF y el Gobierno en 2014. Por el contrario, la facción del MNLF liderada por su fundador, Nur Misuari, se opone a él por considerar que contraviene aspectos fundamentales del acuerdo de paz que el MNLF firmó con el Gobierno en 1996 –como la sustitución de la actual Región Autónoma del Mindanao Musulmán, de la que Misuari fue gobernador, por la mencionada Región Autónoma de Bangsamoro–, por lo que acordó con Duterte una negociación bilateral para implementar plenamente el acuerdo de paz de 1996. Tras finalizar el borrador de la mencionada ley a mediados de junio y enviarlas a la oficina presidencial para su revisión, a mediados de agosto Duterte remitió el borrador de ley al Congreso para su eventual aprobación.

Durante la segunda mitad del año, el propio Duterte reclamó públicamente la necesidad de revertir las

injusticias históricas padecidas por el pueblo moro y expresó en varias ocasiones su compromiso hacia esta ley, instó al Congreso a que la aprobara con carácter de urgencia y sugirió la celebración de una sesión conjunta especial entre ambas cámaras parlamentarias para discutir el borrador de ley elaborado por la CTB y revisado por el Gobierno, así como otros borradores alternativos presentados por otros congresistas. Además, durante el año también se produjeron numerosas muestras de apoyo al proceso de paz. Cabe destacar especialmente la celebración de la llamada Asamblea Bangsamoro en Sultan Kudarat en noviembre, que tenía como objetivo el apoyo al proceso de paz y a la que asistieron cientos de miles de personas (un millón según el propio MILF), así como Rodrigo Duterte, los principales líderes del MILF y del MNLF, más de 80 diplomáticos, congresistas y representantes de la RAMM y de otras instituciones.

Además de los avances en la tramitación de la Ley Fundamental de Bangsamoro y del apoyo brindado por Duterte a la misma, el aspecto que provocó una mayor presión sobre una culminación exitosa del proceso de paz fue el mencionado asedio a la ciudad de Marawi y la

El asedio a la ciudad de Marawi y la creciente consolidación de ISIS en Mindanao podría facilitar la aprobación de la Ley Fundamental de Bangsamoro y la implementación del acuerdo de paz de 2014

creciente constatación de que ISIS estaba expandiendo no solamente su capacidad logística y armada en la región, sino también su influencia entre sectores significativos de la población. Tanto Duterte como el líder del MILF, Murad Ebrahim, advirtieron que un eventual fracaso en la aprobación de Ley Fundamental de Bangsamoro y en el proceso de paz provocaría no solamente una deserción importante en las filas del MILF y un fortalecimiento de otras organizaciones armadas leales a ISIS en la región, sino que también incrementaría notablemente el malestar de una parte importante de la sociedad civil en

Mindanao. Ante estas circunstancias, el Gobierno, buena parte de la comunidad internacional y varios analistas sostienen que la mejor opción para lograr la desescalada del conflicto y la estabilidad en Mindanao es la aprobación de la Ley Fundamental de Bangsamoro y el establecimiento de un nuevo marco autonómico –la Región Autónoma de Bangsamoro, que sustituiría a la Región Autónoma del Mindanao Musulmán– en el que el MILF (o la fuerza política que eventualmente éste decida impulsar) tuviera un peso preponderante en la Autoridad de Transición de Bangsamoro. En este sentido, algunos analistas consideran que, tras la masacre de Mamasapano de principios de 2015 que provocó la abrupta interrupción del proceso de paz entre el MILF y el Gobierno del expresidente Benigno Aquino, a ojos de Manila y de varios Gobiernos, el MILF se ha erigido en un interlocutor legítimo y en el único actor en Mindanao capaz de contener y contrarrestar las aspiraciones

5. Véase “La consolidación de ISIS en el sur de Filipinas y en el Sudeste Asiático” en el capítulo 5 (Escenarios de riesgo para 2018).

políticas de organizaciones como el Grupo Maute, Abu Sayyaf o el Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Algunos de los factores que explican la creciente legitimidad política del MILF son el hecho de que desde el año 2015 no se hayan registrado incidentes armados, la buena colaboración entre las partes en los distintos mecanismos de supervisión del acuerdo de alto el fuego, la cooperación del MILF con el Gobierno respecto de la persecución de estructuras de crimen organizado, o la ayuda que el MILF prestó al Gobierno durante los enfrentamientos en Marawi asegurando un corredor humanitario que permitió la evacuación de decenas de miles de personas de la ciudad. Como muestra del apoyo que la comunidad internacional brinda al proceso de paz, cabe señalar las declaraciones por parte de varios Gobiernos o la reunión en el mes de octubre de una delegación diplomática con embajadores de ocho países de la UE y representantes de la UE y el Foro Regional de ASEAN con el MILF, la RAMM, el International Monitoring Team y varias ONG.

Sin embargo, también existen amplios sectores de la población que no comparten la alianza tácita del MILF y las Fuerzas Armadas en el asedio de la ciudad de Marawi, que consideran que el MILF ha ido demasiado lejos en su colaboración con el Gobierno o que perciben que esta cooperación y la buena sintonía política que ha habido entre ambas partes en los últimos tiempos no se ha traducido en avances sustanciales del proceso de paz ni en una mejora del nivel de bienestar de la población.⁶ Según estas voces, los constantes retrasos y dificultades que ha habido en la tramitación de la Ley Fundamental de Bangsamoro –que debería haber sido aprobada en 2015– o las promesas incumplidas por parte de Manila respecto de los acuerdos de paz que se han firmado en las últimas décadas en Mindanao –como por ejemplo el acuerdo de 1996 entre el Gobierno y el MNLF, o el fallido intento de firmar el denominado Memorándum de Entendimiento entre Manila y el MILF en 2008– han mermado la credibilidad del Estado para ofrecer una solución al conflicto, han minimizado los llamados “dividendos de la paz” y han erosionado la capacidad de MILF de convencer a la mayoría del pueblo moro sobre las virtudes de un acuerdo con el Estado.⁷ En este sentido, aunque parece descartado que el MILF pueda abandonar la senda del proceso de paz y reanudar la violencia de alta intensidad, también parece claro que el enquistamiento en la implementación del acuerdo de 2014 debilita enormemente tanto su influencia en la sociedad como su capacidad de contener y contrarrestar el mensaje de organizaciones que se oponen a la negociación con el Estado (como el caso del BIFF) o bien que directamente apuestan por las tesis de ISIS.⁸

Por otra parte, algunos analistas han expresado su escepticismo sobre el futuro de la Ley Fundamental de

Bangsamoro por considerar que, a pesar de los aparentes esfuerzos de Duterte, carece de los apoyos necesarios en ambas cámaras para ser aprobada. De hecho, a finales de año no había ningún parlamentario que quisiera liderar la defensa de la versión de la Ley Fundamental de Bangsamoro elaborada por la Comisión de Transición de Bangsamoro y validada por el Gobierno, dificultando ello su tramitación parlamentaria. De hecho, como ya ocurriera bajo la Administración de Benigno Aquino, durante el proceso de discusión parlamentaria de la ley surgieron borradores alternativos –como el que en 2017 elaboró la ex presidenta de Filipinas, ahora congresista, Gloria Macapagal Arroyo– que distaban bastante del elaborado por la CTB y que fueron calificados de inaceptables por el MILF. En este sentido, el Foro de Coordinación Bangsamoro declaró que no aceptaría ninguna ley que no reflejara los aspectos principales del acuerdo de paz de 2014. Finalmente, algunos analistas consideran que la Ley Fundamental de Bangsamoro no podrá ser aprobada porque actualmente contiene algunas disposiciones que son incompatibles con la Constitución –en su momento se habló de la posibilidad de reformar la Carta Magna de 1987 para acomodar un posible acuerdo de paz con el MILF, pero tal posibilidad parece descartada en las actuales circunstancias⁹ o bien porque la solución al conflicto no forma parte de las prioridades del actual Gobierno ni, menos, de la mayoría parlamentaria. Respecto de esta última cuestión, Duterte ha declarado en varias ocasiones que su prioridad fundamental es la transformación de Filipinas en un estado federal y en alguna ocasión ha sugerido que la solución política al conflicto en Mindanao debe insertarse en esta nueva forma de organización territorial del Estado. Por su parte, el MILF ha manifestado su apoyo a esta reforma, pero ha advertido que no aceptará que la aprobación de la Ley Fundamental de Bangsamoro y el establecimiento de una Región Autónoma de Bangsamoro quede subyugada a un proceso de federalización del Estado que comportaría la reforma de la Constitución y que dilataría enormemente en el tiempo la implementación del acuerdo de paz de 2014.¹⁰

En conclusión, existe incertidumbre y escepticismo sobre las posibilidades de que el proceso de paz con el MILF culmine con éxito, pero a la vez el asedio a la ciudad de Marawi y la creciente percepción de que ISIS podría consolidarse en la región podría erigirse en un factor clave que desbloquee las reticencias del Gobierno y ambas cámaras del Congreso sobre la idoneidad de resolver el conflicto en Mindanao, enquistado históricamente, a través del establecimiento de un régimen autonómico único y específico para las regiones de Mindanao habitadas de manera mayoritaria por población moro y que mejore sustancialmente las competencias y la financiación de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán.

6. Alindogan, Jamela, “Philippine-Moro Islamic peace talk delays ‘creating discontent’”, *Al Jazeera*, 23 de octubre de 2017.

7. Jones, Sydney, Has Marawi killed the Philippines peace process?, *Lowy Institute*, 29 de agosto de 2017.

8. Loesch, Juliette, “The GPH-MILF Peace Process in the Philippines to Prevent and Transform Violent Extremism in Mindanao”, *Journal of Peacebuilding & Development*, Volumen 12, No. 2, 2017.

9. Lau Seng Yap, “Will the Bangsamoro Peace Process Succeed?”, *The Diplomat*, 7 de diciembre de 2017.

10. Mordeno, Marcos, “Will Federalism hold the Bangsamoro hostage?”, *Mindanews*, 7 de marzo de 2017.

4.3. Mozambique: segunda oportunidad para la paz

El acuerdo de paz de 1992 dio paso a una etapa de estabilidad política y un desarrollo económico con elevados niveles de desigualdad en el país. Las crecientes acusaciones de fraude e irregularidades en los sucesivos procesos electorales, algunas corroboradas por observadores internacionales, los escándalos de corrupción y el de la deuda en 2013, un creciente autoritarismo y represión de la oposición, así como las acusaciones de apropiación del Estado (además de los medios de comunicación y la economía) por parte del partido en el poder, el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), han dinamitado parte de los avances realizados. El partido opositor y antigua insurgencia, la Resistencia Nacional de Mozambique (RENAMO), condicionó en 2013 la continuidad de su participación en la vida política a una serie de reformas, amenazando con la retirada de su firma del acuerdo de paz de 1992. Tras tres años de negociaciones, durante el último año se dieron diversos pasos positivos para que las partes puedan alcanzar un acuerdo que sienta las bases para dar una respuesta política a las demandas planteadas en 2013 por parte de RENAMO y pueda suponer una nueva oportunidad para revisar los fallos en la gobernabilidad del país.

Durante el 2017 se han producido diversos hechos que han fortalecido la confianza entre las partes. En primer lugar, a finales de 2016 el presidente Felipe Nyusi y el líder de RENAMO, Afonso Dhlakama, mantuvieron contactos telefónicos que sirvieron para acercar posturas, lo que llevó a que RENAMO declarase una tregua unilateral hasta principios del año 2017 para que la población mozambiqueña pudiera recibir el año nuevo en un clima de paz. Dhlakama prorrogó durante el año esta tregua, lo que permitió el avance de las negociaciones de paz. En segundo lugar, en julio el Gobierno retiró las tropas de ocho posiciones cercanas a las montañas Gorongosa, el feudo de RENAMO, tal y como RENAMO había exigido en junio para proseguir con las negociaciones, lo que contribuyó a generar un clima de mayor confianza entre las partes. En tercer lugar, durante el año se han llevado cabo contactos directos entre las partes, cuestión que no se producía desde 2015. En agosto de 2017 se celebró la primera reunión desde 2015 entre Filipe Nyusi y Afonso Dhlakama. La reunión tuvo lugar en el feudo histórico de RENAMO situado en el distrito montañoso de Gorongosa, lo que contribuyó a cimentar la confianza entre las partes. Tras la reunión, RENAMO señaló que el proceso de descentralización debía presentarse en el Parlamento en diciembre, antes de que se celebraran las elecciones locales de 2018. En cuarto lugar, FRELIMO y RENAMO estuvieron discutiendo sobre las cuestiones que forman parte del núcleo del problema, la reivindicación para incrementar la descentralización del poder en el país, que concierne, entre otras cuestiones, al procedimiento para el nombramiento de los gobernadores provinciales. El presidente anunció a principios de 2018 que pondría en marcha los cambios constitucionales que permitieran a los

partidos políticos que ganen las elecciones parlamentarias provinciales seleccionar al gobernador regional, para su posterior aprobación por parte del presidente del país. Además, Nyusi y Dhlakama se reunieron en Namadjiwa para discutir en torno al desarme, desmovilización y reintegración de los miembros de RENAMO y su incorporación en los cuerpos de seguridad del Estado.

El apoyo y la presión de la sociedad civil al proceso de diálogo ha sido un factor positivo de cara a las negociaciones de paz. La sociedad civil en Mozambique, y en especial las diferentes religiones del país con el apoyo de la Comunidad de Sant'Egidio, han tendido puentes de diálogo entre las partes y han generado ideas para promover las negociaciones de paz. En julio de 2016, en el apogeo de la tensión y los brotes esporádicos de violencia entre las partes, el Parlamento de la Juventud (Parlamento Juvenil, PJ) organizó la conferencia Pensar Moçambique, de la que surgió la propuesta de promover una reunión para reflexionar sobre la paz, la reconciliación y el desarrollo. El PJ es una iniciativa de la sociedad civil y la conferencia, en la que participaron centenares de actores de la sociedad civil y de la clase política mozambiqueña, tuvo una importante repercusión.¹¹ Esta propuesta fue recogida en diciembre de 2016 por el Panel de Monitoreo del Diálogo Político (PMDP), compuesto por personalidades de organizaciones no gubernamentales de Mozambique, que convocó una conferencia nacional de paz en Mozambique y exigió el cese inmediato de las hostilidades militares. El PMDP propuso la convocatoria de la Conferencia Nacional sobre Paz, Reconciliación y Desarrollo en Maputo y reiteró la necesidad de extender el diálogo a otros actores políticos, especialmente a la sociedad civil, y de forma permanente.¹² El documento presentado por el PMDP propuso que los organismos internacionales de los que Mozambique es miembro se movilizaran para crear un ambiente de confianza entre el Gobierno y RENAMO, como una forma de garantizar las condiciones para un alto el fuego. La propuesta del PMDP surgió de un proceso de consultas llevado a cabo por todo el país. Pedía también la realización de una auditoría de las deudas contraídas como consecuencia de la última fase del conflicto, y la publicación del resultado de la auditoría internacional actual del escándalo la deuda de 2013.

Otra cuestión que ha contribuido a darle un impulso al proceso fue el apoyo internacional que ha recibido. Desde el inicio de la crisis, Dhlakama había planteado la necesidad de una mediación internacional como una precondition para el diálogo e hizo un llamamiento para incluir a la Iglesia Católica del país. El Gobierno había rechazado la propuesta, aunque tras la reunión celebrada entre los dos equipos negociadores en mayo de 2016, el presidente Nyusi accedió a la petición y se incorporó a la mediación a la Iglesia y a la Comunidad de Sant'Egidio, la UE y el presidente sudafricano, Jacob Zuma. Así, la UE

11. Jornal Noticias, "PJ promove palestra para 'Pensar Moçambique'", *Jornal Noticias*, 4 de julio de 2016.

12. LUSA, *Mozambican civil society proposes national peace conference*, Club of Mozambique, 14 diciembre de 2016.

nombró a Mario Raffaelli como coordinador del equipo internacional de mediación y representante de la UE, junto al padre Angelo Romano, de la Comunidad de Sant' Egidio.

A pesar de los importantes avances que se han dado en el proceso de paz y que podrían culminar con la firma de un acuerdo global durante 2018, en el país también persisten retos de enorme importancia que podrían ensombrecer los logros alcanzados. Una de las principales cuestiones que podría dificultar la implementación del acuerdo de paz es el papel que pueden acabar jugando los sectores más recalcitrantes de FRELIMO en la aprobación de los cambios constitucionales. Está por ver si estos sectores apoyarán la iniciativa que promueve el Plan de Descentralización de Nyusi, ya que significa que RENAMO podría disponer de un mayor número de gobernadores provinciales y de administradores de distrito, lo que implicaría una pérdida directa de poder por parte de FRELIMO.

Por otra parte, otro de los retos que afronta el país es la mala gobernabilidad y la corrupción. El país sigue esperando respuestas en torno al escándalo que se desencadenó en 2013 y que sigue minando la credibilidad del Gobierno. En 2013 un grupo de actores internacionales facilitó préstamos por valor de 2.000 millones de dólares a empresas mozambiqueñas que otorgaron dudosas garantías soberanas. Esa suma equivale a alrededor de un tercio del presupuesto nacional y violó los compromisos de deuda contraídos con el FMI ese mismo año. Los préstamos fueron acordados por Credit Suisse de Suiza y VTB Capital de Rusia. Estos préstamos enormes finalmente causaron que la deuda soberana creciera a niveles insostenibles. En marzo de 2016, intentando cumplir con sus obligaciones, el Gobierno tuvo que reestructurar la deuda. Esto llevó a la agencia calificadora Standard & Poor's a rebajar la calificación

Mozambique se encuentra ante un momento clave para el proceso de paz que puede contribuir a promover la democracia y la gobernabilidad en el país

crediticia de Mozambique, desencadenando una serie de hechos que llevaron a la divulgación de información sobre préstamos de más de mil millones de dólares previamente no declarados. Pronto se hizo evidente que el proceso de adquisición de préstamos carecía de aprobación parlamentaria, había contravenido la Constitución y violado las leyes presupuestarias.¹³ En abril de 2016, el FMI, junto con donantes clave, suspendió su programa. Esto limitó aún más el margen de maniobra del Gobierno, dañó la confianza de los inversionistas y desencadenó una crisis económica en el país de la que todavía se resiente. El Gobierno se vio obligado por el FMI a llevar a cabo una auditoría independiente que hizo públicas las principales conclusiones en junio de 2017, pero que ha puesto de manifiesto el hecho de que existen numerosas informaciones de las que no se tiene ningún tipo de control ni conocimiento, según señaló la propia auditoría. En abril de 2017, el Parlamento, controlado por FRELIMO, aprobó de forma retroactiva el endeudamiento oculto, decisión vista como un movimiento preventivo para exonerar al Gobierno de posibles consecuencias penales, según señalan diversos analistas. El propio Gobierno es reacio a llevar a cabo la investigación debido a la implicación personal del presidente Nyusi, que era ministro de Defensa en el periodo en el que se concedieron.

A pesar de estos retos y dificultades, el país, convertido en uno de los denominados "leones africanos", por su crecimiento económico, se encuentra ante un momento clave para el proceso de paz que puede contribuir a promover la democracia y la gobernabilidad en el país que contribuya a un mayor control y redistribución de los recursos que atesora. O por el contrario, un proceso de paz no inclusivo que no contribuya a la mejora de la gobernabilidad y convertido en un acuerdo entre las élites de ambos partidos que suponga un foco de inestabilidad futura.

13. Patel, Alisha, "Mozambique's debt scandal: Impunity is the catch of the day", *African Arguments*, 19 de julio de 2017.

4.4. Nuevos pasos hacia la paz en el País Vasco: hacia la desaparición de ETA, la memoria, las víctimas y la convivencia

Cerca de siete años después del anuncio del grupo armado ETA sobre el cese definitivo de su actividad armada y un año después de su declaración como “organización desarmada”, existe la oportunidad en el País Vasco de avanzar en 2018 hacia un escenario de disolución, desmovilización o desaparición de ETA, así como de progresos en otros ámbitos, incluyendo reparación, convivencia y memoria. Al mismo tiempo, el proceso en el País Vasco se ha consolidado como un modelo innovador y de impulso social en un contexto de ausencia de negociaciones formales. Entre los factores que confluyen para nuevos avances en 2018: la acumulación de pasos previos de gran calado que convierten el proceso en irreversible; los trabajos preparatorios encaminados hacia la consecución de la disolución de ETA en 2018 y el peso de las expectativas y demandas sociales al respecto; las medidas del Gobierno francés sobre política penitenciaria; los avances, presentes y previstos, en el ámbito de la memoria y convivencia, entre otros. No obstante, existen asimismo factores de riesgo que pueden ralentizar el proceso o perpetuar divisiones, incluyendo los bloqueos en política penitenciaria y los retos de largo plazo sobre convivencia, entre otros. Pese a los obstáculos, existen las condiciones para nuevos avances, de la mano del empuje político y social de actores políticos y sociales comprometidos con la paz en el País Vasco.

En primer lugar, se está ante un proceso irreversible. El desarme de ETA en abril de 2017 –certificado por la Comisión Internacional de Verificación y con un papel activo de sectores de la sociedad civil a través del mecanismo Artesanos de la Paz– marcó un nuevo paso histórico en el proceso tras los anuncios en enero de 2011 del alto el fuego permanente, general y verificable y, en octubre de ese mismo año, del cese definitivo de la actividad armada. Pese a los bloqueos posteriores¹⁴ y frustración social por la falta de avances más diligentes y claros hacia el desarme y fin de ETA, el proceso avanzó –lento y reimpulsado desde 2016– hacia el escenario de dejación de armas. Lo hizo en un formato sin negociaciones entre el Estado y el grupo armado y, en cambio, con labores de facilitación local e internacional (Foro Social para el Impulso de Paz; Grupo Internacional de Contacto; Comisión Internacional de Verificación) hacia una de las partes, ETA, además de diálogos sub-estatales entre múltiples actores políticos y sociales. La continuación de la presión de las fuerzas de seguridad españolas y francesas sobre ETA en los últimos años (con medidas como la detención de la cúpula del grupo en septiembre de 2015 en Francia) aumentaron el debilitamiento operativo de la organización, inmersa a su vez en su proceso de cambio hacia vías no armadas.

Así, como un paso más en la irreversibilidad del proceso, 2018 podría ser el año de la disolución de ETA. Lo han señalado en público actores facilitadores, como el Foro Social Permanente, que apuntaba a principios de 2018 a un escenario de desmovilización para el primer semestre del año, así como a avances para la reintegración de personas presas y huidas.¹⁵ La propia ETA estaría inmersa en la fase final de un proceso interno de discusión y votación sobre su final definitivo, con el horizonte de 2018 como fecha de su probable final.¹⁶ El escenario sería de disolución de la organización (independientemente del término que use cada uno de los actores o sectores de población, sea disolución, desmovilización o final, entre otros), descartándose la transformación en otra organización o partido.¹⁷ La necesidad de que la desaparición sea totalmente clara es señalada por actores políticos y sociales como clave. La posible disolución de ETA constituiría en sí un paso histórico para el avance hacia la normalización y la convivencia en el País Vasco.

A su vez, la disolución de ETA podría facilitar avances en otros temas pendientes, como la situación de personas presas. Mientras la mayoría de partidos políticos en el País Vasco se han mostrado favorables al acercamiento de presos, la posición del Gobierno central ha sido de negativa a esas medidas mientras siguiera existiendo ETA, y con diversidad de posiciones dentro del oficialista Partido Popular sobre futuros pasos en política penitenciaria una vez ETA desaparezca. En todo caso, la aceptación mayoritaria del marco legal por parte del colectivo de presos de ETA en 2017 mostró la existencia de un nuevo escenario en relación a la posible solución de la cuestión de los y las presas del grupo. En ese momento, un 73,4% los presos del colectivo de presos (EPPK) aprobó la nueva posición, de acogerse de manera individual al marco legal penitenciario vigente para optar a los beneficios penitenciarios y la progresión de grados. No obstante, el EPPK marcó como límite el arrepentimiento, así como la delación.¹⁸

La celebración en 2017 del IV Foro Social centrado en personas presas o huidas, con conclusiones y propuestas del Foro para su reintegración supuso un nuevo impulso y factor de oportunidad para avances en esta cuestión. Entre las medidas propuestas en 2017 por el Foro Social en materia de reintegración de presos se incluye: el levantamiento de medidas en política penitenciaria que contravienen derechos humanos fundamentales; el final de la excepcionalidad penitenciaria como paso previo al desarrollo de una justicia de carácter transicional; y la transferencia a las comunidades autónomas del País

14. Ríos, Paul. “Basque Country. Experiences of the Social Forum to invigorate peace”, en Conciliation Resources, *Legitimacy and peace processes: from coercion to consent*, Accord, no. 25, 2014.

15. EFE, “El Foro Social cree que antes de seis meses se producirá ‘la desmovilización de ETA’”, *DEIA*, 4 de enero de 2018.

16. GARA, “El debate y la votación para cerrar ‘el ciclo y la función de ETA’, en su recta final”, *GARA*, 22 de febrero de 2018.

17. El País, “ETA plantea su disolución en verano al haber acabado su ‘ciclo y función’”, *El País*, 22 de febrero de 2018.

18. Guenaga, Aitor. “Los presos de ETA aceptan mayoritariamente la legalidad penitenciaria”, *El Diario*, 30 de junio de 2017. https://www.eldiario.es/norte/euskadi/presos_de_ETA-debate-politica_penitenciaria-legalidad-EPPK_0_660034932.html

Vasco y Navarra de las competencias en prisiones, así como un plan de reintegración temprano e individualizado de las personas presas. Por otra parte, las reacciones de tranquilidad por parte de asociaciones de víctimas, como Covite o la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), al anuncio del Gobierno francés de acercamiento en 2018 de presos de ETA a prisiones próximas al País Vasco mediante el estudio caso a caso y la aplicación de la legislación francesa, podrían apuntar a un escenario futuro de normalización social en el País Vasco en torno a escenarios futuros –aun inciertos y lejanos– de acercamiento de presos en caso de cambios en la legislación española penitenciaria.

Por otra parte, en relación a uno de los ejes cruciales del proceso, la cuestión de las víctimas, la memoria y la convivencia, existen también oportunidades para el avance. Entre los factores, el acuerdo en 2017 entre todos los grupos políticos del Parlamento Vasco, con excepción del Partido Popular, para la creación de la Ponencia de Memoria y Convivencia –dentro de la Comisión de Derechos Humanos–, con el objetivo de buscar consensos amplios sobre memoria, convivencia, las víctimas, la deslegitimación del terrorismo y la violencia, la política penitenciaria, la paz y los derechos humanos. Su constitución supone un paso adelante, tras el bloqueo en la anterior legislatura de la Ponencia de Paz y Convivencia, sin la participación del Partido Popular ni Unión Progreso y Democracia y el posterior abandono del Partido Socialista de Euskadi. En 2017 la Ponencia avanzó en el bloque de trabajo sobre víctimas, con la comparecencia de víctimas de violencia y las aportaciones de los partidos políticos, y se prevé en 2018 que progrese hacia los primeros acuerdos formales. En paralelo, también el Foro Social tiene

previsto celebrar en 2018 una edición monográfica sobre reparación, convivencia y memoria, con participación de las víctimas. Y, a su vez, se suman las iniciativas en diversos niveles, incluyendo en el ámbito local, sobre memoria y reconciliación, como foros de convivencia locales en algunas localidades, entre otros, así como las actividades y legado de las organizaciones y movimientos de la sociedad civil por la paz y de la arquitectura institucional ya existente, incluyendo el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. Asimismo, a principios de 2018, el Foro Social Permanente informó también de la disposición del EPPK de reconocer el daño causado y de llevar a cabo encuentros con las personas víctimas de la violencia de ETA, en el marco de los trabajos que impulsa el Foro Social para una hoja de ruta inclusiva que lleve en próximos años a una situación de convivencia y reconciliación y sin presos. No obstante, la cuestión de la memoria y las víctimas continuó afectada por aproximaciones diferentes y confrontación política y social, evidenciándose los retos profundos.

En definitiva, confluyen factores diversos para el avance en cuestiones clave del proceso de paz en el País Vasco. Al mismo tiempo, y como se ha apuntado anteriormente, las persistentes divisiones políticas y la diferencia de aproximación entre actores sociales son algunos de los factores de riesgo, que pueden ralentizar los avances en algunos de los ejes política y socialmente más delicados. Se añaden otros potenciales obstáculos, como el impacto que pueda tener el ciclo electoral de 2019 en la polarización política en la etapa pre-electoral o el grado de tensión política instalada en el conjunto del Estado español. No obstante, la irreversibilidad del proceso y la oportunidad abierta permiten vislumbrar nuevos avances en el País Vasco en el futuro.

4.5. La Instancia de la Verdad y la Dignidad de Túnez: ¿mecanismo de referencia de justicia transicional?

Desde finales de 2010, Túnez ha sido un país de referencia. Fue allí donde se inició el proceso de revueltas que se extendió rápidamente por el norte de África y Oriente Medio y puso en jaque a varios gobiernos autoritarios de la región. Túnez se erigió entonces como la experiencia más exitosa ya que, a diferencia de otros países de la zona, logró evitar una espiral de caos y violencia tras el derrocamiento del régimen de Zine el Abidine Ben Alí y puso en marcha un proceso de transición. Este proceso no ha estado exento de dificultades, pero en momentos críticos, y gracias a la iniciativa de la sociedad civil, Túnez ha conseguido mantener las diferencias internas en el marco de un diálogo político –un hecho que ameritó el reconocimiento del Nobel de la Paz al Cuarteto de Diálogo en 2015. En este contexto, Túnez también ha sido escenario de otra experiencia de interés que, eventualmente, podría convertirse en una referencia en el ámbito de la justicia transicional: la Iniciativa de la Verdad y la Dignidad. Más conocida por sus siglas en francés, la IVD es una empresa ambiciosa que pretende lidiar con los abusos del pasado y favorecer la reconciliación en el seno de la sociedad tunecina. Su trabajo ha permitido dar voz a las víctimas y construir un relato alternativo de la historia reciente en el país. No obstante, la iniciativa enfrenta también numerosos retos que podrían comprometer su legado y la consecución de sus objetivos.

La creación de la IVD fue aprobada por el primer gobierno democrático de Túnez a finales de 2013, en el marco de la ley de justicia transicional. Su mandato incluye la búsqueda de la verdad sobre los abusos cometidos desde julio de 1955 –poco antes de la independencia del país de Francia– hasta diciembre de 2013, incluyendo por tanto los gobiernos de Ben Alí (1987-2011) y de su predecesor, Habib Bourghiba (1957-1987). Según la declaración de intenciones de la propia IVD, la entidad aspira a desmantelar el sistema autoritario y facilitar la transición a un estado de derecho a partir de la revelación de las violaciones cometidas en el pasado, el establecimiento de las responsabilidades del Estado en esos abusos, la rendición de cuentas de los responsables y la reparación de las víctimas en sus derechos y dignidad. Este proceso, a su vez, debería permitir la preservación de la memoria y favorecer la reconciliación nacional.¹⁹ Hasta finales de 2017 la IVD había recibido más de 62.000 reclamaciones y había iniciado pesquisas en más de 49.000 casos. Las numerosas demandas presentadas han sido consideradas como una señal del interés en la iniciativa y de la necesidad de amplios sectores de la población por abordar abusos del pasado.

Durante la primera fase de su trabajo, la IVD escuchó a puertas cerradas a miles de víctimas en todas las regiones del país y dibujó un mapa –elaborado por 60 investigadores– en el que identificó 32 violaciones a los derechos humanos, incluyendo arrestos arbitrarios, torturas, desapariciones forzadas, aplicación de pena de muerte sin garantías de juicio justo, así como vulneraciones a la libertad de expresión y de prensa o al derecho a la práctica religiosa, marginalización metódica de determinadas regiones del país, fraude electoral o corrupción. Según los datos que ha publicado la IVD, la mayor parte de las víctimas de los abusos identificados son personas de filiación islamista, seguidas de sindicalistas, militantes de izquierda y activistas de derechos humanos. Dado que inicialmente los testimonios de mujeres representaban un porcentaje muy minoritario, varias organizaciones de mujeres con el apoyo del International Centre for Transitional Justice (ICTJ) pusieron en marcha la campaña “La justicia transicional es también para las mujeres” y alentaron a muchas de ellas a presentar sus reclamaciones a la IVD. Los testimonios de mujeres pasaron así de un 5% a 20% a mediados de 2016. Las audiencias públicas de la IVD se iniciaron en noviembre de 2016 –hasta finales de 2017 se habían producido una decena–, sacando a la luz detalles sobre las torturas, las agresiones sexuales, las intimidaciones y otros múltiples abusos sufridos durante décadas. En estas audiencias no han participado verdugos, sólo víctimas –a diferencia de otras comisiones de la verdad similares, como la de Sudáfrica–, que han sido escogidas por representar los diferentes tipos de abusos cometidos en el período analizado por la IVD.²⁰

La IVD ha sido valorada por diversos analistas como una experiencia única en la región y como una iniciativa sin precedentes a nivel mundial por la amplitud de su mandato.²¹ Así, se ha destacado la conceptualización de justicia transicional que se ha aplicado, resaltando que la iniciativa aborde derechos políticos y civiles, pero también económicos, sociales y temas vinculados a la corrupción; o que se consideren derechos colectivos, permitiendo por ejemplo que regiones hayan presentado demandas como “víctimas” de exclusión durante el régimen de Ben Alí.²² No obstante, esta ambiciosa aproximación también ha generado dudas desde el principio sobre las capacidades de la instancia para desarrollar esta tarea, un trabajo que, además, ha estado condicionado por los cambios y las tensiones políticas en el país. En 2014 las elecciones derivaron en el ascenso al poder de una coalición liderada por Nidaa Tounis, un partido integrado en buena parte por sectores del antiguo régimen que ve con reticencias la

19. Instance Vérité & Dignité, www.ivd.tn

20. González, Ricard, “Túnez busca la verdad y la dignidad que le arrebató la dictadura”, *El País*, 26 de diciembre de 2017.

21. International Crisis Group, *Tunisia: Transitional Justice and the Fight Against Corruption*, Middle East and North Africa Report n° 168, 3 de mayo de 2016.

22. Almajdoub, Sumaya, “Transitional Justice in Tunisia: Challenges and Opportunities”, *Maydan*, 29 de mayo de 2017.

labor de la IVD. El propio presidente, Bejj Caid Essebsi, que ocupó cargos ministeriales durante el gobierno de Ben Alí, ha declarado públicamente que es partidario de dejar atrás el pasado y se ha negado a testificar en las audiencias públicas.²³ Nidaa Tounis ha liderado las críticas a la IVD, a la que acusa de politización, de ser un instrumento de la oposición y de promover una aproximación vengativa. Algunos expertos legales coinciden en que las designaciones en la comisión respondieron más a criterios políticos que técnicos. La propia IVD también se ha visto afectada por controversias y divisiones, y muchos de los cuestionamientos se han centrado en su presidenta, Sihem Ben Sedrine, una periodista y activista de derechos humanos que estuvo en prisión durante el régimen de Ben Alí y que incluso ha recibido amenazas de muerte.

Este trasfondo ha repercutido en la labor de la IVD. La instancia necesita de la cooperación de otras instituciones y uno de los problemas que ha enfrentado ha sido la falta de colaboración, por ejemplo, del Ministerio del Interior, que se ha negado a entregar sus archivos secretos. Los ministerios de Justicia y Defensa, así como la Justicia Militar, tampoco estaban colaborando en las investigaciones de la IVD, según denunció Amnistía Internacional. En este contexto, algunos observadores y víctimas han expresado su temor y frustración ante la posibilidad de que muchos abusos queden impunes. En algunos casos la propia IVD ha mediado entre víctimas y perpetradores, pero en lo que se refiere a las violaciones más graves se espera que derive los dossiers a tribunales especiales. Pero ello requiere de un acuerdo entre la IVD y el Ministerio de Justicia todavía pendiente. HRW destacaba en su informe anual que, a finales de 2017, aún no se había creado ninguno de estos tribunales que, según la ley de justicia transicional tunecina, debían establecerse dentro del sistema judicial civil, y que en los siete años desde el derrocamiento de Ben Alí no se había condenado a nadie por casos graves de torturas y muertes en custodia. Tampoco está claro si el proceso

La IVD ha permitido dar voz a las víctimas y construir un relato alternativo de la historia reciente en Túnez, pero también enfrenta numerosos retos que podrían comprometer su legado

iniciado por la IVD culminará con veredictos vinculantes, ya que la ley de justicia transicional aprobada en 2013 hace referencia a diversos delitos que no aparecen en el código penal tunecino, lo que puede derivar en situaciones problemáticas para los jueces.

A esto se suma que, en septiembre de 2017, el proceso de justicia transicional sufrió un golpe tras la aprobación por el Parlamento de la polémica “ley de reconciliación administrativa” (propuesta por el presidente en 2015)

que, en la práctica, garantiza inmunidad a los ex funcionarios implicados en casos de corrupción que declaren no haberse beneficiado personalmente del mal uso de los fondos públicos (no se establecen mecanismos para que los beneficiados por la ley presenten evidencias sobre sus conductas pasadas). En la práctica, esta norma –que enfrentó la oposición de grupos de la sociedad civil tunecina y críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos y anti-corrupción– recorta el mandato de la IVD, que tenía entre sus tareas la investigación de los crímenes económicos y de la corrupción sistemática durante el régimen de Ben Alí. A lo largo de 2017 el clima político general se ha visto enturbiado, además, por denuncias que apuntan a una deriva autoritaria del gobierno y a la reedición de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, así como por el creciente malestar en sectores de la población por la persistencia de la marginación y los problemas económicos y la desilusión con la clase política.²⁴

En este trasfondo complejo e inestable, la IVD tiene el reto de sortear los obstáculos y concluir su misión. Se espera que la instancia presente su informe final y sus recomendaciones entre 2018 y 2019. Está por verse si la experiencia consigue redefinir la relación de Túnez con su pasado y alterar las estructuras que permitieron tantos abusos en las décadas recientes y si la IVD logra convertirse en un modelo para el mundo árabe.

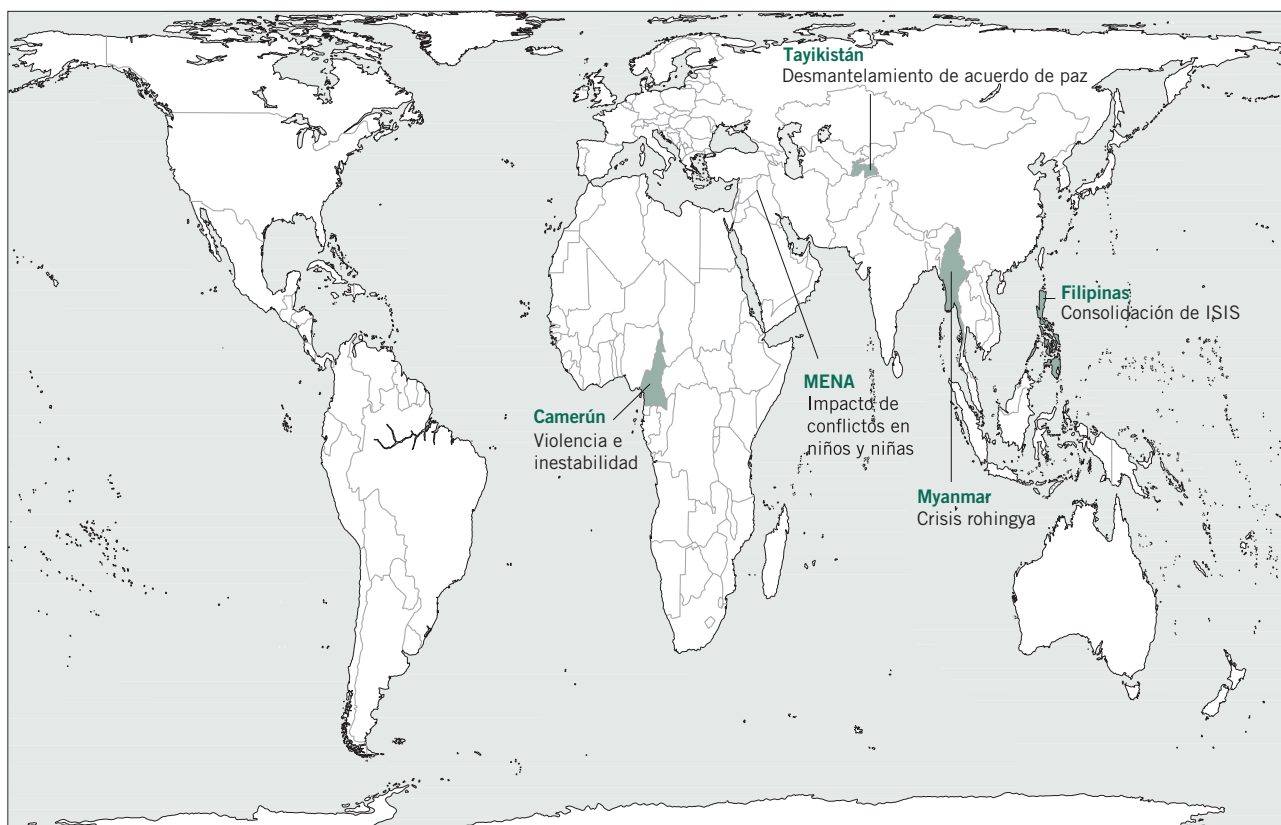
24. Véase resumen sobre Túnez en el capítulo 2 (Tensiones).

23. Abé, Nicola, “The search for justice in Tunisia: ‘We Know Everything, But We Have No Proof’”, *Spiegel Online*, 11 de diciembre de 2017.

5. Escenarios de riesgo para 2018

A partir del análisis del año 2017 de los escenarios de conflicto armado y tensión a nivel mundial, la Escuela de Cultura de Pau de la UAB identifica en este capítulo cinco contextos que por sus condiciones y dinámicas pueden empeorar y convertirse en focos de inestabilidad y violencia todavía más graves durante 2018. Los escenarios de alerta de cara al año 2018 hacen referencia a la escalada de violencia y el aumento de la inestabilidad en Camerún, a la consolidación del grupo armado ISIS en el sur de Filipinas y en el Sudeste Asiático, a las repercusiones de la crisis rohingya para la transición democrática y el proceso de paz en Myanmar, a la reducción del espacio opositor y el desmantelamiento del marco post-acuerdo de paz en Tayikistán, y al impacto de los elevados niveles de violencia en los niños y niñas como consecuencia de los graves conflictos armados que afectan el norte de África y Oriente Medio.

Mapa 5.1. Escenarios de riesgo para 2018



5.1. Escalada de la violencia y de la inestabilidad en Camerún

Camerún, conocido como “el África en miniatura”, por ser el hogar de más de 230 grupos lingüísticos diferentes, hasta la fecha no había atraído la atención de la comunidad internacional a pesar de la mala gobernabilidad vinculada a una excesiva centralidad del sistema político y de los altos índices de corrupción que azotan el país liderado por el sempiterno Paul Biya desde 1982. No obstante, el país afronta una escalada de la inestabilidad vinculada a diversas cuestiones internas y regionales que pueden situarle en 2018 al borde de la guerra civil en un año crucial para el país.

En primer lugar, Camerún está sufriendo las consecuencias de estar situado entre dos de los peores conflictos armados que han afectado el continente en los últimos años: los que padecen sus vecinos Nigeria y la República Centroafricana. En el caso de Nigeria, el conflicto en un primer momento afectaba el norte del país pero progresivamente se ha ido ampliando desde 2014 a toda la subregión del Lago Chad, incluyendo a Chad, Níger y Camerún. En el caso de Camerún, la región más afectada es la región de Far North, donde se estima que han muerto alrededor 2.000 personas (unos 1.800 civiles y 175 soldados) como consecuencia de los ataques de Boko Haram (BH). El grupo ha secuestrado unas mil personas y ha quemado y saqueado decenas de localidades. La región de Far North alberga 96.000 personas nigerianas huidas del conflicto que, a su vez, también ha provocado el desplazamiento de 241.000 cameruneses por las acciones de este grupo armado a fecha de enero de 2018. Aunque el grupo está debilitado por las acciones militares coordinadas a nivel regional, en 2017 murieron 27 soldados y gendarmes, así como 210 civiles, y el conflicto podría escalar en función de la implicación del Gobierno en la región.¹ En lo concerniente a la República Centroafricana, a fecha de enero de 2018, 249.000 personas centroafricanas habían huido de la escalada de los enfrentamientos entre las milicias ex Séléka y las anti-balaka durante los últimos tiempos y buscado refugio en las regiones camerunesas de Adamawa, Este y Norte, según UNHCR, agravando la situación humanitaria en la zona. Además, grupos armados procedentes de RCA han perpetrado esporádicos ataques y secuestros en localidades fronterizas camerunesas lo que ha provocado la respuesta militar camerunesa y el cierre puntual de la frontera común.²

En paralelo, se ha agravado la crisis que afecta a las regiones anglófonas (Northwest y Southwest), en el oeste del país, y que nació como una protesta sectorial en 2016 aunque tiene unas raíces que se remontan al periodo colonial y a la creación del Estado camerunés y al sentimiento de marginación política y económica que viven la minoría anglófona del antiguo sur del Camerún británico (20% de la población del país) por parte de las instituciones del Estado, controlado por la mayoría francófona. La represión violenta de las masivas movilizaciones del 22 de septiembre y el 1 de octubre de 2017 ha desencadenado el surgimiento de movimientos insurgentes. Desde octubre de 2016 hasta finales de 2017 habían muerto unos 90 civiles, unas decenas de soldados y gendarmes y un número indeterminado de insurgentes, más de 1.000 personas habían sido arrestadas, más de 30.000

personas habían buscado refugio en Nigeria y decenas de miles de personas se habían desplazado internamente como consecuencia de la violencia. La escalada de la tensión en las regiones anglófonas tiene además como consecuencia el incremento de las acciones de BH ante la débil reacción de los cuerpos de seguridad, según señala ACLED, ya que el Gobierno camerunés está más preocupado de hacer frente a las acciones de las organizaciones insurgentes de las regiones anglófonas que a los ataques de BH contra la población civil en el norte de Camerún, por lo que BH está aprovechando esta situación.

Ante esta convulsa situación, el país se ve afectado por una creciente inseguridad alimentaria agravada por la afluencia de poblaciones desplazadas como consecuencia de los diferentes escenarios de inestabilidad interna y regional. Según un informe del PMA de diciembre de 2017, el 16% de la población del país (3,9 millones de personas) se enfrentaba a una situación de inseguridad alimentaria entre moderada y grave.

Todo esto guarda relación con los problemas estructurales que padece el país en términos de gobernabilidad, que se une a la grave situación económica derivada de la subida de los precios y la caída del crecimiento del país como consecuencia de la crisis. Para agravar la situación, el país debe celebrar cuatro ciclos electorales en 2018 – municipales, senatoriales, parlamentarias y presidenciales. No se auguran muchas novedades respecto a sus resultados, ya que el país está controlado por el partido en el poder desde la independencia en 1960, el Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), que hasta 1985 se denominaba Union Nationale Camerounaise. El RDPC ha ganado sistemáticamente todas las elecciones, algunas boicoteadas por la oposición política, que acusa al RDPC de controlar todos los mecanismos del poder en el país. El límite de mandatos presidenciales fue eliminado por el Parlamento en 2008, facilitando la perpetuación de Biya en el poder, decisión que provocó en ese momento una escalada de las movilizaciones y de la represión de los cuerpos de seguridad. Las elecciones en el país se han visto sistemáticamente plagadas de fraude e irregularidades denunciadas por la oposición y detectadas por observadores internacionales. En este sentido, los cuatro ciclos electorales del otoño de 2018 que culminarán con las elecciones presidenciales en octubre serán un nuevo termómetro de la gobernabilidad en el país ante un posible inicio de transición programada por Paul Biya (85 años), el gobernante con más años en el poder en todo el continente africano. Aunque se prevé que vuelva a presentarse y a conseguir una amplia mayoría, su partida podría incrementar la inestabilidad, según diversos analistas, debido a las pugnas internas en el seno del RDPC para sucederle. Por otra parte, también apuntan a un boicot electoral por parte de los movimientos independentistas en las regiones occidentales que podría ampliarse a otras zonas del país. En conclusión, la confluencia de los diferentes ejes de división y conflictos locales, nacionales y regionales podrían provocar una involución del país y una espiral de violencia e inestabilidad de consecuencias imprevisibles.

1. Watch List 2018, EU Watch List 10 / From Early Warning to Early Action, International Crisis Group, 31 de enero de 2018.
2. Moki Edwin Kindzeka, “Cameroon Seals Border as Fresh Violence Escalates in CAR”, VOA, 28 de septiembre de 2017.

5.2. La consolidación de ISIS en el sur de Filipinas y en el Sudeste Asiático

A pesar de los avances en el proceso de paz entre el Gobierno y el MILF y del buen funcionamiento de los mecanismos de supervisión del alto al fuego –desde el año 2015 no se han producido episodios de violencia significativos–, durante el año 2017 en Mindanao se registró un incremento sin precedentes en la actividad armada por parte de organizaciones que han proclamado su lealtad a Estado Islámico (ISIS). Cabe destacar especialmente los enfrentamientos que entre los meses de mayo y octubre se produjeron en la ciudad de Marawi (provincia de Lanao del Sur) entre las Fuerzas Armadas y el denominado grupo Maute y otras organizaciones armadas afines a ISIS, y que provocaron la muerte de más de 1.100 personas, el desplazamiento forzoso de más de 600.000 personas y la destrucción de una parte significativa de Marawi, una ciudad de unos 200.000 habitantes. El asedio a la ciudad de Marawi, que según algunos medios fue la mayor batalla librada por ISIS fuera de Siria e Iraq, captó la atención de medios de comunicación de todo el mundo e incrementó notablemente la preocupación de buena parte de la comunidad internacional por la posibilidad de que el Sudeste asiático en su conjunto –y Mindanao en particular– se convierta en un frente importante de la actividad de ISIS y/o de organizaciones cercanas o afines.

En años anteriores ya habían proliferado informaciones sobre una mayor articulación entre grupos yihadistas en Mindanao y sobre las intenciones de ISIS de tener una presencia estable en dicha región. En 2016 ISIS había reconocido oficialmente la lealtad y obediencia hecha pública por numerosos grupos en Filipinas; había anunciado su intención de crear una provincia (*wilayat*) del Califato en la región; había designado a un líder de la organización en la zona; había reivindicado un atentado de envergadura –18 soldados murieron y más de 50 resultaron heridos en la región de Basilan– y había asegurado disponer de 10 batallones de combatientes en cinco localizaciones diferentes de Filipinas. Sin embargo, los acontecimientos de Marawi, junto con el incremento de la actividad por parte de organizaciones como Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) –especialmente en la provincia de Maguindanao y Cotabato Norte–, Abu Sayyaf –especialmente en el archipiélago de Sulu– o Ansar Al Khilafah –sobre todo en la provincia de Sarangani– denotaron un salto cualitativo en la capacidad bélica de ISIS en el Sudeste asiático y provocaron serias preocupaciones por el impacto que ello pudiera suponer en el proceso de paz entre el Gobierno y el MILF y por la posibilidad de que determinadas ideologías extremistas pudieran extenderse entre determinados sectores de la población.

Durante el año el propio Gobierno anunció que estimaba en 50 el número de células de ISIS en Mindanao, pero algunos analistas han sugerido que la situación se puede agudizar en el futuro, por varios motivos. En primer lugar, por la posibilidad de que las derrotas militares infringidas recientemente a ISIS en Siria e Iraq y la pérdida de sus bastiones principales de Mosul y Raqqa puedan comportar, por un lado, el incremento de su actividad bélica en

otras regiones del mundo para desviar la atención de los acontecimientos en Siria e Iraq y, por otro lado, la posibilidad de que se incremente el retorno a sus países de origen de combatientes provenientes del Sudeste Asiático.³ Se estima que cientos de personas (hasta 1.200) del Sudeste Asiático se desplazaron a Siria e Iraq para combatir en las filas de ISIS y que alrededor de 100 combatientes han fallecido en los dos mencionados países. De hecho, una facción dentro de ISIS, de denominada Katibah Nasuntara, estaba conformada por combatientes de la región. Además, el hecho de que desplazarse a Siria e Iraq sea cada vez más complicado –y tal vez tenga menos sentido– hace de Mindanao un lugar más estratégico y atractivo desde el punto de vista del yihadismo. Según algunos analistas, entre las personas que combatieron en Marawi, decenas de ellas provenían de varios países de la región de mayoría musulmana, como Indonesia o Malasia.⁴

Algunos analistas han advertido sobre la posibilidad de que la ideología de organizaciones yihadistas pueda extenderse entre determinados sectores de la población por la situación económica y política de Mindanao. En el plano económico, aunque Mindanao es un territorio próspero, fértil y con abundantes recursos, las provincias sureñas de mayoría musulmana, que coinciden en buena medida con las que integran la Región Autónoma del Mindanao Musulmán, se encuentran entre las más empobrecidas del país. En el plano político, amplios sectores de la sociedad han ido acumulando un creciente escepticismo sobre la voluntad y capacidad del Estado de resolver el conflicto en Mindanao. De hecho, un análisis histórico de los intentos de resolver el conflicto a través de la negociación evidencia numerosos incumplimientos por parte del Estado. El Acuerdo de Trípoli firmado en 1976 entre el Gobierno y el MNLF no fue implementado por parte del dictador Ferdinand Marcos. Más tarde, con la recuperación de la democracia a mediados de los años 80, el Gobierno de Corazón Aquino reanudó el diálogo con el MNLF, que acabó firmando un acuerdo de paz con el Gobierno de Fidel Ramos en 1996. Sin embargo, el MNLF sostiene que dicho acuerdo jamás fue implementado plenamente, por lo que desde entonces ha intentado negociar bilateralmente con el Gobierno. De hecho, en dos ocasiones el fundador del MNLF, Nur Misuari –también gobernador de la Región Autónoma del Mindanao Musulmán– ha llevado a cabo rebeliones armadas importantes –en los años 2001 y 2013– alegando, entre otras cuestiones, incumplimientos por parte del Estado. Además de la no implementación del acuerdo de paz de 1996, varias voces han denunciado que detrás de la percepción generalizada de que la RAMM no ha funcionado ni puede llegar a solucionar el denominado “problema moro” se halla el escaso compromiso del Estado con la RAMM. En cuanto al proceso de paz con el MILF, tras 17 años de negociaciones se alcanzó en 2014 un acuerdo de paz, cuya piedra angular era la creación de una nueva entidad denominada Bangsamoro (o Región Autónoma de Bangsamoro) que sustituyera a la RAMM. Sin embargo,

3. Westerman, Ashley, *How Big A Threat Is Extremism In Southeast Asia?*, NPR, 11 de junio de 2017.

4. Sanderson, Thomas, “Black Flags over Mindanao: ISIS in the Philippines”, Center for Strategic and International Studies, julio de 2017.

tanto el establecimiento de dicha nueva entidad como la operacionalización y la concreción legislativa del acuerdo de paz dependen de la aprobación de la Ley Fundamental de Bangsamoro. Dicha ley debería haber sido aprobada al año siguiente de la firma del acuerdo de paz, pero tras varios retrasos en su tramitación parlamentaria, finalmente se descartó su aprobación a principios de 2015 después de que algunos miembros del MILF se vieran involucrados en una masacre en la provincia de Maguindanao en la que murieron 44 miembros de las fuerzas especiales filipinas. En 2017 se reanudaron las tareas de la Comisión de Transición de Bangsamoro para aprobar dicha ley, pero analistas han advertido sobre el escaso apoyo que ésta tiene en ambas cámaras parlamentarias y han anticipado la posibilidad de que la prioridad política del actual presidente, Rodrigo Duterte, sobre la transformación de Filipinas en un estado federal puedan diluir los contenidos de la Ley Fundamental de Bangsamoro o bien dilatar su aprobación. En cualquier caso, el principal problema al que se enfrenta el MILF actualmente es que la credibilidad de su propuesta (conformación de un nuevo marco autonómico a través del diálogo) depende en buena medida de la voluntad política de su interlocutor. Hasta el momento, los incumplimientos y retrasos sistemáticos del Estado hacia los acuerdos de paz firmados con las dos principales organizaciones moro (el MNLF y el MILF) parecen haber hipotecado en buena medida los esfuerzos del MILF en contener y canalizar pacíficamente los agravios y las demandas de una parte importante del pueblo moro.

A pesar de que una eventual derrota de ISIS en Siria e Iraq, la falta de compromiso del Estado hacia una solución estable al conflicto en Mindanao y la creciente organización y consolidación de ISIS en la región permiten augurar una cronificación e incluso incremento de la violencia en Mindanao, también es cierto que hay algunos factores que podrían menoscabar o dificultar la consolidación de ISIS en Mindanao y en el Sudeste Asiático en general. En primer lugar, los cinco meses de graves combates en Marawi erosionaron notablemente la capacidad militar de ISIS en Mindanao y de algunos grupos armados que le apoyan o dicen combatir en su nombre. Así, al terminar la ofensiva militar en Marawi a finales de octubre, habían muerto alrededor de un millar de combatientes, incluyendo a Isnilon Hapilon –el presunto líder de ISIS en la región–, a Omar y Abdullah Maute –líderes y fundadores del grupo–, así como varios de sus otros hermanos y Mahmud Ahmad, combatiente de origen malasio que, según la inteligencia filipina, había jugado un papel importante en las relaciones entre ISIS y varios de los grupos que operan en Mindanao. Además, la muerte a principios de 2017 en la provincia de Sarangani de Mohammad Jafaar Maguid, alias Tokboy –líder y fundador de Ansar Al-Khilafah– podría suponer,

Los enfrentamientos de la ciudad de Marawi, el incremento de la actividad armada por parte de organizaciones que han jurado lealtad a ISIS y la creciente atención que el propio ISIS está dedicando a Mindanao y el Sudeste Asiático han provocado una reacción importante por parte de varios Gobiernos

según el Gobierno, el desmembramiento del grupo y un debilitamiento de ISIS en el Sudeste Asiático por los estrechos contactos que mantendría con combatientes de ISIS en Siria. En segundo lugar, los hechos de Marawi –y el fortalecimiento de ISIS en la región que denotan– han generado una gran preocupación entre la comunidad internacional, que ha redoblado su cooperación con el Gobierno de Filipinas no solamente en su apoyo al proceso de paz con el MILF, sino también en la lucha contrainsurgente. Países como Australia o EEUU –los únicos países con estatus de Fuerzas Visitantes– jugaron un papel importante en los enfrentamientos en Marawi.⁵ Australia desplegó a unos 80 militares una vez finalizados los enfrentamientos, mientras que EEUU –con quien la administración de Duterte mantenía una relación bastante volátil– proveyó cuantioso armamento, drones y aviones, así como asistencia militar por parte de los entre 100 y 200 soldados desplegados en Filipinas. Además, estos enfrentamientos motivaron un incremento de la cooperación en materia de inteligencia y contraterrorismo de algunos de los países de la región como Malasia, Indonesia, Brunei o Tailandia.⁶ Ante un incremento de la actividad de Abu Sayyaf en la región, ya en 2016 los Gobiernos de Filipinas, Indonesia y Malasia habían firmado un acuerdo para intensificar la vigilancia y el control del Mar de Sulu. En tercer lugar, cabe destacar el sólido compromiso que hasta el momento han mostrado tanto el MNLF como el MILF en su lucha contra ISIS y contra la expansión del radicalismo. De hecho, el MILF participó activamente en la consolidación de un corredor humanitario en Marawi, mientras que el fundador del MNLF, Nur Misuari, ofreció el despliegue de cientos de combatientes.

A modo de conclusión cabe señalar que los enfrentamientos de la ciudad de Marawi, el incremento de la actividad armada por parte de organizaciones que han jurado lealtad a ISIS y la creciente atención que el propio ISIS está dedicando a Mindanao y el Sudeste Asiático han provocado una reacción importante por parte del Gobierno de Filipinas, del MILF y el MNLF, de algunos de los países de la región, de EEUU y otros actores destacados de la lucha global contra el terrorismo. Sin embargo, el incremento de la actividad armadas de grupos como Abu Sayyaf o el BIFF tras la derrota del Grupo Maute en Marawi o el hecho de que tras la finalización oficial de los combates aumentara el número de reclutamientos de organizaciones consideradas yihadistas hacen prever que una presencia de ISIS en la región a medio plazo, proveyendo nuevas oportunidades tanto a grupos armados locales como a sectores de la población reticentes a la posibilidad de que el actual proceso de paz con el MILF posibilite el acomodo de las demandas principales del pueblo moro y comporte una mejora de su bienestar.

5. ABS-CBN News, *US played key role in helping AFP retake Marawi, envoy*, AFP, 26 de octubre de 2017.

6. The Sunday Morning Herald, *Philippines' Battle for Marawi shows how South-East Asia can unite to fight terrorism*, 6 de febrero de 2018.

5.3. La crisis rohingya en Myanmar pone en riesgo la transición democrática y el proceso de paz

La grave crisis humanitaria y de derechos humanos que asoló Myanmar durante el año 2017 amenaza con poner en peligro los frágiles avances en términos de democratización y construcción de paz que han tenido lugar en el país en los últimos años. En agosto, las fuerzas de seguridad de Myanmar iniciaron una operación militar a gran escala en respuesta a varios ataques llevados a cabo por el grupo armado rohingya ARSA en el estado de Rakhine.⁷ Como consecuencia de esta operación, casi 700.000 personas rohingyas se desplazaron de manera forzada, refugiándose fundamentalmente en Bangladesh, y miles murieron fruto de la violencia. Además se documentaron múltiples casos de violencia sexual por parte de personal militar contra población civil y otras graves violaciones de derechos humanos, como incendios y saqueos. Diversas organizaciones de derechos humanos y Naciones Unidas alertaron de que la acción de las fuerzas de seguridad birmanas podía ser constitutiva de delitos de genocidio. Así pues, si bien al finalizar 2017 la intensidad de la violencia se había reducido, la grave crisis ha puesto de manifiesto la enorme fragilidad de los avances de la transición política iniciada en el país en los últimos años y liderada por la Consejera de Estado y premio Nobel de la paz, Aung San Suu Kyi.

La desproporcionada respuesta militar por parte de las fuerzas de seguridad birmanas a los ataques de ARSA han puesto de manifiesto el papel central que las poderosas Fuerzas Armadas pretenden seguir jugando en Myanmar. Tras décadas de férrea dictadura militar, el proceso de transición había dado lugar a un delicado equilibrio entre las fuerzas políticas y militares, que la crisis en Rakhine ha roto, dejando en evidencia la incapacidad de los poderes civiles de controlar y ejercer autoridad sobre el estamento militar. Pese a los múltiples llamamientos por parte de la comunidad internacional y de las organizaciones de derechos humanos para que se pusiera fin a la operación militar que estaba dejando tras de sí un éxodo masivo de población rohingya, las autoridades civiles no pusieron fin a la operación militar sin precedentes en la que se cometieron atroces violaciones de derechos humanos. De hecho, la propia Aung San Suu Kyi no se desplazó a la zona afectada por el conflicto armado hasta el mes de noviembre y el Gobierno negó en repetidas ocasiones las acusaciones de genocidio y limpieza étnica.

Aunque la violencia de mayor intensidad ha remitido, como se señaló anteriormente, se ha iniciado un proceso de militarización del estado de Rakhine, con un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad que han ocupado amplias zonas civiles. Este despliegue, unido a la destrucción de poblaciones enteras que fueron arrasadas y quemadas, hace prever que el retorno al estado de los

centenares de miles de personas desplazadas por la violencia está seriamente en riesgo. Así pues, la crisis humanitaria de desplazamiento –que actualmente tiene un carácter internacional, puesto que es Bangladesh el país donde se ha refugiado la inmensa mayoría de la población rohingya– amenaza con perpetuarse en el tiempo, con el consiguiente impacto en las condiciones de vida de centenares de miles de personas. La militarización de Rakhine, por tanto, no solo amenaza la fragilidad de las estructuras políticas civiles del país, construidas en los últimos años de transición, sino que también llevará con toda probabilidad al enquistamiento de la crisis humanitaria. Tampoco pueden descartarse nuevas acciones militares de la insurgencia rohingya, y el grupo armado ARSA, que ha estado inactivo en los últimos meses, podría llevar a cabo de nuevo ataques contra las fuerzas de seguridad o contra población rakhine. Además, el yihadismo internacional podría tratar de interferir en este conflicto, que hasta el momento ha permanecido ajeno a estas dinámicas. Grupos armados como ISIS o al-Qaeda ya han hecho algunos llamamientos a dar apoyo a la causa rohingya.

Por otra parte, la crisis en el estado de Rakhine también puede tener un impacto muy negativo en el proceso de paz que se está llevando a cabo con un amplio número de grupos armados de oposición y que se ha materializado en un acuerdo de alto el fuego de alcance nacional y en la celebración de la Conferencia de Paz Panglong 21.⁸ Sin embargo, persisten enormes dificultades para lograr avances sustantivos en el marco de esta Conferencia, fundamentalmente por la exclusión de los grupos armados que no han firmado acuerdos de alto el fuego. Indudablemente, la crisis de derechos humanos desencadenada tras la operación militar en el estado Rakhine representa un nuevo obstáculo para lograr definitivamente acuerdos de alto el fuego con todos los grupos insurgentes y avances en las reivindicaciones de las diferentes minorías étnicas que componen el país. La situación de seguridad en Rakhine ha impedido la celebración de procesos de consultas y de diálogo nacional asociados al proceso de paz, lo que ha derivado que se pospongan nuevas sesiones de la Conferencia Panglong 21, por ésta y otras dificultades.

Todos estos factores amenazan el futuro inmediato de Myanmar y han puesto de relieve la incapacidad tanto de las autoridades civiles como de la comunidad internacional para detener la masacre de la población rohingya. En el futuro inmediato se deberá hacer frente a las acusaciones de genocidio y limpieza étnica y, desde instancias internacionales, promover una investigación independiente de lo sucedido que permita la rendición de cuentas ante la justicia internacional.

7. Véase el resumen sobre Myanmar en el capítulo 1 (Conflictos armados).

8. Véase Escola de Cultura de Pau, “Un proceso de paz inclusivo en Myanmar”, *Alerta 2017! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz*, Icaria, 2017.

5.4. El desmantelamiento del marco post-acuerdo de paz en Tayikistán y la reducción del espacio opositor

Sin apenas visibilidad mediática internacional, Tayikistán afronta una grave crisis interna: el desmantelamiento del marco político resultante del acuerdo de paz de 1997, que puso fin a la cruenta guerra civil en el país (1992-1997), causante de unas 50.000 víctimas mortales y en torno a 1,2 millones de personas desplazadas internas y refugiadas. Diversos son los factores que confluyen y que sitúan al país en un escenario de riesgo. La escalada de medidas políticas que desde 2015 han dejado a la oposición política religiosa fuera de la legalidad; la vulneración de derechos humanos de la oposición política, familiares de opositores y otros sectores de población, incluyendo defensores de derechos humanos; y con todo ello, la grave reducción del espacio para la crítica y la contestación democrática. El contexto geoestratégico regional –con Tayikistán como zona de influencia de Rusia y de creciente interés militar para China–, e internacional –con el foco internacional en la lucha contra el yihadismo–, no favorecen tampoco la priorización en los diálogos bilaterales y multilaterales de los riesgos al marco post-acuerdo y a los derechos humanos en el país.

Los factores de riesgo son diversos. Por una parte, el desmantelamiento del marco político post-acuerdo es ya una realidad que podría agravarse. El acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil tayika entre la coalición de fuerzas opositoras Oposición Tayika Unida (UTO) y las fuerzas gubernamentales de la recién independizada Tayikistán (Acuerdo General para el Establecimiento de la Paz y del Acuerdo Nacional y sus protocolos asociados, de 1997) incluía entre sus elementos políticos el levantamiento de la prohibición sobre los partidos políticos y movimientos de la UTO y avalaba su funcionamiento dentro del marco de la Constitución y la legislación del país. 18 años después, en agosto de 2015, el Gobierno ordenó el cierre del Partido del Renacimiento Islámico (PRI) –uno de los actores de la UTO–, alegando falta de representación territorial. La decisión llegó poco después de unas elecciones en las que el PRI quedó fuera del Parlamento y que la OSCE consideró que no alcanzaron los estándares democráticos, en un espacio político restringido y sin garantías de competitividad electoral. En septiembre de ese mismo año el Tribunal Supremo determinó que el PRI era una organización terrorista y más de una treintena de sus líderes fueron detenidos. Ello en un contexto de persecución contra otros grupos opositores, como el G24, y de presiones contra el islam en el espacio público. El desmantelamiento del régimen post-acuerdo dio un paso más en 2016, con la aprobación de cambios constitucionales –ratificados en referéndum–, que prohíben la existencia de partidos de base religiosa. El PRI era el único partido islamista legal en países centroasiáticos ex

La tendencia de restricción del espacio político en Tayikistán ha resultado en el desmantelamiento del marco de coexistencia política de los acuerdos de paz de 1997, situación que podría agravarse en los próximos años

soviéticos. En 2017, el número de miembros del PRI en prisión se elevaba a más de un centenar, según cifras del líder del PRI en el exilio, Muhiddin Kabiri.

Existe el riesgo de que esta pauta de desmantelamiento del marco de garantías de participación política para la oposición se agrave en 2018 y en los próximos años, en paralelo a un creciente proceso de acumulación del poder político por parte de la Presidencia. Así, en 2015 el Parlamento otorgó al presidente tayiko, Emomali Rahmon, el título de “Líder de la Nación”, inmunidad vitalicia y competencias ejecutivas cuando se retire, incluyendo poder de veto sobre decisiones de Estado, entre otras. Las enmiendas de 2016 abrieron las puertas también a la eliminación del número de mandatos presidenciales para Rahmon, sobre la base de su condición de “Líder de la Nación”, entre otros cambios. Estas modificaciones permitirán al presidente tayiko presentarse de nuevo a las elecciones de 2020, las cuales podrían tener lugar en un escenario de desmantelamiento de la oposición política. Las reformas también reducen el umbral de edad mínima de los 35 a los 30 años, facilitando así una posible candidatura de su hijo, Rustam Emomali, en caso de no presentarse su progenitor. Así, Las “draconianas restricciones a las voces opositoras” denunciadas en 2017 por el relator especial de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión⁹ podrían expandirse aún más en el proceso hacia el monopolio del poder político.

Asimismo, se asiste a un grave deterioro del clima general de derechos humanos en el país. Por una parte, se ha incrementado la represión contra familiares de miembros del PRI encarcelados o en el exilio, incluyendo a través de presentación de cargos de intentos de derrocar el orden constitucional, acusaciones consideradas fabricadas por organizaciones de derechos humanos. Familiares de activistas políticos exiliados sufrieron detenciones, interrogatorios y en algunos casos palizas, según denunciaron políticos en el exilio.¹⁰ Además, las personas abogadas de casos relacionados con seguridad nacional, lucha antiterrorista o casos políticamente sensibles, fueron cada vez más objeto de hostigamiento, intimidación y presiones indebidas, según denunció Amnistía Internacional. Entre estos hechos, Buzurgmekhr Yorov, defensor de derechos humanos y abogado defensor en el proceso judicial contra el PRI y condenado a 28 años de cárcel, sufría palizas y amenazas en prisión, según denunció Amnistía Internacional en 2017. En el marco de la crisis de derechos humanos, también ha seguido la tendencia de presión contra las prácticas islámicas en el espacio público, que podrían agravarse a corto y medio

9. Consejo de Derechos Humanos, *Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression on his mission to Tajikistan*, A/HRC/35/22/Add.2, 9 de junio de 2017.

10. Amnistía Internacional, *Informe 2017/2018. La situación de los derechos humanos en el mundo*, AI, 2018.

plazo. Esta política tiene repercusiones específicas de género, como la obligación en 2017 a miles de mujeres a quitarse el *hijab* lugares públicos.¹¹ En los últimos años, se ha intensificado la presión contra lugares de culto, imanes y estudiantes de escuelas religiosas consideradas extremistas o foráneas. Analistas señalaron los riesgos de radicalización y riesgos de acercamiento a estrategias violentas de actores religiosos que están siendo excluidos y perseguidos por el régimen.¹²

En paralelo, la agenda de derechos humanos en las relaciones bilaterales y multilaterales ha quedado aún más relegada, en un contexto regional e internacional de priorización de la lucha contra el extremismo religioso a través de vías securitarias y de incremento de las alertas por los riesgos que supone el retorno de combatientes del grupo armado ISIS de nacionalidad centroasiática y rusa al conjunto de la región. En ese sentido, el presidente ruso, Vladimir Putin, alertó en 2017 de los planes de ISIS de desestabilizar las repúblicas ex soviéticas centroasiáticas y las regiones meridionales de Rusia. En 2017, algunos análisis situaban a Rusia como el principal país de origen de combatientes foráneos de ISIS, con en torno a 3.500 combatientes¹³ (4.000 según el presidente ruso). Por regiones, el centro de investigación Soufan Center situaba a las repúblicas ex soviéticas como la región de origen de mayor número de combatientes de ISIS (8.717 combatientes), seguida de

Oriente Medio (7.054) y –con más distancia– de Europa occidental (5.778) y Magreb (5.356).¹⁴ En ese contexto, uno de los ejes fundamentales de la política exterior de Tayikistán continúa siendo sus relaciones con Rusia, que sigue considerando a las repúblicas centroasiáticas ex soviéticas como zona de influencia, relación en la cual cuestiones vinculadas a garantías de participación política para la oposición o agenda de derechos humanos quedan relegadas. El creciente interés de China por Tayikistán, con un incremento de la cooperación militar y de seguridad, está relacionado –según analistas– con la percepción de los riesgos que supone la radicalización de la oposición ilegalizada y la situación de conflictividad en la vecina Afganistán, frontera con Tayikistán.¹⁵

Ante el escenario de deterioro de la situación en Tayikistán, que evidencia un desmantelamiento del régimen de coexistencia política emanado de los acuerdos de paz así como una política de persecución del extremismo que podría desencadenar efectos contraproducentes, y en ausencia de factores que permitan apuntar hacia una mejora en el corto plazo, resulta imperativo redoblar los esfuerzos internacionales encaminados a poner el foco en la agenda de derechos humanos –incluyendo libertades civiles y políticas– en las relaciones bilaterales y multilaterales con el régimen tayiko, así como incrementar los apoyos a sociedad civil local, incluyendo los y las defensoras de derechos humanos.

10. Ibid.

11. Goble, Paul, "Tajikistan, Most Muslim Country in Central Asia, Struggles to Rein in Islam", *Eurasia Daily Monitor*, Jamestown Foundation, Vol. 15, no. 18., 2018.

12. Barret, Richard. *Beyond the Caliphate: Foreign Fighters and the Threat of Returnees*, Soufan Center, octubre de 2017.

13. Ibid.

14. Partov, Umed, "Beijing Encroaching on Moscow's Military Dominance in Tajikistan", *Eurasia Daily Monitor*, Jamestown Foundation, Vol. 13, no. 185., 2016.

5.5. El impacto de los conflictos y la violencia en niños y niñas de la región MENA

La intensificación en los niveles de violencia y el deterioro en las condiciones de vida como resultado de los graves conflictos armados que afectan a diversos países del Norte de África y Oriente Medio (MENA) están teniendo un creciente impacto en un sector altamente vulnerable: los niños y niñas de la región. En los últimos años se han ido observando una serie de hechos y tendencias preocupantes en materia de letalidad, reclutamiento de menores, detenciones, desplazamiento forzado, violencia sexual, trabajo infantil y falta de acceso a la educación, entre otros ámbitos, que amenazan con dejar una profunda huella en toda una generación. Tanto por las consecuencias directas y a largo plazo de estas dinámicas, como por el hecho de que miles de niños y niñas de la región han nacido y crecido en medio de las hostilidades, por lo que apenas conocen un entorno diferente al de la guerra.

Las y los menores de edad se han visto crecientemente expuestos a morir o a resultar heridos en el marco de conflictos armados caracterizados por el uso indiscriminado y/o deliberado de la violencia en zonas densamente pobladas y en los que se transgreden múltiples normas del derecho internacional humanitario, incluyendo la necesaria distinción entre civiles y combatientes. Países como Libia, Yemen, Iraq o Siria ilustran esta tendencia. En el caso de Siria, los datos de UNICEF indican que 2017 fue el peor año en términos de letalidad del conflicto armado en niños y niñas, con un 50% de incremento en el número de muertes respecto a 2016 –910 muertes verificadas en 2017, aunque la cifra definitiva podría ser mucho más elevada teniendo en cuenta que las estimaciones de organizaciones como la Syrian Network for Human Rights (SNHR) apuntan a la muerte de 2.300 menores en el mismo período. En Yemen, a finales de 2017 UNICEF estimaba que un total de 5.000 menores habían muerto o resultado heridos desde la intensificación de la violencia en el país en marzo de 2015. Además de las consecuencias físicas y psicológicas por la exposición a brutales niveles de violencia, niños y niñas también sufren por la pérdida de familiares y amigos. En Iraq, por ejemplo, se estimaba que 90% de los menores de Mosul padecía traumas por la pérdida de una persona cercana.

Al finalizar 2017 uno de cada cinco menores de la región requería asistencia humanitaria inmediata, 90% de los cuales vivía en países afectados por conflictos. En algunos casos la entrega de ayuda humanitaria se vio obstaculizada por las medidas impuestas por algunos actores en conflicto, como en el caso del régimen de Bashar al-Assad y su política de asedios contra zonas controladas por la oposición –Aleppo y Ghouta Oriental son ejemplo de ello– o el bloqueo de Arabia Saudita en el conflicto yemení. Tanto UNICEF como OCHA llamaron la atención sobre los problemas de

malnutrición en estos países –1,8 millones de menores en Yemen, de los cuales 400.000 sufrían desnutrición severa; 20.000 con desnutrición severa aguda en Siria–, y HRW alertaba de que utilizar el hambre como estrategia de guerra, sin considerar su impacto en menores, constituía una de las tendencias más preocupantes de los conflictos en la región.

Niños y niñas de MENA también se vieron directamente afectados por la destrucción de infraestructuras civiles en el marco de estos conflictos, particularmente en el caso de hospitales y escuelas. En Yemen, el severo deterioro de las instalaciones de salud no sólo ha mermado las posibilidades de tratar a las personas heridas por el conflicto, sino también de controlar la expansión de enfermedades. Así, según datos de UNICEF, los niños y niñas menores de cinco años representaban un cuarto del millón de enfermos de cólera y otros graves casos de diarrea en Yemen, una situación agravada por la destrucción de infraestructuras sanitarias y la falta de acceso a agua potable. Paralelamente, millones de menores han padecido

los problemas en el sistema educativo. En Siria, por ejemplo, OCHA estimaba que el 40% de la infraestructura escolar se había visto afectada por el conflicto armado y que unos 180.000 profesores ya no estaban en servicio. Los menores sirios que han abandonado el país junto a sus familias en los últimos años tampoco tienen garantizada la escolarización. Así, por ejemplo, a finales de 2017 se estimaba que más de 280.000 menores sirios refugiados en Líbano permanecían fuera del sistema educativo.

Otro de los fenómenos preocupantes tiene que ver con el reclutamiento de menores por parte de actores armados. Datos de la ONU indican que los menores están asumiendo roles cada vez más activos –manejando armas, recibiendo entrenamiento, desempeñando tareas en puestos de control– y que el número de niños reclutados activamente para actividades de combate en la región se ha incrementado significativamente en los últimos años. En Yemen, desde marzo de 2015 hasta finales de 2016 se habían reclutado a más de 2.100 menores, según cifras verificadas por la ONU, principalmente por parte de las fuerzas al-houthistas. En Siria, numerosos actores armados han reclutado a niños y adolescentes en sus filas, algunos de los cuales han sido captados en los campos de refugiados en los países vecinos (en ocasiones con ofertas de compensación económica para sus familias). Tanto en Siria como en Libia e Iraq, el grupo armado ISIS desplegó una estrategia deliberada para el reclutamiento de niños para combatir en primera línea, perpetrar operaciones suicidas y otras acciones de extrema violencia, o utilizarlos como escudos humanos. Incluso se llegó a crear una unidad de ISIS integrada por menores (Fetiyeen al Jinneh). Tras el retroceso de ISIS en 2017,¹⁵ uno de los retos es

La región MENA presenta tendencias preocupantes en materia de letalidad, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, violencia sexual, trabajo infantil y falta de acceso a la educación que amenazan con dejar huella en toda una generación

16. Véase los resúmenes de Iraq y Siria en el capítulo 1 (Conflictos armados).

qué ocurrirá con los niños soldados captados por el grupo armado. En Iraq, después de la expulsión de ISIS de Mosul, estos menores enfrentaban amenazas de venganza y algunos de ellos permanecían ocultos en campos de ayuda o casas particulares en el norte del país. HRW ha alertado de que el sistema judicial iraquí trata a estos menores como adultos y no como víctimas. Los informes recientes del secretario general de la ONU sobre menores y conflictos armados también han llamado la atención sobre el arresto y la detención de cientos de menores en países como Iraq, Siria o Yemen por su participación en grupos armados.

Cabe destacar que, a nivel global, Oriente Medio es la principal región emisora, pero también receptora, de población refugiada y desplazada internamente. El abandono del hogar, la ciudad y, en algunos casos, el país, ha afectado a millones de menores de la zona, que enfrentan dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas. En situaciones de extrema precariedad, muchos menores se ven forzados al trabajo infantil. Así, se ha detectado a menores refugiados sirios de hasta seis años que están trabajando extensas jornadas en fábricas en Turquía. Lo mismo ocurre en Líbano, más aún teniendo en cuenta que las restricciones en los permisos de trabajo para los adultos convierten a muchos menores en los principales proveedores de sus familias. En el caso de las niñas, uno de los fenómenos más alarmantes es el incremento en los matrimonios forzados y a muy temprana

edad. Las estimaciones varían, pero algunas indican que los matrimonios de niñas y adolescentes se han cuadruplicado entre la población refugiada siria, con numerosos casos en Líbano, Jordania, Turquía y Egipto. En otros países de la región, como Libia, el desplazamiento forzado de población ha conducido a otras situaciones alarmantes, como la instalación de mercados de esclavos y los abusos contra población refugiada y migrante, incluyendo agresiones sexuales, que también han afectado a niños y niñas. Respecto a la violencia sexual, cabe recordar que ha sido utilizada por actores armados en varios conflictos de la región y que un caso emblemático ha sido el de ISIS y sus abusos contra la población yazidí. Miles de mujeres y niñas de esta minoría capturadas a mediados de 2014 fueron abusadas y convertidas en esclavas sexuales en Iraq y Siria.

El amplio abanico de formas de violencia a las que se han visto expuestos los menores en diversos países de MENA –y que en muchos casos continúa afectándoles– supone, por tanto, uno de los principales retos para el futuro de la zona. Lamentablemente, la espiral de conflictos, el constante desprecio por las normas de derecho humanitario por parte de numerosos actores armados, el bloqueo en las negociaciones para buscar salidas a las crisis y la falta de acción de la comunidad internacional están normalizando unos niveles de violencia en MENA que no permiten augurar un cambio a corto plazo que permita salvaguardar el futuro de millones de niños y niñas de la región.

Glosario

- AA:** Arakan Army (Ejército de Arakan)
- ABSDF:** All Burma Students' Democratic Front (Frente Democrático Estudiantil de Toda Birmania)
- ABM:** Ansar Beit al-Maqdis
- ACNUDH:** Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
- ACNUR:** Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
- ADF:** Allied Democratic Forces
- ADF-NALU:** Allied Defence Forces - National Army for the Liberation of Uganda (Fuerzas de Defensa Aliadas - Ejército Nacional para la Liberación de Uganda)
- ADSC:** All Darfur Stakeholders Conference (Conferencia de Actores de Darfur)
- AFISMA:** Misión Internacional de Apoyo a Malí bajo Liderazgo Africano
- AIEA:** Agencia Internacional de la Energía Atómica
- AKP:** Adayat ve Kalkinma Partisi (Partido de la Justicia y el Desarrollo)
- AKR:** Nueva Alianza de Kosovo
- ALBA:** Alianza Bolivariana para las Américas
- ALP:** Arakan Liberation Party (Partido de Liberación Arakan)
- AMISOM:** Misión de la Unión Africana en Somalia
- ANSIPRJ:** Alliance Nationale pour la Souveraineté et la Restauration de la Justice (Alianza Nacional para la Protección de la Identidad Peul y la Restauración de la Justicia)
- AP:** Autoridad Palestina
- APCLS:** Alliance de Patriotes pour un Congo Libre et Souverain
- APHC:** All Parties Hurriyat Conference
- APRD:** Armée Populaire pour la Restauration de la République et de la Démocratie (Ejército Popular para el Restablecimiento de la República y la Democracia)
- AQMI:** Al-Qaeda en el Magreb Islámico
- AQPA:** Al-Qaeda en la Península Arábiga
- ARS:** Alianza para la Reliberación de Somalia
- ASEAN:** Association of Southeast Asian Nations (Asociación de Naciones del Sureste Asiático)
- ASWJ:** Ahlu Sunna Wal Jama'a
- ATLF:** All Terai Liberation Front (Frente de Liberación de Todo Terai)
- ATMM:** Akhil Terai Mukti Morcha
- ATTF:** All Tripura Tiger Force (Fuerza de los Tigres de Todo Tripura)
- AUBP:** Programa de fronteras de la Unión Africana
- BDP:** Partido de la Paz y la Democracia
- BH:** Boko Haram
- BIFF:** Bangsamoro Islamic Freedom Fighters
- BIFM:** Bangsamoro Islamic Freedom Movement
- BINUCA:** Oficina Integrada de Construcción de Paz de Naciones Unidas en R. Centrafricana
- BLA:** Baluch Liberation Army (Ejército de Liberación Baluchi)
- BLF:** Baluch Liberation Front (Frente de Liberación Baluchi)
- BNUB:** Oficina de las Naciones Unidas en Burundi
- BLT:** Baloch Liberation Tigers
- BM:** Banco Mundial
- BRA:** Balochistan Republican Army (Ejército Republicano de Baluchistán)
- BRP:** Baloch Republican Party (Partido Republicano Baluchi)
- CAP:** Consolidated Appeal Process (Proceso de Llamamientos Consolidados)
- CARICOM:** Comunidad del Caribe
- CDH:** Consejo de Derechos Humanos
- CEEAC:** Comunidad Económica de los Estados de África Central
- CEMAC:** Comunidad Económica y Monetaria de África Central
- CENCO:** Conferencia Episcopal Congoleña
- CIA:** Central Intelligence Agency
- CHD:** Centre for Humanitarian Dialogue
- CICR:** Comité Internacional de la Cruz Roja
- CMA:** Coordinadora de Movimientos de Azawad
- CMPFPR:** Coordinadora de Movimientos Patrióticos de Resistencia
- CNDD-FDD:** Congrès National pour la Défense de la Démocratie - Forces pour la Défense de la Démocratie (Congreso Nacional para la Defensa de la Democracia - Fuerzas para la Defensa de la Democracia)
- CNDP:** Congrès National pour la Défense du Peuple (Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo)
- CNF:** Chin National Front (Frente Nacional Chin)
- CNT:** Consejo Nacional de Transición de Libia
- CPA:** Comprehensive Peace Agreement (Acuerdo de Paz Global)
- CPI:** Corte Penal Internacional
- CPI-M:** Communist Party of India-Maoist (Partido Comunista de la India-Maoísta)
- CPJP:** Convention des Patriotes pour la Justice et la Paix (Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz)
- CPN-UML:** Communist Party of Nepal (Unified Marxist Leninist) (Partido Comunista de Nepal [Marxista Leninista])
- DDR:** Desarme, Desmovilización y Reintegración
- DHD:** Dima Halim Daogah
- DHD (J):** Dima Halim Daogah, Black Widow faction (Dima Halim Daogah, facción Viuda Negra)
- DHD (Nunisa):** Dima Halim Daogah, Nunisa faction (Dima Halim Daogah, facción Nunisa)
- DIH:** Derecho Internacional Humanitario
- DKBA:** Democratic Karen Buddhist Army (Ejército Democrático Budista Karen)
- DMLEK:** Democratic Movement for the Liberation of the Eritrean Kunama (Movimiento Democrático para la Liberación del Pueblo Kunama de Eritrea)
- DPA:** Darfur Peace Agreement (Acuerdo de Paz de Darfur)
- EA:** Eusko Alkartasuna (Solidaridad Vasca)
- EAC:** East African Community (Comunidad de Estados de África del Este)
- EAU:** Emiratos Árabes Unidos
- ECOMIB:** Misión de ECOWAS en Guinea Bissau
- ECOWAS:** Economic Community Of West African States (Comunidad Económica de Estados de África Occidental)
- EDA:** Eritrean Democratic Alliance (Alianza Democrática Eritrea)
- EEBC:** Comisión Fronteriza entre Eritrea y Etiopía
- EEUU:** Estados Unidos de América
- EFDM:** Eritrean Federal Democratic Movement (Movimiento Democrático Federal Eritreo)

EIC: Eritrean Islamic Congress (Congreso Islámico Eritreo)

EIPJD: Eritrean Islamic Party for Justice and Development (Partido Islámico Eritreo para la Justicia y el Desarrollo)

ELF: Eritrean Liberation Front (Frente de Liberación Eritreo)

ELK: Ejército de Liberación de Kosovo

ELN: Ejército de Liberación Nacional

ENSF: Eritrean National Salvation Front (Frente de Salvación Nacional Eritreo)

EPC: Eritrean People's Congress (Congreso del Pueblo Eritreo)

EPL: Ejército Popular de Liberación

EPDF: Eritrean People's Democratic Front (Frente Democrático del Pueblo Eritreo)

EPP: Ejército del Pueblo Paraguayo

EPPF: Ethiopian People's Patriotic Front (Frente Patriótico Popular Etíope)

EPR: Ejército Popular Revolucionario

EPRDF: Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Eritreo)

ESL: Ejército Sirio Libre

ETA: Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad)

ETIM: East Turkestan Islamic Movement (Movimiento Islámico del Turquestán Oriental)

ETLO: East Turkestan Liberation Organization (Organización para la Liberación del Turquestán Oriental)

EUAM Ukraine: Misión de Apoyo de la UE a la Reforma del Sector de Seguridad Civil en Ucrania

EUAVSEC South Sudan: Misión de la Unión Europea en materia de seguridad de la aviación en Sudán del Sur

EUBAM: Misión de Asistencia Fronteriza de la UE a Moldova y Ucrania

EUBAM Libia: Misión de la Unión Europea de Asistencia y Gestión Integrada de Fronteras en Libia

EUBAM Rafah: Misión de Asistencia Fronteriza en el Paso Fronterizo de Rafah

EUCAP NESTOR: Misión de la Unión Europea de Desarrollo de las Capacidades Marítimas Regionales en el Cuerno de África

EUCAP SAHEL Mali: Misión de Naciones Unidas en el Sahel – Malí

EUCAP SAHEL Niger: Misión de Naciones Unidas en el Sahel - Níger

EUFOR ALTHEA: Operación Militar de la UE en Bosnia y Herzegovina

EUFOR RCA: Misión de mantenimiento de la paz de la UE en RCA

EUJUST LEX: Misión Integrada de la UE por el Estado de Derecho en Iraq

EULEX Kosovo: Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo

EUMM: Misión de Observación de la UE en Georgia

EUNAVOR Somalia: Fuerza Naval de la Unión Europea – Somalia, Operación Atalanta

EUPOL Afghanistan: Misión de Policía de la UE en Afganistán

EUPOL COPPS: Misión de Policía de la UE para los Territorios Palestinos

EUPOL RDC: Misión de Policía de la UE en RD Congo

EUSEC RDC: Misión de Asistencia de la UE a la Reforma del Sector de Seguridad en RD Congo

EUTM Mali: Misión de la UE para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Malí.

EUTM Somalia: Misión Militar de la UE para contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad de Somalia

EZLN: Ejército Zapatista de Liberación Nacional

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

FAR-LP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Liberación del Pueblo

FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo

FATA: Áreas Tribales bajo Administración Federal

FDLP: Frente Democrático de Liberación de Palestina

FDLR: Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda)

FDPC: Front Démocratique du Peuple Centrafricain (Frente Democrático del Pueblo Centrafricano)

FEWS NET: Red de Sistemas de Alerta Temprana Contra la Hambruna de USAID

FFR: Front des Forces de Redressement (Frente de Fuerzas de Reorganización)

FIS: Frente Islámico de Salvación

FLEC-FAC: Frente de Liberação do Enclave de Cabinda (Frente de Liberación del Enclave de Cabinda)

FNL: Forces Nationales de Libération (Fuerzas Nacionales de Liberación)

FOMUC: Force Multinationale en Centrafrique (Fuerza Multinacional de la CEMAC en RCA)

FPLP: Frente Popular de Liberación de Palestina

FPI: Front Populaire Ivoirien (Frente Popular Marfileño)

FPR : Front Populaire pour le Redressement (Frente Popular por la Liberación)

FPRC: Front Patriotique pour la Renaissance de la Centrafrique

Frente POLISARIO: Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro

FRF: Forces Republicaines et Federalistes (Fuerzas Republicanas y Federalistas)

FRODEBU: Front pour la Démocratie au Burundi (Frente para la Democracia en Burundi)

FRUD: Front pour la Restauration de l'Unité et la Démocratie (Frente para la Restauración de la Unidad y la Democracia)

FSN: Frente de Salvación Nacional

FUC: Front Uni pour le Changement Démocratique (Frente Unido para el Cambio Democrático)

FUDD: Frente Unido para la Democracia y Contra la Dictadura

FURCA: Force de l'Union en République Centrafricaine (Fuerza de la Unión en la R. Centrafricana)

GAI: Global Acceleration Instrument (Instrumento de Aceleración Global)

GAM: Gerakin Aceh Merdeka (Movimiento de Aceh Libre)

GATIA: Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados

GFT: Gobierno Federal de Transición

GIA: Grupo Islámico Armado

GSPC: Grupo Salafista para la Predicación y el Combate

HAK: Congreso Nacional Armenio

HaY: Harakah al-Yaqin (Movimiento de la Fe)

HCUA: Alto Consejo para la Unidad de Azawad

HDZ: Unión Democrática Croata

HDZ 1990: Unión Democrática Croata 1990

HM: Hermanos Musulmanes
HPG: Humanitarian Policy Group
HRW: Human Rights Watch
HUM: India Assam
IBC: Iraq Body Count
ICG: International Crisis Group
ICR/LA: Iniciativa de Cooperación Regional contra el LRA
IDG: Índice de Desigualdad de Género
IDMC: Internal Displacement Monitoring Centre
IDP: Internally Displaced Person (Persona Desplazada Interna)
IEG: Índice de Equidad de Género
IFLO: Islamic Front for the Liberation of Oromia (Frente Islámico para la Liberación de Oromiya)
IGAD: Intergovernmental Authority on Development (Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo)
IISS: International Institute for Strategic Studies
IMU: Islamic Movement of Uzbekistan (Movimiento Islámico de Uzbekistán)
INLA: Irish National Liberation Army (Ejército Irlandés de Liberación Nacional)
IRA: Irish Republican Army (Ejército Republicano Irlandés)
ISAF: International Security Assistance Force (Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad)
ISF: Misión de Estabilización Internacional en Timor-Leste
ISIS: Estado Islámico
IWF: Iduwini Volunteers Force
JEM: Justice and Equality Movement (Movimiento para la Justicia y la Igualdad)
JKLF: Jammu and Kashmir Liberation Front (Frente de Liberación de Jammu y Cachemira)
JMB: Jamaat-ul-Mujahideen (Asamblea de Muyahidines)
JTMM: Janatantrik Terai Mukti Morcha (Frente de Liberación del Pueblo de Terai)
KANU: Kenya African National Union (Unión Nacional Africana de Kenya)
KCK: Koma Civakên Kurdistan (Unión de las Comunidades en Kurdistán)
KCP: Kangleipak Communist Party (Partido Comunista Kangleipak)
KDP: Partido Democrático de Kurdistán
KFOR: Misión de la OTAN en Kosovo
KIA: Kachin Independence Army (Ejército para la Independencia de Kachin)
KIO: Kachin Independence Organization (Organización para la Independencia Kachin)
KLNLF: Karbi Longri National Liberation Front (Frente de Liberación Nacional Karbi Longri)
KNA: Kuki Liberation Army (Ejército de Liberación Kuki)
KNF: Kuki National Front (Frente Nacional Kuki)
KNPP: Karenni National Progressive Party (Partido Progresista Nacional Karen)
KNU: Kayin National Union (Unión Nacional Kayin)
KNU/KNLA: Karen National Union/Karen National Liberation Army (Unión Nacional Karen/Ejército de Liberación Nacional Karen)
KPF: Karen Peace Force (Fuerza de Paz Karen)
KPLT: Karbi People's Liberation Tigers (Tigres de Liberación del Pueblo Karbi)
KRG: Gobierno Regional del Kurdistán
KYKL: Kanglei Yawol Kanna Lup (Organización para la Salvación del Movimiento Revolucionario en Manipur)
LeJ: Lashkar-e-Jhangvi (Ejército de Jhangvi)
LeT: Lashkar-e-Toiba
LJM: Liberation and Justice Movement (Movimiento para la Liberación y la Justicia)
LRA: Lord's Resistance Army (Ejército de Resistencia del Señor)
LTTE: Liberation Tigers of Tamil Eelam (Tigres de Liberación de la Tierra Tamil)
M23: Movimiento 23 de Marzo
MAA: Movimiento Árabe de Azawad
MAPP-OEA: Misión de la OEA de apoyo al proceso de paz en Colombia
MASSOB: Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (Movimiento para la Actualización del Estado Soberano de Biafra)
MDC: Movement for Democratic Change (Movimiento para el Cambio Democrático)
MEND: Movement for the Emancipation of the Niger Delta (Movimiento para la Emancipación para el Delta del Níger)
MFDC: Mouvement de las Forces Démocratiques de Casamance (Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance)
MFO: Fuerza Multinacional de Observadores para la supervisión del tratado de paz entre Egipto e Israel
MIB OEA: Misión de la OEA de Buenos Oficios en Ecuador y Colombia
MICOPAX: Mission de Consolidation de la Paix en République Centrafricaine (Misión de Consolidación de la Paz en R. Centrafricana de la CEEAC)
MILF: Moro Islamic Liberation Front (Frente Moro de Liberación Islámico)
MINURCA: Misión de las Naciones Unidas en la República Centrafricana
MINURCAT: Misión de Naciones Unidas para la República Centrafricana y Chad
MINURSO: Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental
MINUSCA: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en RCA
MINUSMA: Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí
MINUSTAH: Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
MISCA: Misión de Apoyo a Rep. Centrafricana bajo Liderazgo Africano
MISMA: Misión Internacional de Asistencia a Malí
MIT: Organización Nacional de Inteligencia de Turquía
MJLC: Mouvement des Jeunes Libérateurs Centrafricains (Movimiento de los Jóvenes Libertadores Centrafricanos)
MLC: Mouvement pour la Libération du Congo (Movimiento para la Liberación del Congo)
MLF: Macina Liberation Front (Frente de Liberación de Macina)
MMT: Madhesi Mukti Tigers (Tigres Mukti Madhesi)
MNJTF: Multinational Joint Task Force (Fuerza Regional de Tarea Conjunta)
MNLA: Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad
MNLF: Moro National Liberation Front (Frente Moro de Liberación Nacional)

MONUC: Misión de las Naciones Unidas en la RD Congo

MONUSCO: Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de RD Congo

MOSOP: Movement for the Survival of the Ogoni People (Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni)

MOVADEF: Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales

MPC: Mouvement Patriotique por la Centrafrique

MPRF: Madhesi People's Right Forum (Foro de los Derechos del Pueblo Madhesi)

MRC: Mombasa Republican Council (Consejo Republicano de Mombasa)

MQM: Muttahida Qaumi Movement (Movimiento Nacional Unido)

MSF: Médicos Sin Fronteras

MUYAO: Movimiento Unido por la Yihad en África Occidental

MVK: Madhesi Virus Killers (Asesinos de Virus Madhesi)

NC: Nepali Congress Party (Partido del Congreso Nepali)

NCP: National Congress Party (Partido del Congreso Nacional)

NDA: Niger Delta Avengers (Vengadores del Delta del Níger)

NDF: National Democratic Front (Frente Democrático Nacional)

NDFB: National Democratic Front of Bodoland (Frente Democrático Nacional de Bodoland)

NDGJM: Niger Delta Greenland Justice Mandate

NDPVF: Niger Delta People's Volunteer Force (Fuerza Voluntaria del Pueblo del Delta del Níger)

NDV: Niger Delta Vigilante (Patrulla del Delta del Níger)

NLD: National League for Democracy (Liga Nacional por la Democracia)

NLFT: National Liberation Front of Tripura (Frente de Liberación Nacional de Tripura)

NMSP: New Mon State Party (Partido del Nuevo Estado Mon)

NNC: Naga National Council (Consejo Nacional Naga)

NNSC: Neutral Nations Supervisory Commission (Comisión de Supervisión de Naciones Neutrales)

NPA: New People's Army (Nuevo Ejército Popular)

NSCN-IM: National Socialist Council of Nagaland-Isaac Muivah (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Isaac Muivah)

NSCN-K: National Socialist Council of Nagaland-Khaplang (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia- Khaplang)

NSCN (K-K): National Socialist Council of Nagaland (Kole-Kitovi) (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia (Kole-Kitovi))

NSCN-R: National Socialist Council of Nagaland-Reformation (Consejo Nacional Socialista de Nagalandia-Reforma)

NSLA: National Santhal Liberation Army) Ejército Nacional Santhal

OAS/AZ: Oficina de la OEA en Belice - Guatemala

OCHA: Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas

OCI: Organización para la Cooperación Islámica

OEA: Organización de los Estados Americanos

OFDM: Oromo Federalist Democratic Movement (Movimiento Democrático Federalista Oromo)

OIM: Organización Internacional para las Migraciones

OLF: Oromo Liberation Front (Frente de Liberación Oromo)

OMC: Organización Mundial del Comercio

OMIK: Misión de la OSCE en Kosovo

ONG: Organización No Gubernamental

ONLF: Ogaden National Liberation Front (Frente de Liberación Nacional de Ogadén)

ONU: Organización de las Naciones Unidas

ONUCI: Operación de Naciones Unidas en Côte d'Ivoire

OPC: Etiopía Oromiya

OPM: Organisasi Papua Merdeka (Organización de la Papua Libre)

OSCE: Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa

OTAN: Organización para el Tratado del Atlántico Norte

OXFAM: Oxford Committee for Famine Relief

PALU: Parti Lumumbiste Unifié (Partido Lumumbista Unificado)

PARECO: Patriotes Résistants Congolais (Patriotas Resistentes Congoleses)

PCP: Partido Comunista del Perú

PCP: India Manipur

PKDI: Partido Democrático Kurdo

PJAK: Partido por la Vida Libre en Kurdistán

PLJ: Partido Libertad y Justicia

PKK: Partido de los Trabajadores del Kurdistán

PLA: People's Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional)

PLJ: Partido Libertad y Justicia

PMA: Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PPP: Pakistan People's Party (Partido del Pueblo de Pakistán)

PPRD: Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (Partido Popular para la Reconstrucción y la Democracia)

PREPAK: People's Revolutionary Party of Kangleipak (Partido Nacional Revolucionario de Kangleipak)

PREPAK (Pro): People's Revolutionary Party of Kangleipak / Progressive (Partido Nacional Revolucionario de Kangleipak / Progresista)

PYD : Democratic Union Party (Partido Unión Democrática de kurdos en Siria)

RAMM: Región Autónoma del Mindanao Musulmán.

RAMSI: Regional Assistance Mission to Solomon Islands (Misión Regional de Asistencia a las Islas Salomón)

RASD: República Árabe Saharaui Democrática

RCA: República Centroafricana

RDC: República Democrática del Congo

RENAMO: Resistencia Nacional Mozambiqueña

REWL: Red Egbesu Water Lions

RFC: Rassemblement des Forces pour le Changement (Coalición de las Fuerzas para el Cambio)

RPF: Rwandan Patriotic Front (Frente Patriótico Rwandés)

RPF: Revolutionary People's Front (Frente Popular Revolucionario)

RSADO: Red Sea Afar Democratic Organization (Organización Democrática Afar del Mar Rojo)

RSF: Rapid Support Forces

RTF: Regional Task Force (Grupo de Trabajo Regional)

SADC: Southern Africa Development Community (Comunidad de Desarrollo del África Austral)

SAF: Sudanese Armed Forces (Fuerzas Armadas de Sudán)

SCUD: Socle pour le Changement, l'Unité Nationale et la Démocratie (Plataforma para el Cambio, la Unidad Nacional y la Democracia)

SFOR: Fuerza de Estabilización de la OTAN en Bosnia y Herzegovina

SIGI: Índice de Instituciones Sociales y Género

SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute (Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo)

SLA: Sudan Liberation Army (Ejército para la Liberación de Sudán)

SLA-Nur: Sudan Liberation Army-Nur (Ejército para la Liberación de Sudán, facción Nur)

SLDF: Sabaot Land Defence Forces (Fuerzas de Defensa de la Tierra Sabaot)

SNNPR: Southern Nations, Nationalities, and People's Region (Región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos Meridionales)

SPLA: Sudan People's Liberation Army (Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés, Fuerzas Armadas de Sudán del Sur)

SPLA-IO: SPLA in Opposition

SPLM: Sudan People's Liberation Movement (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés)

SPLM-N: Sudan People's Liberation Army-North (Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés-Norte)

SSA-S: Shan State Army-South (Ejército del Estado Shan-Sur)

SSC: Sool, Saanag y Cayn

SSDM/A: South Sudan Democratic Movement/Army (Movimiento/ Ejército Democrático de Sudán del Sur)

SSLA: South Sudan Liberation Army (Ejército para la Liberación de Sudán del Sur)

SSNPLO: Shan State Nationalities People's Liberation Organization (Organización Popular para la Liberación del Estado de las Nacionalidades Shan)

TAK: Los Halcones de la Libertad del Kurdistán

TIPH: Presencia Internacional Temporal en Hebrón

TMLP: Terai Madhesh Loktantrik Party

TNLA: Ta-ang National Liberation Army (Ejército Nacional de Liberación Ta-ang)

TPIR: Tribunal Penal Internacional para Rwanda

TPIY: Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia

TPLF: Tigrayan People's Liberation Front (Frente Popular de Liberación de Tigrayan)

TTP: Tehrik-e-Taliban Pakistan

UA: Unión Africana

UAD: Union pour l'Alternance Démocratique (Unión por la Alternancia Democrática)

UCPN-M: Unified Communist Party of Nepal (Maoist) (Partido Comunista Unificado de Nepal) [Maoísta]

UE: Unión Europea

UFDD: Union des Forces pour la Démocratie et le Développement (Unión de las Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo)

UFDG: Union des Forces Démocratiques de *Guinée* (Unión de las Fuerzas Democráticas de Guinea)

UFDR: Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement (Unión de Fuerzas Democráticas para la Coalición)

UFF: Ulster Freedom Fighters (Luchadores por la Libertad del Ulster)

UFR: Union des Forces de la Résistance (Unión de las Fuerzas de la Resistencia)

UFDR: Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement (Unión de las Fuerzas Democráticas por la Unidad)

ULFA: United Liberation Front of Assam (Frente Unido de Liberación de Assam)

ULFA-I: United Liberation Front of Assam-Independent (Frente Unido de Liberación de Assam-Independiente)

UNAMA: Misión de asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán

UNAMI: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Iraq

UNAMID: United Nations and African Union Mission in Darfur (Operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur)

UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas

UNDOF: Fuerza de Observación de la Separación de Naciones Unidas

UNEF: Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas

UNFICYP: Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre

UNICEF: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

UNIFIL: Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (o FPNUL)

UNIOGBIS: Oficina Integrada de Construcción de Paz de Naciones Unidas en Guinea Bissau

UNIPSIL: Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en Sierra Leona

UNISFA: Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei

UNITAF: Unified Task Force (Fuerza de Tareas Unificadas)

UNLF: United National Liberation Front (Frente Unido de Liberación Nacional)

UNMIK: Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo

UNMIL: Misión de las Naciones Unidas en Liberia

UNMISS: Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur

UNMIT: Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste

UNMOGIP: Grupo de Observadores Militares de Naciones Unidas en la India y Pakistán

UNOCA: Oficina Regional de Naciones Unidas en África Central

UNOGBIS: Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau

UNOWA: Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental

UNPOS: Oficina Política de las Naciones Unidas para Somalia

UNRCCA: Centro Regional de Naciones Unidas para la Diplomacia Preventiva en Asia Central

UNRWA: Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo

UNSCO: Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio

UNSCOL: Oficina del Coordinador Especial de Naciones Unidas para Líbano

UNSMIL: Misión de Apoyo a Naciones Unidas en Libia

UNMIT: Misión integrada de Naciones Unidas en Timor Leste

UNSOM: Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Somalia

UNTSO: Organismo de las Naciones Unidas para la Vigilancia de la Tregua

UPC: Union pour la Paix en Centrafrique
UPDS: United People's Democratic Solidarity
(Solidaridad Democrática del Pueblo Unido)
UPLA: United People's Liberation Army (Ejército de Liberación del Pueblo Unido)
UPPK: United People's Party of Kangleipak (Partido Unido Popular de Kangleipak)
UPRONA: Union pour le Progrès National (Unión para el Progreso Nacional)
URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
USAID: United States Agency for International Development
(Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU)
USN: Union pour la Salut National
UTI: Unión de Tribunales Islámicos
UVF: Ulster Volunteer Force (Fuerza de Voluntarios del Ulster)
UWSA: United Wa State Army (Ejército del Estado Wa Unido)

VIH/SIDA: Virus de Inmunodeficiencia Humana/
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
VRAE: Valle entre los Ríos Apurímac y Ene
WILPF: Women's International League for Peace and Freedom (Liga Internacional de las Mujeres para la Paz y la Libertad)
WPNLG: West Papua National Coalition for Liberation
YPG: People's Protection Unit (Unidad de Protección del Pueblo)
YPJ: Women's Protection Units (Unidades de Protección de Mujeres)
ZANU-PF: Zimbabwe African National Union – Patriotic Front (Unión Nacional Africana de Zimbabwe – Frente Patriótico)
ZUF: Zeliangrong United Front (Frente Unido Zeliangrong)

Escola de Cultura de Pau

La Escola de Cultura de Pau (ECP) es una institución académica de investigación para la paz ubicada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue creada en 1999 con el objetivo de promover la cultura de paz a través de actividades de investigación, diplomacia paralela, formación y sensibilización.

Los principales ámbitos de acción de la Escola de Cultura de Pau son:

- Investigación. Las áreas de investigación de la ECP incluyen los conflictos armados y las crisis sociopolíticas, los procesos de paz, los derechos humanos y la justicia transicional, la dimensión de género y la educación para la paz.
- Educación y formación. El personal investigador de la ECP imparte clases en cursos de grado y postgrado en universidades catalanas, incluyendo la Diplomatura en Cultura de Paz, el título de postgrado que la propia ECP ofrece en la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, se ofrecen clases y talleres en temas específicos, entre ellos la educación en y para el conflicto y la sensibilidad al conflicto.
- Diplomacia paralela. La ECP promueve el diálogo y la transformación de conflictos a través de iniciativas de diplomacia paralela, con diferentes actores y en diversos ámbitos de acción.
- Servicios de consultoría. La ECP lleva a cabo servicios de consultoría para instituciones locales e internacionales.
- Sensibilización. Las iniciativas de la ECP en materia de sensibilización incluyen actividades dirigidas a la sociedad catalana y española, entre ellas colaboraciones con medios de comunicación.

Escola de Cultura de Pau

Parc de Recerca, Edifici MRA, Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Bellaterra (España)

Tel: +34 93 586 88 42; Fax: +34 93 581 32 94

Email: pr.conflictes.escolapau@uab.cat / Website: <http://escolapau.uab.cat>

Alerta 2018! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz es un anuario que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de paz a partir de tres ejes: conflictos armados, tensiones y género, paz y seguridad. El análisis de los hechos más relevantes del 2017 y de la naturaleza, causas, dinámicas, actores y consecuencias de los principales escenarios de conflicto armado y tensión socio-política en el mundo permite ofrecer una mirada comparativa regional e identificar tendencias globales, así como elementos de riesgo y alerta preventiva de cara al futuro. Del mismo modo, el informe también identifica oportunidades para la construcción de paz o para la reducción, prevención o resolución de conflictos. En ambos casos, uno de los principales objetivos del presente informe es poner la información, el análisis y la identificación de factores de alerta y de oportunidades de paz al servicio de aquellos actores encargados de tomar decisiones políticas, de intervenir en la resolución pacífica de conflictos o de dar una mayor visibilidad política, mediática o académica a las numerosas situaciones de violencia política y social que existen en el mundo.



Con el apoyo de:



El informe Alerta es una referencia clave para cualquier analista o experto en temas de conflictos armados. *Alerta 2018!* representa una edición de especial importancia por el incremento de los conflictos en el mundo y la correspondiente reducción en espacios de diálogo y negociación.

Mark Freeman,
Director Ejecutivo, Institute for Integrated Transitions (IFIT)

El anuario de la Escola de Cultura de Pau se ha convertido en una herramienta imprescindible para todos aquellos comprometidos en la defensa de los derechos humanos, en la resolución de conflictos y en la implementación de políticas de paz con el objetivo de lograr un mundo con menos desigualdades y más justo y solidario. *Alerta 2018!* recoge y analiza, pues, de forma rigurosa los 33 conflictos armados registrados en 2017, los casi cien escenarios de tensión y el incremento de la violencia de género o de graves desigualdades de género que caracteriza a la mayoría de conflictos armados. En definitiva, nos encontramos ante una obra que año a año nos ofrece una visión rigurosa y académicamente solvente para comprender un mundo profundamente injusto y violento y que nos proporciona los instrumentos discursivos y teóricos necesarios para combatir la conculcación de los derechos humanos y la prevalencia de la violencia.

Antoni Segura i Mas,
Catedrático de Historia Contemporánea y Presidente del CIDOB - Barcelona Centre for International Affairs

Prólogo de Diana de la Rúa Eugenio
 Presidenta de la Fundación International Peace Research Association (IPRA)

